

EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA:
UN CAMINO SIN RETORNO HACIA LA POBREZA

COLECCIÓN CEDE
50 AÑOS

EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA:
UN CAMINO SIN RETORNO HACIA LA POBREZA

Ana María Ibáñez Londoño

Ibáñez Londoño, Ana María

El desplazamiento forzoso en Colombia: ¿Un camino sin retorno a la pobreza? / Ana María Ibáñez Londoño. – Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes, 2008.

288 p. ; 16.8 x 23.8 cm. – (Colección CEDE 50 años)

Incluye referencias bibliográficas (p. 206-217).

ISBN 978-958-695-364-1

1. Desplazamiento forzado – Colombia 2. Desplazamiento forzado – Aspectos económicos – Colombia
3. Pobreza – Colombia I. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Economía. CEDE II. Tit.

CDD 304.809861

SBUA

Primera edición: Septiembre de 2008

© Ana María Ibáñez

© Universidad de los Andes

Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico - Cede

Dirección: Carrera 1 No. 18A – 12. Bloque C

Teléfono: 3 394949 – 3 394999. Ext: 2400

Bogotá, D. C., Colombia

infocede@uniandes.edu.co

<http://ediciones.uniandes.edu.co/>

Ediciones Uniandes

Carrera 1 No 19-27. Edificio AU 6

Teléfono: 3394949 – 3394999. Ext: 2133. Fax: ext. 2158

Bogotá, D. C., Colombia

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

© Fotografía de la cubierta

Luis Benavides/Periódico El Espectador-Comunican S. A.

ISBN: 978-958-695-364-1

Edición, diseño editorial, pre prensa y prensa:

Proceditor ltda.

Calle 1 C No. 27 A – 01

Teléfonos: 2204275 – 2204276

Bogotá, D. C., Colombia

proceditor@etb.net.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Para Antonia y Salvador

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
I UNA MIRADA INICIAL AL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA	9
A. Las causas del desplazamiento forzado en Colombia	15
B. Las disputas de tierras, la usurpación de la propiedad y el desplazamiento en Colombia	21
C. Conclusiones	27
II EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA: UNA ESTRATEGIA DELIBERADA DE GUERRA	29
A. El desplazamiento forzado de población civil: ¿una estrategia de guerra?	31
1. ¿Son algunos países más proclives a enfrentar conflictos civiles?	32
2. Los conflictos civiles y la población civil como su principal víctima	37
B. Los determinantes municipales del desplazamiento	39
C. Resultados empíricos: los determinantes del desplazamiento en Colombia	42
1. Estrategia econométrica	43
2. Los datos	46
3. Estadísticas descriptivas	48
D. Conclusiones	57
III ¿QUIÉNES SON VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS? ¿QUIÉNES SE DESPLAZAN?	59
A. Un marco conceptual para analizar el desplazamiento forzado	61
1. Una revisión de la teoría económica de la migración	63
2. Un modelo teórico para analizar el proceso del desplazamiento forzado	66

B.	Análisis empírico	70
1.	Los datos	70
2.	Variables e hipótesis	71
3.	Estadísticas descriptivas	76
C.	Resultados econométricos	79
1.	Determinantes de la probabilidad de ser víctima de amenazas directas	79
2.	Determinantes del desplazamiento	81
D.	Conclusiones	86
	Apéndice: cálculo de los pesos de Manski y Lerman	89
IV	EL IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE EL BIENESTAR ECONÓMICO DE SUS VÍCTIMAS	91
A.	Los costos de los conflictos internos sobre los hogares	94
B.	Las pérdidas de bienestar de los hogares desplazados en Colombia	98
1.	La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados, ENHD (2004)	98
2.	La población desplazada: la migración forzada, características socioeconómicas y cambios en bienestar	100
3.	Determinantes del bienestar: consumo, ingreso, empleo y asistencia educativa	112
C.	Conclusiones	130
V	¿PUEDE LA POBLACIÓN DESPLAZADA RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CON EL PASO DEL TIEMPO?	135
A.	Introducción	135
B.	Los activos, el aseguramiento contra riesgos y las trampas de pobreza	137
C.	La pérdida de activos de la población desplazada y su proceso de recuperación	145
1.	Magnitud de las pérdidas de activos y de la recuperación	145
2.	Los determinantes de la recuperación de activos	152
D.	Los mecanismos de aseguramiento contra riesgos y la suavización del consumo	169
1.	Evolución del ingreso y del consumo de la población desplazada	169
2.	La suavización del consumo	171
E.	Conclusiones	180

VI	IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA	183
A.	Los programas de microcrédito y capacitación laboral: evidencia de su impacto	185
1.	Los programas de microcréditos	185
2.	Los programas de capacitación laboral	188
3.	¿Son los programas de microcréditos y de capacitación laboral útiles para atender a la población desplazada?	190
B.	Los programas de generación de ingresos para la población desplazada	190
C.	Evaluación del impacto de los programas de generación de ingresos	192
1.	Estrategia metodológica	193
2.	Estadísticas descriptivas	197
3.	El impacto de los programas de generación de ingresos	202
D.	Conclusiones	212
VII	EL RETORNO: UNA ALTERNATIVA EN LOS PROCESOS DE POSCONFLICTO	215
A.	La decisión de retornar	217
1.	La decisión de retornar en un contexto de migración voluntaria	217
2.	La decisión de retornar en un contexto de migración forzada	222
B.	El deseo de retorno de la población desplazada en Colombia	224
1.	Un modelo para analizar el deseo de retorno	225
2.	Estadísticas descriptivas	230
3.	Los determinantes del deseo de retorno	236
C.	Conclusiones	245
VIII	EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO: ¿UN CAMINO SIN RETORNO HACIA LA POBREZA?	249
	REFERENCIAS	255

INTRODUCCIÓN

La paz después de la Segunda Guerra Mundial se vio interrumpida por el surgimiento de conflictos internos en los distintos continentes. El mundo pasó de la predominancia de los grandes conflictos militares entre naciones a los conflictos civiles dentro de las naciones, patrón que continuó durante las décadas subsiguientes y perdura hoy, pese a un descenso pronunciado en los últimos años. Además de las recurrentes imágenes de las víctimas de los conflictos en los medios de comunicación, las cifras son elocuentes. Mientras que en 1946 se presentaron un poco más de 15 conflictos, el número de conflictos internos en 2001 llegó a un poco menos de 30 y en 1993 alcanzó un pico de 50¹.

La incidencia de conflictos internos, además de los costos usuales de las guerras, ha derivado en una creciente victimización de la población civil. Durante las guerras internas, los grupos armados involucran a la población como blanco de guerra, con el fin de alcanzar claros objetivos bélicos. Para alcanzar la consolidación de la hegemonía territorial, la apropiación de bienes públicos y privados para financiar el conflicto, el debilitamiento del apoyo civil al oponente, entre otros, los grupos armados llevan a cabo agresiones directas a la población civil. Una manifestación dramática de este accionar de los grupos armados es el flujo creciente y continuo de población desplazada y refugiada en el mundo. Hoy, más de 24,5 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por la violencia y 13 millones han cruzado las fronteras de su país para refugiarse de los embates del conflicto².

1 Gleditsch, 2002.

2 Internal Displacement Monitoring Centre. *www.internal-displacement.org*, consultada el 28 de marzo de 2008, y U.S. Committee for Refugees and Immigrants. *www.refugees.org*, consultada el 28 de marzo de 2008.

Pese a las reiteradas menciones por artículos académicos del impacto de los conflictos sobre la población civil y las imágenes diarias de población víctima del conflicto en todo el mundo, poco se ha examinado la magnitud del impacto para las víctimas del conflicto, y de las consecuencias económicas resultantes en el corto y largo plazo. Más aún, si bien hay un reconocimiento explícito de los profundos efectos de los conflictos sobre la población civil, las políticas de posconflicto se disocian completamente de dichos efectos y de la necesidad de mitigarlos. Estas políticas se concentran en los acuerdos de paz con los grupos armados, en buscar alternativas de reinserción para los combatientes, en reconstruir la infraestructura del país y en recuperar la confianza inversionista para atraer capitales; todas estas dimensiones cruciales para la reconstrucción de un país tras un conflicto, pero insuficientes para sentar las bases de una paz duradera y justa. Poco se hace para reparar los daños enfrentados por las víctimas y asegurar su recuperación económica y social en el período de posconflicto. Peor aún, en algunos procesos de posconflicto se asume que los impactos del conflicto son un hecho aislado concentrado en unas cuantas víctimas y que no se irriga, por ende, a toda la sociedad.

El propósito de este libro es examinar cómo los conflictos internos involucran a la población civil y entender las consecuencias de dichos conflictos sobre sus víctimas civiles. Para alcanzar estos objetivos, me concentro en un grupo particular de víctimas, la población desplazada, y analizo en detalle toda la génesis del desplazamiento forzoso: desde los ataques de los grupos armados a la población, pasando por el proceso de desplazamiento y asimilación en los lugares de llegada, hasta la posibilidad de retornar al lugar de origen.

Me concentro en un país particular, Colombia, para llevar a cabo el análisis. El desplazamiento forzoso en Colombia ha adquirido un cariz de emergencia humanitaria de primera línea. Describir las cifras del desplazamiento en Colombia, pese a no reflejar en toda su magnitud el drama del desplazamiento forzoso en Colombia, es justificación suficiente para basar mi análisis en este país. El total de personas desplazadas en Colombia ascendía, a mediados de 2008, a un poco más de 3,5 millones³, cifra que equivale a un 7,8% de la población colombiana y a un poco más de tres veces la ciudad de Barranquilla⁴. El fenómeno del desplazamiento no está, además, confinado en ciertas regiones aisladas de Colombia: un poco más del 90% de los municipios colombianos son expulsores de población desplazada. Pero si las cifras absolutas y relativas para Colombia son aterradoras, su magnitud es aun más dramática, al compararlas con

3 El capítulo I explica los cálculos para estimar el número de personas desplazadas.

4 Barranquilla es la tercera ciudad más grande de Colombia.

cifras de otros países. La población desplazada total en el mundo se estima en 24,5 millones; Colombia ocupa el deshonroso segundo lugar en número de desplazados, después de Sudán, y genera un 14,3% del desplazamiento mundial. Las consecuencias del desplazamiento forzoso sobre sus víctimas, como se demostrará a lo largo del libro, parecen ser devastadoras. Algunas cifras estimadas en el capítulo IV dan prueba de esto: un 95% de los hogares desplazados está por debajo de la línea de pobreza y un 75% está por debajo de la línea de pobreza extrema. Lo anterior significa que un poco más del 42% de los pobres extremos son personas desplazadas.

A lo largo del libro, discuto preguntas fundamentales para abordar el tema del desplazamiento forzoso bajo una óptica especial y no bajo los preceptos usuales de las políticas para mitigar la pobreza de la población. Con esto, pretendo demostrar que la población desplazada no es población pobre y tampoco son, ni mucho menos, migrantes económicos en busca de más y mejores oportunidades. La población desplazada es víctima del conflicto y, como tal, debe ser receptora de una atención especial y particular del Estado. Dicha atención no sólo contribuye en los procesos de reparación y reconciliación de un país una vez finaliza un conflicto sino que tiene una lógica económica. El desplazamiento forzoso deja un legado de pobreza para las presentes y futuras generaciones de sus víctimas. El lastre de una población sumida en una pobreza estructural retarda el desarrollo económico de un país y profundiza las iniquidades sociales. Una atención dirigida a impulsar a la población desplazada a superar las trampas de pobreza trasciende, por ende, la reparación de un grupo de víctimas.

¿Quiénes son víctimas de un conflicto? ¿El concepto de víctima sólo se aplica a las personas que sufrieron una agresión directa por parte de los grupos armados? ¿O constituye el desplazamiento forzoso en sí una victimización? Pretendo abordar, en primer lugar, este grupo de preguntas. Si bien estas preguntas se deben discutir en el ámbito del derecho internacional humanitario, los capítulos II y III del libro proporcionan evidencia para enriquecer la discusión. En el capítulo II, examino si el desplazamiento forzoso es una consecuencia desafortunada, pero fortuita, del conflicto o si, por el contrario, es una estrategia deliberada de guerra de los actores armados para alcanzar fines específicos. Para explorar estas hipótesis, analizo los objetivos de los grupos armados, discuto cómo los ataques a la población civil contribuyen a alcanzar dichos objetivos y desarrollo un modelo que resume el proceder de los grupos armados. Las hipótesis derivadas del modelo se estudian con una base de datos municipal que contiene información acerca de los ataques de los grupos

armados a los municipios, de la magnitud del desplazamiento y de características sociodemográficas de cada municipio.

Una vez los grupos armados deciden atacar un municipio y consolidar su presencia en el territorio, es asimismo importante preguntarse si la población civil se convierte en víctima del conflicto por una violencia generalizada, pero aleatoria, o si los ataques se dirigen a ciertos grupos de la población para alcanzar sus estrategias de guerra. El capítulo II, escrito en conjunto con Stefanie Engel, aborda este tema. El objetivo del capítulo es identificar, en primer lugar, cuáles grupos de la población civil son desplazados y, en segundo lugar, cuáles grupos de la población finalmente se desplazan en busca de refugio. Con la segunda pregunta, queremos también trazar una diferencia entre la migración forzada y la migración voluntaria con motivos económicos. ¿Son los desplazados migrantes económicos o su perfil diverge diametralmente de los migrantes? Para ello, identificamos los determinantes del desplazamiento forzoso e incorporamos las consideraciones clásicas de la literatura de la migración y variables que capten las dinámicas de violencia enfrentadas por los hogares. Con el fin de explorar estas hipótesis, aplicamos una encuesta de hogares en zonas con una alta incidencia de desplazamiento, a hogares que decidieron permanecer en la zona, pese a la violencia enfrentada, y a hogares que se desplazaron de dichas regiones.

Más allá de las agresiones vividas y del proceso inicial del desplazamiento, el libro profundiza en el tema del impacto económico sobre sus víctimas en los capítulos IV, V, y VI. En particular, estudio cómo cae el bienestar de los hogares desplazados, debido al desplazamiento; cuál es la capacidad de dichos hogares para recuperarse del choque económico y recobrar su capacidad productiva, y qué efectividad tienen los programas dirigidos a la población desplazada para impulsar su recuperación económica. Profundizar en estas preguntas es esencial para diseñar políticas públicas que, además de reconocer el estatus de víctimas de la población desplazada, mitiguen el choque económico y aboguen por la recuperación de la capacidad económica de una población antes productiva.

El capítulo IV estudia el impacto del desplazamiento forzoso sobre el bienestar, cuáles familias enfrentan un descenso más pronunciado en el bienestar, cómo evoluciona el bienestar de las familias con el paso del tiempo y qué factores contribuyen a mejorar las condiciones económicas en el lugar de origen. Con el análisis anterior, el capítulo da luces sobre el descenso en bienestar de la población desplazada y, más importante aun, compara las condiciones de esta población con las de una población igualmente vulnerable, los pobres urbanos. El capítulo provee, además, indicios de posibles mecanismos para mitigar el choque del desplazamiento

e identifica los grupos de población desplazada que deben ser objeto de una atención especial, dada su dificultad para recuperarse del choque inicial. En el trasfondo del análisis subyace una pregunta fundamental: debido a la magnitud del choque y su capacidad de recuperarse de manera autónoma sin ayuda del Estado, ¿debe ser la población desplazada objeto de una discriminación positiva por parte de la política estatal? El análisis de este capítulo y los tres subsiguientes se basa en encuestas de hogares diseñadas por la Universidad de los Andes y aplicadas por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal a 2.322 hogares desplazados, localizados en 48 municipios y 23 departamentos de Colombia.

La habilidad para recuperar la capacidad productiva y para asegurarse frente a choques futuros se examina en el capítulo V, escrito en conjunto con Andrés Moya. El desplazamiento forzoso ocasiona un deterioro marcado del capital físico, humano, social y financiero. El deterioro de estos capitales, la dinámica de recuperación del capital físico y la disponibilidad de mecanismos formales e informales de aseguramiento de riesgos son objeto de estudio del capítulo. El fin último del mismo es establecer, por un lado, si la población desplazada posee el capital suficiente para recobrar su senda productiva y, por otro, si el hogar puede asegurarse respecto a futuros choques, dado el deterioro marcado de todos los mecanismos de aseguramiento contra riesgos.

Una vez detallo las caídas en el bienestar, las pérdidas de activos y los diversos mecanismos para recuperarse del impacto producto del desplazamiento, me concentro en evaluar los programas de generación de ingresos diseñados para la población desplazada. Dicha evaluación se presenta en el capítulo VI. En particular, me pregunto a lo largo del capítulo qué tan efectivos son los programas de generación de ingresos, cuál es su eficacia para impulsar la vida productiva de los hogares desplazados y si el impacto es suficientemente alto y de largo plazo para modificar las condiciones de bienestar y evitar que los hogares adopten estrategias que profundizan la pobreza.

Ahora bien, los capítulos IV, V y VI se han centrado en discutir el impacto económico del desplazamiento, bajo el supuesto que las familias desplazadas aún permanecen en el lugar de recepción. Pero la población desplazada, una vez se está transitando por la etapa de posconflicto, tiene la prerrogativa de retornar a su lugar de origen si así lo desea. Es más, el retorno es considerado como la política óptima para la población desplazada cuando el conflicto cesa. Retornar significa volver a los mercados productivos que conoce, reinsertarse en sus redes sociales y recuperar su viejo entorno. Producir ingresos y superar el trauma vivido por el desplazamiento lucen más simples en su entorno usual y natural. El último capí-

tulo analiza entonces cuáles son las condiciones mínimas necesarias para incentivar el retorno de la población desplazada. ¿Se debe garantizar la no repetición de los hechos que originaron el desplazamiento? ¿Qué tan importante es garantizar la restitución de los activos perdidos por el desplazamiento? ¿Es el retorno óptimo para todos los grupos desplazados o ciertos hogares prefieren nunca volver al sitio donde fueron víctimas de guerra? Todas las preguntas anteriores se discuten en el capítulo VII.

La contribución del libro se puede dividir en tres temas. Primero, si bien diversos estudios mencionan recurrentemente que los costos que enfrenta la población civil en los conflictos son abundantes, la evidencia es poca y es más anecdótica que fáctica. La carencia de datos, debido a la dificultad para recolectar información sobre las víctimas de los conflictos, es un obstáculo, algunas veces infranqueable, para estudiar este tema. Los estudios económicos recurren entonces a estudiar datos agregados de la población cuyas limitaciones sólo permiten estimar, por ejemplo, el impacto agregado sobre la producción económica, la inversión agregada, la morbilidad o la mortalidad de la población. Al ser datos agregados y sólo unos cuantos indicadores, se subestiman sustancialmente los costos de los conflictos internos. Otros estudios recurren a encuestas de hogares y datos de eventos violentos para intentar cuantificar el impacto del conflicto sobre los hogares. Dichos estudios son un avance valioso frente a los estudios con datos agregados, pero la imposibilidad de identificar directamente las víctimas de la violencia y el proceso de victimización vivido redundan en una alta imprecisión de las estimaciones sobre los costos de la violencia.

Segundo, el libro contribuye a una creciente literatura económica acerca del impacto de los choques económicos sobre los hogares. La evidencia de esta literatura se circunscribe a los choques usuales, tales como desastres naturales, la muerte de un familiar o la pérdida del empleo, entre otros. El desplazamiento forzado, un choque que en muchos casos comprende efectos similares a todos los anteriores, es un choque severo y su efecto es bastante más alto que aquel de los choques usuales. El libro es valioso al proveer evidencia adicional de cómo se generan los choques durante los conflictos, cómo reaccionan los hogares ante choques severos, cómo se comportan ante ciertos programas para mitigar los choques y cómo modifican su comportamiento para mitigar el impacto del choque.

Tercero, el libro provee una evidencia bastante sólida del legado de pobreza que perdura tras el fin de un conflicto. Además de documentar las consecuencias nefastas de un conflicto, el análisis del libro pretende dar luces para diseñar políticas y programas dirigidos a mitigar el impacto del conflicto y, tal vez, convertir la etapa del posconflicto en una oportu-

nidad para promover políticas que reduzcan las iniquidades anteriores al conflicto.

Además de contribuir a entender los costos económicos del conflicto, el libro es importante para el momento actual que transita Colombia, ya que es un testimonio y una evidencia de los costos de los conflictos para un grupo significativo de nuestra población. Al reflejar las consecuencias de nuestros actos de guerra, el libro contribuye a los procesos de reconstrucción de la verdad necesarios en los procesos de reconciliación y constituye un testimonio para evitar que nuestra sociedad continúe incurriendo en estas atrocidades. Este texto cuantifica, además, las pérdidas económicas del conflicto; pérdidas que deben ser tenidas en cuenta en un proceso de reparación que permita a la población desplazada retomar el rumbo que llevaban antes de ser víctimas del conflicto.

Para terminar, quiero agradecer a todas las personas e instituciones cuyas contribuciones fueron cruciales para la culminación de este libro. Éste es el resultado de un trabajo de varios años con personas que fueron mis coautores en diversos estudios: Stefanie Engel, Jaime Andrés Erazo, Alberto Galán, Andrés Moya, Patricia Neira, Pablo Querubín, Carlos Eduardo Vélez y Andrea Velásquez. Cada trabajo contribuyó a la elaboración de este libro. Agradezco inmensamente la colaboración prestada por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en la elaboración de la encuesta para hogares desplazados, base de cuatro de los capítulos del libro; en particular, a Fanny Uribe y el padre Maurizio Pontín, cuyos profundos conocimientos sobre la población desplazada y su entusiasmo durante la aplicación de las encuestas cimentaron mi compromiso con la población desplazada. La financiación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Colciencias, GDN, Microcon, USAID y la Universidad de los Andes hicieron posible este libro y muchas otras investigaciones sobre desplazamiento forzoso en Colombia. A Andrea Velásquez y Fidel Cano agradezco su infinita paciencia en la revisión de todo el manuscrito y en la corrección de éste. Por supuesto, el libro no habría sido posible sin la generosa participación de la población desplazada; ellos cedieron su tiempo para conversar largas horas conmigo y para contestar las encuestas. Durante mi contacto con ellos, no sólo contribuyeron en la elaboración del libro sino que me dieron el ejemplo para afrontar la vida con dignidad, fuerza y optimismo. Por último, agradezco a Antonia y Salvador, por ser mi inspiración diaria; a mis papás, por ser mi apoyo permanente, y a Fidel, por su apoyo y amor constantes.

I

UNA MIRADA INICIAL AL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA

La migración forzada es un fenómeno recurrente en Colombia. La intensificación de los conflictos armados en el país ha estado acompañada de la expulsión de los habitantes de las áreas rurales. La agudización reciente del conflicto durante la década de los noventa no es la excepción. El fortalecimiento de los grupos guerrilleros y el surgimiento de los grupos paramilitares, ambos financiados con recursos de la producción y comercio de cultivos ilícitos, recrudesció el conflicto y favoreció su expansión geográfica, incrementando además los ataques hacia la población civil.

El secuestro, las masacres, los asesinatos selectivos, el reclutamiento forzado y las minas antipersonales, entre otros, se convirtieron en estrategias de los grupos armados al margen de la ley para alcanzar sus objetivos de guerra. Los índices de secuestro en 2001 superaron las tres mil personas, una de las cifras más altas del mundo⁵ y, si bien el secuestro ha disminuido significativamente, en 2006 se presentaron 687 secuestros en 28 de los 32 departamentos colombianos⁶. Después de una reducción ostensible en la comisión de masacres, en 2006 aún se registraban 37 casos de masacres, que implicaron la muerte de 193 personas⁷. La instalación de minas antipersonales, práctica que todavía no se ha erradicado en Colombia, implicó que en el año 2006 se presentaron 1.964 eventos de uso de minas antipersonales o minas antipersonales abandonadas sin usar, cifra que es un 14% superior a la de 2005. Como resultado, 1.100 personas fueron víctimas de los accidentes con minas antipersonales⁸.

5 *www.policia.gov.co*, consultada el 16 de marzo de 2006,

6 *www.derechoshumanos.gov.co*, consultada el 22 de abril de 2008.

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

El desplazamiento forzado, la expresión más dramática de la victimización de la población civil, ha alcanzando cifras elevadas. La población desplazada⁹ atendida por el Gobierno nacional ascendía el 31 de marzo de 2008 a 2.452.152 personas, según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)¹⁰. Dado que cerca del 30% de la población desplazada no está registrada en el RUPD¹¹, la magnitud total del desplazamiento podría ascender a un poco más de 3,5 millones de personas desplazadas; magnitud que equivale al 7,8% de la población colombiana, a 1,5 veces la población de Medellín y un poco más de tres veces la población de Barranquilla¹². Cifras cuyo valor absoluto o relativo es a todas luces dramático. El objetivo de este capítulo introductorio es describir el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia y examinar sus causas.

La evolución del desplazamiento a partir de 1999, año en el cual se adopta el RUPD, se presenta en la gráfica 1, la cual ilustra la tendencia del desplazamiento, según los registros oficiales y CODHES, organización no gubernamental que presenta estimaciones de la magnitud del desplazamiento en Colombia. Ambas tendencias denotan un fuerte incremento de la migración forzada durante el período comprendido entre 1999 y 2002, años en los cuales Colombia enfrentó un considerable recrudecimiento del conflicto. A partir de 2002, el desplazamiento forzado cedió terreno, pero aún se desplazaron en promedio 266.635 personas al año, magnitud que equivaldría a que una ciudad del tamaño de Popayán migrara en un año. Más aún, si bien se negoció el proceso de paz con los grupos paramilitares y el conflicto ha disminuido su intensidad, entre 2003 y 2007 se concentra más del 50% de los desplazamientos forzosos desde 1999. Ello

9 Según el Artículo 1 de la Ley 387 de 1997, un desplazado es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

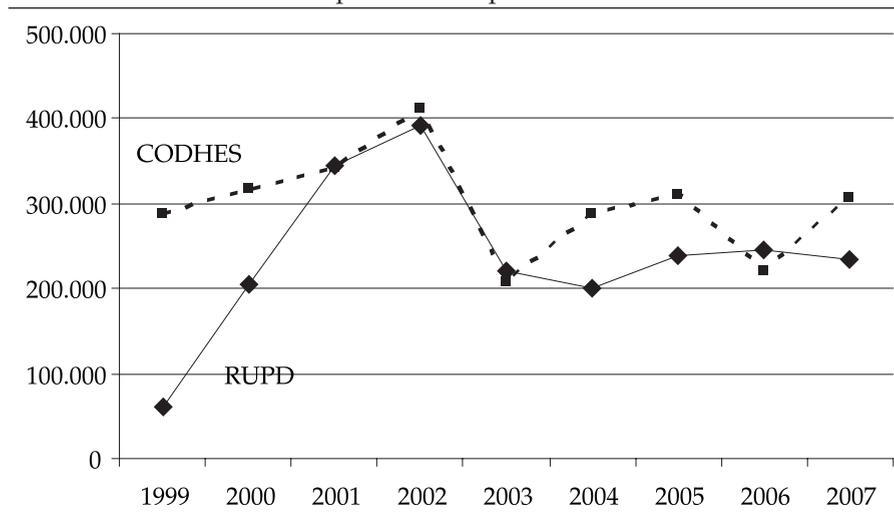
10 El Registro Único de Población Desplazada (RUPD) contiene la información de las personas desplazadas beneficiarias de la asistencia estatal. Para ser inscrito en el RUPD, los hogares desplazados deben recurrir a cualquier dependencia del Ministerio Público y declarar, bajo gravedad de juramento, los hechos del desplazamiento y los grupos responsables. Dicha información debe ser validada por Acción Social, la entidad gubernamental encargada de atender a la población desplazada, en un plazo no mayor a 15 días.

11 Ibáñez y Velásquez, 2006.

12 Cifras de población tomadas de *www.dane.gov.co*, consultada el 21 de abril de 2008.

denota una tendencia preocupante, pues la disminución del conflicto no parece traducirse en una inmediata reducción del desplazamiento forzoso.

Gráfica 1. Evolución del desplazamiento forzoso en Colombia: número de personas desplazadas



Fuentes: Acción Social y CODHES.

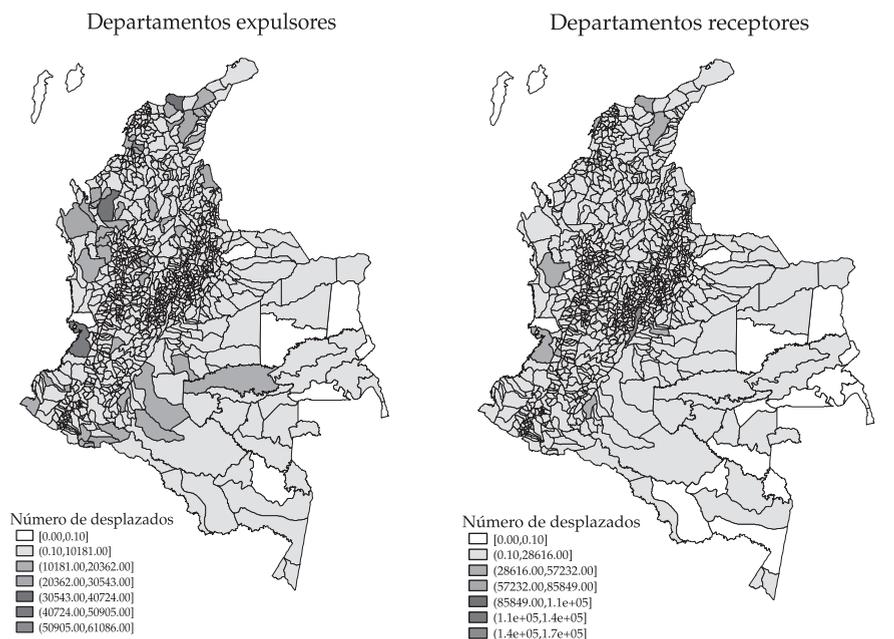
La comparación con cifras internacionales revela, asimismo, la gravedad del fenómeno en Colombia. Estimaciones del IDMC (Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, por su sigla en inglés) calculan que la población desplazada en todo el mundo asciende a 24,5 millones de personas. Colombia contribuye entonces con un 14,3% de los desplazamientos en el mundo y ocupa el segundo lugar, después de Sudán, en número de personas desplazadas¹³.

La expulsión de población desplazada no sólo ha crecido de manera constante, también se ha expandido a lo largo del territorio nacional. Durante 1995, sólo 35 municipios del país fueron expulsores de población, y en 2002 dicha cifra ya ascendía a 949, es decir un poco más del 90% de los municipios del país eran expulsores de población. La expansión del fenómeno del desplazamiento a casi todos los municipios de Colombia, ya sea como expulsores o receptores de población desplazada, se aprecia en el mapa 1. Los municipios en blanco no expulsaron ni recibieron población desplazada. Tal como se observa, sólo unos cuantos municipios del país no han expulsado o recibido población desplazada. El fenómeno no se circunscribe, por ende, a unos municipios apartados del país. Por el

13 www.internal-displacement.org, consultada el 22 de abril de 2008.

contrario, es un fenómeno generalizado que se extiende a lo largo de la geografía colombiana.

Mapa 1. Distribución geográfica del desplazamiento: municipios expulsores y receptores



Fuente: Ibáñez y Velásquez (2008).

Si bien el desplazamiento afecta de manera generalizada a casi todos los municipios del país, su incidencia en algunos municipios parece ser permanente y su impacto es sustancial. Al calcular la intensidad del desplazamiento, es decir, el porcentaje de personas desplazadas respecto a la población total del municipio expulsor, se encuentra que algunos municipios han perdido más de la mitad de su población, debido a la migración forzada de sus habitantes. Algunos ejemplos elocuentes son Bojayá (Chocó), con una intensidad del 94,7%; Cocorná (Antioquia), con el 93,8%; El Tarra (Norte de Santander), con el 82,4%; Peque (Antioquia), con el 77,5%, y Riosucio (Chocó), con el 76,1%. Es más, 10% de los municipios colombianos han perdido cerca de una cuarta parte de su población como consecuencia del desplazamiento forzoso. Los indicadores de presión, que calculan la llegada de población desplazada a un municipio frente a su población nativa, denotan asimismo la dificultad que están enfrentando las ciudades intermedias para absorber los grandes flujos migratorios. Los siguientes indicadores de presión para ciertas capitales

departamentales demuestran dicho impacto: Mocoa (Putumayo), 33,3%; Quibdó, (Chocó), 26,4%; Sincelejo (Sucre), 24,6%; Florencia (Caquetá), 20,3% y San José (Guaviare), 18,5%. Todos estos municipios, con dificultades para atender a su población nativa, han recibido una persona por cada cinco personas nativas en los últimos años, lo cual es a todas luces una emergencia humanitaria que no se puede atender con los recursos usuales de un municipio.

Los grupos guerrilleros y paramilitares, al perpetrar ataques directos a la población civil, son los principales responsables del desplazamiento en Colombia. Con el recrudecimiento del conflicto, estos grupos adoptaron tácticas de ataques frontales a la población civil. Esto, además de facilitar el control territorial, la apropiación de activos y el debilitamiento de las redes sociales, obliga a la población a buscar refugio en otros municipios. Los datos de Acción Social revelan que, cuando los hogares reportan el autor del desplazamiento, la guerrilla es responsable del 45,8% de los desplazamientos; los grupos paramilitares, del 21,8%; la fuerza pública es identificada por un 1,1% de los hogares, y el porcentaje restante corresponde a otros grupos¹⁴.

Los ataques de los grupos armados, la violencia indiscriminada o la mera presencia de grupos armados provocan el desplazamiento de la población. El desplazamiento reactivo se produce tras un ataque directo de los grupos armados a la población civil, mientras que el desplazamiento preventivo sucede para evitar una posible victimización futura. Una tipología de dichos ataques se presenta en el cuadro 1. La evidencia del cuadro 1 es contundente: la población desplazada es víctima en unas proporciones aterradoras de los ataques de los grupos armados y un alto porcentaje de los hogares se desplaza de manera reactiva. Ello implica que la población desplazada tiene una doble condición de víctima. Por un lado, es víctima de crímenes de lesa humanidad y, por otro lado, es una población en condición de desplazamiento. Los principales detonantes del desplazamiento son las amenazas (54,5%), la violencia indiscriminada (39,1%), las confrontaciones armadas (36%), los homicidios (34,5%), las órdenes de desalojo (29,6%) y las masacres (21,1%).

Las estrategias de migración de la población desplazada en Colombia son particulares del conflicto colombiano. En países con desplazamiento forzado, la población migra, por lo general, de manera masiva y se localiza en campos especiales para población refugiada. Ello sucede tras confrontaciones entre los grupos armados y la fuerza pública o ataques masivos y directos a las comunidades. En muchos países africanos los ataques a

14 www.accionsocial.gov.co, consultado el 21 de abril de 2008.

la población provienen de la fuerza pública¹⁵. La falta de protección de la fuerza pública o su clara participación en los hechos ocasiona que, a diferencia de Colombia, las personas decidan migrar masivamente o buscar refugio en otros países, para lograr una mayor protección¹⁶. Colombia ofrece un panorama diferente. Las personas se desplazan predominantemente de manera individual y pocas migran por fuera de las fronteras del país. La gráfica 2 ilustra la evolución del desplazamiento individual y masivo¹⁷ durante el período comprendido entre 1999 y 2007. Cerca del 80% de los desplazamientos que han ocurrido en Colombia son individuales. La incidencia de los desplazamientos masivos fue más frecuente durante el recrudecimiento del conflicto armado, entre 2000 y 2002, cuando los ataques a los municipios y los combates entre grupos armados fueron comunes, siendo Bojayá¹⁸ el ejemplo más emblemático. Por otro lado, los desplazamientos individuales han predominado durante los últimos tres años.

Cuadro 1. Motivo de expulsión^a

Variables	Porcentaje hogares
Amenaza directa	54,46%
Intento de homicidio	18,94%
Homicidio	34,47%
Desaparición o tortura	14,41%
Reclutamiento forzado	17,28%
Masacres	21,13%
Secuestro	7,58%
Confrontación armada	35,96%
Violencia indiscriminada	39,13%
Orden de desalojo	29,59%

a. Los porcentajes no suman 100%. Una sola familia puede ser víctima de varios eventos
Fuente: Ibáñez y Velásquez (2008).

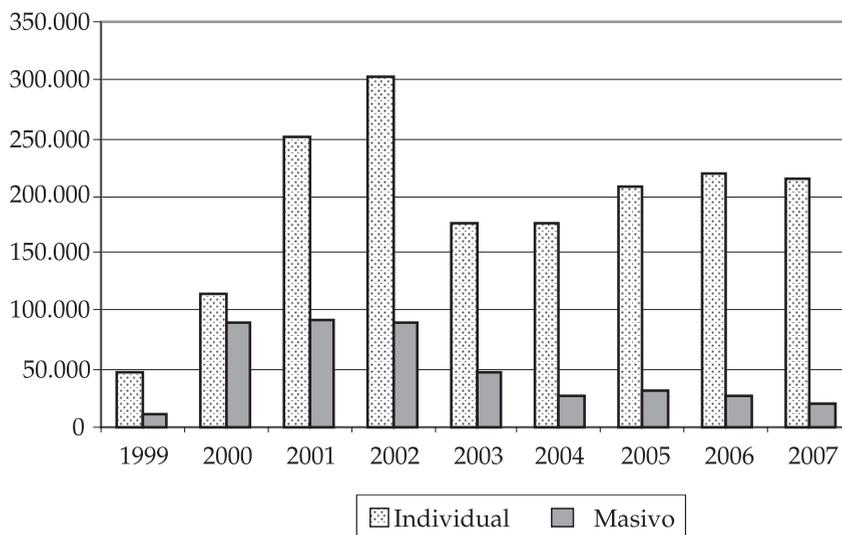
15 Azam y Hoefler, 2002.

16 Moore y Shellman, 2006.

17 Según la definición oficial, un desplazamiento masivo ocurre cuando un grupo de más de 50 personas o 10 hogares se desplazan de manera conjunta.

18 En mayo de 2002, los grupos guerrilleros atacaron la población de Bojayá, localizada en el departamento del Chocó. Como resultado, 119 personas murieron y 4.284 personas se desplazaron (Conferencia Episcopal, 2002).

Gráfica 2. Desplazamiento masivo vs. individual



Fuente: Acción Social.

Es claro entonces que el desplazamiento forzado ha alcanzado magnitudes sin parangón en la historia de Colombia y con pocas comparaciones internacionales similares. El total de personas desplazadas es segundo en el mundo, las cifras relativas denotan una emergencia humanitaria de proporciones considerables y la victimización de la población desplazada es evidente. La siguiente sección describe las causas del desplazamiento forzado en Colombia.

A. Las causas del desplazamiento forzado en Colombia¹⁹

La violencia en Colombia se intensificó desde la década de 1970, con una consecuente triplicación de las tasas de homicidio durante el período comprendido entre 1970 y 1991. Hasta marzo de 2008, el desplazamiento forzado había afectado a un 7,8% de la población colombiana y el conflicto interno cubría vastas regiones del país, pese al repliegue de la guerrilla y el proceso de paz con los grupos paramilitares. Los orígenes de la violencia actual son complejos: el comercio de drogas ilícitas, la debilidad del sistema judicial, la presencia de grupos armados al margen de la ley, la pobreza, la desigualdad y décadas del conflicto armado son identifi-

¹⁹ Esta sección se basa en el trabajo de Ibáñez y Vélez, 2008, "Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia" e Ibáñez y Querubín, 2004, "Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia".

cadadas como las causas de la violencia en Colombia²⁰. Pero el impacto de la violencia diverge entre las áreas urbanas y rurales. Mientras las áreas urbanas enfrentan tasas de homicidios elevadas, la población rural está sometida a las confrontaciones armadas, las masacres, los ataques de los grupos armados y el desplazamiento forzoso.

La violencia y el desplazamiento forzoso parecen tener una estrecha relación. Para explorar esto, se clasifican los municipios de Colombia en cuatro categorías: (i) municipios con una baja incidencia del desplazamiento y bajas tasas de homicidios; (ii) municipios con una baja incidencia del desplazamiento y unas altas tasas de homicidios; (iii) municipios con una alta incidencia del desplazamiento y unas bajas tasas de homicidios; y (iv) municipios con una alta incidencia del desplazamiento y unas altas tasas de homicidios²¹. El cuadro 2 muestra que la alta incidencia del desplazamiento y las altas tasas de homicidios coinciden en un 57,8% de los municipios colombianos; por el contrario, los municipios con una baja incidencia del desplazamiento exhiben asimismo bajas tasas de homicidios.

Cuadro 2. Clasificación de los municipios colombianos de acuerdo a la incidencia del desplazamiento y las tasas de homicidios

Tasas de homicidios	Desplazamiento de población	
	Baja incidencia	Alta incidencia
Altas	66,1%	42,2%
Bajas	33,9%	57,8%

Fuente: Ibáñez y Vélez (2008).

La intensidad y la naturaleza del conflicto determinan los ataques dirigidos contra la población civil. Por un lado, cuando el conflicto se intensifica, incrementar el número de crímenes contra la población civil se convierte en una estrategia de bajo costo para despejar el territorio, lo cual permite a los grupos armados al margen de la ley fortalecer el control en sus regiones, transportar con facilidad armas y desarrollar actividades ilegales con menores obstáculos. Por otro lado, los crímenes contra la población civil son más frecuentes en regiones disputadas por dos grupos armados, donde se encuentra la presencia antagónica de ambos grupos.

20 Vélez, 2002; Sánchez y Núñez, 2001; Gaviria, 1998.

21 Se clasifica un municipio con alta incidencia del desplazamiento o con altas tasas de homicidios cuando la cifra correspondiente está por encima de la mediana nacional.

Pese a la inobjetable relación entre la presencia de grupos armados, la violencia y el desplazamiento forzado, las causas subyacentes de la migración forzada en Colombia son difíciles de identificar. Los detonantes inmediatos son, por lo general, el último incidente en una cadena de eventos que producen la decisión final de huir del pueblo para buscar refugio. Los orígenes del desplazamiento forzado residen, sin embargo, en la dinámica del conflicto colombiano. Los párrafos siguientes describen algunas hipótesis que aparecen de manera reiterativa en la literatura acerca de las causas del desplazamiento en Colombia.

Las disputas de tierra y la usurpación ilegal son consideradas causas subyacentes del desplazamiento forzado²². La ocupación ilegal de tierras constituye una estrategia de guerra crucial para despejar el territorio de posibles oponentes, expandir el control territorial y apropiarse de predios valiosos. Ello es particularmente válido para regiones disputadas por varios grupos armados, donde los grupos intentan consolidar su hegemonía. Todo lo anterior deriva, como se examina en los capítulos tres y cinco, en un desplazamiento elevado de pequeños propietarios rurales, con un abandono de tierras que se calcula entre 1,7 millones y cuatro millones de hectáreas²³. Dada la influencia de los conflictos de tierras sobre el conflicto armado en Colombia, este tema se examina a profundidad en la siguiente sección.

La presencia de cultivos ilícitos y el narcotráfico provocan desplazamiento forzado. La presencia de cultivos ilícitos genera una presión adicional sobre la tierra y sobre el desplazamiento, debido no sólo a la adquisición de tierras para el cultivo de coca y amapola, sino también por la importancia del control de corredores para el transporte de drogas. La fumigación de cultivos ilícitos implica, asimismo, la destrucción de los activos de los cultivadores, generando un choque en sus ingresos y un incremento en los combates. La intensificación de la fumigación en los últimos años ha provocado una ola migratoria importante. Se estima que en Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, regiones cocaleras y escenario de la guerra, 13.153 personas se desplazaron durante 1999. Dicha cifra puede ascender a 20.000 si se incorpora la migración interdepartamental, y a más de 30 o 40 mil si se suman los cosecheros de hoja de coca y los colonos²⁴. Dado que el desplazamiento forzado causado por la erradicación de cultivos ilícitos no es contemplado por la Ley 387 de 1997, una cuantificación más reciente no está disponible.

22 Reyes y Bejarano, 1998; Kay, 2007.

23 PMA, 2001.

24 Puyana, 1999.

El narcotráfico en algunas regiones del país presenta una estrecha relación con el fenómeno del desplazamiento. Por un lado, la compra de tierras por narcotraficantes, como mecanismo para lavar dinero ilícito, genera un proceso especulativo de la tierra, que diezma la capacidad de adquisición del Estado y las posibilidades de negociación de los campesinos frente a los terratenientes. Además, los narcotraficantes heredaron en muchos casos conflictos sociales en las tierras que compran, para lo cual conformaron grupos de autodefensa que intensificaron el conflicto en ciertas regiones y, desde luego, el desplazamiento^{25,26}.

La expulsión de la población como estrategia de guerra busca asimismo impedir los movimientos de resistencia civil, debilitar las redes sociales e intimidar a la población, para así ejercer un mayor control. Los ataques a la población debilitan el apoyo a los grupos oponentes e impiden los levantamientos civiles²⁷. Lozano y Osorio (1999) estiman que un 65% de las personas desplazadas eran miembros activos de organizaciones comunitarias, y un poco más del 11% participaba en organizaciones sindicales y políticas en sus pueblos.

Por último, las familias rurales pueden migrar de manera involuntaria, para evitar el reclutamiento forzoso de sus hijos por parte de los grupos armados al margen de la ley. Niños de ocho años han sido reclutados para pelear como soldados en los grupos armados colombianos²⁸. Por ejemplo, después de un enfrentamiento en octubre de 2001, las Fuerzas Militares colombianas encontraron que cerca de un 43% de los guerrilleros muertos en combate y un 41% de los guerrilleros capturados tenían menos de 18 años de edad²⁹. Estimaciones de la UNICEF calculan que cerca de 14.000 menores han sido vinculados a los grupos armados al margen de la ley como combatientes³⁰.

El desplazamiento forzoso, sus causas y las tácticas de los grupos armados para expulsar población no son un fenómeno exclusivo del conflicto reciente. Durante la época de *La Violencia*, el conflicto provocó un fuerte impacto sobre la población civil: Colombia exhibía los índices más altos de violencia y los diez departamentos más afectados por la violencia re-

25 Pérez, 2002; Reyes, 1997.

26 Pérez, 2002, señala que la presión sobre la tierra y los conflictos que esto genera se presentan en zonas en las cuales hay presencia de recursos estratégicos, no sólo cultivos ilícitos, sino también carbón, petróleo y esmeraldas, generando especulación y violencia.

27 Henao, 1998.

28 Salazar, 2001.

29 USCR, 2003

30 www.unicef.es, consultado el 6 de mayo de 2008.

portaron 174.046 muertes³¹. Las tácticas de los grupos armados, si bien diferían en ciertos casos, consistían en ataques frontales a la población civil, para alcanzar objetivos de guerra, ocasionando así el desplazamiento de la población. Es así como durante la época de *La Violencia* los desplazados eran las víctimas de los ataques directos de los grupos armados y no, al igual que en el conflicto actual, un subproducto desafortunado del conflicto³². Roldán (2003) estima que, durante el período comprendido entre 1946 y 1966, cerca de dos millones de colombianos migraron de manera involuntaria y un alto porcentaje nunca retornó.

Los ataques a la población civil buscaban, como en la actualidad, fortalecer la hegemonía sobre un territorio, usurpar tierras valiosas y despejar las tierras de posibles oponentes. En Antioquia, por ejemplo, las luchas entre los partidos transmutaron a las disputas sobre quién debía habitar y controlar las tierras en cada región³³. Es así como los pobladores partidarios del partido político sin presencia en la región eran expulsados o debían huir para evitar ser víctimas de la violencia³⁴. El despojo del territorio para despojar tierras y poblarlas con partidarios políticos fue reportado en varias regiones del país³⁵. Los pequeños propietarios, quienes eran más débiles, abandonaban sus parcelas por miedo a ser víctimas de la violencia; otros eran forzados a vender sus tierras a precios menores y otros vendían sus tierras a precios muy por debajo del precio comercial, debido al pánico³⁶. La usurpación de tierras en algunas regiones no se circunscribió sólo a los pequeños propietarios. Grandes hacendados del partido opositor al partido hegemónico de la región fueron expulsados de sus tierras, que después eran ocupadas por miembros del partido, guerrilleros o nuevos pobladores³⁷. Huir de la violencia generalizada, algo que es menos común en la actualidad, pues un alto porcentaje de desplazamiento se presentan tras ser víctimas de ataques directos, era común durante *La Violencia*³⁸.

Las consecuencias sociales de los desplazamientos forzados perpetrados durante *La Violencia* fueron, presumiblemente, similares a los actuales.

31 Oquist, 1978.

32 Roldán, 2003; Molano, 1989; Henderson, 1985; Guzmán *et al.*, 1963.

33 Roldán, 2003.

34 Roldán, 2003; Henderson, 1985; Oquist, 1978.

35 Roldán, 2003.

36 Roldán, 2003; Oquist, 1978; Guzman *et al.*, 1963.

37 Roldán, 2003.

38 Molano, 1989; Henderson, 1985; Guzmán *et al.*, 1963.

Sin embargo, la evidencia en este tema es poca y dispersa. Un estudio de Pineda (1960), cuyo objetivo es examinar el desplazamiento de población proveniente de El Líbano (Tolima), encuentra, por ejemplo, que un 37,5% de los hogares perdió familiares en el conflicto; un 29,5% era propietario de sus tierras y sólo un 58% de éstos pudo conservar sus tierras; un 27% estaba desempleado en el momento de la encuesta; y un poco más del 7% deseaba retornar. Oquist (1978) estima que el despojo de tierras, la titulación de tierras o la ocupación *de facto* afectó a cerca de 393.648 parcelas en este proceso. Los capítulos posteriores del libro demostrarán que las consecuencias del desplazamiento forzoso en la actualidad son bastante similares a las aquí descritas.

Para mitigar el impacto del desplazamiento forzoso y promover el retorno de la población campesina a sus regiones, el Gobierno nacional creó en 1953 la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro. Los informes de la Oficina indican que más de 32.000 personas retornaron a sus pueblos entre los meses de junio y noviembre de 1953 y, después de seis meses de su creación, la Oficina había auxiliado a 11.622 exiliados en Bogotá, a 20.949 en otras poblaciones y ciudades, y había retornado, bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, a 4.722 personas³⁹. El siguiente recorte de prensa reporta, por ejemplo, el retorno, promovido por la Oficina, de desplazados provenientes de Yacopí, el 24 de junio de 1953.



Fuente: *El Tiempo*, 24 de junio de 1953.

³⁹ Henderson, 1985; Guzmán *et al.*, 1963.

B. Las disputas de tierras, la usurpación de la propiedad y el desplazamiento en Colombia

El vínculo entre las disputas de tierras, el conflicto armado y el desplazamiento forzoso de población es recurrente y ampliamente documentado en la literatura colombiana. Dada la importancia de este tema, la presente sección analiza a profundidad la influencia del tema de la propiedad de la tierra y las disputas por tierra sobre el conflicto armado en Colombia

La escasez creciente de la tierra deriva, por lo general, en el fortalecimiento de los derechos de propiedad⁴⁰. Algunos países en desarrollo ofrecen, empero, la evidencia contraria: la escasez de tierras ha provocado conflictos en las fronteras agrícolas, y la debilidad de sus instituciones ha permitido que grupos de poder se apropien de grandes extensiones de tierra con estrategias ilegales⁴¹. Cuando la coerción no ha sido efectiva para lograr la acumulación de tierras, los grupos de poder han acudido al Estado para conseguir distorsiones a su favor y así lograr una concentración de la propiedad⁴².

La evidencia empírica demuestra un vínculo entre las disputas de tierras y la violencia en países como Brasil, Ruanda y Colombia. La política contradictoria de tierras en Brasil ha generado conflictos entre terratenientes y colonos. Alston *et al.* (2000) muestran que los conflictos son más comunes en los municipios donde hay grandes propiedades, lo cual genera expectativas de intervención del Estado a favor de los colonos, incentiva a los grandes propietarios a expulsar a los colonos y, de otro lado, a los colonos, a evitar su expulsión. Estimaciones econométricas municipales para Brasil encuentran que la inseguridad en los derechos de propiedad de la tierra aumenta la probabilidad de conflictos violentos. André y Platteau (1998) demuestran que hay una estrecha relación entre la competencia por tierras y la guerra civil de Ruanda desatada en 1994.

Colombia ofrece también un claro ejemplo de la dinámica de las disputas de tierras y conflictos violentos. Durante la primera mitad del siglo XX, la política de tierras en Colombia se concentró en promover la colonización de terrenos baldíos y en proteger la distribución de la tierra dentro de la frontera agrícola⁴³. La titulación de terrenos baldíos a quienes despejaron y trabajaron la tierra promovió la colonización acelerada de las zonas de

40 Binswanger *et al.*, 1995.

41 Deininger y Feder, 1998.

42 Binswanger *et al.*, 1995.

43 Molano, 1994.

frontera. Una vez los terrenos estaban en condiciones de generar excedentes económicos, las grandes terratenientes se apropiaban de los predios y convertían a los colonos en arrendatarios⁴⁴.

El siglo pasado estuvo plagado de conflictos entre colonos y grandes terratenientes. En gran parte del siglo XIX, las disputas de tierras no estuvieron presentes, ya que los pequeños campesinos se dedicaron a colonizar predios por fuera de la frontera agrícola⁴⁵. Sin embargo, desde 1889 hasta 1925, los pequeños propietarios estuvieron en una constante lucha contra los grandes terratenientes y acudieron a los canales institucionales para resolver las disputas de tierras. El agotamiento de la frontera agrícola en la región andina entre 1925 y 1935 desembocó en la primera ola de conflictos violentos, y el crecimiento de la economía agrícola exportadora exacerbó aún más los conflictos. Es más, los colonos migraron a ciertas regiones aisladas con supuesta abundancia de tierras públicas y encontraron las tierras ocupadas por agricultores y ganaderos de gran escala, añadiendo así un componente adicional a las disputas de tierras⁴⁶. A finales de los años treinta, los grandes terratenientes expulsaron a los colonos y sustituyeron a los arrendatarios y los aparceros por trabajadores asalariados⁴⁷. Se presentaron, además, las ventas obligadas de tierras a bajos precios y el abandono de tierras en regiones como Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Dicho patrón se replicaría en el período tardío de *La Violencia*⁴⁸.

Los excedentes agrícolas y la debilidad institucional generaron el potencial para la captura de rentas por parte de grupos influyentes⁴⁹. Las áreas de colonización reciente carecían, además, de capital social suficiente para evitar los problemas de riesgo moral inherentes a los mercados informales de tierras. Un proceso formal de titulación era imprescindible para sostener los mercados emergentes⁵⁰. No obstante, la incapacidad del Estado para crear una infraestructura administrativa adecuada para proteger los derechos de propiedad derivó pronto en conflictos violentos entre grandes terratenientes, pequeños propietarios y colonos.

44 LeGrand, 1994.

45 Oquist, 1978.

46 Roldán, 2003.

47 LeGrand, 1994.

48 Roldán, 2003; Oquist, 1978.

49 Binswanger *et al.*, 1995.

50 De Janvry y Sadoulet, 2001.

El conflicto entre pequeños propietarios y grandes terratenientes se desvió del cauce institucional a finales de los treinta y se exacerbó en la época de *La Violencia*. Los conflictos de tierras durante *La Violencia* eran de dos tipos: por un lado, persistieron las disputas tradicionales, aún irresolutas, entre grandes terratenientes, colonos e indígenas; por otro lado, algunos grupos aprovecharon la violencia para expulsar a pequeños campesinos y despojarlos así de la tierra⁵¹. Debido a la falta de apoyo estatal o al colapso del Estado en algunas regiones, los colonos adoptaron respuestas violentas al desalojo de tierras por parte de los grandes terratenientes, quienes, a su vez, reaccionaban con amenazas y destrucción de propiedades⁵². Ello sucedía, en particular, en regiones donde persistían las disputas acerca de la autenticidad de los títulos, en áreas de colonización intensiva y en zonas donde los grupos indígenas ocupaban extensas áreas del territorio⁵³. Se expulsaba también a los pequeños propietarios, pues eran los más débiles y no se podían defender fácilmente. Muchos abandonaban entonces sus parcelas y migraban a la ciudad⁵⁴. Como resultado del despojo de tierras y de la expulsión de pequeños campesinos, se perdieron 393.468 parcelas durante *La Violencia*⁵⁵. Henderson (1985) estima, por su lado, que en el Tolima 40.000 propiedades fueron abandonadas durante el período de *La Violencia*. Si bien las disputas y conflictos de tierras carecían de relación alguna con disputas partidistas, se convirtió en una estrategia importante de defensa de los minifundistas pertenecer a alguno de los dos partidos políticos para lograr así la protección de sus propiedades⁵⁶.

La adjudicación de baldíos se intensificó a partir del período de *La Violencia*. Promover la colonización se convirtió en una válvula de escape de los conflictos de tierras latentes dentro de la frontera agrícola⁵⁷; en este período se originaron además movimientos migratorios hacia la ciudad o hacia antiguas zonas de colonización donde las organizaciones campesinas habían tenido un fuerte arraigo en los años treinta⁵⁸. El Estado diseñó asimismo un programa en 1961, con el fin de adjudicar tierras e infraestructura a hogares desplazados. Dicho proceso desembocó nuevamente

51 Oquist, 1978.

52 Roldán, 2003; Fajardo, 1994.

53 Oquist, 1978.

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*

56 Roldán, 2003; Oquist, 1978.

57 Fajardo, 1994.

58 LeGrand, 1994.

en la dinámica de colonización y expulsión descrita anteriormente, intensificó aún más la violencia en algunas regiones y generó una profunda desconfianza de los colonos hacia el Estado⁵⁹.

Los conflictos de tierras adquirieron nuevos matices con la expansión del narcotráfico y la agudización del conflicto armado. Por un lado, la concentración de la propiedad y los conflictos de tierras se intensificaron con la expansión del narcotráfico y el recrudecimiento del conflicto armado⁶⁰. Por otro lado, los cultivos ilícitos y los grupos armados ilegales predominan en las zonas de frontera agrícola, donde la presencia institucional es débil o casi inexistente⁶¹. Por último, las regiones del país donde se ha intensificado el conflicto armado presentan una violación reiterada de los derechos humanos y un mercado dinámico de tierras impulsado por la demanda por parte de los narcotraficantes^{62, 63}. Las zonas con mayor concentración de la tierra son, además, aquellas con menor crecimiento económico, menores salarios y mayores niveles de violencia⁶⁴.

La reforma agraria ha sido un tema recurrente en Colombia, dada la alta concentración de la propiedad de la tierra y la evidencia cualitativa acerca de la posible relación entre el conflicto armado y la propiedad de la tierra. Durante el año 1936, el Gobierno de Colombia proclamó la primera ley de reforma agraria, con un sesgo marcado hacia los grandes terratenientes⁶⁵. El objetivo primordial de dicha ley era, con base en la amenaza de la expropiación, inducir la modernización de las prácticas agrícolas y así aumentar la productividad agrícola. Asimismo, la reforma agraria buscaba clarificar la anarquía reinante en torno a los títulos de propiedad de la tierra⁶⁶. Pese a haber logrado parcialmente su cometido, la reforma de 1936 modificó la relación entre grandes terratenientes y arrendatarios, provocando así una expulsión generalizada de arrendatarios⁶⁷.

59 *Ibid.*

60 Suárez y Vinha, 2003.

61 LeGrand, 1994.

62 Reyes, 1994.

63 El Incoder estimaba que los narcotraficantes poseían el 48% de las mejores tierras del país, mientras que los pequeños propietarios, quienes constituyen el 68% de los propietarios, poseían el 5,2% de las tierras (Contraloría General de la República, 2002).

64 Castaño, 1999.

65 Binswanger *et al.*, 1995.

66 Oquist, 1978.

67 De Janvry y Sadoulet, 2001.

En 1961, el Gobierno nacional promulgó una nueva ley de reforma agraria, con el fin de apaciguar los crecientes enfrentamientos violentos, debido a las disputas de tierras. El efectivo cabildeo de los grandes terratenientes derivó en programas de beneficios crediticios y tributarios a su favor, paralelos a la reforma, lo cual elevó el valor de la tierra e imposibilitó la expropiación con compensación contemplada en la nueva ley. Como consecuencia, la producción agrícola se centralizó aún más en las grandes propiedades, en detrimento de las pequeñas propiedades, y además perpetuó la concentración de la tierra⁶⁸.

La década de los setenta se caracterizó por la numerosa legalización de terrenos baldíos y un programa agresivo de desarrollo rural, con una relegación total de la redistribución de tierras dentro de la frontera agrícola. Los programas de desarrollo rural contribuyeron a impulsar a los pequeños propietarios y a la economía campesina. Pero el freno de la redistribución de tierras y el cubrimiento insuficiente de los programas de desarrollo rural excluyeron a un porcentaje importante de familias campesinas y, por ende, exacerbaron la violencia en vastas zonas del país⁶⁹.

El evidente fracaso de la reforma agraria de 1961 derivó en la Ley 160 de 1994, cuyo principal propósito era gestionar la asignación de tierra por medio de mecanismos de mercado. No obstante la voluntad de redistribuir cerca de un millón de hectáreas, los resultados de la reforma agraria han sido, hasta el momento, desalentadores. Desde 1993 hasta 2001, la reforma agraria entregó 598.332 hectáreas. Además, se focalizó en cuatro departamentos, y un 50% de los predios asignados se concentró en 40 municipios⁷⁰. El reciente Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley 1152 de 2007, no modifica los principios de la reforma agraria definidos en la ley de 1994.

El énfasis de la política agraria en la colonización de terrenos baldíos durante la primera mitad del siglo XX, el conflicto entre pequeños propietarios y terratenientes, el período de *La Violencia*, la expansión del narcotráfico y la intensificación del conflicto armado han derivado en una fuerte concentración de la tierra en Colombia. Durante el período comprendido entre 1962 y 1982, se otorgaron 5,4 veces más títulos por colonización que por asignación de terrenos de la reforma agraria⁷¹, tendencia que se replica en la actualidad. Durante el período comprendido entre 2002 y 2007, se asignaron 1'521.614 hectáreas, de las cuales un 53,3% se distribuyó por

68 *Ibid.*

69 *Ibid.*

70 Zapata y Arismendy, 2003.

71 Fajardo, 1994.

titulación de baldíos, un 37,9%, por titulación a comunidades afrodescendientes, y un 5,6% por programas de reforma agraria⁷². La concentración de la tierra, pese a las políticas de reforma agraria, se mantuvo constante entre 1960 y 1990; período en el cual el coeficiente Gini de tierras sólo disminuyó en tres puntos porcentuales⁷³. Es más, el coeficiente Gini para Colombia (0,83) es más alto que el promedio Latinoamericano (0,81) y bastante más alto que en muchos países del mundo⁷⁴.

Las disputas irresolutas de tierras desde el siglo pasado permean también el conflicto actual. La ocupación territorial y el desalojo de población civil son estrategias de guerra adoptadas por los grupos armados para desocupar territorio, expandir sus áreas de control y usurpar propiedades agrícolas. Datos preliminares de un estudio realizado por la Conferencia Episcopal (1999) muestran que 1.322 familias desplazadas encuestadas abandonaron cerca de 32 mil hectáreas, con un promedio de 24 hectáreas por familia. En un estudio acerca de la efectividad de la reforma agraria, Suárez y Vinha (2003) encuentran que el 31% de las transferencias de grandes propiedades se dio por presiones violentas.

Los resultados de este libro refuerzan la evidencia anterior. En el tercer capítulo se demuestra que los propietarios de tierras son víctimas con mayor frecuencia de las amenazas provenientes de los actores armados ilegales y, por ende, son más propensos a migrar. El despojo de tierras y el desplazamiento forzoso poseen un vínculo indudable, que ha conllevado el abandono de un poco más 1,7 millones de hectáreas por parte de la población desplazada, tal como se demuestra en el quinto capítulo de este libro.

El vínculo entre tenencia de la tierra y el conflicto armado parece indudable. El acceso a la tierra ha sido un componente fundamental de los diversos conflictos sociales que agobian a Colombia desde finales del siglo XIX hasta hoy. Grandes terratenientes, pequeños propietarios y colonos se han enfrentado durante décadas y, en los últimos cincuenta años, los grupos armados al margen de la ley y los narcotraficantes se han unido a esta disputa. Hoy miles de colombianos han sido desplazados por la violencia y se presume que un porcentaje elevado de estos hogares son víctimas de disputas antiguas por la propiedad de la tierra.

72 Helo *et al.*, 2008.

73 Deininger, 1999.

74 Vollrath, 2007; Deininger y Olinto, 2000.

C. Conclusiones

Las cifras examinadas en este capítulo muestran, de manera incuestionable, que el desplazamiento forzado ha alcanzado un cariz de emergencia humanitaria de grandes proporciones. La descripción es elocuente: la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia es elevada, incluso respecto a otros países que también enfrentan desplazamiento. Los perfiles de victimización de la población desplazada denotan, además, su doble condición de víctimas como personas desplazadas y como víctimas directas de la violencia.

Las causas del desplazamiento forzado reposan, como es de esperarse, en el devenir del conflicto armado en Colombia. Los dos capítulos siguientes profundizan en este tema y demuestran la innegable relación entre los crímenes de los grupos armados al margen de la ley y el desplazamiento forzado. Los capítulos IV, V y VI examinan el impacto del desplazamiento forzado sobre sus víctimas y demuestran el legado de pobreza que generó y está generando el conflicto colombiano. El capítulo VII discute la viabilidad de los programas de retorno de la población desplazada y analiza la posibilidad de basarse en ellos en una época de posconflicto, para evitar que los hogares desplazados caigan en trampas de pobreza y para asegurar una paz duradera y sostenible, tan esquiva en la historia de Colombia.

II

EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA: UNA ESTRATEGIA DELIBERADA DE GUERRA

El desplazamiento forzoso en Colombia ha crecido, *pari passu*, con la intensificación del conflicto durante la década de los noventa. La evidencia de estudios cualitativos y cuantitativos relaciona el incremento en el desplazamiento con ataques deliberados de los grupos armados contra la población civil⁷⁵; ataques que persiguen el control territorial, la extracción de rentas económicas, la desarticulación de redes sociales y, en general, la hegemonía de su presencia en el territorio nacional. Los crecientes ataques a la población civil no se circunscriben a Colombia. La agudización de los conflictos internos en el mundo ha conllevado, asimismo, un número cada vez mayor de víctimas civiles⁷⁶.

El análisis económico sobre la incidencia de los conflictos internos intenta develar por qué algunos países parecerían ser terrenos fértiles para el surgimiento de los conflictos. Al explorar las causas de los conflictos internos, los estudios identifican los determinantes de la incidencia, la duración y la reincidencia de los conflictos. Algunos factores que originan los conflictos, según la literatura económica, son la debilidad de las instituciones; el atractivo para extraer rentas económicas por medio de actividades delictivas; la existencia de condiciones propicias, tales como una geografía difícil o la posibilidad de financiar la guerra con actividades de fácil explotación, y los factores de reivindicación social, como la desigualdad del ingreso, la distribución de la tierra o la pobreza concentrada en ciertos grupos⁷⁷.

75 Deininger *et al.*, 2008; Henao, 1998; Ibáñez *et al.*, 2006; Lozano y Osorio, 1999; Reyes y Bejarano, 1998.

76 Cairns 1997; Davenport *et al.*, 2003; Lubkemann, 2005; Weiner, 1993; Wood, 1994.

77 Collier *et al.*, 2003; Djankov y Reynal-Querol, 2007; Fearon y Laitin, 2003; Grossman, 1991; Hirshleifer, 1991; Macours, 2007, Maystadt, 2008; Nafziger y Auvinen, 2002; entre otros.

Pese a la importante contribución de estos estudios, persisten ciertos vacíos. Al estar basados en datos de corte transversal de los países, los estudios desconocen la influencia de los componentes culturales e idiosincrásicos sobre la incidencia de los conflictos. Pocos estudios económicos, además, han explorado los canales por los cuales la dinámica de los conflictos civiles deriva en ataques deliberados a la población civil como estrategia de guerra⁷⁸.

Por otro lado, los estudios sobre la población refugiada se concentran en describir y entender las decisiones de las personas y hogares que migran forzosamente hacia otro país. Los resultados de estos estudios corroboran que, si bien los factores económicos influyen las decisiones de la población refugiada, la ocurrencia de guerras civiles es la principal causa de la migración forzada⁷⁹. Aunque los estudios proveen bastante evidencia empírica, su principal debilidad es intentar identificar los determinantes de las decisiones de los individuos con datos agregados. Un análisis basado en flujos agregados de población refugiada para identificar los determinantes de la decisión de migrar asume que la probabilidad de victimización es uniforme para toda la población⁸⁰. Dicho supuesto es bastante restrictivo, pues, como se demuestra en este capítulo, los grupos armados deciden atacar ciertos municipios atractivos para alcanzar sus objetivos de guerra y, como se demuestra en el capítulo siguiente, los ataques a la población civil dentro de estos municipios no son aleatorios. Ciertos grupos de la población son más atractivos y son atacados, por ende, con mayor frecuencia.

El propósito de este capítulo es examinar el proceso de decisión de los grupos armados. En particular, intento explicar cómo los grupos armados atacan a la población civil para provocar el desplazamiento, ya sea masivo o individual, y así alcanzar sus objetivos de guerra. Para tal fin, desarrollo un modelo teórico que explica las decisiones de los grupos armados y estimo el modelo, con datos municipales para Colombia, de la magnitud del desplazamiento forzoso. El uso de datos municipales es una contribución frente a la literatura económica que identifica las causas de los conflictos civiles y de la literatura que explora los determinantes del crecimiento de población refugiada en el mundo. Por un lado, al contar con datos para un país, se controla en buena medida por la incidencia de los comportamientos culturales e idiosincrásicos sobre los conflictos.

78 Con excepción de los estudios de Azam y Hoefler, 2002; Czaika y Kis-Katos, 2007.

79 Melander y Öberg, 2006; Davenport *et al.*, 2003; Schmeidl, 1997; Stanley, 1987; Zolberg *et al.*, 1986, entre otros.

80 Moore y Shellman, 2006.

Cabe señalar, sin embargo, que Colombia no es homogénea en aspectos culturales e idiosincrásicos; por ende, aún persisten problemas por la dificultad para controlar por éstos. Por otro lado, los estudios sobre refugiados se basan en el número agregado de refugiados que salen de un país o arriban a él. Ello impide analizar las estrategias de guerra que adoptan los grupos armados y los incentivos que enfrentan para atacar a la población civil en un determinado municipio. Dado que los datos de este capítulo establecen el número de personas desplazadas expulsadas de un municipio y se cuenta con características institucionales, económicas y geográficas de los municipios, es posible identificar los incentivos que enfrentan los grupos rebeldes para atacar a la población civil en determinados municipios.

A. El desplazamiento forzoso de población civil: ¿una estrategia de guerra?

La intensificación de las guerras civiles durante la década de los noventa, producto de diversos factores, ha derivado en un incremento sustancial del número de víctimas civiles. Conflictos irresueltos desde 1945, la desintegración de la Unión Soviética y la consecuente proliferación de armas, el fortalecimiento del comercio ilegal de narcóticos, entre otros factores, contribuyeron a una creciente incidencia de conflictos civiles y guerras intraestatales a partir de la década de los noventa. La mayor incidencia estuvo además acompañada de una duración promedio más prolongada de los conflictos civiles: mientras que en 1947 los conflictos duraban en promedio dos años, en 1999 la duración promedio ascendía a 15 años⁸¹.

A diferencia de los conflictos interestatales, en los cuales las víctimas son predominantemente miembros de las fuerzas militares, las principales víctimas de los conflictos intraestatales provienen de la población civil. La población civil no sólo es reclutada por los grupos rebeldes; también es atacada como estrategia de guerra para eliminar líderes comunitarios, atemorizar a la población civil, expandir su dominio territorial, evacuar la zona de oponentes y usurpar activos a la población. La violencia contra la población no es entonces una consecuencia fortuita y desafortunada del conflicto sino una estrategia deliberada de guerra⁸². El porcentaje de víctimas civiles en el mundo se ha incrementado, como consecuencia de lo anterior, del 10% a principios del siglo XX, al 90% en 1990⁸³. Los crecientes ataques y amenazas a la población civil durante las épocas de

81 Fearon y Laitin, 2003.

82 Azam y Hoeffler, 2002.

83 Cairns, 1997.

conflicto han producido una tendencia creciente y constante en el número de refugiados y desplazados en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial⁸⁴. Por ende, desde 1990 hasta hoy, el número de personas desplazadas en el mundo ha oscilado alrededor de los 25 millones⁸⁵, y el número de refugiados, alrededor de los 13 millones⁸⁶.

El objetivo de esta sección es analizar cómo algunas condiciones de los países propician el surgimiento de guerras civiles o conflictos internos, y examinar por qué este tipo de conflictos involucra a la población civil. Para alcanzar tal objetivo, analizo la literatura económica sobre los orígenes de los conflictos y una literatura incipiente sobre las dinámicas de la migración forzada y su estrecha relación con las estrategias de guerra adoptadas por los grupos armados, ya sean acciones del Estado o grupos rebeldes.

1. ¿Son algunos países más proclives a enfrentar conflictos civiles?

Las guerras civiles y los conflictos internos son expresiones y etapas en los ciclos de violencia que enfrentan ciertos países. Pero, ¿qué determina que algunos países enfrenten estos ciclos de violencia? ¿Son algunos países más proclives a enfrentar un conflicto? Si bien las causas y los determinantes en cada una de las etapas del conflicto pueden diferir⁸⁷, la literatura económica ha identificado características comunes que comparten los países que están o han enfrentado conflictos internos, guerras civiles o períodos agudos de violencia. Las posibles causas de los conflictos se pueden agrupar de maneras diversas, y en este capítulo se agrupan como causas institucionales, factores de exclusión y factores económicos. Asimismo, algunos países poseen condiciones que favorecen el surgimiento de las insurgencias o de grupos rebeldes⁸⁸. Todos estos factores se analizan a continuación.

La debilidad institucional, la falta de protección de los derechos de propiedad y la dificultad para diseñar mecanismos pacíficos de resolución de disputas son algunas de las causas institucionales que pueden contribuir al surgimiento de los conflictos. La incapacidad del Estado para hacer

84 Weiner, 1993; Wood, 1994; Davenport *et al.*, 2003; Lubkemann, 2005.

85 Internal Displacement Monitoring Centre. *www.internal-displacement.org*, consultada el 28 de marzo de 2008.

86 U.S. Committee for Refugees and Immigrants. *www.refugees.org*, consultada el 28 de marzo de 2008.

87 Bodea y Elbadawi, 2007.

88 Fearon y Laitin, 2003.

cumplir las leyes y para implementar mecanismos pacíficos de resolución de disputas son condiciones que favorecen la incidencia de los conflictos o la violencia⁸⁹. Más aún, cuando los sistemas legales de los Estados son inoperantes para definir y proteger los derechos de propiedad, la inseguridad en torno a estos derechos incrementa la probabilidad del surgimiento de un conflicto⁹⁰. Ello se presenta por diversas razones. Por un lado, la imposibilidad o dificultad para apoyarse en el sistema legal –con el fin de adquirir la adjudicación de los derechos de propiedad o resolver por medios pacíficos las disputas de los derechos de propiedad– incentiva a ciertos ciudadanos a recurrir a mecanismos violentos⁹¹. Por otro lado, la inseguridad frente a los derechos de propiedad propicia declaraciones falsas, abusos y corrupción para adquirir los derechos de propiedad *de facto*. Por último, la informalidad en los derechos de propiedad facilita la usurpación de activos valiosos, como la tierra⁹². Estudios para Colombia y Guatemala encuentran que la inseguridad en los derechos de propiedad y las tensiones ancestrales que persisten en torno al acceso a la tierra y en torno a conflictos locales, al confluir, generan condiciones favorables para la aparición de conflictos⁹³. Por último, la debilidad institucional o la carencia de presencia institucional crea espacios para que los grupos rebeldes asuman las funciones del Estado en ciertas regiones, para así imponer sus reglas y gravar a la población con impuestos paralelos que financien sus acciones de guerra⁹⁴.

La evidencia empírica de la literatura económica acerca de la relación entre la debilidad institucional y la incidencia del conflicto es aún escasa. Angrist y Kugler (2005) encuentran que los grupos armados al margen de la ley en Colombia se asientan en las regiones rurales apartadas de los centros económicos y con poca presencia institucional. Macours (2007), en un estudio para Guatemala, muestra que la titulación de tierras, al proveer una mayor seguridad sobre los derechos de propiedad, reduce la frecuencia de las disputas de tierras. Con una base de datos de corte transversal de países, Djankov y Reynal-Querol (2007) encuentran que la debilidad institucional, definida como la inseguridad en los derechos de propiedad y la inestabilidad del sistema legal, determina de manera positiva la probabilidad de surgimiento de un conflicto civil. Es más,

89 Dills *et al.*, 2008; Djankov y Reynal-Querol, 2007; Fearon y Laitin, 2003.

90 Dills *et al.*, 2008; Djankov y Reynal-Querol, 2007; Maystadt, 2008; Macours, 2007.

91 Dills *et al.*, 2008.

92 Velásquez, 2008.

93 Velásquez, 2008; Macours, 2007; Roldán, 2002; Oquist, 1978, entre otros.

94 Angrist y Kugler, 2005.

una vez se incluyen las variables proxies de las instituciones, el impacto del ingreso per cápita sobre dicha probabilidad desaparece. Velásquez (2008) muestra que la informalidad en la tenencia de tierra incrementa la presencia de grupos armados al margen de la ley en los municipios colombianos.

Al contrario de los factores institucionales, los factores de exclusión han sido identificados con frecuencia como posibles determinantes en la incidencia de los conflictos. La pobreza, la desigualdad de oportunidades, un desarrollo económico insuficiente y ciclos económicos desfavorables parecen influenciar no sólo la ocurrencia de conflictos sino también su duración. La pobreza y unos bajos ingresos de segmentos de la población generan potenciales afectos a la causa rebelde, ya sea como combatientes o como colaboradores. Reclutar jóvenes para participar en los grupos armados al margen de la ley es bastante más sencillo cuando las oportunidades económicas son limitadas⁹⁵. Es así como las guerras civiles están concentradas, por lo general, en los países más pobres⁹⁶. La carencia de desarrollo económico parece, además, no poder ser compensada por la fortaleza institucional o incrementos en el presupuesto destinado a la defensa⁹⁷. La evidencia empírica sobre este tema es, sin embargo, contradictoria. Por un lado, se encuentra que, tras superar un umbral de ingresos, la ocurrencia de la violencia y los conflictos internos disminuye de manera considerable⁹⁸. Por otro lado, algunos estudios empíricos revelan que la variable de ingreso per cápita capta la calidad de las instituciones o las posibles rentas económicas que se extraen durante un conflicto y, por tanto, su efecto desaparece o su impacto es contrario al esperado⁹⁹. Sin embargo, estudios circunscritos a un país particular demuestran que la pobreza incrementa la ocurrencia de un conflicto¹⁰⁰. Por último, los choques económicos negativos parecen tener un efecto significativo sobre la iniciación de conflictos en el África subsahariana¹⁰¹.

Un desarrollo económico insuficiente *per se* no siempre produce el surgimiento de un conflicto civil¹⁰². Además de los niveles de ingreso, la des-

95 Angrist y Kugler, 2005; Fearon y Laitin, 2003.

96 Collier *et al.*, 2003.

97 Collier *et al.*, 2003.

98 Nafziger y Auvinen, 2002.

99 Djankov y Reynal-Querol, 2007; Collier, 1998; Collier *et al.*, 2003; Maystadt, 2008.

100 Czaika y Kis-Katos, 2007; Deininger *et al.*, 2008.

101 Miguel *et al.*, 2004.

102 Nafziger y Auvinen, 2002; Collier *et al.*, 2003.

igualdad del ingreso y la distribución desigual de activos, factores que reflejan la exclusión de grupos de la población, parecen predecir bien en ciertos casos la ocurrencia de conflictos. La desigualdad de oportunidades, al atizar el descontento social, puede propiciar condiciones para el apoyo a grupos rebeldes e incrementar la inestabilidad política¹⁰³. Es más, las rebeliones pueden ser más efectivas cuando la desigualdad afecta a grupos fácilmente identificables de la población o cuando éstos pueden identificar los causantes de su pobreza y exclusión. Ello porque la desigualdad facilita la acción de los rebeldes, al permitir que los grupos armados acudan a los grupos excluidos para buscar apoyo a su causa.

Al igual que para el ingreso per cápita, la evidencia empírica acerca del impacto de la desigualdad del ingreso y de la propiedad de la tierra sobre la incidencia del conflicto es contradictoria. Los estudios que analizan la iniciación de conflictos internos con datos de corte transversal para países encuentran que la desigualdad del ingreso o de la distribución de la propiedad de la tierra no incide en la probabilidad de ocurrencia, pero sí contribuye a incrementar la duración del conflicto y a provocar emergencias humanitarias¹⁰⁴. Empero, las comparaciones entre países, al desconocer los componentes culturales e idiosincrásicos, no permiten establecer cómo las percepciones locales sobre la desigualdad pueden afectar el conflicto¹⁰⁵. Es así que los estudios concentrados en un solo país sí identifican una relación positiva entre la desigualdad del ingreso o de la propiedad de la tierra y la incidencia del conflicto¹⁰⁶.

Los conflictos no son, sin embargo, sólo expresiones de reivindicación social. Los actores armados no siempre persiguen motivos altruistas. Una rama de la literatura económica considera que las personas pueden generar ingresos en actividades productivas y en actividades destructivas. En estos casos, la insurrección y cualquier estrategia para prevenirla compiten por recursos económicos con las actividades productivas. Las actividades rebeldes y la insurrección, además de perseguir los supuestos beneficios sociales analizados en párrafos anteriores, producen retornos privados a los insurgentes. Los beneficios privados de la insurgencia, sin embargo, no excluyen los beneficios públicos o sociales¹⁰⁷. Los grupos rebeldes expanden, por tanto, su dominio en regiones con actividades económicas valiosas, para poder extraer rentas económicas que incre-

103 Maystadt, 2008; Bodea y Elbadawi, 2007; Alessina y Perotti, 1996.

104 Fearon y Laitin, 2003; Collier *et al.*, 2003; Collier y Hoeffler, 2002; Collier, 1998.

105 Maystadt, 2008.

106 Maystadt, 2008; Macours, 2007; Deininger *et al.*, 2008.

107 Hirshleifer, 1991, Grossman, 1991.

menten el retorno privado de la insurgencia. Diversos estudios han indicado cómo el ingreso per cápita, las rentas potenciales de bienes de fácil extracción y una actividad económica dinámica pueden, en un momento dado, contribuir al surgimiento de conflictos internos¹⁰⁸.

La rebelión requiere, además, recursos económicos para financiarse¹⁰⁹. Ignorar las necesidades de financiación de los grupos rebeldes no permite un análisis completo sobre los conflictos internos. Los grupos rebeldes buscan ejercer control territorial en regiones con alto potencial económico y que permitan la fácil extracción de rentas¹¹⁰. Es así como los países con recursos naturales de fácil extracción, como algunos países africanos, o con un potencial de producción de drogas ilícitas, como Colombia y Afganistán, enfrentan conflictos internos, cuyos rebeldes son financiados por estas actividades. Peor aun, si bien los rebeldes pueden tener en un inicio motivaciones políticas, la necesidad de recurrir a actividades ilegales para financiar la insurgencia atrae a criminales interesados en el botín de guerra y no en las reivindicaciones sociales iniciales¹¹¹. Dada la influencia de la producción y la comercialización de drogas ilícitas en el conflicto colombiano, este tema amerita una discusión adicional.

La producción y comercio de drogas ilícitas están asociados con el surgimiento de los conflictos internos. En primer lugar, las drogas ilícitas proveen recursos para financiar el accionar de los grupos armados al margen de la ley¹¹², perfeccionan y transfieren la tecnología del crimen y expanden la oferta y disponibilidad de armas¹¹³. En segundo lugar, los mercados de drogas ilegales corrompen y debilitan aun más la legitimidad del Estado, lo cual facilita la aparición de la presencia de los grupos rebeldes, o la fortalece; grupos que, en muchos casos, como en Colombia y Afganistán, reemplazan al Estado en algunas regiones del país¹¹⁴. Asimismo, en Colombia, la expansión del crimen organizado congestionó el sistema judicial, impidiendo la judicialización de otros criminales¹¹⁵. Por otro lado, al proveer protección a los productores de droga y a las

108 Maystadt, 2008; Angrist y Kugler, 2005; Collier *et al.*, 2003; Collier y Hoeffler, 2004.

109 Collier *et al.*, 2003; Rubin, 2000.

110 Angrist y Kugler, 2005; Collier *et al.*, 2003; Collier y Hoeffler, 2004; Rubin, 2000.

111 Collier *et al.*, 2003.

112 Gates y Lektzian, 2004; Rubin, 2000.

113 Dills *et al.*, 2008; Gaviria, 1998.

114 Angrist y Kugler, 2005; Gates y Lektzian, 2004.

115 Gaviria, 1998.

tierras como soporte de la base productiva¹¹⁶, el conflicto facilita la producción y comercio de las drogas ilegales¹¹⁷. Es, sin embargo, importante anotar que, si bien los grupos rebeldes y los narcotraficantes se benefician con el debilitamiento del Estado, para presionar así un cambio de política, sus objetivos finales no necesariamente coinciden¹¹⁸. Al financiar a los grupos rebeldes y debilitar el Estado, la presencia de economías ilegales contribuyen, además, a incrementar la duración del conflicto¹¹⁹.

Para terminar, ciertos países poseen condiciones que favorecen la aparición de grupos rebeldes¹²⁰. La insurgencia es una tecnología militar particular que requiere condiciones propicias para surgir: los rebeldes son menos y más débiles que el pie de fuerza militar de los países donde surgen, y requieren armas pequeñas para moverse con facilidad. Los rebeldes deben entonces operar en regiones rurales y en terrenos difíciles en los cuales se puedan esconder de las fuerzas del Estado. Por lo tanto, los países con un territorio extenso y con una geografía difícil, que permita a los rebeldes esconderse y dificulte la llegada de tropas del Estado, constituyen una ayuda para el surgimiento de grupos rebeldes¹²¹. Por otro lado, contar con una población civil afecta a la causa rebelde también favorece el accionar de la insurgencia. Cuando los rebeldes poseen un profundo conocimiento de la población local, pueden conseguir su apoyo, ya que las retaliaciones por eventuales traiciones son más sencillas de llevar a cabo. Ello se logra mejor en áreas rurales¹²². La alta densidad poblacional, empero, puede constituir un beneficio para los grupos rebeldes, pues mantener el anonimato es sencillo y los costos de coordinación de una acción son menores¹²³.

2. Los conflictos civiles y la población civil como su principal víctima

A diferencia de los conflictos entre Estados, en los conflictos internos los grupos armados atacan a la población como estrategia para alcanzar objetivos de guerra. Los ataques a la población provienen de la violencia in-

116 Fearon y Laitin, 2003.

117 Gates y Lektzian, 2004.

118 *Ibid.*

119 Collier *et al.*, 2003.

120 Fearon y Laitin, 2003.

121 Maystadt, 2008; Collier *et al.*, 2003; Fearon y Laitin, 2003.

122 Maystadt, 2008; Fearon y Laitin, 2003.

123 Maystadt, 2008.

surgente, la violencia estatal y la interacción entre la violencia insurgente y estatal¹²⁴. La violencia estatal contra la población civil ha sido común en algunos países africanos, generando grandes flujos de refugiados¹²⁵, mientras que los ataques a la población civil provenientes de los grupos al margen de la ley se han presentado con más frecuencia en los países latinoamericanos, provocando la migración forzada dentro de las fronteras del país.

Los grupos armados persiguen diversos objetivos de guerra al atacar a la población civil. La extensión del dominio territorial, con el ataque y el control de las poblaciones, es importante, ya sea por el atractivo económico que ofrece la región o por su contribución para ejercer hegemonía en el territorio. Algunas poblaciones son atractivas por su valor económico, debido, por ejemplo, a la siembra de cultivos ilícitos, la existencia de reservas de recursos naturales valiosos, tales como recursos mineros o petróleo, o por ser potenciales corredores para transportar drogas y armas de manera ilegal. Otras regiones, por su lado, son fundamentales en la estrategia de guerra de los grupos armados y en la necesidad de expandir la hegemonía territorial, en pos de fortalecer su posición armada.

Alcanzar ambos objetivos implica ataques deliberados a la población civil. Los ataques a la población civil permiten a los grupos armados usurpar activos valiosos para financiar el conflicto o para el lucro personal de los combatientes. Asimismo, para fortalecer la hegemonía territorial, los ataques permiten expulsar a posibles oponentes de la región, evitar movimientos de resistencia civil, debilitar los tejidos sociales o separar a la población civil de los grupos rebeldes¹²⁶. Al asesinar líderes y amenazar a los habitantes, los grupos armados aterrorizan a la población civil a un bajo costo, previenen movimientos de oposición y ganan la influencia que no logran en el campo de batalla¹²⁷. La violencia contra la población no es entonces un subproducto de la guerra. Es una estrategia deliberada de guerra¹²⁸.

Los asesinatos selectivos, las masacres, las amenazas de muerte, los reclutamientos forzados, las desapariciones forzadas y la destrucción de propiedades son algunos de los ataques perpetrados por los grupos armados para atemorizar a la población civil y alcanzar así sus objetivos de guerra.

124 Melander y Öberg, 2006.

125 Azam y Hoeffler, 2002.

126 Hedmann 2005.

127 Lubkemann, 2005.

128 Ibáñez y Vélez, 2008; Lubkemann, 2005; Azam y Hoeffler, 2002; Stanley, 1987.

Dichos ataques obligan a la población a migrar para protegerse del accionar de los grupos armados, generando flujos de población desplazada o refugiada. La estrecha relación entre las guerras civiles y la migración forzada, ya sea dentro de las fronteras del territorio (población desplazada) o por fuera de las fronteras (población refugiada), está ampliamente documentada por un número importante de estudios¹²⁹. En particular, estos estudios se han concentrado en establecer una relación entre los conflictos internos y los flujos de refugiados hacia otros países. Otros estudios para Colombia, Guatemala e Indonesia, al contar con datos más desagregados de los flujos migratorios dentro del país, han examinado la relación entre las acciones de los grupos armados y el desplazamiento forzado¹³⁰. Todos los estudios confirman que la principal razón de la migración forzada son los ataques directos o indiscriminados de los cuales es víctima la población civil.

Las causas de los conflictos internos y los ataques a la población civil como estrategia de guerra son las bases para analizar los determinantes del desplazamiento forzado en Colombia. Para identificar los determinantes, la próxima sección desarrolla un modelo económico que es luego estimado con datos municipales del número de personas desplazadas.

B. Los determinantes municipales del desplazamiento¹³¹

Las acciones de guerra de los grupos armados responden, tal como se explicó en la sección anterior, a la necesidad de expandir el control y la hegemonía territorial. Al adoptar las estrategias de guerra, los grupos armados atacan a la población civil y producen desplazamiento forzado. Con el fin de entender la lógica detrás de los procesos de expulsión de población, desarrollo un modelo para identificar los determinantes municipales del desplazamiento. Cabe anotar que el objetivo del modelo y de las estimaciones posteriores no es identificar las causas de la violencia y el conflicto en Colombia. El modelo asume que Colombia enfrenta un conflicto cuyos actores son los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y el Estado, y a partir de la existencia del conflicto, se desarrolla un modelo para entender los determinantes del desplazamiento forzado.

El conflicto armado afecta a la población civil a través de dos canales. Por un lado, las acciones de los grupos armados pueden afectar de manera

129 Melander y Öberg, 2006; Davenport *et al.*, 2003; Schmeidl, 1997; Stanley, 1987; Zolberg *et al.*, 1986, entre otros.

130 Czaika y Kis-Katos, 2007; Morrison y May, 1994; Schultz, 1971.

131 El modelo que se presenta en esta sección fue desarrollado en conjunto con Pablo Querubín, basados en el artículo de Deininger *et al.*, 2008.

fortuita a la población civil. Por ejemplo, las acciones armadas pueden restringir la oferta de alimentos en las áreas rurales o una confrontación armada en municipios vecinos puede atemorizar a la población. Por otro lado, las acciones de los grupos armados pueden estar dirigidas estratégicamente a ciertos segmentos de la población. Las masacres, los asesinatos selectivos, los secuestros y las amenazas de muerte, entre otros, son algunos de los ataques de los grupos armados contra la población. Con el fin de evitar ser víctima de dichos ataques, o tras ser víctima de un ataque, la población civil huye para buscar refugio en otros municipios. El modelo intenta explicar el comportamiento de los grupos armados, es decir, la selección de los municipios a atacar y la intensidad de los ataques, que se refleja en el número de personas desplazadas.

El proceso de desplazamiento se puede simplificar de la siguiente manera. Los grupos armados están involucrados en un conflicto civil cuyo fin es ejercer dominio territorial, ya sea por razones políticas, tácticas y/o extraer rentas económicas del territorio. Para alcanzar dichos fines, los grupos armados llevan a cabo diferentes estrategias y acciones. Primero, al despoblar el territorio de población civil, los grupos armados pueden usurpar sus activos valiosos y explotar con facilidad los recursos naturales de la región. Segundo, para evitar movimientos de resistencia civil, los grupos insurgentes atacan a personas que no apoyen su causa o que apoyen la causa enemiga. Asimismo, pueden atacar individuos con posiciones de liderazgo en la comunidad o con densas redes sociales, con el fin de crear terror y obtener el control territorial. Cuando este tipo de personas son expulsadas, se facilita preservar el dominio sobre el territorio. Al alienar a la población, los ataques a la población civil producen, sin embargo, efectos negativos para los grupos insurgentes. En este sentido, los retornos para los grupos rebeldes de desplazar a la población civil son no-lineales: en niveles iniciales, los retornos del desplazamiento forzoso son altos, pues la extracción de rentas y la apropiación de recursos se facilitan. Pero al desplazar más población, la alienación de la población civil reduce los retornos del desplazamiento, ya que la extracción de recursos y la producción de cultivos ilícitos requieren mano de obra y generan, además, una oposición que puede favorecer al grupo enemigo.

El modelo asume que los actores armados poseen una función objetivo, la cual recoge la probabilidad de éxito en el control territorial del municipio i , P_i . Los actores armados adoptan dos tipos de acciones. Por un lado, los actores armados llevan a cabo acciones en el municipio i para incrementar la probabilidad de éxito, tales como ataques a las fuerzas militares y policiales, pero que no afectan de manera directa a la población civil, M_i . Por otro lado, los actores armados atacan directamente a la población civil en el municipio i para apropiarse de activos valiosos, evitar movimientos

de resistencia civil o debilitar el apoyo al grupo enemigo, representado por las acciones A_i . Estas acciones incrementan para los actores armados los recursos disponibles que se pueden extraer del municipio i , R_i , tales como cultivos de drogas ilícitas, explotación minera o impuestos paralelos a la población. Pero los ataques reducen el apoyo de la población del municipio i al grupo armado, F_i . El Estado lleva a cabo acciones, S_i , para reducir la probabilidad de éxito de los grupos rebeldes. Este modelo asume como dadas las estrategias adoptadas por el Estado, ya que no se pretende examinar sus decisiones.

Ciertas características municipales pueden facilitar o dificultar la acción de los actores armados. Algunos municipios ofrecen condiciones propicias para el surgimiento de grupos armados. Terrenos difíciles útiles para guarecerse y que constituyen un obstáculo para la llegada de las fuerzas estatales, o una población rural dispersa favorecen la lucha guerrillera. Asimismo, el reclutamiento de jóvenes a la causa insurgente se torna más sencillo en municipios con altos índices de pobreza, pocas oportunidades económicas o una desigualdad excesiva, G_i . Por el contrario, unas instituciones fuertes con una protección adecuada de los derechos de propiedad previenen la resolución violenta de conflictos y son un obstáculo para emprender la lucha insurgente, I_i .

La lucha armada dirigida hacia la población civil causa desplazamiento, reduciendo así la población total, n_i , del municipio en el cual se llevan a cabo las acciones, A_i . El tamaño de la población en el municipio está determinado parcialmente por las acciones de los grupos rebeldes, $n_i(A_i)$, de tal manera que, si el grupo insurgente decide intensificar sus ataques, el tamaño de la población decrece $\frac{\partial n_i}{\partial A_i} < 0$.

La probabilidad de éxito está definida por

$$P_i = P_i(M_i, S_i, F_i(n_i(A_i)), G_i, I_i)$$

donde $\frac{\partial P_i}{\partial M_i} > 0$, $\frac{\partial P_i}{\partial S_i} < 0$, $\frac{\partial P_i}{\partial F_i} > 0$, $\frac{\partial P_i}{\partial G_i} > 0$ y $\frac{\partial P_i}{\partial I_i} < 0$

Los grupos rebeldes maximizan su función objetivo, la probabilidad de éxito, sujeta a una restricción de presupuesto. Los recursos de los grupos insurgentes provienen de los recursos extraídos en cada municipio, R_i , y otros recursos no determinados en el modelo, Y_p . Los recursos obtenidos en el modelo son destinados para llevar a cabo las estrategias de guerra (A_i y M_i), las cuales tienen un costo respectivo de C_A y C_M .

Las caídas en la población, como consecuencia del desplazamiento, aumentan los activos usurpados a la población y, por ende, los recursos

de los grupos rebeldes. Ello implica que provocar el desplazamiento incrementa, en este caso, los beneficios monetarios de los grupos rebeldes $\frac{\partial R}{\partial n} \frac{\partial n}{\partial A} > 0$. Pero los ataques a la población deterioran el apoyo de la

población a los grupos insurgente $\left(\frac{\partial F}{\partial n} < 0\right)$, incrementando así la dificultad para alcanzar el objetivo de hegemonía territorial sobre el municipio

$$\left(\frac{\partial P}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial n} \frac{\partial n}{\partial A} < 0\right)$$

El problema de maximización del grupo rebelde está definido por

$$\underset{A, M}{Max} P_s(M, S, F(n(A)), G, I)$$

$$\text{sujeta a } R(n(A)) + Y_p \geq C_A A + C_M M$$

Los grupos rebeldes deciden emprender acciones contra la población civil analizando los beneficios marginales de la acción, los consecuentes incrementos en recursos, los costos marginales, el debilitamiento del apoyo de la población civil y las dificultades derivadas de las decisiones del Estado, ya sea por medio de acciones armadas o por un fortalecimiento de sus instituciones. Las acciones “óptimas” de los grupos armados contra la población civil, las otras acciones armadas y el tamaño de la población en cada municipio están entonces definidos por

$$A^* = A(C_A, C_B, Y_p, S, G, I)$$

$$M^* = M(C_A, C_B, Y_p, S, G, I)$$

$$n^* = n(C_A, C_B, Y_p, S, G, I)$$

Este modelo se estima a continuación con datos municipales del número de personas desplazadas, para establecer cuáles municipios son atacados por los grupos armados (A^*) y cuántas personas son expulsadas del territorio (n^*).

C. Resultados empíricos: los determinantes del desplazamiento en Colombia

La revisión de literatura y el modelo anterior identifican cómo factores institucionales, económicos, de exclusión, y las condiciones propicias para el surgimiento de la insurgencia, determinan la magnitud del desplazamiento. El modelo deriva una forma reducida de los determinantes municipales del desplazamiento y de las acciones de los grupos guerri-

llos. Cabe de nuevo resaltar que el objetivo del modelo no es en ningún momento develar las causas del conflicto interno colombiano. Por el contrario, el modelo asume que en Colombia hay un conflicto de vieja data y explora el accionar de los grupos armados. El objetivo de esta sección es describir la estrategia econométrica y los datos utilizados así como analizar los resultados.

1. Estrategia econométrica

La magnitud del desplazamiento en el municipio i depende (D_i), como se deduce de la forma reducida desarrollada en la sección anterior, del atractivo económico que ofrece el municipio para los actores armados (R_i), de factores de exclusión que facilitan atraer simpatizantes a la causa insurgente (G_i), de la fortaleza de las instituciones existentes en el municipio (I_i) y de características de los municipios que pueden propiciar el surgimiento de grupos armados (T_i). Por último, las acciones de los grupos armados determinan la magnitud del desplazamiento (A_i). El modelo asume que la función de desplazamiento para cada uno de los municipios es idéntica y está definida por

$$D_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \beta_2 G_i + \beta_3 I_i + \beta_4 T_i + \beta_5 A_i + \varepsilon_i$$

Dado que un poco más del 2,5% de los municipios colombianos no presenta eventos de desplazamiento, se estima un modelo Tobit, cuyo objetivo es identificar los determinantes de la magnitud del desplazamiento en el nivel municipal. Tal como se discutió en la sección anterior, se espera que $\beta_1 > 0$, lo cual implica que, a medida que el municipio sea más atractivo para los grupos armados, debido a su riqueza y la facilidad para extraer rentas económicas, los ataques al municipio sean más frecuentes y, por ende, el desplazamiento mayor. Como proxies del atractivo económico de los municipios, incluyo las transferencias que recibió el municipio por parte del Gobierno nacional, una variable dicótoma que denota si el municipio recibe regalías por la explotación de petróleo, carbón, oro o esmeraldas, y el PIB per cápita del municipio. Estudios económicos han encontrado que los grupos armados al margen de la ley consiguieron en muchos municipios, en connivencia con las autoridades locales, apoderarse de las transferencias enviadas por el Gobierno nacional para la atención en salud y la provisión de oferta educativa¹³². Las regalías, indicador de la explotación de recursos naturales valiosos y de fácil extracción, pueden asimismo constituir un atractivo para los grupos armados. Por último, es posible que los grupos armados expandan su control territorial sobre territorios más ricos, para así extraer rentas económicas de bienes

132 Sánchez y Palau, 2006.

privados y contar con más recursos para financiar sus acciones. El PIB per cápita representa entonces otros atractivos económicos del municipio, tras controlar por las transferencias y la existencia de recursos mineros.

Los factores de exclusión, al fortalecer el apoyo potencial a los grupos armados al margen de la ley, pueden asimismo contribuir a generar más desplazamiento ($\beta_2 > 0$). El porcentaje de hogares en el municipio con al menos un factor del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se toma como proxy de los factores de exclusión. Una vez se controla por el PIB per cápita del municipio, es probable que una pobreza generalizada y más extendida en el municipio genere grupos de la población afectos a la causa insurgente, o que la falta de oportunidades económicas para las personas jóvenes las lleve a formar parte de las filas de combatientes de dichos grupos. Al contar con un mayor apoyo de la población civil y un mayor número de combatientes, los grupos armados pueden ejercer un dominio territorial más fuerte sobre el municipio, llevar a cabo sus ataques e intensificar el desplazamiento de su población.

Unas instituciones fuertes y una permanente presencia institucional desincentiva la presencia de grupos armados y dificulta sus acciones, reduciendo así la magnitud del desplazamiento ($\beta_3 < 0$). Definir, sin embargo, la fortaleza de las instituciones es una tarea difícil, ya que depende de diversas dimensiones. En este caso, capto la fortaleza de las instituciones bajo dos dimensiones: la seguridad de los derechos de propiedad y la calidad de las autoridades. La seguridad de los derechos de propiedad se mide con un índice que denota el porcentaje de predios rurales bajo propiedad formal en cada uno de los municipios¹³³. La calidad de las instituciones locales se aproxima con el índice de desempeño fiscal calculado por el Departamento Nacional de Planeación. Dicho índice mide el desempeño de cada municipio respecto al recaudo de impuestos, endeudamiento, gastos de funcionamiento y otros factores. Es de esperarse, por tanto, que municipios con mejores instituciones presenten unas finanzas locales más sanas y un mejor indicador de desempeño fiscal.

El surgimiento de grupos rebeldes requiere de una geografía particular que favorezca sus acciones y dificulte la protección por parte del Estado. Los municipios que favorecen el surgimiento de grupos rebeldes, al enfrentar más acciones de dichos grupos, generan un desplazamiento mayor ($\beta_4 > 0$). Las condiciones propicias para el surgimiento se miden con dos variables: la distancia del municipio a la capital departamental y la densidad de la población. La hegemonía y control territorial de los grupos armados es más probable en municipios aislados de los centros

133 Este índice fue calculado por Velásquez, 2008.

económicos y administrativos del poder, ya que la llegada de las instituciones estatales es más costosa en estos sitios. Más aún, Colombia es un país con una geografía complicada y con un alto porcentaje de municipios ubicados en zonas de difícil acceso. Cabe, empero, señalar que la distancia a la capital departamental puede asimismo reflejar la presencia institucional. Es presumible que en regiones aisladas la presencia institucional sea menor. Por otro lado, tal como se planteó en la revisión bibliográfica, una población de baja densidad permite a los grupos armados ejercer un mayor control. En poblaciones de baja densidad, es posible conocer mejor a todos los habitantes de la región y controlar sus acciones.

Por último, las acciones de los grupos armados son el evento detonante del desplazamiento $\beta_5 > 0$. Si bien una serie de eventos determinan y desencadenan el desplazamiento, la migración forzada como tal se produce en muchos casos tras un evento violento concreto. Para captar las acciones de los grupos armados, incluyo el número de ataques terroristas en el municipio, según los registros de la Policía Nacional, y la tasa de homicidios municipal. Los ataques de los grupos armados se perpetúan en algunos casos para provocar desplazamiento y, en otros casos, dentro de la dinámica del conflicto. En ambos casos, son estrategias de guerra deliberadas que responden a los objetivos militares de quienes los perpetúan. Los homicidios, pese a no ser diferenciados por actor responsable, reflejan las actividades criminales en un municipio, ya sea por narcotráfico, crimen o conflicto armado, y la difusión de una tecnología criminal que puede ser beneficiosa para la entrada de los grupos armados. Los ataques a los municipios obedecen entonces a las decisiones y comportamientos de los grupos armados, mientras que los homicidios representan unas características del municipio.

Si bien se incluyen suficientes controles para identificar las estrategias de los grupos armados, es posible que algunas variables no observables que determinen el desplazamiento y estén relacionadas con las variables incluidas sesguen los resultados. La idiosincrasia regional o las constelaciones de poder que operan en la región pueden influenciar las estrategias de los grupos armados e influenciar asimismo las actividades económicas de la región o la inclinación de la población a apoyar los grupos armados. Para controlar por estos posibles factores, las regresiones se estiman con controles regionales. Los resultados de las regresiones se presentan con y sin controles regionales, para verificar la robustez de los resultados.

Por otro lado, el desplazamiento forzoso se presenta en dos formas: masivo e individual. Un desplazamiento masivo ocurre, según la definición oficial del Estado colombiano, cuando un grupo de más de 50 personas o 10 hogares se desplazan de manera conjunta. El desplazamiento indi-

vidual se presenta cuando un grupo pequeño de personas, un hogar o una persona migran de manera forzada. Las estrategias de los grupos armados para provocar los dos tipos de desplazamiento y las motivaciones difieren. Los desplazamientos masivos ocurren, por lo general, tras una masacre, una confrontación armada o una orden de desalojo. De otro lado, los desplazamientos individuales son el resultado de amenazas directas, asesinatos selectivos, o una decisión de prevenir ataques posteriores. Ejercer control territorial, alcanzar la hegemonía en un territorio o apoderarse de bienes públicos o privados pueden ser las principales motivaciones para producir desplazamientos masivos, mientras que usurpar activos valiosos y destruir redes sociales pueden ser las motivaciones para generar desplazamientos individuales. Con el fin de identificar los determinantes de distintos tipos de desplazamiento, se estiman por separado las regresiones para el número de personas desplazadas de manera individual y masiva.

2. Los datos

Los datos provienen de diversas fuentes. Los datos para población desplazada provienen del Registro Único de Población Desplazada –RUPD– de Acción Social. La legislación colombiana contempla una serie de beneficios para la población desplazada. Con el fin de acceder a estos beneficios y evitar que población no desplazada los solicite, la población debe registrarse en el RUPD. Para ser registrados, los hogares deben presentar una declaración juramentada en cualquier entidad del Ministerio Público, en la cual relatan los hechos del desplazamiento, se identifican los actores responsables y se recogen unas características de los hogares. La declaración debe ser validada por Acción Social, que cuenta con un plazo máximo de 15 días para otorgar el registro en el RUPD o negarlo. No se otorga la inclusión en el RUPD cuando la declaración es falsa, cuando el desplazamiento no se produjo por los hechos contemplados en la Ley 387 de 1997 o cuando la solicitud de inscripción se realiza un año después de sucedido el desplazamiento. Estos datos permiten cuantificar la cantidad de personas desplazadas entre 1999 y 2007.

Los datos del RUPD contabilizan el número de personas desplazadas con derecho a recibir ayuda por parte del Estado colombiano, y se pueden desagregar anualmente, por municipio y por tipo de desplazamiento, entre otros. Si bien los datos del RUPD proveen un panorama bastante completo de la magnitud del desplazamiento en Colombia, es necesario examinar algunas de sus debilidades. Primero, pese a que el desplazamiento forzoso se intensificó a mediados de los noventa, el RUPD no se creó hasta 1999 y su difusión fue paulatina; por tanto, los datos de des-

plazamiento antes de 1999 son bastante inexactos. Para reducir los errores de medición, tomo los datos del RUPD a partir de 1999. Segundo, el registro en el RUPD depende de la decisión de los hogares desplazados de acercarse a una entidad del Ministerio Público y declarar, así como de los criterios de los funcionarios encargados de validar la declaración. Ello implica que hay un subregistro de población desplazada, que Ibáñez y Velásquez (2006) calculan en un poco más del 70%. Más aún, dicho subregistro no es aleatorio y depende de ciertas características de los individuos, como la vulnerabilidad y la falta de información acerca del RUPD. Los datos del RUPD son, por ende, sesgados. Si el sesgo de inclusión en el RUPD está relacionado con los determinantes del desplazamiento, se podrían presentar problemas en las estimaciones siguientes. Sin embargo, Ibáñez y Velásquez (2006) demuestran que las características del desplazamiento no determinan la declaración e inclusión en el RUPD.

La formalidad en la propiedad de los predios rurales es calculada en el trabajo de Velásquez (2008). Los datos provienen del Catastro Nacional y calculan el porcentaje de hectáreas en el municipio que están bajo arreglos formales de propiedad. Estos datos sólo contienen información para un momento del tiempo bajo el período de análisis: 1999-2007. El indicador de desempeño fiscal es calculado por el Departamento Nacional de Planeación para evaluar el desempeño fiscal de cada municipio. El indicador oscila entre cero y 100, siendo este último el puntaje más alto que se puede otorgar a un municipio. Un puntaje alto significa que el municipio tiene una elevada capacidad para garantizar su autofinanciamiento, depende en menor medida de las transferencias nacionales y cuenta, en general, con unas finanzas sanas. El indicador fue creado recientemente y no se cuenta con datos sino a partir de 1999. Se usa entonces el indicador fiscal para el año 2004.

La presencia de regalías en un municipio se define como una variable dicótoma que refleja si el municipio recibía regalías durante el período de estudio. La información anual sobre las transferencias del Sistema General de Participación que reciben los municipios del Gobierno nacional proviene del Departamento Nacional de Planeación, cubre el período comprendido entre 1990 y 2003, y está reportada en miles de pesos de 2000. Por último, el PIB per cápita se imputa con base en el PIB departamental calculado por el DANE desde 1993 hasta 2003, la base de impuestos de industria y comercio (ICA) recolectada por municipio y la población municipal reportada por el DANE. Para imputar el PIB municipal, se calcula la participación municipal en la recolección departamental del ICA, y dicha participación se utiliza para calcular el PIB municipal con base en el PIB departamental. El PIB per cápita está en millones de pesos constantes de 1994.

La distancia a la capital departamental y la densidad de la población provienen de los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La distancia a la capital departamental está medida en kilómetros. La densidad poblacional se calcula con el área del municipio medida en kilómetros cuadrados y la población reportada por el DANE para el período comprendido entre 1993 y 2007. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas proviene de los datos del Censo aplicado por el DANE en 2005.

Para terminar, los datos de violencia provienen de información recolectada por el Departamento Nacional de Planeación en la Policía Nacional y el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Los datos de ataques de grupos terroristas cubren el período comprendido entre 1995 y 2002. Los homicidios cubren el período entre 1990 y 2007. Dado que muchos datos sólo cuentan con información para un período dado o con un solo punto en el tiempo, el modelo se estima para las medias de cada una de las variables.

3. Estadísticas descriptivas

Antes de analizar los resultados econométricos, presento las estadísticas descriptivas y unas gráficas que refuerzan las hipótesis discutidas en secciones anteriores. El cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas para todos los municipios: los expulsores de población y los no expulsores de población. Los resultados del cuadro revelan varias conclusiones importantes y hechos que se corroboran después con las estimaciones econométricas. En primer lugar, el cuadro evidencia la expansión del desplazamiento a lo largo del territorio nacional: un poco más del 97% de los municipios han sido expulsores de población durante el período comprendido entre 1999 y 2007. Peor aun, casi una tercera parte de los municipios (27,4%) ha enfrentado desplazamientos masivos de su población; cifra dramática, pues dichos desplazamientos suceden tras eventos traumáticos como masacres, confrontaciones armadas u órdenes colectivos de desalojo, entre otros. Asimismo, el número promedio de personas desplazadas por año es elevado: 175,56 personas se desplazan al año por municipio.

Los datos, aun sin controlar por todas las características, parecen corroborar las hipótesis que explora el capítulo. La debilidad institucional, en particular la poca seguridad en los derechos de propiedad, parece generar desplazamiento. Los municipios no expulsores exhiben un porcentaje de predios bajo propiedad formal diez puntos porcentuales superior al de los municipios expulsores. Los índices de propiedad formal son 99,2 y 89,8% para los municipios sin y con desplazamiento, respectivamente. La gráfica 1a ilustra una distribución kernel del índice de formalidad de la

Cuadro 1. Características municipales: total muestra, municipios con desplazamiento y municipios sin desplazamiento

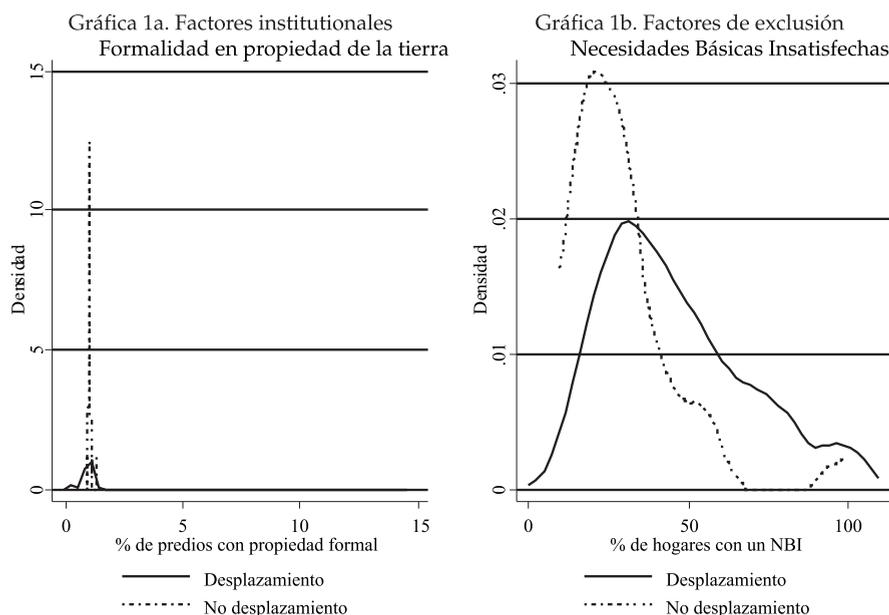
Variable	Total muestra	Municipios expulsores	Municipios no expulsores
% municipios con desplazamiento	97,5%		
% municipios con desplazamiento individual	97,5%		
% municipios con desplazamiento masivo	27,4%		
Media anual de personas desplazadas	175,56 (420,34)		
Media anual de personas, individual	135,65 (296,90)		
Media anual de personas, masivo	39,91 (166,75)		
Porcentaje predios con propiedad formal	90,1% (0,51)	89,8% (0,52)	99,2% (0,0813)
Índice de desempeño fiscal	56,37 (8,72)	56,35 (8,76)	57,17 (6,83)
Media PIB per cápita, en millones de pesos de 1994	0,68 (1,71)	0,68 (1,72)	0,52 (0,90)
Media transferencias, en miles de pesos de 2000	2.713,36 (9618,42)	2.748,90 (9718,05)	1067,76 (805,69)
Porcentaje municipios con regalías	28,7%	28,9%	18,5%
Distancia a capital departamental	129,24 (105,36)	130,12 (105,82)	94,46 (79,32)
Media densidad de población (Población/superficie en km)	132,01 (580,02)	133,55 (587,16)	71,38 (61,04)
NBI 2005	45,39 (22,54)	45,80 (22,49)	29,44 (18,78)
Media ataques terroristas	0,67 (3,18)	0,69 (3,22)	0,01 (0,04)
Media tasa de homicidios	57,35 (66,65)	58,32 (67,11)	18,44 (20,89)

Fuente: cálculos de la autora con datos del RUPD y datos municipales CEDE.

tierra para los municipios con y sin desplazamiento. Los municipios con desplazamiento están representados por la línea sólida, y los municipios sin desplazamiento, con la línea punteada. La distribución de los municipios expulsores de población revela una mayor frecuencia de municipios

con bajos índices de formalidad. Por otro lado, los municipios que no expulsan población se concentran en un índice de formalidad cercano al ciento por ciento. Es importante no derivar, sin embargo, conclusiones contundentes. Es probable que los municipios con más formalidad de la propiedad sean las grandes ciudades que, en algunos casos, no expulsan población. Una vez se controle por densidad de la población, se podrá develar el impacto de la formalidad de la propiedad. Pese a lo anterior, el indicador de desempeño fiscal parece mostrar también que unas mejores instituciones reducen el desplazamiento. Dicho indicador es un poco más alto para los municipios sin desplazamiento.

Gráfica 1. Factores institucionales y de exclusión: formalidad en la propiedad de la tierra e índice NBI



Fuente: cálculos de la autora con datos del RUPD y datos municipales CEDE.

El efecto de los factores de exclusión parece ser notable. El indicador NBI para los municipios con desplazamiento es casi el doble que el de aquellos sin desplazamiento. El porcentaje de hogares con una necesidad insatisfecha es en promedio un 45,8% para los municipios que expulsan población y un 29,4% para aquellos que no expulsan población. Ello implica que el primer grupo de municipios exhibe un NBI más alto en casi una desviación estándar que los municipios no expulsores. Pareciera ser

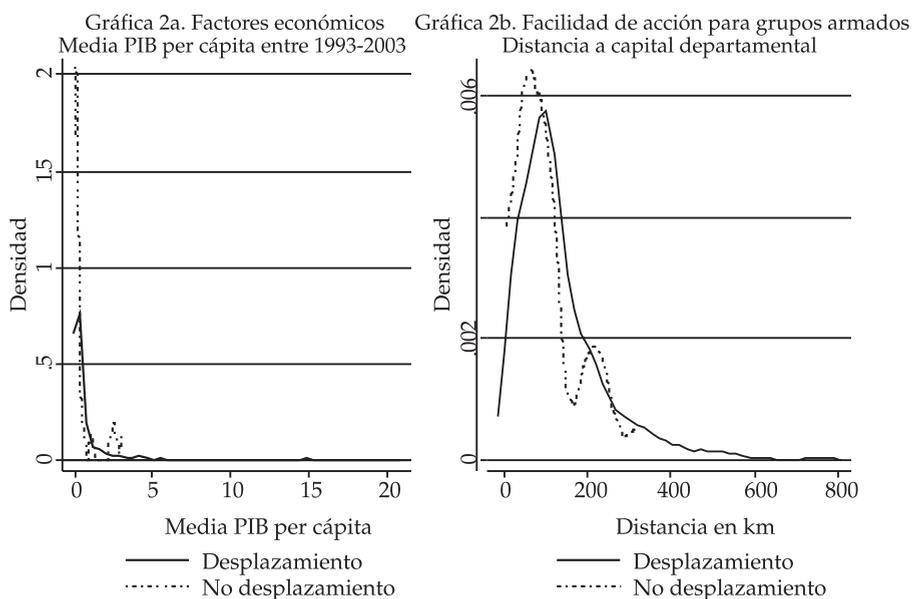
que la pobreza y la falta de oportunidades económicas proveyeran unas condiciones propicias para el accionar de los grupos armados. Es paradójico, sin embargo, que ello redunde en una mayor victimización de la población cuyos derechos se están intentando reivindicar. La diferencia entre ambos grupos de municipios es más evidente cuando se grafica la distribución kernel de cada grupo de municipios, tal como lo ilustra la gráfica 1b. La distribución del NBI para los municipios no expulsores de población se concentra en la porción baja de la curva, es decir, revela una menor pobreza, mientras que los municipios expulsores se concentran en la porción alta de la distribución. Incluso un porcentaje no despreciable de municipios presenta un NBI cercano al ciento por ciento.

El conjunto de variables que capta los factores económicos también revela diferencias significativas entre ambos grupos de municipios. Primero, las transferencias del Gobierno nacional son más del doble para los municipios que expulsan población que para los municipios que no reportan desplazamiento. De nuevo, es importante analizar si este efecto persiste una vez se controla por la densidad de la población. Segundo, el desplazamiento sucede con mayor frecuencia en los municipios que perciben regalías por la explotación de petróleo, carbón, oro y esmeraldas: mientras que 28,9% de los municipios con desplazamiento reciben regalías, sólo un 18,5% de los municipios que no generan desplazamiento las reciben. Tercero, el PIB per cápita, reflejo de la actividad económica y riqueza de un municipio, es cerca de una desviación estándar más alto para los municipios expulsores de población. Pese a exhibir unos índices de pobreza más altos, los municipios que generan desplazamiento son bastante más ricos que los municipios sin incidencia de desplazamiento; cifras que pueden reflejar la desigualdad de oportunidades en estos municipios. La gráfica 2a presenta la distribución kernel del PIB per cápita para los municipios con y sin desplazamiento. La gráfica ilustra de nuevo que los municipios con menores PIB per cápita generan menos desplazamiento.

Las condiciones propicias para el surgimiento de grupos insurgentes parecen, en efecto, atraer la presencia de grupos armados y provocar, por tanto, un mayor desplazamiento. Los municipios expulsores están más alejados de sus capitales departamentales. La distancia promedio de estos municipios a su capital es un poco más de 130 kilómetros, mientras que para los otros municipios es de 94,5 kilómetros. Evidencia que se corrobora con la gráfica 2b, donde se compara la distribución kernel de esta variable. Por otro lado, la densidad de la población refleja un comportamiento contrario al esperado: la densidad poblacional es más alta para los municipios generadores de desplazamiento. Sin embargo, la desviación estándar de los municipios generadores de desplazamiento denota una distribución bastante dispersa, mientras que la distribución

para los otros municipios está muy concentrada alrededor de su media. Es mejor no derivar conclusiones contundentes antes de controlar por las otras características del municipio.

Gráfica 2. Factores económicos y factores que propician surgimiento de grupos armados: PIB per cápita y distancia de la capital departamental



Fuente: cálculos de la autora con datos del RUPD y datos municipales CEDE.

Por último, los indicadores de violencia, como se presumía, son muchas veces más altos para los municipios que generan desplazamiento. Los ataques terroristas son 60 veces más altos para los municipios con desplazamiento, y las tasas de homicidio, pese a no estar directamente relacionadas con el conflicto, son tres veces más altas. Además de mostrar el comportamiento esperado, los indicadores de violencia denotan la violencia generalizada y desmesurada que enfrenta el país.

Los cuadros 2 y 3 presentan las estimaciones para los determinantes de los desplazamientos individuales y masivos, respectivamente. Con el fin de medir el impacto de las diferentes variables sobre la magnitud del desplazamiento, evalué en cuánto se incrementa el número de personas desplazadas cuando la variable bajo análisis cambia de la media de los municipios no expulsores a la media de los municipios expulsores. Las variables restantes se mantienen constantes en la media de los municipios no expulsores.

Cuadro 2. Estimaciones Tobit para desplazamientos individuales

Variable	Estimación Tobit			
	(1)		(2)	
Porcentaje predios con propiedad formal	-17,4153 (-1,02)	-25,8477 (-1,52)	-24,4738 (-1,00)	-24,5489 (-1,48)
Índice de desempeño fiscal	-1,7303 (-1,58)	-1,8416 (-1,69)*	-2,2211 (-1,42)	-1,5199 (-1,43)
Media PIB per cápita, en millones de pesos de 1994	14,2267 (2,53)***	10,6831 (1,91)*	13,4237 (1,67)*	9,1621 (1,68)*
Media transferencias, en miles de pesos de 2000	0,0279 (11,53)***	0,0267 (10,99)***	0,0295 (6,77)***	0,0178 (5,86)***
Regalías	15,8654 (0,82)	7,3693 (0,38)	18,4977 (0,67)	13,4622 (0,72)
NBI 2005	3,5784 (8,30)***	2,6321 (5,39)***	4,5334 (7,36)***	2,5029 (5,26)***
Distancia a capital departamental	0,1773 (1,97)**	0,1941 (2,18)**	0,2564 (1,99)**	0,1969 (2,27)**
Media de la densidad de población (Población/superficie en km)	-0,0931 (-4,96)***	-0,0899 (-4,86)***	-0,1266 (-4,72)***	-0,0860 (-4,77)***
Media ataques terroristas			22,0675 (3,24)***	21,3394 (4,57)***
Media tasa de homicidios			0,8728 (4,65)***	0,6628 (5,19)***
Constante	-4,1052 (-0,06)	32,2072 (0,46)	-48,1714 (-0,48)	-18,3071 (-0,27)
Controles regionales	No	Si	No	Si
Número observaciones	996	996	996	996
Pseudo R cuadrado	0,016	0,0181	0,0153	0,0219

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en RUPD y base de datos municipales CEDE.

Cuadro 3. Estimaciones Tobit para desplazamientos masivos

Variable	Estimación Tobit			
	(1)		(2)	
Porcentaje predios con propiedad formal	-135,5090 (-2,59)***	-116,5331 (-2,16)***	-138,0323 (-2,67)***	-130,6185 (-2,42)**
Índice de desempeño fiscal	-1,8973 (-1,04)	-2,1391 (-1,16)	-1,8281 (-1,01)	-1,8203 (-1,00)
Media PIB per cápita, en millones de pesos de 1994	11,8372 (1,21)	8,7343 (0,86)	8,6632 (0,86)	6,4409 (0,62)
Media transferencias, en miles de pesos de 2000	0,0419 (8,34)***	0,0404 (7,88)***	0,0377 (6,74)***	0,0345 (5,93)***
Regalías	-2,1802 (-0,07)	-1,5149 (-0,05)	3,6528 (0,11)	2,7059 (0,08)
NBI 2005	4,0433 (5,36)***	3,2372 (3,90)***	4,0143 (5,35)***	3,0944 (3,77)***
Distancia a capital departamental	0,2923 (2,07)**	0,3338 (2,33)**	0,3152 (2,25)**	0,3407 (2,41)**
Media densidad de población (Población/superficie en km)	-0,4376 (-5,46)***	-0,4138 (-5,19)***	-0,4522 (-5,47)***	-0,4254 (-5,13)***
Media ataques terroristas			10,4885 (1,50)	12,3444 (1,72)*
Media tasa de homicidios			0,8256 (4,26)***	0,8765 (4,47)***
Constante	-334,7529 (-2,65)***	-341,0191 (-2,68)***	-383,8377 (-3,03)***	-392,1976 (-3,07)***
Controles regionales	No	Sí	No	Sí
Número de observaciones	996	996	996	996
Pseudo R cuadrado	0,0342	0,0335	0,039	0,0407

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en RUPD y base de datos municipales CEDE.

Las estimaciones corroboran muchos de los resultados discutidos en párrafos anteriores y permiten, además, identificar diferencias entre el desplazamiento individual y masivo, tanto en términos de significancia estadística como en magnitud de los coeficientes. La fortaleza de las instituciones, representada por la formalidad en los derechos de propiedad

y el indicador de desempeño fiscal, parece no prevenir el desplazamiento individual. Si bien el porcentaje de predios formales y el indicador de desempeño fiscal son significativos para algunas de las regresiones estimadas, al incluir todos los controles, tanto los derechos de propiedad como el indicador de desempeño fiscal pierden significancia, como se aprecia en el cuadro 2. Sin embargo, la distancia a la capital departamental, otra posible proxy, es significativa y positiva. Por el contrario, la formalidad de los derechos de propiedad es un factor importante para evitar los desplazamientos masivos. Además de presentar un coeficiente significativo para todas las regresiones estimadas, el estimador del coeficiente para el porcentaje de predios con propiedad formal es seis veces mayor para los desplazamientos masivos que para los individuales. Es más, su impacto, cuando se compara con otras variables, es alto. Cuando la media disminuye a los valores de los municipios expulsores, el promedio anual de desplazamientos masivos se incrementa en 12 personas. Ello devela la estrategia de los grupos armados, que pueden provocar desplazamientos masivos para despejar el territorio de población y apoderarse de activos valiosos tales como la tierra.

El atractivo económico de las regiones determina en un alto porcentaje los desplazamientos individuales y masivos. Las regalías, pese a diferir de manera significativa en las estadísticas descriptivas para los municipios expulsores y no expulsores de población, no aparecen como significativas para ninguna de las especificaciones. De otro lado, las transferencias son siempre significativas para todas las especificaciones de los desplazamientos individuales y masivos. Empero, la magnitud de su coeficiente es bastante mayor para los desplazamientos masivos que para los desplazamientos individuales. Al incrementar la media de las transferencias para los municipios no expulsores a la media de los municipios expulsores, se eleva el promedio de los desplazamientos individuales en 29 personas, mientras que los masivos aumentan en 58 personas. Este resultado confirma los hallazgos de Sánchez y Palau (2006): los grupos armados al margen de la ley buscan apropiarse de las transferencias para así financiar su estrategia de guerra. Dicha estrategia parece requerir, además de la coacción de las autoridades locales o la imposición de políticos de sus filas, expulsar población civil. La riqueza del municipio, medida por el PIB per cápita, aumenta el desplazamiento individual, pero no determina el desplazamiento masivo. Es probable que los grupos armados lleven a cabo desplazamientos masivos para adquirir la hegemonía territorial de una región, apoderarse de los presupuestos de las autoridades locales y poblar territorios valiosos con su población de base. De otro lado, los desplazamientos individuales pueden llevarse a cabo para desarticular redes sociales o apropiarse de activos valiosos de los pobladores. Ello

podría explicar la significancia del PIB per cápita para el desplazamiento individual y no para el masivo. Pese a lo anterior, la magnitud del impacto del PIB per cápita es baja. Un aumento del PIB per cápita del promedio de los municipios no expulsores a los municipios expulsores incrementa el desplazamiento en una persona.

El impacto mayor, tanto para los desplazamientos masivos como para los individuales, proviene del indicador de NBI, el cual pretende captar los factores de exclusión. Un crecimiento en la pobreza provoca una intensificación de los dos tipos de desplazamiento. Tal como se discutió en secciones anteriores, la pobreza y la exclusión de grupos de la población generan condiciones propicias para que los actores armados ganen el apoyo de la población civil y para reclutar combatientes. El coeficiente para el NBI es robusto frente a cualquier especificación: siempre es significativo y su efecto es positivo. Además, su impacto es sustancial. Incrementar la pobreza a la media de los municipios expulsores aumenta el desplazamiento forzoso en 40 personas para el caso individual y en 50 personas para el masivo.

Unas condiciones geográficas favorables o la dispersión de la población en el municipio parecen facilitar las acciones de los grupos armados. En ambos tipos de desplazamiento, la distancia a la capital departamental intensifica el desplazamiento, y la densidad de la población lo reduce. Un municipio aislado de su capital presumiblemente tiene pocas vías de acceso y una baja presencia institucional, complicando así la llegada de las fuerzas del Estado y facilitando el surgimiento de grupos rebeldes. Una población dispersa también contribuye al surgimiento de los grupos armados y a la implementación de sus estrategias: ya que conocen de manera cercana a la población, es sencillo identificar posibles opositores, así como convencer a los pobladores de apoyar la causa rebelde. Ambas variables tienen un alto impacto sobre el desplazamiento. Por ejemplo, los desplazamientos masivos se incrementan en 12 personas cuando se evalúan en la distancia de los municipios expulsores, y en 26 personas al evaluarla con la densidad de los expulsores.

Por último, las variables que representan la violencia en la región, ya sea perpetuada por los grupos armados o el crimen generalizado, afectan de manera significativa los desplazamientos masivos e individuales. Una intensificación de los ataques o un deterioro de las tasas de homicidios conllevan un mayor desplazamiento. La magnitud de los efectos son, sin embargo, menores que el impacto de las transferencias y del indicador NBI. Si los ataques y la tasa de homicidios aumentan a los niveles de los municipios expulsores, los desplazamientos individuales crecen en 14 y

12 personas, respectivamente, mientras que los desplazamientos masivos se incrementan en 8 y 15 personas, respectivamente.

Los resultados confirman las hipótesis del modelo: factores institucionales, económicos y de exclusión, así como condiciones geográficas favorables, determinan el desplazamiento. Sin embargo, los determinantes difieren, en algunos casos, para los desplazamientos masivos e individuales. El desplazamiento masivo de población parece ser una estrategia para despoblar territorio valioso de posibles oponentes, para apropiarse de rentas provenientes de los presupuestos locales, y ser alimentado por factores de exclusión presentes en los municipios. Los desplazamientos individuales, si bien no son determinados por factores institucionales, están determinados en una buena medida por la necesidad de capturar bienes privados de la población y, de nuevo, alimentarse de la pobreza de los municipios. Las condiciones geográficas y sociales propicias facilitan asimismo las acciones de los grupos armados. Los municipios más aislados y con menor densidad poblacional enfrentan un desplazamiento mayor.

D. Conclusiones

La migración forzada de población es un evento traumático para sus víctimas y no es un subproducto desafortunado del conflicto. Los actores armados atacan a la población civil para alcanzar objetivos de guerra y financiar sus acciones militares. Al despoblar el territorio de oponentes y provocar el desplazamiento forzoso de ciertos segmentos de la población, los grupos armados afianzan su control territorial, expanden su hegemonía y se apropian tanto de bienes públicos como de bienes privados. Para lograr el desplazamiento de población, los grupos al margen de la ley recurren a estrategias de victimización como las masacres, los asesinatos selectivos, el reclutamiento forzoso y las amenazas directas, entre otros. Todas ellas son claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

El análisis de las estadísticas descriptivas, las gráficas y las estimaciones develan que el desplazamiento forzoso en Colombia responde a unos objetivos claros de guerra de los grupos armados. Los municipios con poca presencia institucional, con una debilidad en sus derechos de propiedad, con atractivos económicos para los grupos armados, son atacados con más frecuencia y provocan, por ende, la expulsión de población. Peor aun, pareciera que el tipo de desplazamiento obedeciera a los diferentes objetivos de los grupos armados. Es así como el desplazamiento masivo parece adoptarse como estrategia cuando los grupos armados pretenden

apropiarse de recursos públicos (las transferencias) y usurpar tierras bajo arreglos informales de propiedad. Los desplazamientos individuales, por otro lado, parecen ser una estrategia para la apropiación de bienes privados.

La comprobación del desplazamiento como arma efectiva de guerra conlleva una pregunta de política pública esencial en la época del posconflicto. Si la población desplazada fue víctima de claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario y los ataques contra ella fueron deliberados, ¿no serían entonces unas víctimas de los grupos armados, quienes deberían compensarlas? ¿No debería ser considerada la población desplazada como beneficiaria de los procesos de compensación, por el simple hecho de ser expulsada de su territorio para alcanzar objetivos de guerra?

Por último, los resultados revelan de manera contundente que la pobreza en los municipios puede generar condiciones propicias para el surgimiento de grupos rebeldes y para facilitar las estrategias de éstos. Es, sin embargo, paradójico, que, pese a los sentimientos iniciales de reivindicación social de los grupos armados, terminen afectando de manera sustancial a la población que pretendían defender. Tal como se analiza en los próximos capítulos, el desplazamiento produce una caída en bienestar y una pérdida de activos tan elevadas que empujan a los hogares a trampas de pobreza que posiblemente no puedan superar sino hasta cuando pasen unas cuantas generaciones.

III

¿QUIÉNES SON VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS? ¿QUIÉNES SE DESPLAZAN?¹³⁴

En el capítulo anterior se analizó el incremento sostenido de conflictos internos y su consecuente impacto sobre el desplazamiento forzoso. El prolongado conflicto interno en Colombia y su intensificación a partir de finales de los ochenta han provocado la migración forzosa de más de 3,5 millones de personas¹³⁵. El Derecho Internacional Humanitario considera el desplazamiento forzado como una violación de los derechos humanos. Las consecuencias del fenómeno para el país afectado son además sumamente negativas. El incremento en el desempleo, la redistribución violenta de la tierra, las distorsiones e ineficiencias en la distribución de los recursos, y los efectos de flujos demográficos grandes y no planificados en las ciudades receptoras, son algunos de los problemas que causa el desplazamiento forzoso. El interés en intentar abordar las necesidades de la población desplazada ha crecido, por ende, en los últimos años en las Naciones Unidas, las agencias multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales, los cuales han desarrollado programas de asistencia¹³⁶.

El grueso de dichos programas se ha concentrado en mitigar las consecuencias del desplazamiento forzoso¹³⁷ y apoyar el asentamiento de la población desplazada en el municipio receptor. El flujo continuo y creciente

134 Este capítulo es una versión posterior del artículo de S. Engel, y A. M. Ibáñez, 2007, "Displacement Due to Violence in Colombia: A Household Level Analysis". *Economic Development and Cultural Change* 55 (2): 335-365.

135 Fecha de corte: 30 de noviembre de 2007. www.red.gov.co

136 UNDP, 2003.

137 El porcentaje de la inversión del Presupuesto Nacional en los programas de desplazamiento destinado a su prevención es del 0,2% (DNP, 2005). Cabe anotar que la política de seguridad democrática ha contribuido a disminuir las acciones de los grupos al margen de la ley, lo cual a su vez ha reducido el desplazamiento forzoso.

de población desplazada y la capacidad limitada de las ciudades receptoras para absorber las crecientes masas de migrantes evidencian, sin embargo, la urgencia de diseñar políticas de prevención, asistencia y reubicación. Una condición *sine qua non* para definir políticas de prevención es entender el proceso de decisión subyacente al desplazamiento forzoso. Es claro que la violencia es la principal causa y el detonante inmediato del desplazamiento forzoso. Pero las reacciones de las personas ante la violencia difieren. Así, pues, es común observar cómo un porcentaje nada despreciable de la población decide permanecer en áreas con alta incidencia de violencia, pese a los altos riesgos que ello implica. Aunque algunas hipótesis acerca de los determinantes del desplazamiento se han identificado en la literatura, su importancia relativa, su dirección y su magnitud no se han analizado de una manera rigurosa para los hogares víctimas de este fenómeno¹³⁸. Algunas preguntas que no han sido aún exploradas son: ¿Es el desplazamiento forzoso causado sólo por la violencia o las características sociodemográficas de los hogares ejercen también cierta influencia, así sea mínima? ¿Es la violencia indiscriminada o es dirigida hacia ciertos grupos particulares de hogares? ¿Existen políticas, además del cese del conflicto, que puedan prevenir el desplazamiento?

Los estudios sobre migración forzosa se concentran en examinar las decisiones de la población refugiada y su evidencia empírica se basa en patrones agregados de población refugiada, ya sea del país expulsor o receptor. Pese a analizar datos agregados de migración forzosa, los estudios extraen sus hipótesis de modelos de decisión individual, en los cuales las personas deciden migrar si los beneficios netos de hacerlo son positivos. La agregación de los datos asume, por ende, que la probabilidad de victimización así como los beneficios y los costos de migrar son homogéneos para todos los individuos¹³⁹; supuesto bastante restrictivo si se tienen en cuenta los argumentos expuestos en el párrafo anterior. La evidencia de estos estudios asocia consistentemente las guerras civiles como la principal causa de la migración forzosa¹⁴⁰. La violencia como principal causa de la migración forzada no excluye, sin embargo, que los factores económicos influyeran también la decisión, pero de una manera casi imperceptible¹⁴¹.

138 Para trabajos previos sobre desplazamiento consultar, por ejemplo, Deng, 1995 y los trabajos analizados en el capítulo anterior.

139 Moore y Shellman, 2006; Melander y Öberg, 2006

140 Czaika y Kis-Katos, 2007; Melander y Öberg, 2006; Davenport *et al.*, 2003; Schmeidl, 1997; Morrison y May, 1994; Stanley, 1987; Zolberg *et al.*, 1986, entre otros.

141 Czaika y Kis-Katos, 2007; Moore y Shellman, 2006; Davenport *et al.*, 2003; Schmeidl, 1997; Wood, 1994.

El objetivo de este capítulo es entonces identificar los determinantes del desplazamiento al nivel del hogar, con base en un análisis estadístico riguroso. En particular, el capítulo intenta contestar las preguntas formuladas en el párrafo anterior, concentrándonos en el caso de Colombia y empleando encuestas de hogares para estimar un modelo de utilidad aleatoria. El capítulo consta de cuatro secciones. La sección A discute las similitudes y diferencias entre las teorías de la migración y el desplazamiento forzoso y desarrolla un modelo conceptual para identificar los determinantes de este último. Los datos empleados para el análisis empírico y las hipótesis a evaluar se presentan en la sección B. En la sección C se presenta un análisis econométrico de la probabilidad de ser víctima de un ataque directo por parte de los grupos armados y la probabilidad de desplazamiento. Por último, la sección D concluye y discute las recomendaciones de política.

A. Un marco conceptual para analizar el desplazamiento forzoso

El objetivo de este capítulo es analizar los determinantes del desplazamiento forzoso para los hogares. Dado que el desplazamiento forzado se considera más un problema político que un problema económico¹⁴², las contribuciones de la literatura económica en el análisis de este tema son pocas y los datos disponibles para examinar el fenómeno son escasos. Algunos estudios analizan flujos agregados de migración e incorporan la noción del desplazamiento forzoso con variables que miden la incidencia de conflictos internos y de desastres naturales. Un análisis econométrico de la migración interna en Colombia durante el período comprendido entre 1951 y 1964 encuentra que las tasas de migración neta aumentan con una agudización de los homicidios políticos¹⁴³. Morrison y May (1994) muestran que, durante el período más cruento de la guerra civil en Guatemala, la violencia era un determinante fundamental de la migración. Un estudio de la migración del Norte de China hacia Manchuria indica que los choques, tales como las guerras, las hambrunas y las inundaciones, entre otros, producen migraciones intempestivas cuando éstos suceden, pero no explican la persistencia de la migración entre regiones¹⁴⁴.

Los estudios anteriores examinan los determinantes agregados de la migración forzada y no analizan las decisiones de desplazamiento de los

142 Lucas, 1997.

143 Schultz, 1971.

144 Gottschang, 1987.

hogares. Si bien la migración de personas refugiadas y desplazadas ocurre bajo un contexto de violencia extrema, persisten diferencias estructurales entre la decisión de desplazamiento y la decisión de migrar cuando la violencia no está presente. Con el fin de contribuir a entender la migración en contextos de violencia, el objetivo de este capítulo es desarrollar y aplicar un modelo para identificar los determinantes de la decisión de desplazamiento del hogar. El modelo intenta explicar por qué las decisiones de migrar bajo un contexto de violencia no están determinadas únicamente por la incidencia de la violencia. Aunque la violencia provoca el desplazamiento, no parece ser el único factor que influencia la decisión de permanecer o desplazarse del municipio de origen. Más aún, en muchas regiones, la población enfrenta altos índices de violencia, y un porcentaje significativo de la población prefiere permanecer en su municipio, pese a los riesgos que conlleva esta decisión.

Dos razones pueden subyacer en la decisión de permanecer en municipios con altos índices de violencia. Primero, los hogares que deciden permanecer pueden enfrentar riesgos menores de ser víctimas directas de la violencia, en contraste con los hogares que deciden migrar. Si en efecto algunos hogares perciben riesgos mayores de ser víctimas de la violencia, es importante identificar los factores que determinan el riesgo percibido por los hogares. Segundo, otros factores pueden influenciar la decisión de desplazamiento. Cuando los hogares deben decidir entre permanecer en su pueblo o migrar hacia otro municipio, pueden considerar los riesgos y beneficios potenciales de ambas opciones y escoger la más adecuada para ellos: o, quizás más apropiado, el menos nocivo de dos males. Durante este proceso de decisión, los individuos se crean expectativas acerca de sus niveles de vida en ambos municipios: el de origen y el de recepción. La decisión de desplazarse se asemeja, en este sentido, a la decisión de migrar. El efecto de la violencia, sin embargo, incorpora diferencias considerables que se deben abordar en el modelo.

El objetivo de esta sección es, por ende, discutir los resultados principales de la teoría de la migración y examinar su posible aplicación en el contexto de un desplazamiento forzado. En particular, resaltamos similitudes que pueden ser útiles en el análisis y las diferencias importantes que se deben considerar en la decisión de desplazamiento; presentamos después el modelo empírico para identificar los determinantes del desplazamiento.

1. Una revisión de la teoría económica de la migración

Las teorías iniciales de la migración señalaban las diferencias salariales geográficas como la principal causa de la migración¹⁴⁵. En estudios posteriores, Todaro (1969) define un modelo teórico de un individuo que decide migrar si el flujo descontado del diferencial de ingresos entre las áreas urbanas y rurales excede los costos de migración. Al introducir el diferencial de ingresos, Todaro permite que las causas de migración no se restrinjan a la brecha salarial e incluyan asimismo los costos de migración, la tasa de descuento y la probabilidad de encontrar empleo en el municipio de recepción. Si bien el concepto de comparar los beneficios y costos esperados de la migración es útil para examinar las decisiones de desplazamiento, factores adicionales, como el riesgo de ser víctimas de la violencia y el bienestar económico, más que el ingreso, determinan, entre otros, los beneficios y costos de la migración. Por ejemplo, los hogares pueden decidir desplazarse, pese a percibir diferenciales negativos de ingreso o una caída sustancial en la calidad de vida tras el desplazamiento, si el diferencial de riesgo de ser víctimas de la violencia disminuye. Ello implicaría que los hogares estarían dispuestos a sustituir ingreso por un riesgo menor de ser víctimas de la violencia.

La teoría del capital humano enriquece los modelos de migración al permitir que los determinantes de la migración identificados por Todaro dependan de las características individuales, y justificar así las diferencias en la propensión a migrar entre los individuos¹⁴⁶. Algunas características del individuo que influyen la decisión de migrar son el horizonte de planeación del individuo y, por ende, su edad¹⁴⁷, la educación¹⁴⁸ y la aversión al riesgo. Asimismo, las condiciones económicas en los municipios de origen y recepción, tales como los mercados de tierras y vivienda, influyen las decisiones de los potenciales migrantes¹⁴⁹.

Otros autores han analizado la importancia de la información imperfecta y, por tanto, costosa de adquirir en el proceso de la decisión de migrar¹⁵⁰. Unos costos de permanecer en el municipio de origen inferiores a los costos básicos de información constituyen una condición mínima para mi-

145 Ravenstein, 1885, 1889; Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961.

146 Sjaastad, 1962; Mincer, 1974; Becker, 1964, 1975; Todaro, 1976, 1989; Todaro y Maruszko, 1987.

147 Plane, 1993.

148 Greenwood, 1997.

149 *Ibid.*

150 Stark y Levhari, 1982; Dustmann, 1992; Maier, 1985.

grar. De otro lado, un cúmulo mayor de información acerca de las oportunidades económicas y sociales en el municipio de recepción constituye un incentivo para migrar¹⁵¹.

Varios de los resultados de la teoría de capital humano se aplican en la decisión de desplazamiento, pero su efecto es en algunos casos el opuesto. Por ejemplo, a diferencia de la migración económica, donde los individuos menos aversos al riesgo son más propensos a migrar, los individuos menos aversos que residen en regiones con violencia aguda podrían estar más dispuestos a permanecer en sus pueblos y enfrentar el riesgo de ser víctimas de una acción violenta. El resultado anterior se desprende del riesgo adicional que significa vivir en un contexto violento; riesgo que bien podría sobrepasar en intensidad otro tipo de riesgos (por ejemplo, desempleo en el municipio de recepción). Más aún, un mejor acceso a la información, al proveer evidencia acerca de las condiciones precarias de la población desplazada, puede disuadir, y no incentivar, la decisión de desplazarse.

Al considerar al individuo como miembro de un hogar, la nueva economía de la migración modera el supuesto de un individuo autónomo carente de un contexto social¹⁵². Dichos modelos permiten explicar migraciones individuales de miembros del hogar. La migración estratégica de algunos miembros del hogar sucede con frecuencia en el caso del desplazamiento forzado: algunos miembros migran para protegerse de la acción de los grupos armados y otros permanecen para continuar extrayendo rentas de sus predios; en otros casos, el jefe del hogar migra primero para buscar oportunidades económicas en el municipio de recepción y los otros miembros migran una vez se alcancen unas condiciones mínimas de subsistencia; y, en otros casos, los jóvenes del hogar se desplazan para evitar el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. El hogar debe entonces decidir no sólo si se desplazan o no, sino también cuáles miembros del hogar deben desplazarse. Estas decisiones estratégicas de los hogares no pueden, sin embargo, ser analizadas con los datos utilizados en este capítulo.

En un estudio interdisciplinario, Fischer *et al.* (1997) examinan factores que limitan la migración. La pérdida de activos específicos al lugar de origen, debido a la migración¹⁵³; el capital humano específico al lugar de origen¹⁵⁴, el capital social, y la posible discriminación en el municipio re-

151 Fischer *et al.*, 1997.

152 Stark 1991; Stark y Bloom 1985.

153 Lucas, 1997.

154 Jagannathan, 1987.

ceptor, son algunos factores que pueden disuadir la migración. El beneficio provisto por estos factores, o el costo de perderlos al migrar, aumentan conforme la residencia en origen es mayor. Es así como los costos de migración para los residentes permanentes son altos, debido a una base mayor de activos físicos, humanos y sociales.

Los factores anteriores son de suma relevancia en el proceso de decisión de la población desplazada. La población desplazada enfrenta discriminación y marginalización en los municipios de recepción. La pérdida de activos específicos al lugar de origen, tales como la tierra, las mejoras en los predios y la experiencia laboral agrícola, puede agravarse en un contexto de violencia o conflicto armado. La violencia y el conflicto armado en una región pueden deprimir los precios de mercado de los activos y dificultar entonces su venta antes de la migración. Ello puede implicar mayores costos de oportunidad de migrar, en contraste con un proceso de migración económica tradicional¹⁵⁵; en particular, cuando la usurpación de activos por parte de los grupos armados sucede una vez se abandona el municipio de origen, los costos de oportunidad serán elevados. El arraigo con las redes sociales en el municipio de origen puede ser asimismo un disuasor de la migración. Sin embargo, las estrategias de los grupos armados se concentran, en ciertas ocasiones, en hogares propietarios de tierras, para apropiarse de activos valiosos, o con una alta inserción en las redes sociales de sus municipios, para aterrorizar a la población civil. Dichos activos incrementan, por un lado, los costos de migración y, por otro, la posibilidad de ser víctimas de la violencia de los grupos armados; aspecto que se discutirá y examinará a profundidad a lo largo del capítulo.

Por último, el concepto de racionalidad limitada es útil para entender los procesos migratorios¹⁵⁶. Las decisiones y los comportamientos humanos están limitados por situaciones pasadas, experiencias previas, patrones emocionales y una habilidad limitada para calcular los costos y beneficios de una decisión¹⁵⁷. El impacto de la racionalidad limitada se asemeja a los obstáculos que surgen cuando hay información incompleta en el momento de tomar una decisión. La racionalidad limitada implica, además, que los individuos enfrentan dificultades para procesar la información disponible cuando la información relevante para una decisión particular diverge de su información habitual. Es evidente entonces que el concepto

155 El costo de oportunidad para los hogares proveniente del desplazamiento forzoso es igual al valor de los activos en el sitio de origen si el hogar decide permanecer en su lugar de origen menos el valor de esos activos si el hogar decide desplazarse.

156 Fischer *et al.*, 1997.

157 Simon, 1957, 1983.

de racionalidad limitada es particularmente relevante para el caso del desplazamiento forzado. La población residente en regiones de conflicto convive con altos niveles de estrés y angustia, debido a la violencia y a la posibilidad de ser víctimas de ésta. Por ende, la toma de decisiones bajo una total racionalidad económica es imposible y la racionalidad limitada prevalece en el proceso de decisión: evaluar los beneficios y costos del desplazamiento es casi imposible, máxime si se puede ser víctima de amenazas de muerte o de asesinatos por parte de los grupos armados.

2. Un modelo teórico para analizar el proceso del desplazamiento forzado

El modelo de la decisión de desplazamiento que desarrollamos en esta sección se basa en la literatura de migración discutida e incorpora las particularidades del proceso del desplazamiento forzado. La discusión de la sección anterior revela que, si bien la teoría de la migración constituye un punto de partida para analizar el desplazamiento forzado, hay diferencias importantes entre la migración económica y el desplazamiento causado por acciones violentas. Primero, la violencia introduce elementos adicionales de riesgo, entre los cuales se encuentra el riesgo de perder la vida, la muerte de otro miembro del hogar, la posibilidad de ser víctima de una agresión y el riesgo de perder propiedades. Aunque las razones económicas cumplen un papel menor en el proceso de desplazamiento, dichos riesgos representan la principal motivación para desplazarse. Segundo, residir en áreas con violencia y criminalidad extrema produce altos niveles de estrés; por ende, las decisiones son impulsivas y tomadas sin la información adecuada. Tal como se planteó en la sección anterior, dichas diferencias introducen factores adicionales para considerar en el análisis empírico, y se requiere entonces modificar algunas hipótesis acerca de la dirección del impacto de los factores considerados en los análisis de migración. Ignorar estas diferencias entre la decisión de desplazamiento y la decisión de migrar sesga el análisis de las decisiones de migración bajo un contexto de violencia.

Con el fin de abordar dichas diferencias, proponemos un modelo donde la decisión de migrar depende, además de las variables tradicionales de migración, de las percepciones de seguridad de los individuos. El modelo incorpora los determinantes de la migración y los adapta al contexto específico del desplazamiento forzado. Asimismo, el modelo permite que el impacto de los factores económicos sobre la decisión de migrar varíe de acuerdo a la violencia que sufre cada hogar. Por último, las percepciones de seguridad incorporadas en el modelo dependen directa e indirectamente de la probabilidad de ser víctimas de la violencia; probabilidad que depende a su vez de las características socioeconómicas de los hogares.

a. La decisión de desplazarse

Un modelo simple para representar la decisión de desplazarse se presenta a continuación. El hogar i decide desplazarse si la utilidad esperada del desplazamiento es mayor que la utilidad esperada de permanecer en el sitio de origen:

$$E(U_{id}) > E(U_{in}) \quad (1)$$

donde U_{ij} es la utilidad indirecta del hogar i en el lugar j , con $j = d$ para el lugar de destino y $j = n$ para el lugar de origen; y E representa el operador del valor esperado. La utilidad esperada se puede reescribir como

$$E(U_{ij}) = v_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

donde v_{ij} es la utilidad observada y ε_{ij} es el término aleatorio con una media igual a cero. El término aleatorio recoge todas las variables no observables del modelo.

La utilidad observada de permanecer en el lugar de origen o desplazarse al lugar de destino depende de un conjunto de factores. En primer lugar, la percepción de seguridad en los lugares de origen y destino es un determinante fundamental de la función de utilidad. En segundo lugar, el ingreso y la calidad de vida en los dos lugares afectan la función de utilidad. En tercer lugar, la migración y los costos de información, tales como la pérdida de activos en origen o los lazos familiares en el destino, son determinantes importantes para estimar los costos y beneficios del desplazamiento forzoso. Por último, la propensión a migrar puede estar determinada por características sociodemográficas del hogar que influyen su estructura de preferencias. Ello, a su vez, determina cómo el hogar evalúa los beneficios que surgen por una mayor seguridad en el municipio de destino frente a las reducciones en la calidad de vida tras el desplazamiento. La utilidad observada se define entonces como

$$v_{ij} = f(S_{ij}, Y_{ij}, C_i, Z_i), \quad (3)$$

donde S_{ij} es la percepción de seguridad para el hogar i en el municipio j , Y_{ij} es el estatus económico del hogar i en el municipio j , C_i representa los costos de migración y de información y Z_i representa las características del hogar que influyen las preferencias.

Con base en las ecuaciones (1), (2) y (3), la probabilidad de desplazarse se define como

$$\Pr ob_i(D_i = 1) = g(S_{id}, S_{in}, Y_{id}, Y_{in}, C_i, Z_i) \quad (4)$$

donde $D_i=1$ denota que el hogar i decidió migrar y $D_i=0$ denota que el hogar permaneció en el lugar de origen.

Las percepciones de seguridad dependen de la violencia en el municipio de origen, denominada como las amenazas indirectas (T_i^I), así como de las percepciones del hogar acerca de la posibilidad de ser amenazado directamente por los grupos armados (T_i^D):

$$S_{in} = h(T_i^I, T_i^D). \quad (5)$$

La ecuación anterior indica por qué, tal como se planteó en párrafos anteriores, algunos hogares permanecen en municipios con altos índices de violencia: su percepción de seguridad personal es mejor al sentirse como blancos menos atractivos para los grupos armados, en contraste con aquellos que deciden migrar. Un indicador importante de T_i^D es si el hogar recibió amenazas directas de muerte o de otro tipo. Es probable, empero, que la incidencia de amenazas directas a los hogares sea endógena y dependa de las características sociales y económicas del hogar. Por ejemplo, los grupos armados pueden dirigir sus ataques con más frecuencia a hogares con mejor posición económica o que desempeñan un papel importante en la comunidad, pues pueden ser más atractivos para alcanzar los objetivos de guerra. Los beneficios económicos para los actores violentos de desplazar hogares con mejor posición económica y expropiar sus tierras y otros activos aumentan con la riqueza del hogar. Por otro lado, al amenazar a los hogares con posiciones de liderazgo en su comunidad, los grupos armados establecen un precedente ante la población, reduciendo así la necesidad de intimidar a toda la población civil. Por último, la probabilidad de recibir amenazas depende de la presencia de grupos armados en la región, tanto de grupos al margen de la ley como de la fuerza pública. Si bien la fuerza pública puede fortalecer la seguridad de la zona, su presencia puede también contribuir a la intensificación del conflicto. Esto se discute a profundidad en párrafos posteriores.

La probabilidad de recibir una amenaza directa se define como

$$T_i^D = I(E_i, V_i, A_i) + e_i \quad (6)$$

donde E_i representa el estatus económico del hogar i ; V_i denota las redes sociales del hogar i en el municipio de origen; A_i representa la presencia de grupos armados en la región de origen; y e_i es un término aleatorio.

Cabe anotar, tal como se explica en la discusión siguiente, que los determinantes de la ecuación (6) presumiblemente afectan asimismo la decisión de desplazamiento definida en la ecuación (4). Si bien conceptualmente la probabilidad predicha de recibir amenazas debe ser incorporada en

la regresión de desplazamiento, carecemos de restricciones de exclusión para estimar el modelo estructural aquí definido. Por ende, estimamos la forma reducida de la probabilidad de desplazamiento

$$\text{Prob}_i(D_i = 1) = \tilde{g}(T_i^D, S_{id}, Y_{id}, Y_{in}, C_i, Z_i). \quad (7)$$

Con el fin de examinar de alguna manera las relaciones estructurales, analizamos además los determinantes de la probabilidad de ser amenazados de manera directa. Comparar la estimación de los determinantes del desplazamiento con aquella de la probabilidad de ser amenazados permite inferir parcialmente los efectos directos de algunas variables en la decisión de desplazamiento. Por ejemplo, el efecto directo del estatus económico mediado por la calidad de vida y el efecto indirecto del estatus económico mediado por las percepciones de seguridad.

Es posible, además, que las percepciones de seguridad influyeran no sólo la utilidad esperada por canales directos; también pueden afectar otras variables, en particular los incentivos económicos considerados en la decisión de migrar. En efecto, hay dos tipos de desplazamiento: preventivo y reactivo. El desplazamiento reactivo ocurre cuando las personas, residentes en contextos de alta violencia, abandonan su región intempestivamente al ser víctimas de la violencia y no perciben más opciones para proteger sus vidas. El desplazamiento preventivo ocurre cuando algunos hogares, residentes en zonas no necesariamente con altas intensidades de violencia, sopesan los riesgos de permanecer y abandonar su pueblo y prefieren migrar para evitar ser posibles víctimas de la violencia en un futuro.

Como es de esperarse, otros factores, diferentes de la violencia, pueden ejercer una mayor influencia para el desplazamiento preventivo frente al desplazamiento reactivo¹⁵⁸. Una opción para comprobar dicha hipótesis es incluir interacciones entre las variables que caracterizan la violencia y algunas de las variables económicas. Si nuestra hipótesis es en efecto correcta, los estimadores de las interacciones deben ser significativos y deben reducir el efecto de las variables económicas en la decisión de desplazarse.

158 Existen dos razones que pueden causar esto. Primero, las personas residentes en áreas de una alta intensidad de la violencia deciden bajo una racionalidad limitada, debido a los altos niveles de estrés impuestos por la violencia. Segundo, la violencia puede modificar los retornos de ciertos activos.

B. Análisis empírico

1. Los datos

Con el fin de analizar los determinantes del desplazamiento, aplicamos una encuesta durante el año 2000 a una muestra de hogares que decidieron abandonar su lugar de origen debido a la violencia (desplazados) y de hogares que decidieron permanecer en áreas de violencia (no desplazados). Se aplicaron 376 encuestas de hogares. Un total de 200 encuestas se aplicaron en las tres principales ciudades receptoras en ese año: Bogotá, Medellín y Cartagena¹⁵⁹. La muestra se concentró en hogares desplazados de los departamentos de Antioquia y Córdoba, por ser éstas las principales zonas de expulsión en ese momento¹⁶⁰. Se seleccionaron tres municipios de estos dos departamentos para aplicar la encuesta de no desplazados: Apartadó y Mutatá, en el departamento de Antioquia, y Tierralta, en Córdoba. Se aplicaron 176 encuestas en los municipios de la muestra de no desplazados¹⁶¹. Los tres municipios seleccionados para aplicar la encuesta de no desplazados aparecen como el municipio de expulsión para el 22,3% de los hogares de la muestra de población desplazada. Para evaluar si la muestra de desplazados y no desplazados son comparables o si, por el contrario, exhiben diferencias sistemáticas, comparamos el promedio ponderado de indicadores económicos y de violencia para los municipios de expulsión de la muestra de población desplazada con los mismos indicadores para los municipios de la muestra de no desplazados¹⁶². Los resultados indican que los municipios de origen para la muestra de desplazados y no desplazados son comparables; en particular, los t-estadísticos revelan que las diferencias en las características no son estadísticamente significativas (ver el cuadro 1).

La encuesta recoge información sobre características sociodemográficas, condiciones de vida, acceso a programas asistenciales y necesidades actuales, entre otros. Las definiciones de las variables usadas en el análisis

159 El número de encuestas se distribuyó de la siguiente manera: 100 en Bogotá, 50 en Cartagena y 50 en Medellín.

160 Durante 1998, el departamento de Antioquia expulsó un 20,65% de los desplazados totales y el departamento de Córdoba expulsó el 8,37%. Erazo *et al.*, 2000, presentan una descripción detallada de la encuesta. Cerca del 90% de los hogares de la submuestra de desplazados migró de municipios localizados en los departamentos de las comunidades de no desplazadas.

161 El número de hogares encuestados en estos tres municipios se distribuyó de la siguiente manera: 30 en Mutatá, 100 en Apartadó y 46 en Tierralta. Los detalles de la selección de la muestra se encuentran en Erazo *et al.*, 2000.

162 Las ponderaciones se calcularon de acuerdo al porcentaje de hogares en la muestra de cada municipio.

econométrico y las estadísticas descriptivas se presentan en la siguiente sección. Las encuestas se aplicaron al jefe del hogar. Cabe anotar que la muestra no es representativa de la población desplazada en Colombia y, por tanto, los resultados no se pueden generalizar. Con el fin de corregir el posible sesgo inducido por una muestra construida con base en decisiones (por ejemplo, desplazarse y no desplazarse), calculamos las estadísticas y las regresiones con las ponderaciones sugeridas por Manski y Lerman (1977). Los detalles de la metodología utilizada se describen en el apéndice al final de este capítulo.

Cuadro 1. Promedios ponderados de indicadores económicos y de violencia de los municipios de origen para la muestra de desplazados y no desplazados

	Municipio de expulsión: muestra desplazados	Municipios de residencia: muestra no desplazados	t-estadístico
Porcentaje de hogares en el municipio con necesidades básicas insatisfechas 2000	61,14	65,32	-1,6049
Índice de ruralidad (1993)	58,71	59,12	-0,3655
Tasa de homicidios en 2000 (Número de muertes por 100.000 habitantes)	64,72	80,00	-1,2642
Número de secuestros per cápita entre 1993-1999	6,08	18,63	0,7126

Fuente: cálculos de las autoras con base en datos municipales recolectados por el CEDE (2005).

2. Variables e hipótesis

Los datos de la encuesta descrita en la sección anterior se usan para estimar la probabilidad de desplazamiento (ecuación [7]) y la probabilidad de ser víctimas de las amenazas directas (ecuación [5]). Los párrafos siguientes describen las proxies usadas para los determinantes del modelo conceptual y las hipótesis correspondientes. Es importante enfatizar que algunas variables (por ejemplo, la edad y la educación) son proxies de diversos determinantes. Cuando la dirección del impacto de estas variables difiere, el impacto agregado puede ser ambiguo y las hipótesis correspondientes no se pueden probar en detalle.

a. Determinantes del desplazamiento

Las percepciones de seguridad en el municipio de origen (S_{in}), determinantes presumiblemente fundamentales del proceso de desplazamiento, se discuten a continuación. Es de esperar que los hogares que perciben una mayor inseguridad estén más inclinados a desplazarse. Las percepciones de seguridad, si bien no son observables, se pueden aproximar con las proxies siguientes.

- *Eventos violentos sufridos por miembros de la familia, amigos, vecinos y personas de otras veredas.* La incidencia de eventos violentos profundiza la percepción de inseguridad, incrementando así la probabilidad de desplazamiento. Tal como se discutió en párrafos anteriores, la variable que denota ser víctimas de amenazas directas no se puede incluir en el análisis, debido a su endogeneidad. Incluimos, por tanto, medidas de violencia indirecta que se define como una variable dicótoma igual a uno si el encuestado conoce de la incidencia de eventos violentos en municipios o pueblos cercanos.
- *Presencia de grupos subversivos.* La percepción de inseguridad y, por ende, la propensión a optar por el desplazamiento puede aumentar con la presencia en la región de grupos guerrilleros y/o paramilitares.
- *Presencia gubernamental en la región (militar o de otra fuerza pública).* No es claro *a priori* si la presencia gubernamental mejora o deteriora las percepciones de seguridad en las regiones violentas. Por un lado, la presencia de la fuerza pública puede proteger a la población civil de los grupos armados. Por otro lado, su presencia puede colocar a la población civil en medio de dos fuegos: la fuerza pública y los grupos subversivos. Peor aun, se han reportado en ocasiones incidentes en los que la fuerza pública comete violaciones de derechos humanos.

El estatus económico, ya sea en el municipio de origen (Y_{in}) o de recepción (Y_{id}), también determina la probabilidad de desplazamiento, aunque presumiblemente su influencia es menor que los factores ligados a la violencia. El estatus económico en recepción influye positivamente en la decisión de migrar y se puede aproximar con las siguientes variables¹⁶³.

163 Los datos recolectados no permitieron medir los ingresos de los hogares. Las dificultades tradicionales al recolectar datos sobre ingresos se agravan en el caso del desplazamiento forzoso, debido a la alta inserción en los mercados informales laborales urbanos, el alto porcentaje de hogares con ingreso proveniente de actividades agrícolas y el tiempo que transcurre entre el momento del desplazamiento y la aplicación de la encuesta. Es probable que los hogares, por razones estratégicas, decidan sobrestimar (subestimar) los ingresos antes (después) del desplazamiento si esperan que los resultados de la encuesta afecten futuras compensaciones o el apoyo potencial de programas estatales.

- *Características del jefe del hogar (edad, educación):* de acuerdo con la literatura de migración, los jefes de hogar jóvenes pueden presentar una mayor inclinación a desplazarse, dado que su horizonte de planeación es más largo, incrementando así el flujo de ingresos en recepción. Asimismo, una mejor educación aumenta la probabilidad de desplazamiento al incrementar el ingreso esperado en las áreas urbanas de recepción. Sin embargo, tal como se explica en párrafos posteriores, la educación amplía las fuentes de información y modifica las preferencias, lo cual puede causar un efecto opuesto sobre la probabilidad de desplazamiento.
- *Contactos personales en el lugar de recepción:* establecer el efecto *a priori* de los contactos personales en el lugar de recepción no es fácil. Por un lado, la literatura de migración argumenta que los contactos personales contribuyen a mejorar las condiciones de vida en el municipio receptor, pues proporciona apoyo en el proceso de búsqueda de empleo y de vivienda. Por otro lado, los contactos personales, al proveer información, pueden volver más realistas las expectativas excesivamente optimistas acerca de las oportunidades de empleo, las condiciones de vida y el acceso a la asistencia estatal en los municipios de recepción.

Las variables proxies para el estatus económico en origen Y_{in} son:

- *Tierra bajo posesión del hogar en el lugar de origen:* la propiedad de la tierra puede de alguna manera prevenir el desplazamiento. Al migrar de manera forzada, los hogares con tierras deben abandonar la producción agrícola y su ingreso puede declinar sustancialmente. Los costos de oportunidad de no explotar la tierra son, además, mayores para predios más extensos; por lo tanto, se espera que la probabilidad de desplazamiento decrezca con el tamaño del predio.
- *Acceso a servicios de salud y de educación en el lugar de origen:* un acceso más amplio a dichos servicios está asociado con mejores condiciones de vida, lo cual puede disminuir un poco la probabilidad de desplazarse.
- *Conexión a servicios públicos:* los hogares conectados a servicios públicos poseen un estándar de vida más elevado en el lugar de origen y, como es de esperar, ello reduce la probabilidad de desplazamiento.
- *Posesión de ganado:* el ganado es una fuente directa de ingresos y un mecanismo de ahorro. Ello implica que hatos de ganado más grandes están asociados con un estatus económico superior en el lugar de origen y, por lo tanto, su posesión puede reducir la probabilidad

de desplazamiento. De otro lado, al constituir el ganado un activo de fácil venta, un hato más grande representa un acervo de ahorro mayor para emplear durante el desplazamiento, lo cual aumenta entonces la probabilidad de desplazamiento.

- *Características del jefe de hogar (edad, educación)*: las consideraciones para estas características son las opuestas a las discutidas para el ingreso en el lugar de recepción.

Costos de migración e información (C_i) se representan con las variables siguientes:

- *Tierra bajo posesión del hogar en el lugar de origen*: la propiedad de activos específicos al lugar de origen, es decir, activos que no se pueden trasladar en la migración, significa un costo potencialmente alto al desplazarse. Se espera que los costos de migración reduzcan la propensión a migrar.
- *Arraigo por la región de origen (años vividos en la región)*: un vínculo fuerte con el lugar de origen conlleva unos costos emocionales y psicológicos elevados de migrar y abandonar un modo de vida, lo cual puede reducir la probabilidad de desplazamiento.
- *Educación del jefe del hogar*: una educación alta puede disminuir los costos de migración, pero el impacto es ambiguo y depende del tipo de información que recibe y procesa el hogar acerca del lugar de recepción.
- *Contactos en el lugar de recepción*: de igual manera, los contactos en el lugar de recepción pueden mejorar la información acerca de las verdaderas condiciones de vida y pueden contribuir a reducir el desplazamiento. El efecto contrario de los contactos en recepción se discutió en párrafos anteriores.
- *Acceso a los medios de comunicación*: tal como en el caso anterior, el efecto depende del tipo de información que transmitan los medios, y no es claro *a priori*.

Las características del hogar (Z_i) se incluyen para además reflejar la estructura de preferencias del hogar (por ejemplo, función de utilidad, tasa de descuento y aversión al riesgo). La edad y el género del jefe del hogar son las características del hogar que se incluyen en el modelo. Jefes del hogar más jóvenes pueden ser menos aversos al riesgo que los jefes mayores y las mujeres suelen ser más aversas al riesgo que los hombres. Sin embargo, a diferencia de la literatura de migración, la aversión al riesgo contribuye a acelerar el desplazamiento, debido a los altos riesgos que

enfrenta el hogar si permanece en el lugar de origen. El impacto de la educación sobre la estructura de preferencias no es claro *a priori*.

Por último, incluimos interacciones entre las variables que representan la violencia y los indicadores económicos. Ello permite examinar si, en efecto, la violencia reduce la influencia de los incentivos económicos sobre la decisión de migración. Para alcanzar tal objetivo, se incluyen interacciones entre la variable “violencia indirecta” e importantes indicadores económicos, como la propiedad de la tierra, el tamaño de los predios, el acceso a servicios sociales y la educación.

b. Determinantes de la probabilidad de recibir una amenaza directa

Es importante, tal como se explicó en la sección anterior, analizar los determinantes de recibir amenazas directas pues esto provee evidencias acerca de la relación estructural especificada en la sección A.2. En los determinantes de la probabilidad de recibir amenazas, cuya variable dependiente es igual a uno si algún miembro del hogar recibió amenazas de muerte, se incluyen las mismas variables que en la estimación de la probabilidad de desplazamiento. Dada la discusión de la sección A.2, las siguientes variables pueden influenciar la probabilidad de recibir amenazas.

Un estatus económico más alto (E_i) puede incrementar el riesgo de recibir amenazas por parte de los grupos armados. Desde esta perspectiva, los hogares más ricos pueden optar con una mayor probabilidad por el desplazamiento. Cabe anotar que dicho impacto se opone al efecto directo de la riqueza de los hogares explicado en párrafos anteriores: los hogares con más riqueza enfrentan costos de oportunidad más altos por el desplazamiento y están, por lo tanto, menos dispuestos a abandonar su lugar de origen.

Hogares con densas redes sociales en su lugar de origen (V_i) pueden desempeñar un papel activo en la comunidad y ser blanco de los grupos armados, pues, al atacarlos, se produce un efecto intimidatorio sobre toda la comunidad, a un bajo costo. Más aún, al atacar a líderes de la comunidad, los grupos armados dificultan la organización de actividades de resistencia civil. Para capturar la inserción de los hogares en la comunidad, se incluyen las siguientes variables:

- *Años vividos en la región*: un largo período de residencia en la región puede incrementar el riesgo de recibir amenazas por parte de los grupos armados.
- *Edad del jefe del hogar*: el impacto de la edad es menos claro. Por un lado, es presumible que los jefes de hogar mayores cumplan un papel

importante en la comunidad y sean blancos, con más frecuencia, de los grupos armados. Por otro lado, los jóvenes adultos pueden ser buenos combatientes y ser, entonces, o una potencial amenaza para los actores armados o posibles candidatos para reclutar en sus filas.

- *Participación en las organizaciones locales*: los hogares con una alta participación en organizaciones formales pueden enfrentar un mayor riesgo de recibir amenazas.

Los actores armados (A_i) que se incluyen son:

- *Guerrilla, paramilitares*: la probabilidad de recibir amenazas se incrementa con la presencia en la región de estos grupos.
- *Fuerza pública*: la presencia militar y de otros miembros de la fuerza pública protege a la población civil contra amenazas de los grupos armados al margen de la ley. Pero la presencia militar puede también significar amenazas contra la población civil al incrementar la presión sobre los grupos subversivos.

3. Estadísticas descriptivas

El cuadro 2 presenta las estadísticas descriptivas para las variables exógenas y la incidencia de las amenazas directas para los dos grupos, a saber, la población desplazada y no desplazada. Las estadísticas están ponderadas por los pesos de Manski, para corregir el sesgo de muestreo (ver el apéndice al final de este capítulo). La percepción de la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros se reporta con mayor frecuencia para los hogares desplazados en contraste con los hogares no desplazados. De otro lado, la protección de la fuerza pública, tal como las Fuerzas Militares, la Policía y otras instituciones, parece efectiva para evitar el desplazamiento forzado.

El cuadro 2 muestra, asimismo, la incidencia de eventos violentos sufridos por los hogares entrevistados, sus amigos y su familia, así como su percepción de sucesos similares en su comunidad o en comunidades vecinas. Los resultados indican la alta exposición a la violencia de la población residente en zonas de conflicto. Al indagar acerca de los actos de violencia dirigidos directa y deliberadamente a miembros del hogar, un 78% de los hogares desplazados revela que ellos u otros miembros del hogar recibieron amenazas de muerte. Tal como se esperaba, dicho porcentaje es significativamente inferior (9%) para la muestra de no desplazados. Ello corrobora los resultados de nuestra hipótesis inicial: la violencia es el principal expulsor en el proceso de migración forzada. Pero

es sorprendente que algunos hogares prefieran permanecer en los lugares de origen, pese a estar expuestos a altos niveles de violencia.

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas para hogares desplazados y no desplazados

Variable	Desplazados	No desplazados
	Media (Desviación estándar)	Media (Desviación estándar)
Víctimas de amenazas directas (=1 si cualquier miembro del hogar fue víctima de una amenaza de muerte)	78%	9%
Violencia indirecta (=1 si el entrevistado conoce de otros incidentes violentos ocurridos en su pueblo o en pueblos cercanos)	98%	75%
Percepción de presencia militar en origen	91%	90%
Percepción de presencia policial en origen	58%	90%
Percepción de presencia paramilitar en origen	97%	66%
Percepción de presencia guerrillera en origen	96%	50%
Acceso a tierras en origen	80%	6%
Tamaño estandarizado del predio en origen	-0,22 (0,12)	0,01 (0,02)
Acceso a servicios sociales en origen	34%	91%
Años de educación más altos en el hogar	7,37 (0,49)	9,01 (0,30)
Número de cabezas de ganado en origen	0,66 (0,36)	0,01 (0,01)
Acceso a servicios públicos	0,36	0,99
Acceso a medios de comunicación (radio, periódicos, televisión, revistas, teléfono, otros) en el lugar de origen	2,79 (0,42)	3,35 (0,11)
Edad del jefe del hogar	33,71 (1,99)	43,93 (1,11)
Jefe del hogar masculino	90%	59%
Participación en organizaciones en origen: número de organizaciones	0,26 (0,13)	0,27 (0,04)
Contactos personales en el lugar de recepción	87%	74%
Años de residencia en el lugar de origen	15,53 (4,10)	21,01 (1,05)

Fuente: cálculos de las autoras con base en la encuesta.

La violencia puede ser además indirecta. Los eventos violentos que suceden en la misma comunidad o en comunidades vecinas afectan también las percepciones de seguridad y riesgo de los hogares. Los resultados revelan que la exposición indirecta a la violencia es menor para los no desplazados que para los desplazados. La incidencia de violencia indirecta es, empero, bastante alta para la población no desplazada: más de una tercera parte tiene amigos y más de una quinta parte tiene parientes que han sido asesinados; y casi 6% tiene amigos que han sido víctimas de amenazas directas.

La pérdida de propiedad, en particular de la tierra, produce un fuerte impacto sobre la población desplazada. Los resultados revelan que un 80% de los desplazados poseían tierras, las cuales destinaban a actividades productivas en el lugar de origen, y el 97% de éstos dependían de la tierra como única fuente de ingresos. Más aún, el 58% de aquellos desplazados con acceso a la tierra poseían un título legal de propiedad y el 2% se consideraba propietario pero no tenían el título de propiedad. Cerca del 2% de los hogares encuestados vendió o arrendó sus tierras, mientras que más de un 94% reportó haber abandonado la tierra o ser víctima del despojo por parte de los grupos armados. Por último, los resultados muestran que un 66% de los hogares con acceso a tierra en el lugar de origen fue víctima de amenazas de muerte, mientras que sólo el 12% de aquellos sin acceso a la tierra fue víctima de estas amenazas¹⁶⁴.

La migración forzada ocasiona la pérdida de un modo de vida y el rompimiento con las redes sociales en el lugar de origen. Dicho impacto es más profundo para las personas con mayor arraigo. Los resultados que se presentan en el cuadro 2 revelan que, antes del desplazamiento forzado, los hogares desplazados residieron 15 años en el lugar de origen. El desplazamiento significa, por consiguiente, perder el vínculo con el lugar que consideraron su hogar durante un largo tiempo y la relación con sus redes sociales. La participación en organizaciones locales es otro indicador de la densidad de las redes sociales del hogar. Dicha participación para los hogares desplazados asciende al 15%, y las cifras del cuadro 2 revelan, asimismo, que los hogares desplazados están más inclinados a participar en organizaciones que los hogares no desplazados, lo cual puede denotar que los grupos rebeldes atacan a miembros activos de la comunidad, con el objeto de destruir o debilitar las redes sociales.

El desplazamiento produce un descenso en el estatus económico. Primero, los activos específicos al lugar de origen son, por lo general, abandonados. Segundo, el desplazamiento implica renunciar al acceso a servicios

164 Estos resultados se calculan con la muestra conjunta de desplazados y no desplazados.

sociales tales como educación y salud. Por último, algunas inversiones físicas y sociales no se pueden trasladar durante la migración. El cuadro 2 revela que los hogares con mejor estatus económico están menos inclinados a desplazarse. Cuando se comparan con los hogares desplazados, los hogares no desplazados reportan con más frecuencia el acceso a servicios sociales, una mejor educación y un estatus económico superior.

C. Resultados econométricos

Los datos de la encuesta aplicada a población desplazada y no desplazada son la base para estimar los determinantes de la decisión de migrar y de la probabilidad de ser víctimas de amenazas directas. Para estimar las regresiones, se asume una especificación lineal y una distribución logística de los errores. Con el fin de corregir el sesgo de muestreo, las observaciones se ponderan con los pesos de Manski descritos en el apéndice al final de este capítulo. Los resultados son robustos frente a cambios en el grupo de variables independientes incluidas. En los párrafos siguientes presentamos los resultados de los determinantes de ser víctimas de amenazas directas. Ello es necesario para interpretar los resultados de la regresión principal: los determinantes del desplazamiento.

1. Determinantes de la probabilidad de ser víctima de amenazas directas

Los resultados de la estimación econométrica de la probabilidad de ser víctima de las amenazas directas se presentan en el cuadro 3. Tal como se planteó en secciones anteriores, la percepción de presencia de grupos guerrilleros y paramilitares incrementa la probabilidad de ser víctimas de amenazas directas, pero el efecto es estadísticamente significativo sólo para los grupos paramilitares. Dos aclaraciones sobre este resultado son importantes. Primero, después de aplicar la encuesta, la dinámica del conflicto en Colombia cambió sustancialmente. En 2007, los grupos guerrilleros desplazaron población en proporciones superiores a los grupos paramilitares, mientras que en 2000 los grupos paramilitares eran los principales actores responsables del desplazamiento. Segundo, mientras que los grupos guerrilleros desplazaban población durante las confrontaciones armadas, los grupos paramilitares usaban amenazas directas. Por lo tanto, la mayor significancia estadística de ese coeficiente no es sorprendente. La presencia de Fuerzas Militares también ejerce un efecto significativo y positivo sobre la probabilidad de recibir amenazas. Por el contrario, la presencia de la Policía en la región reduce significativamente la probabilidad de recibir amenazas. Ello parece indicar que la presencia de la Policía evita el ataque de los grupos al margen de la ley a ciertos

hogares de la comunidad. La Policía ejerce una presencia permanente en la comunidad, lo cual implica una relación de cercanía y confianza con la población, facilitando así sus labores de protección.

Cuadro 3. Estimación logit de la probabilidad de ser víctima de amenazas

Variable	Coefficiente (t-estadístico)
Violencia indirecta	0,2434 (0,25)
Percepción presencia Fuerzas Militares	1,8613*** (3,13)
Percepción presencia Policía	-1,0732** (-2,02)
Percepción presencia grupos paramilitares	0,1749 (0,23)
Percepción presencia grupos guerrilleros	1,1995* (1,74)
Acceso a tierras	-0,0684 (-0,12)
Tamaño del predio: estandarizado	0,8465** (2,41)
Acceso a servicios sociales	-0,6969 (-1,34)
Años de educación más altos en el hogar	0,0888 (1,13)
Número de cabezas de ganado en origen	0,5707 (0,76)
Acceso a servicios públicos	-1,2921** (-2,45)
Acceso a medios de comunicación	0,6213*** (3,05)
Edad jefe del hogar	0,0080 (0,43)
Jefatura del hogar masculino	-1,1262** (-2,34)
Número de organizaciones	-0,3269 (-1,61)
Contactos personales en recepción	-0,4250 (-0,89)
Años de residencia	0,0052 (0,32)
Constante	4,6865 (1,22)
Número de observaciones	346
Pseudo R cuadrado	0,5705

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de las autoras.

Los resultados de la estimación corroboran la hipótesis del ataque deliberado de los actores armados a hogares con más activos. En particular, el tamaño del predio tiene un impacto positivo y significativo sobre la probabilidad de ser amenazado. Para otras dimensiones del estatus económico, el efecto es menos claro. El acceso a salud, educación y servicios públicos exhibe un efecto negativo, y el efecto es sólo significativo para el caso de los servicios públicos.

Los hogares encabezados por mujeres enfrentan probabilidades más elevadas de recibir una amenaza directa frente a los hogares encabezados por hombres. Ello parece confirmar una hipótesis común de la literatura: las mujeres son las principales víctimas de la violencia durante los conflictos. Es importante, empero, ser cautelosos con dicha interpretación, pues otros estudios sugieren que los hogares desplazados presentan una alta jefatura femenina, precisamente, debido al asesinato del jefe del hogar hombre antes del desplazamiento¹⁶⁵. Los resultados acerca del papel del capital social como actor expulsor son contradictorios. Los años de residencia en la región de origen exhiben un efecto positivo sobre la probabilidad de recibir amenazas, pero el efecto no es significativo. Contrario a lo esperado, el número de organizaciones tiene un efecto negativo significativo al 10%. Dicho resultado es sorprendente, ya que otros estudios sugieren que los líderes locales son un blanco frecuente de los grupos al margen de la ley¹⁶⁶. Es probable que el número de organizaciones no sea una proxy adecuada de la posición de liderazgo de un hogar en la comunidad. Por otro lado, es posible que las organizaciones actúen como mecanismo protector de sus miembros, reduciendo así la probabilidad de recibir amenazas. El coeficiente recogería entonces ambos efectos y, en este caso, pareciera dominar el papel protector de las organizaciones sociales.

2. Determinantes del desplazamiento

Los resultados del análisis econométrico de la decisión de desplazamiento se presentan en los cuadros 4 y 5. El cuadro 4 presenta los resultados de la regresión con las variables discutidas en las secciones anteriores y el cuadro 5 incluye interacciones entre algunas variables económicas y la violencia indirecta, con el fin de identificar si la violencia modifica los incentivos de migración tradicionales. La violencia, tal como se planteó, es el principal determinante de la decisión de desplazamiento: los hogares deciden desplazarse con una probabilidad más alta cuando conocen la incidencia de la violencia en áreas cercanas. La probabilidad de despla-

165 Ibáñez y Querubín, 2004; Ibáñez y Velásquez, 2006.

166 Henao, 1998; Lozano y Osorio, 1999.

zamiento también aumenta de manera significativa con la percepción de presencia de grupos al margen de la ley, tanto grupos paramilitares como guerrilleros. Todas estas variables son significativas en un 1% para ambas regresiones.

Cuadro 4. Estimación logit de la probabilidad de desplazamiento sin interacciones

Variable	Coefficiente (t-estadístico)
Violencia indirecta	3,7933*** (8,88)
Percepción de presencia de Fuerzas Militares	-2,1257*** (-4,83)
Percepción de presencia de Policía	-1,1706*** (-3,11)
Presencia de grupos paramilitares	3,5822*** (7,46)
Presencia de grupos guerrilleros	1,4165*** (4,43)
Tenencia de tierra	0,4648 (1,57)
Tamaño estandarizado del predio	-0,6311* (-1,75)
Acceso a servicios sociales	-1,0943*** (-2,56)
Años de educación más altos en el hogar	-0,2230*** (-5,41)
Número de cabezas de ganado en origen	2,4913*** (3,14)
Acceso a servicios públicos	-1,8817** (-2,17)
Acceso a medios de comunicación	-0,2859*** (-2,52)
Edad jefe del hogar	-0,0730*** (-6,24)
Jefe del hogar masculino	-0,1784 (-0,71)
Número de organizaciones	1,2674*** (4,87)
Contactos personales en recepción	0,2914 (1,04)
Años de residencia	0,0302*** (2,99)
Constante	4,6856*** (3,80)
Número de observaciones	346
Pseudo R cuadrado	0,6411

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de las autoras.

Cuadro 5. Estimación logit de la probabilidad de desplazamiento con interacciones

Variable	Coefficiente (t-estadístico)
Violencia indirecta	4,3801*** (4,67)
Percepción de presencia de Fuerzas Militares	-2,3218*** (-5,40)
Percepción de presencia de Policía	-1,1122*** (-3,24)
Presencia de grupos paramilitares	3,4898*** (8,17)
Presencia de grupos guerrilleros	1,5030*** (4,63)
Tenencia de tierra por Violencia indirecta	0,5661** (2,01)
Tenencia de tierra por No violencia indirecta	-3,2247 (-1,55)
Tamaño estandarizado de predio por Violencia indirecta	-0,3475 (-1,45)
Tamaño estandarizado de predio por Violencia indirecta	-9,0542 (-1,45)
Acceso servicios sociales por Violencia indirecta	-1,0400*** (-2,59)
Acceso servicios sociales por No violencia indirecta	-3,4227*** (-6,39)
Años de educación más altos en el hogar por Violencia indirecta	-0,2350*** (-5,72)
Años de educación más altos en el hogar por No violencia indirecta	0,0628 (1,13)
Número de cabezas de ganado en origen	1,5999*** (3,68)
Acceso a servicios públicos	-1,4643* (-1,75)
Acceso a medios de comunicación	-0,2662** (-2,34)
Edad jefe del hogar	-0,0745*** (-6,80)
Jefe del hogar masculino	-0,2413 (-0,91)
Número de organizaciones	1,3175*** (4,89)
Contactos personales en recepción	0,2443 (0,85)
Años de residencia	0,0319*** (3,18)
Constante	3,8987*** (3,48)
Número de observaciones	346
Pseudo R cuadrado	0.6472

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de las autoras.

Los resultados para la presencia de la fuerza pública son interesantes. La presencia de la Fuerza Militar y la Policía parece incrementar la percepción de seguridad y reducir significativamente la probabilidad de desplazamiento. Dicho efecto es además significativo al 1% en ambas regresiones. Ello a pesar del efecto positivo de la percepción de Fuerzas Militares sobre la probabilidad de recibir amenazas. Es probable que la presencia permanente de Fuerzas Militares en una región, al significar enfrentamiento con grupos armados al margen de la ley, incremente la presión sobre la población, derivando entonces en amenazas hacia la población civil, para debilitar el apoyo de la fuerza pública. Una vez el desplazamiento es inminente y las Fuerzas Militares protegen a la población, su presencia evita el desplazamiento.

Pese a la fuerte influencia de las variables relacionadas con la violencia, las consideraciones de seguridad no son los únicos determinantes de la probabilidad de desplazamiento. Al incluir interacciones, el impacto de los incentivos económicos sobre la probabilidad de desplazamiento se puede diferenciar para los hogares expuestos a un alto riesgo de violencia indirecta (medida como aquellos hogares que conocen de otros eventos de violencia en la propia comunidad o en una vecina) y aquellos que no están expuestos. Los resultados indican que el impacto de las variables económicas sobre la probabilidad de desplazamiento varía de acuerdo a la exposición del hogar a la violencia.

El tamaño del predio reduce la probabilidad de desplazamiento para los hogares con alta y baja exposición a la violencia, pero es bastante más fuerte para los hogares con baja exposición a la violencia. Dos efectos contrarios actúan en este caso. Primero, un predio extenso tiende a desincentivar el desplazamiento, pues las pérdidas de un importante activo implican unos costos de oportunidad elevados (efecto directo). Segundo, los resultados muestran que un predio extenso aumenta la probabilidad de ser víctima de amenazas, lo cual conduce a un incremento en la probabilidad de desplazamiento (efecto indirecto). El coeficiente para el tamaño del predio es menos negativo para los hogares con alta exposición a la violencia, reflejando presumiblemente que para estos hogares las consideraciones económicas cumplen un papel menor relativo a las consideraciones de seguridad. De igual manera, la tenencia de tierras aumenta la probabilidad de desplazamiento para los hogares con altas exposiciones a la violencia, mientras reduce la probabilidad para los hogares con bajas exposiciones; sin embargo, el efecto para aquellos hogares con baja exposición es sólo significativo al 12%.

Otras dimensiones de las condiciones de vida parecen influir en la probabilidad de desplazamiento. Los hogares con un mayor acceso a servicios

sociales y conexiones a servicios públicos en el lugar de origen exhiben una menor probabilidad de desplazamiento. El coeficiente de servicios sociales es, empero, tres veces más alto para los hogares con baja exposición a la violencia. La diferencia entre los coeficientes de los hogares con alta y baja exposición a la violencia es significativa al 1%.

El número de cabezas de ganado ejerce, por otro lado, un efecto positivo sobre la probabilidad de desplazamiento. Tal como se discutió en secciones anteriores, el ganado es un mecanismo de ahorro que puede ser fácilmente transformado en efectivo y, por lo tanto, la posesión de ganado puede proveer recursos financieros para cubrir los costos del desplazamiento, así como una base inicial para financiar los primeros meses en el lugar de recepción.

La edad del jefe del hogar disminuye la probabilidad de desplazamiento. Las personas jóvenes, al contar con un horizonte de planeación más largo, están menos arraigadas a la región de origen. Los hogares encabezados por mujeres están más dispuestos a desplazarse, pero el efecto no es significativo. Parece que el efecto indirecto del género a través de la probabilidad de ser víctimas de amenazas se contrarresta por otros efectos. Por ejemplo, las mujeres perciben menos ingresos esperados en el lugar de recepción, lo cual puede reducir la probabilidad de desplazamiento. La forma reducida no permite distinguir el impacto separado de cada uno de estos efectos.

Los contactos personales en el lugar de recepción exhiben un signo positivo, pero el efecto no es estadísticamente significativo. Ello, sin embargo, no es sorprendente: si bien los contactos personales reducen los costos inmediatos de la migración, proveen asimismo información que reduce las expectativas de las condiciones de vida en el receptor. Los resultados indican que dichos efectos se contrarrestan, pero el efecto positivo parece sugerir que la disminución en los costos de migración domina los efectos de información.

El acceso a los medios de comunicación parece afinar, en efecto, la información acerca de las condiciones de vida de la población desplazada en el lugar de recepción y disminuir así la probabilidad de desplazamiento. Dicho resultado se opone a la evidencia encontrada en la literatura de la migración que demuestra que una mejor información está asociada a una mayor disposición a migrar. Nuestros resultados revelan un impacto negativo alto del acceso a los medios de comunicación sobre la probabilidad de desplazamiento. Lo anterior puede ser el resultado de los reportes frecuentes de los medios colombianos acerca de las precarias condiciones que enfrenta la población desplazada.

Más aún, los años de educación del jefe del hogar tienen un impacto negativo significativo para los hogares con alta exposición a la violencia. Es probable que las personas con más educación posean unas expectativas más realistas acerca de las condiciones de la población desplazada. El efecto de información parece dominar el efecto de las condiciones de vida: una mejor educación significa un ingreso esperado más alto en las ciudades receptoras, lo cual incrementa la probabilidad de desplazamiento. Por el contrario, el efecto de las condiciones de vida parece ser más fuerte para los hogares con baja exposición a la violencia. Para dichos hogares, la educación presenta un efecto positivo, pero no significativo. Estos resultados corroboran de nuevo nuestra hipótesis: el impacto de las consideraciones económicas es más fuerte para los hogares con baja exposición a la violencia (la diferencia entre los coeficientes es significativa al 1%).

Los lazos con la región no parecen reducir la probabilidad de desplazamiento, excepto para la edad del jefe del hogar, como se discutió en párrafos anteriores. Los hogares con más años de residencia en origen y aquellos con una mayor participación en organizaciones formales son más propensos a desplazarse. Una posible explicación se basa en el apoyo que pueden proveer las extensas redes sociales que poseen los residentes de largo plazo y los hogares con alta participación en organizaciones formales. Dichas redes pueden apoyar a sus miembros en el cuidado de las propiedades abandonadas. Un sistema de apoyo de esta naturaleza puede prevalecer por un tiempo y el desplazamiento no significa, por ende, perder los lazos con la región de origen sino, por el contrario, disminuir los costos de la migración.

D. Conclusiones

El análisis de los resultados es inequívoco: cualquier solución real del problema del desplazamiento en Colombia requiere el cese de las hostilidades contra la población civil. Sin embargo, mientras el conflicto armado persiste, es necesario considerar otras opciones para mitigar el problema. Entender los determinantes del desplazamiento y sus impactos contribuye a definir políticas públicas apropiadas para prevenir, asistir y generar condiciones propias que permitan un asentamiento digno de la población desplazada.

Este capítulo contribuye a desarrollar un modelo conceptual que analiza empíricamente los determinantes del desplazamiento al nivel del hogar. Si bien existen similitudes con la teoría tradicional de la migración, nuestra discusión evidencia importantes diferencias que surgen en el contexto de un conflicto armado. Algunas dimensiones, como la aversión al riesgo

y la carencia de información, producen efectos diferentes para la migración tradicional y el desplazamiento forzado. Más aún, mientras la tenencia de tierras y la inserción en redes sociales en el lugar de origen reducen la migración tradicional al incrementar los costos de oportunidad, pueden provocar el desplazamiento, de manera indirecta, al aumentar el riesgo de un hogar de ser víctimas de las amenazas directas.

En el caso particular de Colombia, nuestro análisis confirma el papel dominante de la violencia y de las percepciones de inseguridad como principales detonantes del desplazamiento. Por otro lado, la presencia de la fuerza pública contribuye a disminuir la inseguridad en las áreas con alta exposición a la violencia. Dado que las amenazas directas parecen ser un importante detonante del desplazamiento, el Estado, además de hacer presencia con la fuerza pública, debe diseñar mecanismos de protección especial para los grupos de población con un alto riesgo de ser blanco de los grupos armados. Los resultados econométricos evidencian que los hogares con acceso a tierras, en particular, con predios más extensos, y los hogares con una fuerte vinculación a las redes sociales en origen enfrentan un riesgo mayor de recibir amenazas¹⁶⁷.

La seguridad no es, empero, el único factor que influencia la decisión de desplazamiento. Algunos hogares deciden permanecer en sus regiones, pese a ser afectados por la violencia del conflicto. Más aún, ciertos hogares parecen reflexionar acerca de sus opciones y del impacto esperado del desplazamiento. Temas como los costos de abandonar activos valiosos, en particular, la tierra para la producción agrícola, parecen afectar la decisión de desplazamiento. De manera similar, los hogares sin acceso a servicios públicos o a salud o a la posibilidad de educación para sus hijos optan por el desplazamiento con mayor probabilidad.

Los incentivos económicos, tal como revelan los resultados, determinan, así sea muy parcialmente, la decisión de migrar en un contexto de conflicto civil. Pero el impacto de los incentivos económicos es mucho menor cuando la incidencia de la violencia es alta. La violencia contribuye entonces a acrecentar las tendencias de urbanización en Colombia y reduce la respuesta de los flujos de migración a los incentivos económicos. Las políticas públicas dirigidas a reducir el desbalance en las oportunidades económicas entre las áreas urbanas y rurales son poco efectivas en contextos de violencia.

La provisión de información veraz es, asimismo, una herramienta para prevenir ciertos desplazamientos. Es probable que las expectativas acerca

167 Cabe anotar que el análisis de este capítulo se concentra en hogares de bajos ingresos con predios pequeños.

de las condiciones en las ciudades receptoras sean excesivamente optimistas. Una mejor información de los problemas que enfrenta la población desplazada en el lugar receptor reduce la probabilidad de optar por el desplazamiento. Ello implica que una posible política para prevenir ciertos desplazamientos (por ejemplo, desplazamiento que se basa en percepciones erradas de riesgo) es mejorar el flujo de información. Claro está que la provisión de información no puede ser el fin último de la política pública, que, además, debe proveer alternativas a los hogares que se sienten amenazados por el conflicto. Además de las políticas para incrementar la seguridad discutidas en párrafos anteriores, otra opción es diseñar una red descentralizada de apoyo más cercana a las regiones de expulsión. Ello podría, a su vez, reducir la enorme presión sobre las principales ciudades receptoras. Las disposiciones contenidas en la Ley 387 de 1997 y en decretos subsiguientes, al crear los Comités Municipales y Departamentales para la Atención a la Población Desplazada, así como el Sistema de Alertas Tempranas, son un paso en este sentido. La aplicación de estos mecanismos ha sido, sin embargo, lenta, y por ahora son poco efectivos para prevenir el desplazamiento.

Los hogares que se desplazan por razones preventivas sopesan con más frecuencia las ventajas y desventajas potenciales de la migración forzada y de otras alternativas posibles. Al contar con un mayor margen de maniobra, dicho grupo de población desplazada puede planear mejor la migración y mitigar la pérdida de activos causada por la salida intempestiva. Más aún, las políticas de retorno pueden ser más viables para estos hogares que para aquellos que migraron de manera reactiva y no tuvieron la oportunidad de organizar su partida (ver el capítulo VII).

Un objetivo primordial de la Ley 387 de 1997 es diseñar y aplicar mecanismos para ofrecer asistencia legal y judicial a la población desplazada, con el fin de garantizar la investigación de los eventos de desplazamiento, la restitución de los derechos violados y la protección de los bienes afectados¹⁶⁸. Si bien el Gobierno nacional diseñó los mecanismos para proteger las tierras de la población desplazada con la promulgación del Decreto 2007 de 2001 y la Ley 1152 de 2007, es importante implementar políticas más efectivas para identificar el estatus actual de las tierras abandonadas, para comprobar quiénes explotan dichas tierras en la actualidad y para generar procesos de reconocimiento de los derechos de propiedad.

Por último, tras este capítulo emergen diversos temas de investigación interesantes. Primero, el proceso de desplazamiento se puede modelar como dinámico. Cuando los actores del conflicto ejercen presencia en una

168 Ley 387 de 1997, Capítulo II, Sección 1.

región, algunos grupos de la población civil son atacados y deben responder de manera reactiva. Otros miembros de la comunidad observan los ataques violentos y reaccionan de manera preventiva. Segundo, es probable que en el largo plazo los hogares consideren el riesgo de desplazamiento en su elección de activos. Si la violencia es endémica en la región, los hogares pueden asignar un porcentaje mayor de su inversión en activos trasladables, tales como el capital humano, y menos en activos no trasladables, tales como tierras y vivienda. Probar esta posible endogeneidad en el largo plazo es un tema interesante de investigación. De igual manera, el desplazamiento forzoso se puede modelar como un juego entre grupos violentos y la comunidad local, y examinar las condiciones que permiten a las comunidades resistir el desplazamiento.

Apéndice: cálculo de los pesos de Manski y Lerman

Para corregir el sesgo de muestreo, calculamos las ponderaciones sugeridas por Manski y Lerman (1977) y estimamos una función de máxima verosimilitud ponderada para el análisis econométrico. Con el fin de construir las ponderaciones de la muestra de población desplazada, calculamos la fracción de la población desplazada que selecciona cada municipio donde se aplicó la encuesta (Q_i^d) y el porcentaje análogo para la muestra (H_i^d)¹⁶⁹. Las estadísticas para el promedio de dichos pesos se presentan en el cuadro A1. La ponderación para la contribución i de la función logarítmica para la muestra de desplazados es

$$w_i^d = Q_i^d / H_i^d.$$

Cuadro A1. Estadísticas de las ponderaciones de Mansky y Lerman

Variable	Media
Número de personas desplazadas entre 1995 y 1999	1,268
Población en 1999	64,986
Porcentaje de personas desplazadas	1%
Porcentaje de personas no desplazadas	99%

Fuente: cálculos de las autoras con base en información municipal recolectada por el CEDE (2005).

La ponderación para la muestra de no desplazados es

$$w_i^{nd} = Q_i^{nd} / H_i^{nd}.$$

169 Estas cifras están disponibles en www.red.gov.co

donde Q_i^{nd} representa el porcentaje de población que permaneció en el municipio donde se aplicó la encuesta, y H_i^{nd} es la fracción análoga para la muestra. Al ponderar cada contribución de la función logarítmica de verosimilitud, se obtienen estimadores insesgados de los parámetros.

IV

EL IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE EL BIENESTAR ECONÓMICO DE SUS VÍCTIMAS

El desplazamiento forzoso, además de ser una clara violación de los derechos humanos, ocasiona un descenso pronunciado en el bienestar económico de sus víctimas. La expulsión de población civil constituye *per se* una violación de los derechos humanos y está acompañada de actos de violencia considerados como crímenes de lesa humanidad. Los asesinatos selectivos, las amenazas de muerte, las masacres y el reclutamiento son tácticas comunes y efectivas para expulsar a la población civil. La población desplazada presenta, por consiguiente, un perfil de alta victimización que conlleva secuelas psicológicas, en ciertos casos, insuperables.

El impacto del desplazamiento, sin embargo, no se limita a las consecuencias anteriores. Además, produce una caída en el bienestar económico de sus víctimas, incapacita a los hogares para enfrentar futuros choques y profundiza los factores determinantes de la pobreza estructural. El descenso en bienestar es el resultado de diversos factores. La migración forzada mina la capacidad de los hogares para emprender actividades productivas en los municipios de recepción y, por ende, sus ingresos y consumo se deterioran en el corto plazo. La imposibilidad de generar suficientes ingresos y la llegada a una ciudad nueva y desconocida restringen a su vez el acceso a servicios sociales y públicos. Las familias desplazadas residen entonces en barrios marginales, con unas condiciones de vivienda precarias, con un bajo cubrimiento de los servicios de salud y con un deterioro en su capacidad de gasto. Factores que, al confluir, derivan en una mala nutrición, en deserción escolar y en un deterioro de las condiciones de salud. En el largo plazo, la imposibilidad de generar ingresos, la mala salud y la disminución en las inversiones de capital humano producen una espiral descendente de bajos ingresos y profundización de los impactos negativos. Todo lo anterior implica que los costos del

conflicto no cesan una vez éste finaliza y sus impactos suelen incrementar la pobreza estructural¹⁷⁰.

El descenso en bienestar sucede simultáneamente con una erosión de la capacidad de los hogares para enfrentar futuros riesgos. El conflicto destruye o debilita los mecanismos de aseguramiento del riesgo: la base de activos se contrae, los créditos formales e informales desaparecen, y el capital social se debilita. Tal situación, aunada a las condiciones económicas descritas en el párrafo anterior, conduce a una vulnerabilidad alta frente a choques posteriores¹⁷¹. Al restringir las alternativas de generación de ingresos y las estrategias de riesgo, el choque causado por el desplazamiento puede contraer el ingreso permanente por debajo de la línea de pobreza, condenando a las familias desplazadas a la pobreza estructural y a una alta dependencia de la asistencia estatal¹⁷².

Estudiar los cambios en el bienestar de la población desplazada reviste un valor académico y contribuye en la definición de políticas públicas. Las consecuencias de los conflictos internos sobre la población civil han sido poco exploradas. La literatura económica se ha concentrado en calcular los costos económicos agregados del conflicto (por ejemplo, caídas en el PIB o reducción en la inversión privada) y existe poca evidencia acerca del impacto del conflicto sobre los hogares o empresas, pese a que estos costos parecen ser significativos, frenan el desarrollo económico y perduran varios años tras haber finalizado el conflicto¹⁷³.

La adecuada definición de políticas públicas requiere cuantificar las pérdidas de bienestar causadas por el desplazamiento. Primero, es importante identificar si la población desplazada debe ser objeto de una atención especial por parte del Estado o si, por el contrario, debe ser simplemente beneficiaria de los programas tradicionales dirigidos hacia la población pobre. La cuantificación de las caídas en bienestar y la exploración de la capacidad de los hogares desplazados para recuperar sus niveles anteriores de bienestar, en conjunto con una comparación con las condiciones de la población pobre, son una información fundamental para justificar o negar una discriminación positiva hacia la población desplazada. Si bien la teoría económica advierte de la imposibilidad de comparar el bienestar de diferentes individuos, las comparaciones parciales entre grupos de la población, en este caso, la población desplazada y la población pobre, bastan para decidir acerca de la pertinencia de desviar recursos hacia

170 Green, 1994; Goodhand, 2001.

171 Alwang *et al.*, 2001.

172 Goodhand, 2001.

173 Collier *et al.*, 2003.

una población con necesidades apremiantes¹⁷⁴. La pregunta central que intenta contestar entonces el capítulo es si la población desplazada posee las capacidades básicas para convertir sus ingresos en condiciones aceptables de vida, sin ningún tipo de ayuda estatal; máxime cuando su migración no fue voluntaria y sus habilidades y su entorno cultural se adecuaron a las áreas rurales de donde provienen y no a las áreas urbanas en las cuales se asientan de manera involuntaria.

Segundo, la legislación colombiana, contenida en la Ley 387 de 1997 y la Ley de Justicia y Paz, entre otras, estipula que la población desplazada debe ser restituida a las condiciones anteriores al desplazamiento. Dichas condiciones constituyen entonces el objetivo de la política para la población desplazada y deben ser caracterizadas para diseñar políticas que permitan alcanzarlas. Tercero, es importante analizar cómo el desplazamiento afecta cada dimensión del bienestar, para focalizar los recursos estatales hacia las dimensiones del bienestar más afectadas y hacia aquellas más efectivas, a fin de potenciar las capacidades productivas de la población desplazada.

La identificación de las pérdidas de bienestar posee, empero, una complicación empírica. La causalidad entre el desplazamiento forzoso y las condiciones actuales de la población desplazada no es clara: ¿son dichas condiciones el resultado del desplazamiento?, o ¿son dichas condiciones el resultado de las características inherentes al hogar? Estudios sobre las consecuencias sociales de los conflictos civiles enfrentan dificultades para separar los impactos del conflicto sobre la incidencia de la pobreza y procesos más amplios de cambio social¹⁷⁵. Con el fin de abordar esta pregunta, es necesario contar con una base de datos longitudinal que observe a las familias antes del desplazamiento y después de sucedido. Una base de datos longitudinales de este tipo tendría un problema ético insalvable, ya que el desplazamiento es una violación a los derechos humanos, y permitir que suceda no es una opción. Si el desplazamiento es inminente y esta información es pública, el Estado debe proteger a la población para evitarlo. Por otro lado, encontrar un grupo de control no es fácil. La población residente en áreas rurales, pese a tener características similares a la población desplazada, no vivió el choque del desplazamiento y su entorno, las áreas rurales, es muy diferente de aquel de los hogares objeto de estudio. La población urbana tampoco es un grupo de control apro-

174 Sen, 1999, argumenta que, cuando suceden hambrunas, las decisiones de la sociedad probablemente son unívocas y apoyarían cualquier decisión para evitarlas. En estos casos, prevalece la necesidad de evitar la hambruna sobre el sacrificio en el consumo de bienes privados o sobre el sacrificio en la provisión de otros bienes públicos.

175 Goodhand, 2001.

piado, ya que tiene características diferentes y no ha vivido el choque del desplazamiento. Ambos grupos de control estarían entonces plagados de sesgos.

Para abordar el problema, comparo las condiciones socioeconómicas de la población antes y después del desplazamiento, con base en preguntas retrospectivas. Al contrastar dichas condiciones, construyo una aproximación del impacto del desplazamiento. Dado que la comparación requiere que los hogares recuerden su situación antes del desplazamiento, esta medida puede contener también errores, debido a la dificultad para recordar su situación en el municipio de origen. La evidencia empírica muestra, sin embargo, que los errores de memoria son menores cuando se pregunta por un período en el cual sucedió un evento significativo (evento ancla), y tal es el caso del desplazamiento forzado¹⁷⁶.

El objetivo de este capítulo es examinar las pérdidas de bienestar de la población desplazada. Con tal fin, analizo las condiciones de la población desplazada en el municipio receptor, comparo estas condiciones con aquellas antes del desplazamiento e identifico los determinantes del bienestar con estimaciones econométricas. Dicho análisis se concentra en los resultados estáticos –las pérdidas de bienestar– de un proceso dinámico: la capacidad de los hogares desplazados para salir de la pobreza. Pese a no contar con datos longitudinales para abordar la segunda pregunta, analizar las condiciones económicas actuales de la población desplazada, tal como se aborda en este capítulo, y examinar las pérdidas de capital causadas por el desplazamiento, tema que se analiza en el próximo capítulo, proveen evidencia clara acerca de la vulnerabilidad de la población desplazada, su capacidad para recuperarse del choque vivido y el riesgo de dicha población de caer en pobreza crónica.

A. Los costos de los conflictos internos sobre los hogares

Los conflictos internos imponen altos costos sobre la población civil. Además de las muertes directas causadas por el conflicto, los costos indirectos impuestos por el conflicto sobre la población civil son sustanciales. Los efectos del conflicto ponen en riesgo los ingresos presentes, al debilitar la capacidad productiva de los hogares¹⁷⁷ (Brück, 2007; Goodhand, 2001), y los ingresos futuros, al provocar una reducción en las inversiones en capital humano, un deterioro en la salud de algunos grupos de población, la migración forzada, un cambio en la composición de los hogares y una destrucción de las redes sociales.

176 Kennickell y Starr-McCluer, 1997.

177 Brück, 2007; Goodhand, 2001.

Un impacto directo e inmediato de los conflictos es la contracción de la producción económica de las víctimas o de las familias residentes en zonas de conflicto. La destrucción de capital, la apropiación de activos, el deterioro de la base de activos rurales, la alta incertidumbre, los mercados débiles y la contracción en la provisión de bienes públicos debilitan la capacidad productiva de los hogares. Ello no sólo significa un descenso sustancial en los ingresos presentes de los hogares sino un ingreso permanente menor para todo el ciclo de vida restante.

Además de los efectos más palpables, la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad que trae consigo el conflicto conducen a los agentes económicos a adoptar estrategias cuyos riesgos y, por ende, retornos son bajos¹⁷⁸. Los productores residentes en zonas de conflicto prefieren, por ejemplo, consumir su producción agrícola y no venderla en los mercados¹⁷⁹. Dicha estrategia parece persistir durante varios años tras finalizando el conflicto¹⁸⁰.

La reducción en las inversiones de capital humano, consecuencia del conflicto, implica una caída en los ingresos futuros y conlleva costos en el largo plazo para los hogares. El conflicto y la violencia ejercen diversos impactos sobre las decisiones de inversión en capital humano. Primero, cuando el conflicto es de alta intensidad, destruye el capital físico y genera incertidumbre, originando así una caída en la producción. En el largo plazo, ello reduce el ingreso de los hogares, que a su vez contraen las inversiones en capital humano. Segundo, la violencia modifica las tasas de retorno de la educación, ya sea con incrementos, al destruir capital humano, o con descensos, al requerir menos capital humano, debido a la contracción en la producción¹⁸¹. Evidencia empírica para Colombia y Tayikistán indica que la asistencia escolar disminuye en el caso de niños residentes en zonas de conflicto¹⁸².

El aumento de la mortalidad y la morbilidad por canales diferentes a las muertes mismas del conflicto es otro costo adicional. Los canales que deterioran la salud de la población durante un conflicto son diversos: la población está expuesta con más frecuencia a riesgos de contraer enfermedades, ser herida o morir; la restricción de recursos públicos redundan en una contracción de la oferta de servicios de salud; y el deterioro de las

178 Mansuri y Healy, 2000; Brück, 2007.

179 McKay y Loveridge, 2005; Brück 2007.

180 Brück, 2007.

181 Barrera e Ibáñez, 2004.

182 Barrera e Ibáñez, 2004; Shemyakina, 2006.

condiciones de vida de la población, tales como una mayor incidencia de la desnutrición, hace más propensa a la población a contraer enfermedades. Es así como los conflictos nacionales e internacionales provocaron en 1999 cerca de 269.000 muertes y 8,44 millones de DALY^{183, 184}, impacto cuya persistencia significó una pérdida de 8,01 millones de DALY en 1999, debido a los guerras internas ocurridas entre 1991 y 1997¹⁸⁵. La mortalidad infantil en épocas de conflicto se agrava¹⁸⁶. Urdinola (2004) encuentra que para Colombia el incremento de una persona por cada mil habitantes en la tasa de homicidios causa un aumento de la tasa de mortalidad de dos niños por cada mil nacidos vivos. En Camboya, la brecha de mortalidad infantil entre áreas urbanas y rurales desapareció durante el período de su guerra interna¹⁸⁷. Asimismo, la salud y el crecimiento de los niños se afectan de manera considerable para los niños víctimas del conflicto: en Burundi, el conflicto interno y el embargo subsiguiente provocaron un deterioro de las medidas antropométricas de los niños¹⁸⁸. El impacto no se limita, sin embargo, a los menores. La mortalidad de los hombres adultos, grupo poblacional más involucrado con las actividades del conflicto, se eleva. En Camboya, la época del Khmer Rouge produjo un exceso de mortalidad entre los hombres adultos, educados, residentes en áreas urbanas y con predominancia de población musulmana¹⁸⁹.

Con el fin de evitar ser víctimas del conflicto o tras ser víctimas del conflicto, la población es forzada a migrar para proteger sus vidas. El desplazamiento forzoso ocasiona elevadas pérdidas de bienestar, genera una población residual y altamente dependiente de la ayuda estatal, deteriora la base de activos y restringe las estrategias para mitigar riesgos¹⁹⁰. Las pérdidas de bienestar para un hogar colombiano forzado a migrar equivalen al 37% del valor presente neto del consumo total del hogar durante su ciclo de vida; pérdidas que son particularmente elevadas para los segmentos más pobres de la población desplazada¹⁹¹.

183 Años de vida ajustados por discapacidad.

184 OMS, 2000.

185 Ghobarah *et al.*, 2003.

186 Hoeffler y Reynal-Querol, 2003.

187 De Walque, 2004.

188 Bundervoet y Verwimp, 2005.

189 De Walque, 2004.

190 Goodhand, 2001; Ibáñez y Vélez, 2007.

191 Ibáñez y Vélez, 2007.

Por último, el conflicto civil altera la composición del hogar. La vinculación de algunos hombres a los grupos armados modifica la composición del hogar y obliga a las mujeres a adquirir nuevas responsabilidades como jefes y principales proveedoras económicas del hogar¹⁹². El desplazamiento forzoso también modifica la composición del hogar, ya sea porque algunos miembros permanecen en el municipio de origen para continuar protegiendo sus bienes o porque algunos miembros son asesinados o desaparecen. Las tasas de dependencia del hogar se aumentan como resultado de lo anterior y se profundiza así la vulnerabilidad de algunos hogares¹⁹³.

Los costos del conflicto no son, además, homogéneos al afectar de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la población. El impacto del conflicto sobre los hogares pobres, hogares que carecen de mecanismos para protegerse de eventuales riesgos, o sobre los residentes en áreas desprovistas de protección estatal, es bastante mayor¹⁹⁴. Evidencia empírica señala, por ejemplo, que los hogares encabezados por viudas del conflicto sufren unas pérdidas elevadas¹⁹⁵. La pobreza, empero, no significa necesariamente una mayor vulnerabilidad frente al conflicto. Los productores agrícolas en áreas remotas, con posibilidad de cultivar sus tierras, están menos expuestos a algunos choques ya que la explotación de sus tierras les garantiza un consumo mínimo de alimentos¹⁹⁶.

El legado de un conflicto interno no se limita entonces a la muerte de sus combatientes. Las guerras internas producen pobreza estructural y profundizan la desigualdad del ingreso en los países que las enfrentan¹⁹⁷. Es así como ocho de los diez países con el índice de desarrollo humano más bajo sufrieron conflictos internos en épocas recientes, y la mitad de los 50 países con peores índices enfrentaron un conflicto interno severo en los últimos 20 años¹⁹⁸. Peor aun, el fin del conflicto no significa el fin de sus costos, pues los impactos económicos y sociales persisten en la etapa de posconflicto.

192 Stewart y Fitzgerald, 2001.

193 Goodhand, 2001.

194 Stewart y Fitzgerald, 2001.

195 Goodhand, 2001; McKay y Loveridge, 2005; Binzel y Brück, 2007; Brück, 2007.

196 Glewwe y Hall, 1998; Brück, 2007.

197 Collier, 1999; Goodhand, 2001; Stewart *et al.*, 2001; McKay y Loveridge, 2005.

198 Stewart y Fitzgerald, 2001.

B. Las pérdidas de bienestar de los hogares desplazados en Colombia

Identificar los cambios en bienestar de la población desplazada en Colombia es el objetivo de esta sección. Para examinar los cambios en bienestar, se analizan diversos indicadores que proporcionan una mirada más completa de cómo la migración forzada afecta el bienestar de sus víctimas. Además de analizar los indicadores tradicionales, ingreso y consumo del hogar, examino otros indicadores, tales como el cubrimiento de los servicios de salud, la asistencia educativa, las condiciones de la vivienda, los cambios en la composición del hogar y la vinculación a los mercados laborales. Ello permite identificar un perfil claro de vulnerabilidad de la población desplazada y sus necesidades más apremiantes. Todos los indicadores se analizan antes y después del desplazamiento, con el fin de establecer los cambios en bienestar causados por la migración forzada. Esta sección contiene una descripción de los datos base del estudio y las estadísticas descriptivas resultantes.

1. La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados, ENHD (2004)¹⁹⁹

El análisis de este capítulo y los tres siguientes se basa en la Encuesta Nacional de Hogares Desplazados, diseñada por la Universidad de los Andes y aplicada por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, en 2004. Diseñar una muestra representativa de la población desplazada es complicado, dada la carencia de un marco muestral representativo de la población desplazada. Tres muestras de población desplazada están disponibles en Colombia. La primera muestra, el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), fue creada en 1999 y es administrada por Acción Social (AS), entidad gubernamental encargada de la política para la población desplazada. El propósito del RUPD es identificar a la población desplazada beneficiaria de ayuda estatal. Para acceder al RUPD, los hogares deben presentar una declaración ante una entidad del Ministerio Público, en la cual relatan los hechos del desplazamiento. La veracidad de dicha declaración es verificada por AS y, si ésta es considerada como

199 La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados, 2004, se diseñó en el marco del proyecto de la Universidad de los Andes "Hacia una política proactiva para la población desplazada". El proyecto fue financiado por el GDN y USAID. La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal también participó en el proyecto proporcionando la base de datos del Sistema RUT y aplicando las encuestas. El grupo de investigación del proyecto estuvo conformado por Andrés Moya, Pablo Querubín, Andrea Velásquez y yo, y por parte de la Conferencia Episcopal, Fanny Uribe y el padre Maurizio Pontín participaron activamente en el proyecto.

cierta, el hogar es registrado como desplazado y como beneficiario de la ayuda estatal. El registro en el RUPD depende de la decisión de declarar ante el Ministerio Público y del proceso de verificación emprendido por AS; por ende, la muestra es sesgada.

La segunda muestra, el Sistema SISDES, es recolectada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). El objetivo del Sistema SISDES es cuantificar la magnitud del desplazamiento, desde 1985 hasta hoy, y llevar a cabo estudios de caso para caracterizar a la población desplazada en ciertas regiones. La cuantificación de la población desplazada se basa en una metodología de “estadísticas por consenso” que extrae información acerca de desplazamientos de población de los registros de prensa, de las autoridades locales y de múltiples actores. Con el fin de caracterizar a la población desplazada, se aplican muestras a grupos de la población desplazada que tampoco son representativos de dicha población.

El Sistema RUT de la Conferencia Episcopal es la tercera muestra. El Sistema RUT es una encuesta que aplica la Iglesia católica a la población desplazada que acude a las 3.764 parroquias a solicitar ayuda. La encuesta recoge información acerca de las causas y de los actores responsables del desplazamiento, características del hogar, tenencia de tierras, acceso a mercados laborales antes y después del desplazamiento, asistencia educativa antes y después del desplazamiento, y deseo de retorno. Si bien el Sistema RUT no carece de sesgos, posee varias ventajas importantes sobre los dos anteriores: es accesible al público, su cubrimiento geográfico y temporal es considerable y caracteriza a un número significativo de hogares.

Dadas las ventajas anteriores, el Sistema RUT se usó como base para construir una muestra representativa de población desplazada. Dicha muestra está constituida por 2.322 hogares y se aplicó en 48 municipios y 21 departamentos del país. Con el fin de eliminar el sesgo del Sistema RUT y evaluar los programas de generación de ingresos, la muestra se dividió en tres submuestras: (i) 769 hogares beneficiarios de programas de generación de ingresos de USAID; (ii) 794 hogares inscritos en el Sistema RUT; y (iii) 759 hogares no inscritos en el Sistema RUT.

Para corregir el sesgo de la muestra del Sistema RUT, se definieron dos submuestras. La primera muestra se construyó con base en el Sistema RUT y se seleccionó una muestra estratificada de 3.000 hogares RUT que debían ser localizados por los encuestadores de la Conferencia Episcopal. Por cada hogar RUT encuestado, el encuestador debía aplicar la encuesta a un hogar No-RUT localizado en la vecindad inmediata. La muestra final está conformada por 794 hogares RUT y 759 hogares No-RUT.

La tercera submuestra se construyó para evaluar el impacto de los programas de generación de ingresos dirigidos a la población desplazada. Para tal fin, se escogieron 769 hogares beneficiarios de los programas de USAID ejecutados por CHF, FUPAD y OIM. Los operadores de las tres organizaciones enviaron listas de sus beneficiarios, que permitían seleccionar una muestra aleatoria de beneficiarios. Las encuestas de beneficiarios se realizaron en los mismos municipios de las submuestras para los hogares RUT y No-RUT. Se aplicó además el mismo cuestionario.

El objetivo de la encuesta es describir el proceso de desplazamiento forzoso de cada hogar, identificar las condiciones de la población desplazada antes y después de la migración, detallar su situación económica en el municipio de recepción, evaluar los programas de generación de ingresos de USAID y establecer bajo cuáles condiciones la población desplazada estaría dispuesta a retornar a su municipio de origen.

Recabar información de las condiciones de la población desplazada en el municipio de origen y el municipio de recepción es complicado, debido a las dificultades para recordar eventos pasados. El cuestionario de la encuesta se diseñó para minimizar los errores de memoria. Evidencia empírica ha encontrado que el error de memoria es menor cuando los hogares cuentan con un “evento ancla” significativo. Es indiscutible que el desplazamiento forzoso constituye un “evento ancla” que implica un deterioro en las condiciones de vida y, por tanto, es posible indagar sobre las condiciones antes y después del desplazamiento. Si bien el error de memoria es bajo para variables de stock tales como la tenencia de activos y el acceso a servicios sociales, la medición de variables flujo, como el consumo con preguntas retrospectivas, tendría un error elevado²⁰⁰. Para medir el consumo antes del desplazamiento, se adopta entonces una estrategia alternativa. Con datos de la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 1997), se estiman los determinantes del consumo urbano y rural. Dichos determinantes se incluyen en la ENHD (2004), para luego predecir el consumo agregado de los hogares desplazados en el municipio de origen.

2. La población desplazada: la migración forzada, características socioeconómicas y cambios en bienestar

El objetivo de esta sección es describir el proceso de desplazamiento, las estrategias de migración adoptadas por los hogares y los cambios en los indicadores de bienestar como consecuencia del desplazamiento. Un análisis detallado de estos tres grupos de variables permite entender cómo el proceso de desplazamiento y las estrategias de migración afectan el bien-

200 Kennickell y Starr-McCluer, 1997.

estar en el municipio de recepción, comparar las condiciones de bienestar antes y después del desplazamiento e identificar las condiciones socioeconómicas de la población desplazada en el municipio de recepción.

El cuadro 1 describe el proceso que conllevó al desplazamiento y las estrategias de migración adoptadas por los hogares. Para examinar cómo el recrudecimiento a partir del año 2000 afecta a la población civil, se analizan los indicadores para hogares que se desplazaron antes del año 2000 y a partir del año 2000. Los hogares se desplazan generalmente por razones reactivas, es decir, no para evitar la violencia sino una vez han sido víctimas de ella: un 87,6% de los hogares reporta un desplazamiento reactivo²⁰¹. Más de la mitad de los hogares se desplaza tras recibir una amenaza directa, y dicho porcentaje se incrementó en 14 puntos porcentuales cuando el conflicto se recrudeció en el año 2000. De otro lado, los homicidios y las masacres²⁰², estrategias adoptadas con más frecuencia por los grupos paramilitares, parecen ceder a partir del año 2000, muy probablemente debido al proceso de paz con los grupos paramilitares. La escalada de ataques dirigidos a la población civil ha acrecentado entonces el desplazamiento reactivo a partir del año 2000 (79,6% vs. 89,2%) y disminuido la importancia de las consideraciones económicas en el proceso de decisión de migrar (22,2% vs. 12,4%). Dichos ataques conducen además a la población a percibir la migración como un evento definitivo: un 78,3% de los hogares consideran la migración como algo definitivo.

La estrategia de migración refleja la necesidad de los hogares de proteger a los miembros del hogar y minimizar las pérdidas económicas. Los hogares intentan, en primera instancia, mantener unido el hogar, y un 90,6% migra con el núcleo completo. Es más, casi tres cuartas partes de los hogares migran también con la familia extendida. La migración por etapas es poco frecuente y los hogares prefieren migrar de manera directa al municipio de destino. Es probable que, pese a ser forzados a migrar, los hogares escojan el municipio de destino de una manera más pausada y se localicen en ciudades o pueblos donde residen familiares o amigos, quienes les pueden tender una mano: un 65,6% de los hogares dice haber escogido el municipio de recepción porque allí residían familiares o ami-

201 Se considera que un hogar se desplazó de manera reactiva cuando identifica como las causas de la migración forzada las amenazas, los atentados, los asesinatos, las desapariciones, el reclutamiento, las masacres, el secuestro y las órdenes de desalojo por parte de los grupos al margen de la ley.

202 Los asesinatos selectivos, las masacres y los intentos de homicidio son las tácticas de guerra utilizadas con más frecuencia por los grupos paramilitares. El porcentaje de hogares que fueron desplazados por paramilitares y fueron víctimas de asesinatos selectivos, intentos de homicidio y masacres es, respectivamente, 21,6%, 37% y 27%. Dichos porcentajes son, para los grupos guerrilleros, 17,9%, 32,9% y 18,6%.

gos. Ello reduce presumiblemente los costos de migración. La migración a un lugar cercano al origen puede ser también una estrategia efectiva para reducir los costos de migración, proteger activos, continuar produciendo en los predios agrícolas o evitar perder los lazos sociales. En efecto, los datos revelan que más de la mitad de hogares migra en el mismo departamento y un 17,7% migra incluso en el mismo municipio.

Cuadro 1. Proceso de desplazamiento y estrategias de migración

Variable	Total muestra	Desplazamiento antes de 2000	Desplazamiento después de 2000 (incluido)
Motivo de desplazamiento			
Amenaza directa	54,4%	44,2%	56,5%
Intento de homicidio	18,9%	16,9%	19,4%
Homicidio	34,4%	45,1%	32,3%
Masacre	21,1%	33,8%	18,6%
Confrontación armada	36,0%	41,8%	34,8%
Violencia indiscriminada	39,1%	48,7%	37,2%
Más de un motivo de desplazamiento	68,5%	64,8%	69,3%
Desplazamiento reactivo	87,6%	79,6%	89,2%
Motivaciones económicas para migrar	14,1%	22,2%	12,4%
Actores responsables del desplazamiento			
Grupos guerrilleros	70,2%	61,1%	72,0%
Grupos paramilitares	45,0%	52,4%	43,5%
Fuerzas armadas	3,5%	4,8%	3,2%
Más de un grupo	24,8%	31,5%	23,4%
Estrategia de migración			
Migra núcleo familiar completo	90,6%	88,8%	90,9%
Migra con familia extendida	74,3%	70,8%	75,0%
Migración masiva	7,5%	5,6%	7,9%
Migración directa a receptor	93,0%	83,0%	95,0%
Migración intradepartamental	59,0%	51,0%	60,6%
Migración intramunicipal	17,7%	17,3%	17,8%
Percibe desplazamiento como definitivo	78,3%	82,6%	77,4%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

El cuadro 2 presenta las características sociodemográficas de los hogares desplazados y los cambios en su estructura como consecuencia del desplazamiento. La estructura de los hogares desplazados coincide con muchas características presentes en los grupos de población que enfrentan

una pobreza estructural. Primero, los hogares desplazados son grandes (5,32 personas) y con altas tasas de dependencia. Si bien un hogar grande en las áreas rurales puede contribuir a expandir el ingreso al significar mano de obra adicional para la producción agrícola, en las áreas urbanas un hogar grande es sinónimo de pobreza²⁰³. Segundo, la escolaridad del jefe del hogar y su cónyuge es baja y el analfabetismo del jefe del hogar, variable altamente correlacionada con la pobreza estructural, ronda el 20%²⁰⁴. Tercero, las minorías étnicas, en particular los grupos indígenas, parecen ser blanco frecuente de los grupos armados: mientras que el Censo de 2005 reporta que un 3,4% de la población colombiana es indígena, para la población desplazada este porcentaje asciende a un 17,2%²⁰⁵,²⁰⁶. Es posible que los territorios indígenas y las zonas de conflicto se traslapen, causando así un mayor desplazamiento de los grupos indígenas. Asimismo, los territorios indígenas pueden ser valiosos para alcanzar los objetivos de guerra de los grupos armados.

El perfil de vulnerabilidad anterior se agrava con la fragmentación de los hogares como consecuencia del desplazamiento. Dicha fragmentación obedece a comportamientos estratégicos de los hogares para diversificar las fuentes de ingreso del hogar (por ejemplo, continuar explotando predios agrícolas), es consecuencia del accionar de los grupos armados, que asesinan o desaparecen a miembros del hogar, o sucede después del desplazamiento, cuando algunos miembros deciden abandonar el hogar. Los tres motivos anteriores derivan en un porcentaje elevado, un 20,7% de familias fragmentadas, debido al desplazamiento. Un alto porcentaje de la fragmentación parece suceder tras el desplazamiento inicial, pues más de un 90% de las familias reporta haber migrado con el núcleo completo, y la fragmentación se acrecienta conforme pasa el tiempo de desplazamiento. Los hijos y el jefe del hogar suelen ser los miembros que se separan del hogar con más frecuencia: 12,7 y 8,5%, respectivamente. La desaparición o abandono del jefe del hogar incrementa la vulnerabilidad del hogar, pues era, por lo general, el principal proveedor económico. Es más, un 6,4% de los hogares pierden el jefe del hogar por abandono, muerte o desaparición. No todos los hogares fragmentados son, sin embargo, necesariamente vulnerables. Cuando los hogares se fragmentan por razones estratégicas, algunos miembros envían transferencias mensuales (20%) superiores a \$40.000.

203 McKay y Lawson, 2003.

204 *Ibid.*

205 Se define un hogar como indígena o afrodescendiente cuando el jefe del hogar se autoidentifica como indígena o afrodescendiente.

206 DANE, 2006.

Cuadro 2. Características de los hogares desplazados y cambios en la estructura del hogar por el desplazamiento

Variable	Total muestra	Desplazamiento antes de 2000	Desplazamiento después de 2000 (incluido)
Características hogares desplazados			
Jefatura masculina	61,0%	61,8%	60,9%
Tamaño del hogar	5,32 (0,11)	5,46 (0,19)	5,30 (0,13)
Número menores de 12 años	1,76 (0,75)	1,56 (0,12)	1,81 (0,09)
Número jóvenes entre 12 y 17 años	0,84 (0,05)	0,96 (0,10)	0,82 (0,05)
Número personas entre 17 y 65 años	2,50 (0,07)	2,69 (0,13)	2,46 (0,84)
Número mayores 65 años	0,17 (0,02)	0,20 (0,04)	0,16 (0,02)
Años escolaridad jefe del hogar	5,70 (0,12)	5,78 (0,25)	5,69 (0,14)
Años escolaridad cónyuge	5,76 (0,5)	5,95 (0,13)	5,72 (0,06)
Porcentaje alfabetismo jefe del hogar	79,1%	75,3%	79,9%
Pertenencia a grupos indígenas	17,2%	16,8%	17,3%
Pertenencia a grupos afrodescendientes	10,9%	13,6%	10,4%
Cambios en la estructura del hogar			
Fragmentación del hogar	20,7%	31,6%	18,5%
Miembro del hogar: jefe del hogar	8,5%	9,1%	8,4%
Miembro del hogar: cónyuge	1,7%	1,8%	1,7%
Miembro del hogar: hijos	12,7%	23,0%	10,6%
Jefe del hogar muere o abandona hogar	6,4%	7,8%	6,1%
Contacto mensual	7,1%	3,6%	8,3%
Hogar recibe transferencias	20,8%	20,0%	21,1%
Valor promedio de las transferencias	43.472 (14.611)	69.746 (39.684)	34.437 (13.622)

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

¿Afecta el desplazamiento forzoso el bienestar de sus víctimas? El cuadro 3 presenta indicadores de ingreso, consumo, mercados laborales, condiciones de la vivienda, cubrimiento de los servicios de salud y asistencia escolar antes y después del desplazamiento. El impacto del desplazamiento forzoso sobre estos indicadores de bienestar difiere y no siempre la migración forzada implica un deterioro de algunas dimensiones del

bienestar. La capacidad de generación de ingresos se debilita significativamente, debido, en gran medida, a las dificultades para acceder a los mercados laborales, y ello redundando en pobres condiciones de la vivienda. No obstante, la mayor oferta de servicios sociales en las áreas urbanas permite una expansión en el cubrimiento de los servicios de salud y en la asistencia educativa.

Cuadro 3. Condiciones económicas antes y después del desplazamiento

Variable	Antes del desplazamiento	Después del desplazamiento
Ingreso y consumo		
Ingreso laboral por adulto equivalente	1'928.321 (325.606)	624.167 (37.328)
Consumo por adulto equivalente	1'627.002 (276.577)	1'054.040 (55.985)
Porcentaje consumo donado	Nd	12,2%
Porcentaje consumo destinado a alimentación	Nd	64,8%
Porcentaje de hogares debajo de línea de pobreza	Nd	94,4%
Porcentaje de hogares debajo de línea de pobreza extrema	Nd	71,6%
Mercados laborales		
Desempleo – jefe del hogar	1,7%	16,1%
Desempleo – otros miembros mayores de 18	5,0%	13,6%
Agricultura – ocupación laboral	57,3%	13,8%
Comercio – ocupación laboral	8,0%	11,9%
Industria – ocupación laboral	2,2%	2,9%
Construcción – ocupación laboral	3,7%	6,6%
Servicios – ocupación laboral	6,8%	16,2%
Labores domésticas – ocupación laboral	12,8%	9,5%
Condiciones de la vivienda		
Hacinamiento alto	22,8%	39,8%
Paredes de buenos materiales	63,8%	58,7%
Pisos de buenos materiales	8,2%	11,4%
Energía eléctrica	56,4%	88,8%
Acueducto	43,0%	66,2%
Alcantarillado	29,6%	50,6%
Servicios sociales: educación y salud		
Asistencia escolar, niños entre 7 y 11 años	52,1%	81,5%
Asistencia escolar, niños entre 12 y 17 años	74,2%	68,3%
Días de interrupción escolar		286,4
Porcentaje de menores vinculados a los mercados laborales		10,3%
Afiliados a régimen subsidiado de salud	52,5%	73,2%

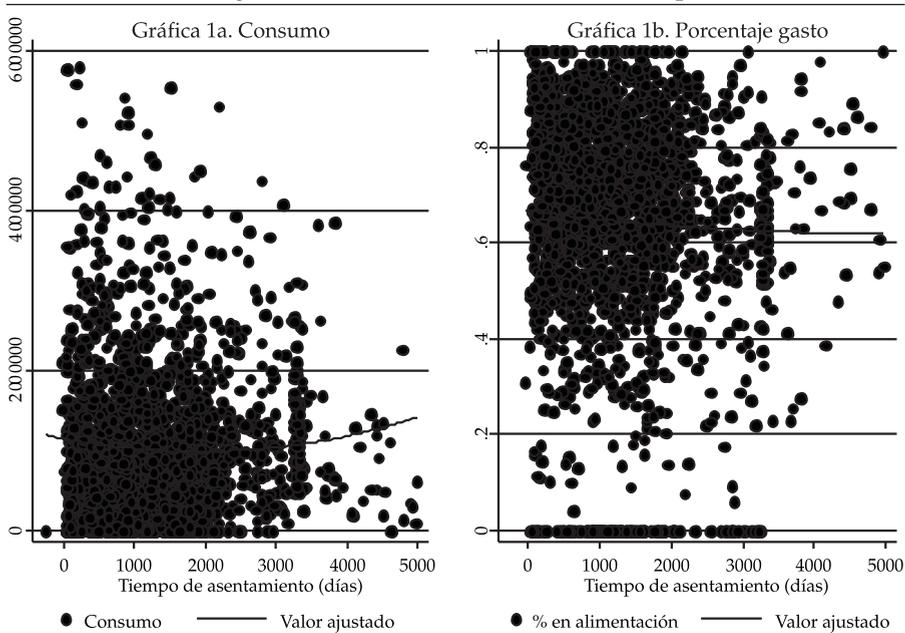
Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

El descenso del consumo agregado por adulto equivalente y el ingreso laboral por adulto equivalente tras el desplazamiento, indicadores tradi-

cionales de bienestar económico, es pronunciado. El ingreso laboral desciende a una tercera parte del ingreso que devengaban los hogares antes del desplazamiento. Más aún, la distribución de los ingresos laborales colapsa y su variación es mínima, lo cual significa que el desplazamiento nivela por lo bajo los ingresos de los hogares desplazados.

El comportamiento del consumo agregado es similar, pero parece ser más resistente frente al choque del desplazamiento. Primero, el consumo agregado en el municipio de recepción equivale a dos terceras partes del consumo en origen. Segundo, el tiempo de asentamiento no modifica el consumo del hogar, cuya variación es mínima y pareciera ser alrededor de un promedio que presumiblemente equivale a un consumo mínimo requerido para la subsistencia del hogar. La gráfica 1a muestra la evolución del consumo con el tiempo de asentamiento. Durante los primeros años, el consumo sufre una leve caída, para después alcanzar el mismo consumo de los primeros meses de asentamiento en el municipio de recepción.

Gráfica 1. Evolución del consumo por adulto equivalente y el porcentaje de gasto destinado a alimentos con el tiempo de asentamiento

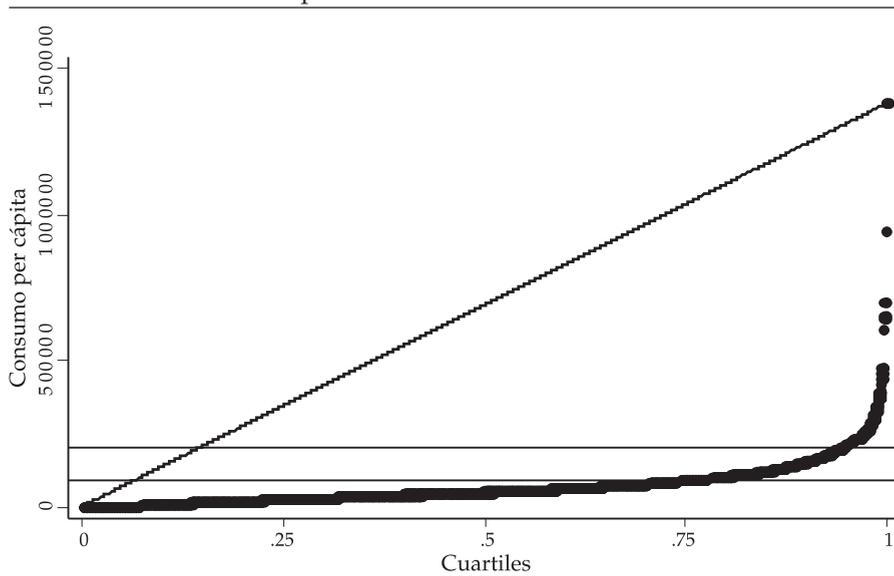


Fuente: cálculos de los autora con base en ENHD (2004).

Pese a la relativa estabilidad del consumo agregado, su nivel es bastante bajo, existe una alta dependencia respecto a la asistencia para la población

desplazada y su composición denota una vulnerabilidad preocupante. La gráfica 2 presenta la distribución del consumo agregado por adulto equivalente y compara dicha distribución con la línea de pobreza y la línea de indigencia²⁰⁷. La gráfica evidencia los bajos niveles de consumo de la población desplazada: sólo un poco más del 5% de los hogares está por encima de la línea de pobreza y un 75% de los hogares desplazados está por debajo de la línea de indigencia. Si se extrapola este valor al total de la población desplazada, ello significaría que cerca de 1'500.000²⁰⁸ personas entraría a engrosar la población indigente urbana; cifra que equivale a un 42% de dicha población²⁰⁹. El descenso producido por el desplazamiento forzoso obliga a grupos considerables de hogares a enfrentar una pobreza extrema y cabe, por ende, preguntarse si este descenso es una condición permanente o posible de superar en un futuro cercano.

Gráfica 2. Distribución de consumo per cápita, línea de pobreza y línea de pobreza extrema



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

207 Se calculan las líneas de pobreza e indigencia como un promedio ponderado por el número de hogares entrevistados en cada municipio, de las líneas de pobreza e indigencia de los municipios receptores.

208 Según Acción Social, el número de personas desplazadas a febrero de 2007 es de 1'976.970.

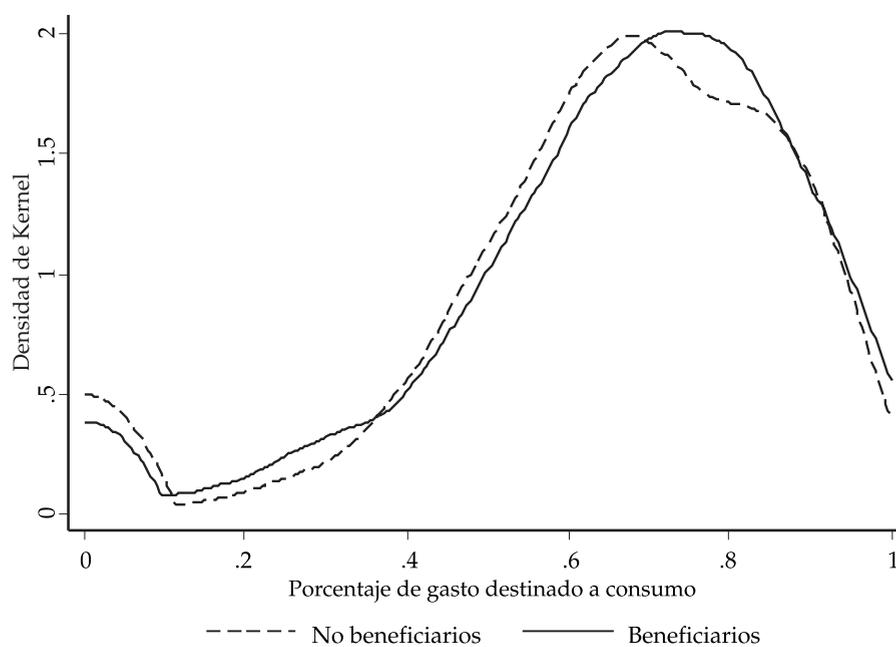
209 Según la Misión de Pobreza (MERD, 2006), en el año 2006 se tenían 3'550.000 millones de personas residentes en áreas urbanas y localizadas debajo de la línea de indigencia.

La evidencia que se examina a lo largo de este capítulo y el siguiente permite inferir con un cierto grado de confianza que el perfil de pobreza ilustrado en la gráfica 2 puede convertirse en permanente si no se diseña una intervención eficaz. Las fuentes de financiación del consumo y su composición proveen la primera evidencia de esto. Un poco más del 12% del consumo de los hogares desplazados se financia con donaciones o transferencias, pero la dependencia respecto a las donaciones disminuye con el tiempo de asentamiento, y después de un año casi todo el consumo es financiado por el hogar. El porcentaje de consumo destinado a alimentos denota aun más vulnerabilidad. Cerca de un 65% del consumo es destinado a financiar el gasto en alimentos. Dicha cifra es un indicador claro de vulnerabilidad, pues los hogares cuentan con pocos recursos para acumular activos suficientes para expandir los ingresos del hogar, y con una reducida habilidad para mitigar nuevos choques. El porcentaje del consumo destinado al gasto de alimentos parece ser poco sensible a variables tales como el tiempo de asentamiento y la participación en programas de generación de ingresos. La gráfica 1b ilustra la evolución del porcentaje del gasto de alimentos a lo largo del tiempo e incluye una línea de tendencia. Es claro que el tiempo de asentamiento no contribuye a expandir el ingreso, y permitir así que un menor porcentaje del consumo sea destinado al gasto de alimentos. El impacto de los programas de generación también parece ser marginal. La gráfica 3 presenta la distribución Kernel para dicho indicador, en el caso de los beneficiarios (línea punteada) y no beneficiarios (línea sólida) de los programas de generación de ingresos. Si bien los programas de generación de ingresos desplazan la distribución hacia la izquierda, reflejando que un mayor porcentaje de hogares destina menos porcentaje al consumo de alimentos, la diferencia no es sustancial, ya que la distribución para los beneficiarios está aún concentrada en el rango entre 60 y 80% del porcentaje destinado a consumo de alimentos. (véase gráfica 3).

La rigidez del consumo respecto a diversas variables está determinada por la incapacidad de los hogares desplazados para expandir sus ingresos. Esto, a su vez, es el resultado de la dificultad de la población desplazada para acceder a los mercados laborales urbanos, debido a sus bajos niveles de escolaridad, a una experiencia laboral inadecuada para las ocupaciones urbanas, al desconocimiento de los mercados laborales urbanos y a las altas tasas de desempleo del país en algunas regiones. Todo lo anterior redonda en un incremento sustancial de las tasas de desempleo, una vez sucede el desplazamiento, tanto para el jefe del hogar, cuya tasa de desempleo antes del desplazamiento es el 1,7% y en el municipio de recepción es el 16,1%, como para los otros miembros del hogar mayores de 18 años (5% *vs.* 13,6). Más grave aun es el lento proceso de absorción

de la población desplazada por parte de los mercados laborales urbanos. Durante los tres primeros meses de asentamiento, las tasas de desempleo del jefe del hogar alcanzan el 53% y después de un año de asentamiento dicha tasa alcanza el 16%. Pese a la mejoría en los indicadores laborales, las tasas de desempleo después de un año de desplazamiento sobrepasan la tasa de la población indigente urbana²¹⁰.

Gráfica 3. Densidad de Kernel para porcentaje del gasto destinado a alimentos: beneficiarios y no beneficiarios



Fuente: cálculos de la autora con base en ENDH (2004).

La migración forzada produce además una recomposición en las ocupaciones laborales y obliga a la población desplazada a competir en áreas cuya experiencia laboral es irrelevante. Antes de suceder el desplazamiento, un 57,3% de los jefes de hogar estaba dedicado a labores agrícolas y, una vez en el municipio de recepción, pocos pueden trabajar de nuevo en producción agrícola y se concentran en labores de servicios y construcción; ocupaciones que presumiblemente denotan trabajos en el sector informal, con bajas remuneraciones, sin seguridad social y poca estabilidad.

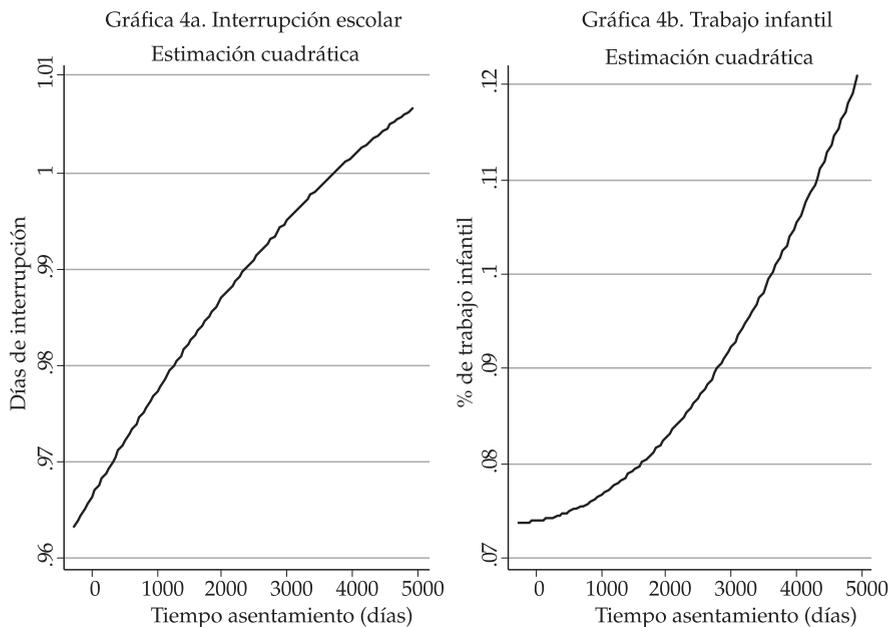
210 Ibáñez y Moya, 2006.

Los bajos ingresos, el consumo cercano a un mínimo de subsistencia y las precarias perspectivas laborales llevan a la población desplazada a residir en viviendas ubicadas en barrios marginales. El cuadro 3 caracteriza las condiciones de la vivienda antes y después del desplazamiento. En contraste con las viviendas en el municipio de origen, las viviendas en el municipio de recepción tienen un porcentaje mayor de hacinamiento alto, peores materiales de las paredes y pisos de mejor calidad. De otro lado, tal como es de esperarse dada la oferta más amplia de servicios públicos, el cubrimiento de energía eléctrica (88,8%), acueducto (66,2%) y alcantarillado (50,6%) se aumenta significativamente en los municipios de recepción. Pese a la expansión en el acceso a servicios públicos tras el desplazamiento forzoso, los indicadores de acceso de la población desplazada a energía eléctrica, acueducto y alcantarillado son bastante menores que aquellos de la población indigente urbana: 98,9%, 94,8% y 78,3%, respectivamente²¹¹.

El efecto del desplazamiento sobre la asistencia escolar de los niños menores de 17 años arroja resultados opuestos, de acuerdo a la edad de los menores (ver el cuadro 3). Por un lado, la asistencia escolar de los menores entre 7 y 11 años de edad se incrementa considerablemente después del desplazamiento (52,1% *vs.* 81,5%). La mayor oferta educativa y las políticas de gratuidad escolar para la población desplazada parecen ser efectivas, al contribuir a incrementar en más de un 50% la asistencia escolar de este grupo de edad. Por otro lado, la presión para solventar las caídas en los ingresos de los hogares desplazados obliga a los menores entre 12 y 17 años a abandonar sus estudios, con los consecuentes altos costos en el futuro, los cuales son en muchos casos irreversibles. La asistencia escolar de este grupo de edad desciende del 74,2% al 68,3%, y cerca del 10,3% de los niños está vinculado a los mercados laborales. El tiempo, en lugar de mejorar la asistencia escolar y reducir la interrupción escolar, las agrava. La gráfica 4 ilustra cómo evolucionan la interrupción escolar y el trabajo infantil con el tiempo de asentamiento. Los resultados concuerdan con el desempeño del consumo y el ingreso. El tiempo de asentamiento no parece mejorar, sino empeorar, las condiciones económicas de la población desplazada, lo cual obliga a los hogares a adoptar estrategias costosas, como interrumpir la educación de los hijos mayores y vincularlos a los mercados laborales. Ambas gráficas muestran que la interrupción escolar y la vinculación de los menores a los mercados laborales se incrementan de manera pronunciada, conforme pasa el tiempo de asentamiento.

211 *Ibid.*

Gráfica 4. Evolución de la interrupción escolar y el trabajo infantil con el tiempo de asentamiento, menores entre 12 y 17 años



Fuente: cálculos de la autora con base en ENDH (2004).

El cubrimiento de los servicios de salud mejora notablemente en el municipio de recepción. Antes del desplazamiento, el cubrimiento de los servicios de salud era del 52,5%, y en el municipio de recepción dicho indicador alcanza un 73,2%. Más aún, el acceso de la población desplazada a los servicios de salud es superior, en contraste con la población pobre urbana, cuya tasa de acceso es del 54,3%²¹². La amplia cobertura de los servicios de salud para la población desplazada puede obedecer al diseño de la política pública en este tema. Para ser cubierto por los servicios de salud, el único requisito es estar registrado en el RUPD y no deben incurrir en costos adicionales. La facilidad para acceder a estos programas ha derivado en un cubrimiento bastante satisfactorio.

Los resultados descritos en los párrafos anteriores permiten identificar los cambios en el bienestar producidos por el desplazamiento. Es claro que el desplazamiento forzoso afecta seriamente la capacidad de generar ingresos de la población desplazada y, como resultado, el ingreso y el consumo caen de manera pronunciada, y el tiempo no parece contribuir a mejorar estos indicadores. Ello deriva en malas condiciones de la vivienda y obli-

ga a los hogares a adoptar estrategias costosas en el largo plazo, como la interrupción escolar. De otro lado, la mayor oferta de servicios estatales expande el acceso de la población desplazada a la salud, la educación y los servicios públicos. Pareciera ser que la asistencia estatal para la población desplazada no enfrenta obstáculos, al expandir los servicios sociales típicamente prestados por el Estado (educación y salud), mientras que la asistencia diseñada especialmente para esta población, la estabilización socioeconómica, aún sería muy incipiente.

3. Determinantes del bienestar: consumo, ingreso, empleo y asistencia educativa

La sección anterior describe los cambios en bienestar producidos por el desplazamiento forzoso y las condiciones económicas de la población desplazada en los municipios de recepción. Es necesario, sin embargo, extender el análisis anterior para identificar cómo las dinámicas que generaron el desplazamiento, el proceso de migración, las características socioeconómicas de los hogares y la tenencia de capital humano, físico y social determinan las condiciones económicas de la población desplazada. Al identificar los determinantes del bienestar, es posible afinar las políticas públicas dirigidas hacia esta población. Para ilustrar, las estimaciones de los determinantes del bienestar identifican los grupos más vulnerables de la población desplazada o las variables susceptibles de ser modificadas por políticas públicas que contribuyen a mejorar el bienestar de la población desplazada. El objetivo de esta sección es entonces identificar los determinantes del bienestar de la población desplazada. Para alcanzar tal objetivo, estimo regresiones econométricas para el consumo agregado, el consumo de alimentos, la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia, la probabilidad de ser desempleado y la probabilidad de asistencia educativa.

El bienestar de los hogares desplazados, medido por el consumo y el ingreso laboral por adulto equivalente, está determinado por las dinámicas que generaron el desplazamiento del hogar i (D_i), las estrategias de migración (M_i), el capital humano del hogar (H_i), sus características socioeconómicas (Z_i), su capacidad para producir ingresos (I_i), los activos físicos (A_i), el capital social (S_i) y la participación en programas de generación de ingresos (B_i).

Las dinámicas generadoras del desplazamiento (D_i) modifican la estructura del hogar y la tenencia de activos y pueden, por tanto, determinar el bienestar de los hogares en el municipio de recepción. El desplazamiento reactivo, por ejemplo, implica una migración apresurada e impide así que el hogar planee adecuadamente su traslado a un nuevo municipio;

por lo tanto, los instrumentos de los hogares para adaptarse al municipio de recepción se restringen, y también su capacidad para generar ingresos. El grupo responsable del desplazamiento también puede afectar de manera diferencial el bienestar de la población desplazada. Los grupos guerrilleros y paramilitares usan tácticas diferentes para expulsar a la población desplazada, atacan ciertas zonas del país de acuerdo a sus intereses estratégicos y su capacidad de destrucción, y el daño no es homogéneo. Todo ello implica una alta variación en el impacto inmediato sobre sus víctimas y en la capacidad futura de la población desplazada para iniciar una nueva vida en el municipio de recepción.

El desplazamiento intramunicipal y el tiempo de asentamiento, estrategias de migración de los hogares (M_i), son también determinantes del bienestar en el municipio de recepción. Al migrar en el mismo municipio de origen, los costos de la migración son menores, pues las familias pueden proteger sus activos y continuar explotándolos para devengar ingresos adicionales. De otro lado, las personas pueden migrar cerca de sus predios, porque consideran el desplazamiento como un evento temporal, y así, retornar tendría un costo menor. En este caso, es posible que los hogares decidan no invertir tiempo ni recursos en el proceso de asentamiento y sus condiciones de bienestar sean entonces bastante precarias. El tiempo de asentamiento en el municipio de recepción es otro factor determinante de las condiciones de bienestar. Es probable que, a medida que el asentamiento en el nuevo municipio se consolida, las condiciones de las familias mejoren: poco a poco se crean nuevos vínculos laborales, las redes sociales se expanden, se obtiene ayuda estatal, se acumulan activos y la ciudad se conoce mejor. Las estadísticas descriptivas revelan, empero, que el tiempo de asentamiento ejerce un efecto casi imperceptible y en forma de u-invertida; ello implica que durante los primeros años hay una leve mejoría y después las condiciones se deterioran de nuevo.

El bienestar económico está también mediado por el capital humano de los miembros del hogar (H_i). Altos niveles de capital humano son instrumentales para adaptarse más fácilmente a los nuevos municipios, para vincularse a trabajos de mejor calidad, para conectarse con redes sociales y para acceder a los beneficios del Estado. El capital formal, representado por los años de escolaridad del jefe del hogar, y el capital informal, representado por la vinculación a labores agrícolas antes del desplazamiento, son las variables incluidas en las regresiones. Los años de escolaridad, al significar una mayor capacidad para competir en los mercados urbanos, contribuyen a expandir los ingresos de los hogares y a mejorar, por ende, su bienestar. La dedicación a actividades agrícolas, por otro lado, son un obstáculo para competir en los mercados laborales urbanos. La experiencia agrícola no es valorada en los mercados urbanos y el desplazamiento

causa entonces una depreciación del capital humano no formal, disminuyendo los retornos que se obtienen de éste.

Otro determinante del bienestar son las características socioeconómicas de los hogares desplazados (Z_i). El género del jefe del hogar, los hogares con jefatura femenina debido al desplazamiento, la pertenencia a minorías étnicas, la edad del jefe del hogar y la tasa de dependencia son variables que influyen en la capacidad productiva de los hogares y en su bienestar. El impacto de la jefatura femenina sobre el bienestar de los hogares no es fácil de establecer *a priori*. Los hogares encabezados por mujeres tienen menos miembros generando ingresos y su condición de mujeres puede significar una mayor vulnerabilidad, pero las mujeres son más flexibles para aceptar trabajos, su experiencia en labores domésticas es más valorada para emprender ocupaciones urbanas y pueden ser focalizadas con mayor probabilidad por la asistencia para la población desplazada. Los hogares encabezados por mujeres debido al desplazamiento, es decir, familias cuyo jefe del hogar fue asesinado o abandonó el hogar, sí son extremadamente vulnerables: la mujer se convierte de un momento a otro en la principal proveedora económica del hogar, las tasas de dependencia se incrementan, deben asumir papeles para los cuales no estaban preparadas (por ejemplo, solicitar créditos y acudir a solicitar ayuda estatal) y están enfrentando el trauma de los eventos vividos. Estudios cualitativos han encontrado que las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes) enfrentan condiciones muy precarias en los municipios de recepción, debido a la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno cultural, a la fuerte ruptura cultural que significa el desplazamiento y a barreras idiomáticas para los grupos indígenas²¹³. La edad del jefe del hogar y la tasa de dependencia, por último, son consideradas tradicionalmente como determinantes del bienestar y denotan la vulnerabilidad del hogar.

La capacidad del hogar para generar ingresos es esencial para alcanzar un mayor bienestar económico. Dos conjuntos de variables se incluyen: las variables relacionadas con los mercados laborales (I_i) y las variables relacionadas con el capital físico (A_i). Las variables relacionadas con los mercados laborales reflejan la habilidad de los hogares para vincularse a los mercados laborales urbanos y devengar ingresos. Para el consumo agregado se incluye una variable dicótoma que identifica si el jefe del hogar está desempleado, y para el ingreso laboral se incluyen variables dicótomas para la ocupación laboral. Las variables relacionadas con el capital físico reflejan los retornos que pueden derivar los hogares de sus activos. Las tierras en el municipio de origen y los nuevos activos en el

213 ACNUR, 2003.

municipio de recepción son capital físico que puede poseer un hogar desplazado y del cual puede derivar retornos. Un alto porcentaje de la población desplazada tenía acceso formal o informal a la tierra y algunos aún pueden controlar sus tierras y presumiblemente extraer rentas de las mismas. Con el fin de captar esto, las estimaciones incluyen el porcentaje de tierras que aún controla el hogar desplazado. Los activos en el municipio de recepción se caracterizan como el valor de los activos en el municipio de recepción.

Al proveer apoyo en momentos de crisis, reducir los costos de búsqueda laboral y ayudar en el proceso de asentamiento de los hogares desplazados, el capital social (S_i) contribuye a incrementar el bienestar económico de dicha población. La participación en organizaciones formales, los contactos de familiares y amigos en el municipio receptor y el acceso a créditos informales son variables que representan diversas dimensiones del capital social de las familias. Las organizaciones formales pueden ser instrumentales para asesorar a la población desplazada en el acceso a la asistencia estatal, para contactarlos con oportunidades laborales y otorgarles microcréditos. La familia y los amigos pueden ser un soporte fundamental durante los primeros meses del desplazamiento, pues proveen alojamiento y alimentación y conectan a los miembros del hogar con oportunidades laborales. El acceso a créditos informales es una ayuda para mitigar choques y evitar así caídas graves en el consumo o para iniciar nuevas actividades productivas.

Por último, la participación en los programas de generación de ingresos (B_i) puede fortalecer una de las principales debilidades de la población desplazada: el deterioro de su capacidad productiva. El objetivo de los programas de generación de ingresos es expandir el ingreso de los hogares desplazados e impulsar su recuperación económica. Es importante entender si dichos programas son en efecto eficaces para mejorar el bienestar de los hogares desplazados. El capítulo VI realiza una evaluación detallada de los programas de generación de ingresos, pero en este capítulo y el siguiente también se analiza su impacto sobre las variables analizadas. Dado que la asignación de cupos en los programas de generación de ingresos no es un proceso aleatorio y depende también de las decisiones de los hogares desplazados, la variable que denota la participación en dichos programas es endógena. Para solucionar el problema de endogeneidad, se instrumentaliza la variable de participación en los programas de generación de ingresos con una variable dicótoma que identifica si los municipios son cubiertos por los programas de USAID. Los programas de generación de ingresos evaluados en este libro son financiados por USAID y el proceso de selección escoge primero los municipios beneficiarios de proyectos USAID en general y, una vez se seleccionan los muni-

cipios beneficiarios, los programas específicos, tal como el de generación de ingresos, se focalizan hacia ciertos grupos de la población. Ser beneficiario de los programas de generación de ingresos requiere, en primera instancia, que el municipio sea cubierto por los programas globales de USAID. Por ende, la probabilidad de ser beneficiario de los programas de generación de ingresos depende en buena medida de si la región está cubierta por proyectos de USAID, pero la presencia de proyectos de USAID no determina los niveles de bienestar de la población desplazada, ya que dicha presencia es reciente y no ha cambiado aún las condiciones económicas del municipio.

El bienestar de los hogares desplazados en el municipio de recepción (Y_i) está entonces definido por

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 M_i + \beta_3 H_i + \beta_4 Z_i + \beta_5 I_i + \beta_6 A_i + \beta_7 S_i + \beta_8 B_i + \varepsilon_i$$

donde Y_i es el bienestar del hogar i y está representado por el consumo agregado por adulto equivalente, el consumo de alimentos, el ingreso laboral o la probabilidad de estar ubicado por debajo de la línea de indigencia, y ε_i es un término aleatorio.

El cuadro 4 presenta los determinantes para el consumo agregado por adulto equivalente y para el consumo de alimentos. Se presentan resultados para estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinarios corregidos por heteroscedasticidad (MCO) y para regresiones de variables instrumentales (VI). La estructura familiar vulnerable, un perfil laboral inadecuado para las áreas urbanas, el capital social y el capital físico determinan el consumo de los hogares.

La fragilidad manifiesta de algunos grupos de hogares desplazados redundan en menores niveles de consumo. Tener un jefe del hogar que estaba dedicado a las actividades agrícolas en el municipio de origen implica menores niveles de consumo agregado, pero no ejerce ninguna influencia sobre el consumo de alimentos. Tal como se ha discutido en párrafos anteriores, dichos hogares, al no contar con experiencia laboral para ejercer los oficios urbanos y provenir seguramente de áreas rurales apartadas, enfrentan un difícil proceso de adaptación a la ciudad, el cual se refleja en niveles de bienestar bajos. La pertenencia a minorías étnicas y los hogares con jefes mayores también parecen sufrir una alta fragilidad: tanto el consumo agregado como el consumo de alimentos es menor para este grupo de hogares. Por último, los hogares con altas tasas de dependencia exhiben un menor consumo agregado, pero el efecto se diluye una vez se corrige el problema de endogeneidad.

Cuadro 4. Determinantes del consumo agregado y consumo de alimentos

(Mínimos Cuadrados Ordinarios y Variables Instrumentales)

Variables	Consumo agregado		Consumo de alimentos	
	MCO	VI	MCO	VI
	Coefficiente (t-estad)	Coefficiente (t-estad)	Coefficiente (t-estad)	Coefficiente (t-estad)
Beneficiario generación de ingresos	0,0730 (1,29)	-0,0906 (-0,26)	0,0882 (1,58)	-0,0831 (-0,23)
Desplazamiento intramunicipal	0,0009 (0,01)	-0,0009 (-0,01)	0,0361 (0,41)	0,0368 (0,41)
Desplazamiento reactivo	0,0324 (0,43)	0,0316 (0,42)	-0,0036 (-0,05)	-0,0058 (0,07)
Guerrilla: responsable desplazamiento	-0,0336 (-0,76)	-0,0288 (-0,63)	-0,0296 (-0,65)	-0,0237 (-0,50)
Paramilitares: responsable desplazamiento	0,0528 (1,19)	0,0556 (1,25)	0,0656 (1,45)	0,0689 (1,50)
Agricultura en origen	-0,0815 (-1,92)**	-0,0845 (-1,94)**	-0,0502 (-1,16)	-0,0527 (-1,21)
Tiempo de asentamiento	0,0000 (0,22)	0,0001 (0,51)	0,0000 (-0,03)	0,0000 (0,31)
Tiempo de asentamiento cuadrado	0,0000 (-0,44)	0,0000 (-0,65)	0,0000 (-0,30)	0,0000 (-0,51)
Jefatura masculina	0,0552 (1,17)	0,0641 (1,26)	0,0625 (1,28)	0,0720 (1,39)
Jefe del hogar abandonó o murió	0,0305 (0,39)	0,0484 (0,58)	0,0054 (0,07)	0,0242 (0,28)
Minorías étnicas	-0,1148 (-2,12)**	-0,1178 (-2,13)**	-0,1547 (-2,79)***	-0,1564 (-2,79)***
Edad jefe del hogar	-0,0547 (-5,30)***	-0,0537 (-4,99)***	-0,0452 (-4,44)***	-0,0443 (-4,24)***
Edad jefe del hogar cuadrado	0,0005 (4,69)***	0,0005 (4,28)***	0,0004 (4,05)***	0,0004 (3,76)***
Años escolaridad jefe	0,0066 (0,69)	0,0061 (0,62)	0,0009 (0,09)	0,0007 (0,07)
Tasa de dependencia	-0,2994 (-2,70)***	-0,3116 (-2,76)	-0,1162 (-1,03)	-0,1298 (-1,11)
Desempleo jefe del hogar	-0,1439 (-2,44)**	-0,1552 (-2,53)	-0,0306 (-0,52)	-0,0436 (-0,71)

(Continúa...)

Cuadro 4. Determinantes del consumo agregado y consumo de alimentos

Participa organizaciones – recepción	0,0402 (0,83)	0,0359 (0,72)	-0,0208 (-0,41)	-0,0228 (-0,45)
Contactos en recepción	0,0526 (1,13)	0,0498 (1,04)	0,0958 (2,06)**	0,0915 (1,91)*
Acceso a créditos informales	0,1490 (2,31)**	0,1511 (2,32)**	0,0627 (0,93)	0,0667 (0,98)
Logaritmo valor de activos – recepción	0,0274 (2,77)***	0,0313 (2,41)	0,0266 (2,53)***	0,0305 (2,32)**
Porcentaje de tierras, controlado por hogar	0,1539 (1,07)	0,1494 (1,02)	0,0501 (0,44)	0,0458 (0,39)
Constante	14,7834 (36,21)***	14,7032 (48,52)***	14,3563 (33,75)***	14,2756 (44,68)
Número de observaciones	1,805	1,805	1,695	1,695
R cuadrado	0,2183	0,2007	0,1875	0,1822

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La vinculación a los mercados laborales protege el consumo de los hogares. El consumo agregado es menor para los hogares con jefes desempleados. La significancia estadística de esta variable desaparece, sin embargo, una vez se instrumentaliza la participación en los programas de generación de ingresos.

El capital social parece actuar como un mecanismo efectivo para evitar caídas en el consumo de los hogares. Aquellos hogares con contactos en el municipio de recepción disfrutaban de un consumo de alimentos más alto; producto presumiblemente de las transferencias, ya sea en dinero o especie, que los familiares y amigos realizan a las personas desplazadas. Dichas transferencias no son, sin embargo, suficientes para expandir el consumo total del hogar. De otro lado, el acceso a créditos informales sí expande el consumo total del hogar y no afecta el consumo de alimentos. Es probable entonces que los hogares se apoyen en familiares y amigos para impedir caídas en el consumo de alimentos y en créditos informales para solventar otros gastos del hogar.

Los activos físicos del hogar, con la generación de retornos, también parecen proteger el consumo de los hogares. El consumo total y el consumo

de alimentos de los hogares crecen conforme aumenta el valor de los activos en el municipio de recepción. Acumular activos es entonces efectivo para mejorar las condiciones de bienestar de las familias desplazadas.

Los resultados de las estimaciones corroboran las conclusiones derivadas de las gráficas 1 y 3: el tiempo de asentamiento y la participación en los programas de generación de ingresos no influyen en ninguna medida los niveles de consumo de los hogares. Tal como se observa en la gráfica 1, un mayor tiempo de asentamiento en el municipio de recepción no significa un mayor consumo. La evidencia de este capítulo y de capítulos posteriores indica que los hogares adoptan estrategias para evitar caídas drásticas en el consumo, pues se comprometerían la salud y la productividad de los miembros del hogar. Para ello, recurren a donaciones, interrupción escolar, préstamos y fragmentación del hogar. Estas estrategias son efectivas para no permitir que el consumo descienda aun más, pero en el largo plazo se compromete la generación de ingresos futuros. Por ende, el tiempo de asentamiento, si bien debería implicar una consolidación en el municipio de recepción, no ejerce ninguna influencia, puesto que el impacto del desplazamiento es fuerte y coloca a los hogares en niveles de ingreso y consumo bastante menores; niveles que parecen retenerlos en trampas de pobreza difíciles de superar.

Además de analizar las variables que determinan el nivel de consumo de los hogares, es importante explicar cuáles hogares se ubican debajo de la línea de pobreza y de la línea de indigencia urbana, para así identificar grupos particularmente vulnerables. Para ello, estimo regresiones de la probabilidad de que un hogar esté por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Dado que más del 95% de la población desplazada está por debajo de la línea de pobreza, las estimaciones arrojan resultados poco interesantes y no se presentan acá. Pero es relevante identificar cuáles características prevalecen en el 5% que no es pobre: son hogares que no perdieron el principal proveedor como consecuencia del desplazamiento, con jefes más jóvenes, con menores tasas de dependencia y con acceso a créditos informales.

De otro lado, es importante identificar cuáles hogares están por debajo de la línea de indigencia en el municipio de recepción. Los resultados de esta probabilidad se presentan en el cuadro 5. Una estructura del hogar frágil, la no participación en programas de generación de ingresos, la llegada reciente al municipio de recepción y la carencia de activos son determinantes de la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia. Al igual que en los determinantes del consumo, la vulnerabilidad de la estructura del hogar empuja a los hogares por debajo de la línea de indigencia. La probabilidad de estar por debajo de dicha línea es mayor

para los hogares con jefes mayores y con altas tasas de dependencia. Ello significa que la edad y la tasa de dependencia no sólo determinan consumos menores sino también unos consumos inferiores a los de la línea de indigencia.

Cuadro 5. Determinantes de la probabilidad de estar debajo de la línea de indigencia

Variables	Probabilidad de estar debajo de la línea de indigencia	
	Probit	Probit VI
	Efecto marginal (t-estad)	Efecto marginal (t-estad)
Beneficiario generación de ingresos	0,0013 (0,05)	0,2768 (1,90)*
Desplazamiento intramunicipal	0,0730 (1,82)*	0,0750 (1,84)*
Desplazamiento reactivo	0,0214 (0,72)	0,0236 (0,77)
Guerrilla: responsable desplazamiento	0,0333 (1,42)	0,0262 (1,07)
Paramilitares: responsable desplazamiento	-0,0207 (-0,90)	-0,0291 (-1,25)
Agricultura en origen	-0,0025 (-0,11)	0,0006 (0,02)
Tiempo de asentamiento – días	0,0000 (-0,40)	-0,0001 (-1,70)*
Tiempo de asentamiento cuadrado – días	0,0000 (0,35)	0,0000 (1,31)
Jefatura masculina	0,0207 (0,82)	0,0064 (0,23)
Jefe del hogar abandonó o murió	-0,0158 (-0,39)	-0,0486 (-1,06)
Minorías étnicas	0,0360 (1,27)	0,0400 (1,36)
Edad jefe del hogar	0,0258 (5,41)***	0,0237 (4,68)***
Edad jefe del hogar cuadrado	-0,0003 (-5,09)***	-0,0002 (-4,22)***
Años escolaridad jefe	-0,0019 (-0,35)	-0,0013 (-0,23)
Tasa de dependencia	0,2787 (5,82)***	0,3014 (6,09)***

(Continúa...)

Cuadro 5. Determinantes de la probabilidad de estar debajo de la línea de indigencia

Desempleo jefe del hogar	0,0199 (0,70)	0,0379 (1,23)
Participa organizaciones – recepción	0,0052 (0,23)	0,0088 (0,38)
Contactos en recepción	-0,0308 (-1,41)	-0,0315 (-1,38)
Acceso a créditos informales	-0,1092 (-3,01)***	-0,1129 (-2,99)***
Logaritmo valor de activos – recepción	-0,0062 (-1,32)	-0,0121 (-2,03)**
Porcentaje de tierras, controlado por hogar	-0,1712 (-2,30)**	-0,1626 (-2,08)**
Constante	0,0073 (0,04)	0,0982 (0,59)
Número de observaciones	1,913	1,913
R cuadrado	0,2312	0,1851

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La participación en programas de generación de ingresos y el tiempo de asentamiento, sin significancia estadística en el caso del consumo, reducen la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia. Si bien los programas de generación de ingresos no contribuyen a expandir el consumo de los hogares, sí son efectivos para prevenir alcanzar una situación crítica, como descender por debajo de la línea de indigencia. El cuadro 5 muestra cómo, tras instrumentalizar esta variable, el impacto de los programas de generación de ingresos no sólo es estadísticamente significativo; también el tamaño del impacto es considerable: los hogares beneficiarios de dichos programas enfrentan una probabilidad 28% menor de caer en la indigencia. Dado que no se están evaluando los impactos de largo plazo, es posible que los programas de generación de ingresos en el corto plazo no sean efectivos para expandir el consumo, pero sí actúen como mecanismo para proteger el consumo de los hogares y evitar caídas pronunciadas. De igual manera, un proceso más consolidado en el municipio de recepción disminuye la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia, pero su efecto es apenas perceptible.

El capital, tanto físico como social, aparece de nuevo como un factor determinante en las condiciones de bienestar de la población desplazada.

Los activos físicos en origen, representados por el porcentaje de tierras aún en control del hogar, y en recepción, representados por el valor de activos en recepción, contribuyen considerablemente a prevenir caídas por debajo de la línea de indigencia. Sin duda, los retornos que se obtienen de los activos físicos aumentan el ingreso, expanden el consumo y permiten a los hogares desplazados alcanzar un mayor bienestar. El capital social, representado por el acceso a créditos informales, reduce asimismo la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia, presumiblemente, al actuar como un mecanismo de mitigación de riesgos²¹⁴.

¿Quiénes están empleados y percibiendo mejores salarios? Los cuadros 6 y 7 presentan los determinantes de la probabilidad de estar desempleado y del ingreso laboral. La estructura del hogar, la participación en programas de generación de ingresos, el tiempo de asentamiento, el capital humano y el capital social son variables determinantes de la probabilidad de estar desempleado.

Los hogares con jefes mayores, que perdieron el jefe debido al desplazamiento y dedicados a la agricultura antes del desplazamiento están desempleados con más frecuencia. Pese a contar con mayor experiencia laboral, los jefes de hogar de más edad, al ser presumiblemente menos flexibles en el proceso de adaptación y aprender con más dificultad los nuevos oficios, enfrentan más obstáculos para vincularse a los mercados laborales. Si bien las mujeres que asumieron la jefatura del hogar debido al desplazamiento son las principales proveedoras del hogar, la probabilidad de estar desempleadas es mayor, pues su poca experiencia laboral, sus débiles conexiones con redes sociales y la necesidad de velar por el bienestar de sus hijos les impiden acceder fácilmente a los mercados laborales. La dedicación a la agricultura en el municipio de origen, capital humano informal valioso en las áreas rurales de Colombia, es poco relevante para las ocupaciones urbanas y deriva entonces en tasas de desempleo más altas para este tipo de personas.

De otro lado, la probabilidad de estar desempleado es más baja para los hogares con menores de 12 años, los beneficiarios de los programas de generación de ingresos y los hogares vinculados con organizaciones formales. La presión que ejercen unas altas tasas de dependencia obliga a los hogares a vincularse a los mercados laborales con pocas consideraciones acerca de la calidad del trabajo. Tal como se observa en los cuadros 6 y 7, la tasa de dependencia, si bien aumenta la probabilidad de estar empleado, disminuye los ingresos laborales. Los programas de generación de ingresos aumentan, en efecto, la probabilidad de vinculación a los merca-

214 Un análisis detallado del capital y su contribución en el bienestar de los hogares desplazados se presenta en el siguiente capítulo.

dos laborales. Por último, dado que las organizaciones formales pueden actuar como intermediarios laborales y reducir así los costos de búsqueda laboral y las asimetrías de información, la participación en dichas organizaciones parece ser un canal efectivo para conseguir empleo.

Cuadro 6. Determinantes de la probabilidad de ser desempleado

Variables	Probit	VI Probit
	Coefficiente (t-estadístico)	Coefficiente (t-estadístico)
Beneficiario generación de ingresos	-0,3430 (-4,09)***	-2,0328 (-3,51)***
Jefatura masculina	-0,1009 (-1,24)	0,0456 (0,46)
Jefe del hogar abandonó o murió	0,0040 (0,03)	0,2604 (1,85)*
Minorías étnicas	-0,0537 (-0,55)	-0,0754 (-0,93)
Años escolaridad	0,0043 (0,26)	0,0042 (0,31)
Agricultura en origen	0,1405 (1,85)*	0,0152 (0,16)
Edad	0,0422 (2,91)***	0,0465 (3,51)***
Edad al cuadrado	-0,0005 (-2,97)***	-0,0005 (-4,00)***
Número menores de 12 años	-0,0182 (-0,73)	-0,0374 (-1,78)*
Enfermo o discapacitado en el hogar	-0,0385 (-0,32)	-0,1737 (-1,63)*
Tiempo de asentamiento – días	-0,0007 (-6,19)***	0,0000 (-0,12)
Tiempo de asentamiento cuadrado – días	0,0000 (4,46)***	0,0000 (0,42)
Participa organizaciones – recepción	-0,2501 (-3,16)***	-0,2415 (-3,00)
Contactos en recepción	-0,0553 (-0,75)	-0,0952 (-1,56)
Constante	-1,4804 (-3,84)***	-1,3993 (-3,24)
Número de observaciones	2,238	2,238
R cuadrado	0,1059	

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Cuadro 7. Determinantes del ingreso laboral
(Mínimos Cuadrados Ordinarios y Variables Instrumentales)

Variables	MCO	VI
	Coefficiente (t-estadístico)	Coefficiente (t-estadístico)
Beneficiarios generación de ingresos	0,2359 (4,21)***	0,9238 (3,06)***
Desplazamiento intramunicipal	-0,0409 (0,32)	-0,0313 (-0,23)
Desplazamiento reactivo	-0,1017 (-1,72)*	-0,1014 (-1,56)
Guerrilla: responsable desplazamiento	-0,1260 (-2,39)**	-0,1425 (-2,60)
Paramilitares: responsable desplazamiento	-0,0387 (-0,69)	-0,0706 (-1,20)
Agricultura en origen	-0,2082 (-3,95)***	-0,2107 (-3,84)***
Tiempo de asentamiento – días	0,0004 (4,83)***	0,0003 (2,38)**
Tiempo de asentamiento – días	0,0000 (-4,10)***	-0,0000 (-2,42)**
Jefatura masculina	0,0946 (1,56)	0,0755 (1,17)
Jefe del hogar abandonó o murió	-0,1432 (-1,56)	-0,2207 (-2,30)**
Minorías étnicas	-0,1715 (-2,28)**	-0,1645 (-2,10)**
Edad jefe del hogar	-0,0473 (-4,50)***	-0,0554 (-4,76)***
Edad jefe del hogar cuadrado	0,0005 (4,76)***	0,0006 (5,00)***
Años escolaridad jefe	0,0080 (0,51)	0,0085 (0,54)
Años escolaridad cónyuge	0,0548 (3,57)***	0,0383 (2,26)**
Tasa de dependencia	-0,5749 (-5,19)***	-0,5289- (4,60)***
Agricultura: ocupación recepción	0,3825 (4,29)***	0,3604 (3,91)***
Comercio: ocupación recepción	0,4665 (6,94)***	0,4105 (5,51)***
Industria: ocupación recepción	0,6124 (4,76)***	0,6183 (4,84)***
Construcción: ocupación recepción	0,2101 (2,41)**	0,1760 (1,88)*

(Continúa...)

Cuadro 7. Determinantes del ingreso laboral

Transporte: ocupación recepción	0,6120 (3,70)***	0,5364 (3,14)***
Servicios: ocupación recepción	0,3188 (4,57)***	0,3152 (4,37)***
Participa organizaciones – recepción	0,0339 (0,65)	0,0481 (0,89)
Contactos en recepción	0,0996 (1,89)*	0,1113 (2,00)**
Constante	13,1411 (29,06)***	13,5544 (37,33)***
Número de observaciones	1.727	1.727
R cuadrado	0,2912	0,2375

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Ahora bien, es importante explorar cuáles hogares cuentan con una mejor capacidad para generar ingresos laborales. El cuadro 7 presenta los determinantes del ingreso laboral de los hogares. Algunas variables que son determinantes significativas del consumo y de la probabilidad de estar desempleado continúan siéndolo del ingreso laboral, y emergen otras nuevas variables: las características del desplazamiento, la vulnerabilidad del hogar, la participación en programas de generación de ingresos, el tiempo de asentamiento, el capital humano y el capital social determinan el ingreso laboral del hogar.

El tipo de desplazamiento y el actor responsable parecen no sólo causar la expulsión sino determinar la capacidad de los hogares para adaptarse al municipio de recepción. El desplazamiento reactivo, al ser intempestivo, impide tomar medidas para proteger los activos de los hogares y prevenir un deterioro de la capacidad productiva de los hogares. Ello se refleja en un coeficiente significativo y negativo de los determinantes del ingreso laboral, que pierde, sin embargo, significancia en la estimación de variables instrumentales. Asimismo, ser víctima de la guerrilla parece minar la capacidad de generación de ingresos de las familias desplazadas. Al asesinar con más frecuencia el jefe del hogar y despojar más tierras, los ataques de la guerrilla contra la población civil tienen un poder destructor mayor sobre la capacidad productiva de los hogares. Algo similar ocurre con los procesos de pérdida y acumulación de activos, es decir que la guerrilla parece llevar a cabo acciones con mayor poder de destrucción sobre la base económica de los hogares (ver el capítulo V).

La jefatura femenina debido al desplazamiento, la tasa de dependencia, la edad del jefe del hogar y la pertenencia a minorías étnicas significan menores ingresos laborales de los hogares. Los hogares con jefatura femenina, debido a la muerte o abandono del principal proveedor económico, perciben ingresos laborales más bajos. Dicho impacto parece no estar sólo mediado por el incremento en la tasa de dependencia, variable incluida en la estimación y con un coeficiente también negativo y significativo, sino por otras características no observables de estos hogares. Las mujeres que perdieron su cónyuge provienen de áreas rurales, pocas habían estado vinculadas formalmente a los mercados laborales y sus cónyuges eran los encargados de solicitar créditos y de establecer contactos con redes sociales. Al asumir la jefatura, las mujeres deben entonces ejercer un sinnúmero de responsabilidades para las cuales no estaban preparadas. Además de enfrentar más dificultades para vincularse a los mercados laborales, una vez se vinculan, los ingresos laborales son menores. La pertenencia a minorías étnicas implica un ingreso laboral menor, debido probablemente a las dificultades para adaptarse a un nuevo entorno cultural y laboral que difiere sustancialmente de su entorno tradicional.

Los programas de generación de ingresos, uno de cuyos objetivos es mejorar la perspectiva laboral de los hogares desplazados, parecen estar cumpliendo su cometido en este frente. Los beneficiarios de dichos programas enfrentan una menor probabilidad de estar desempleados (ver el cuadro 6) y generan mayores ingresos laborales. Es posible, por tanto, presumir que los beneficiarios de los programas de generación de ingresos se vinculan con más frecuencia y facilidad a los mercados laborales, y los salarios de los trabajos a los cuales acceden son mejores. Esta conclusión sólo se aplica, empero, al corto plazo, pues la evaluación se concentra en un punto del tiempo, y el tiempo de participación en el programa es todavía corto. Es importante analizar si dichos beneficios son sostenibles y perduran en el largo plazo, para así permitir expansiones en el consumo de los hogares; algo que para los beneficiarios actuales no parece estar sucediendo.

Al ampliar las redes sociales y el conocimiento de los mercados laborales urbanos, el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción contribuye a mejorar los ingresos laborales de los hogares desplazados. Pero el efecto es apenas perceptible, y tras diez años de asentamiento, los hogares apenas se acercan a percibir los ingresos que devengaban en el municipio de origen. El contraste del impacto de los programas de generación de ingresos y el tiempo de asentamiento arroja una conclusión clara: la estrategia de no intervenir e impulsar a los hogares desplazados

no es efectiva, pues es evidente que su habilidad para generar ingresos no mejora suficientemente, a medida que se consolida el hogar en el municipio de recepción.

El capital humano produce el efecto predicho en párrafos anteriores. Los hogares con mayores niveles educativos, en particular, con un cónyuge más educado, perciben ingresos laborales superiores. De otro lado, el capital humano informal, es decir, la experiencia agrícola que adquieren antes del desplazamiento, no es relevante para los oficios urbanos y ello deriva en un menor ingreso laboral. La magnitud de este coeficiente es además elevada: por ejemplo, los hogares dedicados a actividades agrícolas en el origen están aun en mayor desventaja que aquellos que pertenecen a minorías étnicas, y en una situación similar a la de los hogares que perdieron el jefe del hogar debido al desplazamiento.

De nuevo, el capital social es un factor importante para incrementar las condiciones de bienestar de las familias desplazadas. Los contactos en el municipio de recepción, al proveer información acerca de oportunidades laborales y recomendaciones frente a posibles empleadores, implican unos ingresos laborales más altos. Similar a los programas de generación de ingresos, es probable que los contactos en recepción sean efectivos para incrementar la probabilidad de conseguir empleo y para engancharse en trabajos de mejor calidad, mejorando así los salarios.

Para terminar, analizo la asistencia escolar de los menores desplazados entre 7 y 11 años de edad y entre 12 y 17 años. Los resultados de las estimaciones probit y probit de variables instrumentales se presentan en el cuadro 8. Incluyo como determinantes características de la estructura del hogar, la pertenencia a minorías étnicas, la educación de los padres, el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción y variables proxy del capital social.

¿Cuáles hogares reportan una menor asistencia escolar de sus hijos? La pérdida del jefe del hogar como consecuencia del desplazamiento implica una menor asistencia escolar para los dos grupos de edades; a saber, entre 7 y 11 años y entre 12 y 17 años. Las explicaciones de una menor asistencia se pueden derivar fácilmente de los resultados presentados en párrafos anteriores. Los hogares encabezados por mujeres tras la muerte o abandono del jefe del hogar reportan tasas de desempleo superiores y perciben ingresos inferiores frente al promedio de la población desplazada; por ende, se deben apoyar en el trabajo de sus hijos para solventar los menores ingresos. La gratuidad escolar para los menores desplazados no es entonces suficiente para garantizar su asistencia escolar.

Cuadro 8. Determinantes de asistencia escolar: Modelo de Probabilidad Lineal

Variables	Entre 7 y 11 años		Entre 12 y 18 años	
	Probit	Probit VI	Probit	Probit VI
	Coefficiente (t-estadístico)	Coefficiente (t-estadístico)	Coefficiente (t-estadístico)	Coefficiente (t-estadístico)
Beneficiario generación de ingresos	0,0682 (2,69)***	0,3280 (0,76)	0,0622 (2,10)**	0,8040 (0,89)
Jefatura masculina	-0,0144 (-0,66)	-0,0269 (-0,88)	-0,0179 (-0,71)	-0,0401 (-0,99)
Jefe del hogar abandonó o murió	-0,0833 (-2,16)**	-0,1058 (-2,02)**	-0,1076 (-2,47)***	-0,1858 (-1,74)
Número de menores de 12 años	-0,0335 (-2,45)***	-0,0325 (-2,28)**	0,0232 (1,39)	0,0181 (0,90)
Número de menores entre 12 y 17	-0,0151 (-1,58)	-0,0198 (-1,59)	0,0104 (0,69)	0,0079 (0,43)
Tiempo de asentamiento	0,0003 (7,88)***	0,0003 (2,37)**	0,0002 (4,58)***	0,0000 (-0,16)
Tiempo de asentamiento cuadrado	0,0000 (-7,39)***	0,0000 (-3,28)***	0,0000 (-4,36)***	0,0000 (0,02)
Minorías étnicas	-0,0355 (-1,19)	-0,0285 (-0,91)	-0,0196 (-0,63)	-0,0360 (-0,81)
Años de educación – jefe del hogar	0,0103 (3,53)***	0,0093 (2,46)***	0,0100 (2,78)***	0,0085 (1,62)*
Años de educación – cónyuge	-0,0033 (-0,74)	-0,0046 (-0,93)	0,0041 (0,95)	0,0000 (0,00)
Participación organizaciones – recepción	0,0647 (3,21)***	0,0625 (2,83)***	0,0435 (1,73)*	0,0697 (1,60)*
Contactos en recepción	0,0038 (0,18)	0,0034 (0,16)	-0,0126 (-0,52)	0,0056 (0,15)
Orden del niño en el hogar	0,0312 (2,09)**	0,0381 (2,45)**	-0,0236 (-1,62)	-0,0147 (-0,68)
Constante	0,0828 (0,59)	0,0179 (0,11)	0,1093 (0,77)	-0,0205 (-0,09)
Número de observaciones	1,592	1,592	1,635	1,635
R cuadrado	0,1843	0,1273	0,1386	

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Tres factores parecen ser decisivos para proteger la asistencia escolar de los menores en los grupos de edad: la educación de sus padres, el tiempo de asentamiento y el capital social. Padres más educados, al conocer los

retornos futuros del capital humano y devengar probablemente más ingresos, intentan evitar la interrupción escolar de sus hijos. El tiempo de asentamiento, que refleja la consolidación del proceso de asentamiento, mejora la probabilidad de asistencia escolar. Tal como se observó en los resultados de las estimaciones anteriores, un mayor tiempo en el municipio de recepción significa una expansión del ingreso laboral y una menor probabilidad de estar desempleado, dos variables fundamentales para evitar que los niños menores deban contribuir en los procesos de generación de ingresos de los hogares. Asimismo, residir más tiempo en el municipio de recepción permite a los hogares conocer mejor las oportunidades para acceder a programas estatales y, así, aprovechar la oferta educativa en estos municipios. De nuevo, el capital social, representado por la participación en organizaciones formales, aumenta el bienestar de los hogares desplazados al promover la asistencia escolar de ambos grupos de menores. Los canales de contribución pueden ser diversos: más ingresos de la familia, redes sociales de apoyo, conocimiento de los programas de ayuda para la población desplazada y posibilidad de recibir créditos.

Para los niños entre 7 y 11 años también actúan los canales tradicionales determinantes de la asistencia escolar. Por un lado, la asistencia escolar disminuye para las familias con más número de niños menores de 12 años. Por otro lado, la probabilidad de asistencia escolar se reduce para menores con más hermanos mayores.

Los programas de generación de ingresos, si bien son efectivos para expandir el ingreso laboral, no son suficientes para evitar la deserción escolar. Para los dos grupos de edad, el impacto de los programas es positivo y significativo antes de instrumentalizar. Una vez se instrumentaliza, la variable pierde la significancia estadística. Cabe anotar, sin embargo, que, como se mencionó en párrafos anteriores, la evaluación se circunscribe a los impactos de corto plazo. Es probable que en el corto plazo los programas impulsen un incremento en el ingreso laboral, pero que éste no sea aún suficiente para permitir que los menores retornen a estudiar.

El análisis conjunto de las estimaciones anteriores arroja resultados interesantes. Primero, es claro que tres grupos de la población desplazada enfrentan condiciones económicas bastante precarias. Las personas dedicadas a actividades agrícolas en el origen, los hogares encabezados por mujeres tras la muerte o abandono del jefe del hogar y las personas mayores de 65 años tienen un menor consumo agregado, una mayor probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia, sus tasas de desempleo son más altas, perciben ingresos más bajos y la asistencia escolar de sus hijos es menos frecuente. Segundo, el capital social actúa claramente

como un mecanismo efectivo para mejorar las condiciones de bienestar de los hogares y como instrumento de mitigación de riesgo. Los contactos en el municipio de recepción aumentan el consumo de alimentos y el ingreso laboral; el acceso a créditos informales expande el consumo total del hogar y previene que los hogares estén por debajo de la línea de indigencia; y la participación en organizaciones formales significa una mayor vinculación a los mercados laborales y más asistencia escolar. Tercero, la consolidación en el municipio de recepción no es sinónimo de una mejoría en las condiciones económicas. El tiempo de asentamiento no influye en el consumo del hogar y, si bien aumenta el ingreso, la probabilidad de estar empleado y la asistencia escolar, su efecto es bastante parsimonioso. Cuarto, el impacto de los programas de generación de ingresos es positivo, pero insuficiente para evitar que los hogares adopten estrategias costosas en el largo plazo. Aunque los beneficiarios están empleados con más frecuencia y ganan ingresos laborales más altos, dichos ingresos no son suficientes para evitar que el consumo de los hogares sea bajo y para promover la asistencia escolar. Ambas estrategias, reducir consumo e interrumpir la educación, las adoptan los hogares para contrarrestar los menores ingresos y significan un descenso en los ingresos futuros del hogar.

C. Conclusiones

El objetivo del capítulo era responder tres preguntas: ¿Cómo afecta el desplazamiento forzoso el bienestar de sus víctimas? ¿Cuáles hogares se ven más afectados por el proceso de desplazamiento forzoso y cuáles son los factores que mejoran las condiciones de la población desplazada? ¿Deben ser los hogares desplazados beneficiarios de una discriminación positiva por parte de la política pública o simplemente ser cobijados por los programas tradicionales focalizados hacia la población pobre, y permitir que con el transcurrir del tiempo recuperen su bienestar anterior? En los párrafos siguientes intento contestar cada una de estas preguntas.

El análisis del capítulo es claro: el desplazamiento forzoso genera un impacto negativo sobre el bienestar de sus víctimas. Si bien el acceso a servicios sociales y públicos se incrementa, debido a la mayor oferta de éstos en áreas urbanas, el ingreso y el consumo descienden ostensiblemente y la presión por solventar dicha caída obliga a los hogares desplazados a adoptar estrategias costosas en el largo plazo, pues comprometen el consumo futuro y las posibilidades de salir de la pobreza. Los datos indican que las familias desplazadas recurren con frecuencia a mantener el consumo en niveles bajos, cerca de tres cuartas partes tienen un consumo inferior a la línea de indigencia urbana, y a la interrupción escolar, pese a ser cobijadas por programas de gratuidad escolar.

Las estimaciones econométricas identifican tres grupos cuyas condiciones son, sin duda, precarias. Los hogares que perdieron el jefe debido al desplazamiento y ahora son encabezados por mujeres, los hogares con jefes dedicados a la agricultura en el municipio de origen y los hogares con jefes mayores. Para todas las variables analizadas –el consumo total, el consumo de alimentos, el ingreso laboral, la probabilidad de estar desempleado y la asistencia escolar–, los tres grupos enfrentan condiciones peores. Las explicaciones son obvias. Asumir la jefatura del hogar, debido a la muerte o abandono del jefe del hogar, reviste varias dificultades: ejercer nuevas responsabilidades para las cuales no estaban preparadas las mujeres, enfrentar incrementos en las tasas de dependencia, ser muchas veces las únicas generadoras de ingresos del hogar y cargar el trauma de los eventos vividos. La dedicación a la agricultura antes del desplazamiento y los jefes mayores viven obstáculos similares. El capital humano de los primeros se deprecia en las áreas urbanas: la experiencia agrícola no es relevante para los oficios urbanos. El segundo grupo, si bien cuenta con más experiencia laboral, puede ser más inflexible para adaptarse a un nuevo entorno laboral y aprender nuevos oficios.

De otro lado, los activos físicos y el capital social emergen en todas las estimaciones como mecanismos de protección para evitar caídas adicionales en las condiciones de bienestar. Los activos físicos, ya sea los activos acumulados en el municipio de recepción o las tierras aún controladas por los hogares, significan un consumo mayor y una menor probabilidad de caer en la indigencia. El capital social, medido como participación en organizaciones formales, contactos en recepción y acceso a créditos informales, contribuye a mejorar todos los indicadores de bienestar analizados. Al actuar como instrumentos de aseguramiento contra riesgo, proveer hospedaje y alimentación, conectar a las familias con oportunidades laborales, suministrar información acerca de posibles ayudas y, en general, ayudar a los hogares en el proceso de adaptación, el capital social es definitivamente un mecanismo efectivo de protección. Cabe anotar que el desplazamiento forzoso causa un deterioro pronunciado de todos los tipos de capital, lo cual es preocupante, dados los resultados descritos. El análisis del deterioro del capital se aborda en el capítulo siguiente.

¿Es necesaria una intervención estatal para impulsar la recuperación de la población desplazada? Los resultados de este capítulo permiten entrever que una intervención es crucial para prevenir que la población desplazada caiga en trampas de pobreza difíciles de superar. Primero, las condiciones de la población desplazada son bastante precarias y, para muchos indicadores, incluso peores que las de la población indigente urbana. Es más, sólo un 5% de la población desplazada está ubicada por encima de

la línea de pobreza y tres cuartas partes están por debajo de la línea de indigencia urbana.

Segundo, los resultados son claros: dejar a la población desplazada a merced del tiempo no es una solución adecuada. La consolidación en el municipio de recepción no viene acompañada de una mejoría notoria en las condiciones de bienestar: el consumo permanece constante, los otros indicadores de bienestar reaccionan poco al paso del tiempo y tras unos años de asentamiento se deterioran de nuevo. Dos interpretaciones se pueden dar para la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo. Es posible, por un lado, que el choque del desplazamiento retenga a los hogares en trampas de pobreza imposibles de superar y, por ello, sus condiciones no mejoran con el tiempo. Por otro lado, Brück (2007) encuentra en Mozambique que las víctimas del conflicto se tornaban en exceso previsivas y, después de tres años de finalizado el conflicto, los hogares preferían mantener las estrategias de sobrevivencia adoptadas durante el conflicto. En el caso de la población desplazada, los bajos niveles de consumo pueden significar que los hogares desplazados prefieren mantener el consumo bajo para poder recuperar sus activos y en un futuro generar más ingresos. La evidencia del siguiente capítulo muestra, sin embargo, que esta segunda hipótesis es poco probable.

Tercero, los programas de generación de ingresos, a diferencia del tiempo de asentamiento, contribuyen a mejorar las condiciones de bienestar de las familias desplazadas. El impacto, sin embargo, parece circunscribirse a algunas variables y no previene que las familias adopten estrategias muy costosas para los ingresos de largo plazo: la disminución del consumo y la interrupción escolar.

Todos los puntos anteriores, más la frágil estructura de muchos hogares desplazados, podrían significar que la caída en bienestar como consecuencia del desplazamiento sea permanente y la población desplazada entre a engrosar las filas de los pobres crónicos. Las altas tasas de analfabetismo, la pérdida de activos, la interrupción escolar que se agrava con el tiempo, las malas condiciones de la vivienda, la viudez, debida al desplazamiento, y el alto porcentaje del gasto destinado a alimentos son características típicas de la pobreza estructural, y están presentes en la población desplazada. Ello, aunado a que tres cuartas partes de la población desplazada están por debajo de la línea de indigencia, permite inferir que salir de niveles tan bajos de consumo dotados de pocos elementos es bastante improbable. No intervenir crearía una población enfrentada a una pobreza estructural, altamente dependiente de la ayuda estatal y que, como resultado, prefiere residir en áreas urbanas donde la ayuda

asistencialista está disponible, tal como ha sucedido en otros países que han enfrentado conflictos (Goodhand, 2001).

La asistencia estatal se debe entonces concentrar en dos frentes. En primer lugar, las redes de protección social son imprescindibles, pues los hogares desplazados no están preparados para enfrentar choques adicionales, debido a sus bajos ingresos laborales y bajos niveles de consumo. En segundo lugar, se deben fortalecer los programas de generación de ingresos para impulsar que los hogares desplazados recuperen su capacidad productiva y reduzcan así la dependencia respecto a la ayuda estatal.

V

¿PUEDE LA POBLACIÓN DESPLAZADA RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CON EL PASO DEL TIEMPO?²¹⁵

A. Introducción

Las difíciles condiciones de la población desplazada son descritas en los capítulos anteriores. Los hogares desplazados sufrieron ataques deliberados de los grupos armados, huyeron intempestivamente para proteger sus vidas, vivieron eventos traumáticos, abandonaron sus inversiones y ahorros de toda una vida y sus condiciones en los municipios de destino son precarias. Las pérdidas de bienestar del desplazamiento son entonces sustanciales.

Pero, ¿cuánto perduran dichas pérdidas de bienestar? ¿Son simplemente una caída temporal en bienestar que, tras un período determinado, se disipa y la población desplazada recupera sus niveles anteriores de bienestar? El objetivo de este capítulo es examinar la habilidad de los migrantes forzados para recuperarse del choque causado por el desplazamiento. La pregunta central es si la superación del impacto del desplazamiento es una cuestión de tiempo o si, por el contrario, la superación debe ser impulsada por una asistencia externa.

La literatura económica sobre migración provee algunas respuestas a esta pregunta. Respuestas que, empero, no se aplican a la población desplazada, que tienen unas características distintas a los migrantes económicos. Los principales hallazgos de la literatura económica encuentran que, si bien los migrantes recientes perciben ingresos menores que la población nativa, tras diez años o más de asentamiento alcanzan o sobrepasan los ingresos de los nativos²¹⁶. Un estudio para Colombia de José Leibovich

215 Este capítulo se basa en Ibáñez y Moya, 2007, e Ibáñez y Moya, 2006a.

216 Chiswick, 1978, 1980.

(1996) encuentra un patrón similar: al arribar al municipio de destino, los migrantes reportan ingresos un 4,5% menores que los de los nativos, brecha que desaparece con el paso del tiempo. Las inversiones de los migrantes en capital humano específico del país receptor y la selección positiva que se presenta en la migración –los migrantes son más capaces y están más motivados que los nativos– redundan en una tasa de crecimiento superior de los ingresos laborales frente a los nativos, y en un eventual sobrepaso. Estudios posteriores identifican problemas metodológicos serios que invalidan parcialmente los resultados anteriores y evidencian que la rápida recuperación de los migrantes depende de su grupo étnico y de la “calidad” de los migrantes, en particular, de la capacidad de los migrantes para adquirir capital humano específico del país²¹⁷ (por ejemplo, idioma, cultura, costumbres).

Cabe entonces discutir las similitudes y divergencias entre los migrantes forzados y los migrantes económicos. Si ambos grupos de la población son similares, los hallazgos descritos en el párrafo anterior se podrían extender a la población desplazada y, tal como afirman algunos economistas y diseñadores de políticas, al ser similares no serían necesarias políticas públicas específicas para impulsar la recuperación después del desplazamiento. Bajo este precepto, la responsabilidad de recuperarse del impacto del desplazamiento recae sobre sí mismos, si se ignoran las obligaciones que impone el Derecho Internacional Humanitario.

Este supuesto es errado. Dos diferencias son evidentes entre la migración económica y la migración forzada. La primera diferencia es obvia: los primeros migran voluntariamente y los segundos migran forzadamente. Mientras que los migrantes económicos se trasladan en busca de ampliar sus oportunidades económicas, los migrantes forzados se trasladan para salvar sus vidas o después de ser víctimas de un evento violento. La segunda diferencia es consecuencia de las dinámicas mismas de cada proceso. Numerosos estudios han demostrado que la migración económica implica una “selección positiva”. Migran personas con niveles educativos más altos, menos adversas al riesgo y dispuestas a confrontar nuevos retos: se van los mejores de la región. Al arribar a su destino, estas características positivas contribuyen a impulsar una rápida recuperación²¹⁸. Los desplazados, por el contrario, sufren una “selección negativa”. Son expulsados como estrategia de guerra y sus principales características son

217 Stewart y Hyclak, 1984; Borjas, 1985; Borjas, 1994; Borjas, 1995; Carliner, 1996; Dustmann y Van Soest, 2001; Shields y Price, 2001.

218 Borjas, 1987, demuestra que la selección positiva de los migrantes no siempre sucede. Dicha selección depende de la distribución del ingreso en el país de origen, las condiciones políticas y de seguridad y las tasas de crecimiento, entre otras.

un obstáculo en los procesos de recuperación: sufren elevadas pérdidas de activos, su experiencia laboral es meramente rural, carecen de capital humano específico de las áreas urbanas, sus niveles de escolaridad son bajos y la familia se ha desintegrado muchas veces como consecuencia del desplazamiento. Al arribar a su destino, sus características se convierten en un obstáculo para iniciar procesos de recuperación.

Para analizar el proceso de recuperación de la población desplazada, el capítulo se concentra en dos variables económicas fundamentales en la generación de ingresos de los hogares: los activos y la habilidad para mitigar riesgos. Los activos, al generar retornos y actuar como instrumentos de aseguramiento contra riesgos, contribuyen a fortalecer y expandir la capacidad productiva de los hogares. El acceso a capital financiero y el aseguramiento con mecanismos formales e informales contra el riesgo protegen a los hogares frente a posibles choques e impiden que variaciones en los ingresos, como consecuencia de dichos choques, se trasladen a reducciones en el consumo. Los activos y los mecanismos de aseguramiento son, por ende, esenciales para garantizar una senda de ingresos creciente durante el ciclo de vida de los hogares y para evitar caídas en trampas de pobreza. Al perjudicar estas dos variables económicas, el desplazamiento forzoso mina la capacidad de los hogares para sobreponerse y recuperar su senda de crecimiento económico.

B. Los activos, el aseguramiento contra riesgos y las trampas de pobreza

Diversas formas de capital contribuyen en la generación de ingresos de los hogares. El capital físico, tales como la tierra u otros activos productivos, es un insumo en el proceso productivo de las familias, produce retornos y permite la acumulación de nuevo capital. El capital financiero provee recursos líquidos para iniciar negocios, para acumular más capital productivo o para invertir en capital humano. El capital humano incrementa los retornos de participar en los mercados laborales, diversifica las oportunidades económicas y es de suma importancia para los hogares pobres cuando carecen de capital físico para generar ingresos. Asimismo, las inversiones en capital humano permiten a los agentes económicos transitar de trabajos de baja productividad y bajos salarios a trabajos de alta productividad y altos salarios²¹⁹. Al apoyar el proceso de búsqueda la-

219 Adato *et al.*, 2006; Krishna *et al.*, 2006; Barrett y McPeak, 2006; Barrett *et al.*, 2004; Sen, 2003.

boral, permitir el acceso a mercados financieros y proporcionar ayuda para mitigar las crisis, el capital social contribuye a expandir el ingreso²²⁰.

La acumulación de activos cuando los retornos son decrecientes conduce, según la economía neoclásica, a una convergencia en las trayectorias económicas de los hogares. Los retornos de los activos para acervos pequeños crecen a una tasa más alta que los retornos de grandes acervos de capital, lo cual permite que la brecha entre hogares pobres y ricos desaparezca en un momento dado. Los ingresos de todos los hogares eventualmente se igualan y sus niveles no están determinados por las condiciones iniciales de las familias. Por consiguiente, familias inicialmente pobres dejarían de serlo en un futuro, sin necesidad de intervenciones explícitas.

Es claro que las predicciones de la teoría neoclásica no siempre se cumplen. La presencia de retornos crecientes, la imposibilidad de acceder a los mercados financieros, la indivisibilidad de las inversiones o la adopción de algunos comportamientos impiden que los hogares acumulen suficientes activos para sobrepasar umbrales de activos, lo que los obliga a permanecer en trayectorias económicas de bajos ingresos²²¹. Los ingresos y el estatus económico de los hogares están entonces determinados no sólo por las condiciones actuales sino por las condiciones iniciales: un hogar pobre puede no superar nunca la pobreza o permanecer en ella por un lapso de tiempo prolongado.

Alcanzar una senda de ingresos más alta para los hogares con una base de activos pequeña y con dificultades para acceder a los mercados financieros es casi imposible. Los rendimientos de una base pequeña de capital son bajos y, al sólo cubrir los gastos de subsistencia del hogar, no se puede ahorrar para adquirir nuevo capital. Si los hogares cuentan con un acceso ilimitado a los mercados financieros, los bajos rendimientos de los activos se compensan con créditos; créditos que se pueden destinar a la acumulación de nuevos activos y, así, incrementar los retornos para cruzar el umbral de activos que atrapaba al hogar en un equilibrio de bajos ingresos. Los mercados de crédito no están, sin embargo, disponibles para los hogares pobres que carecen de los activos requeridos como garantías. Otras estrategias pueden ser utilizadas para financiar la adquisición de nuevo capital: contraer el consumo de corto plazo y asignar esos recursos para consolidar una base de activos. Pero adoptar dicha estrategia no es una posibilidad cuando el consumo de los hogares apenas cubre las necesidades básicas. La imposibilidad de solventar la escasez de recursos con créditos o con contracciones del consumo dificulta la acumulación de

220 Adato *et al.*, 2006; Barrett *et al.*, 2004; Little *et al.*, 2006.

221 Galor y Zeira, 1993; Durlauf, 1992; Mookherjee y Ray, 2002; Carter y Barrett, 2006.

activos, frena la expansión del ingreso, coloca a los hogares en sendas de bajos ingresos y los condena, por ende, a la pobreza²²². Además de crear trampas de pobreza, las desigualdades iniciales se reproducen y se profundizan con el tiempo²²³.

Todo lo anterior implica que la pobreza estructural está fuertemente relacionada con la falta de activos. Evidencia empírica proveniente de encuestas longitudinales y de estudios cualitativos muestra que la carencia de activos determina la pobreza estructural, mientras que una base sólida de activos es un impulso a los hogares para salir de la pobreza²²⁴. Es más, los activos son mecanismos fundamentales de movilidad y de superación de la pobreza cuando los mercados laborales son rígidos y las tasas de desempleo son altas²²⁵.

Aunados a las contribuciones en los procesos productivos, algunos activos pueden, en ciertos momentos, ser útiles como mecanismos para mitigar choques esperados e inesperados²²⁶. Con el fin de prevenir el impacto de choques, los hogares recurren con frecuencia a métodos de aseguramiento en los mercados formales. Por ejemplo, las grandes compañías se aseguran frente a posibles incendios y los hogares compran seguros de salud para cubrir los costos de una enfermedad grave. Dichos mecanismos de aseguramiento no siempre están disponibles para los hogares pobres, que, como alternativa, acumulan activos no productivos para convertirlos en capital líquido cuando los choques suceden. Un ejemplo clásico y común en las áreas rurales de los países en desarrollo es la acumulación de ganado como mecanismo de aseguramiento²²⁷. Una vez sucede un choque (por ejemplo, pérdida de la cosecha, enfermedad grave, evento climático extremo), los hogares recurren a los activos no productivos, los convierten en capital líquido y, así, financian temporalmente su consumo.

La protección de los activos es, por ende, esencial²²⁸. Perder activos implica un deterioro de la capacidad productiva de los hogares y una alta

222 Carter y Barrett, 2006; Reardon y Vosti, 1995; Rosenzweig y Binswanger, 1993.

223 Zimmermann y Carter, 2003.

224 Krishna *et al.*, 2006; Adato *et al.*, 2006; Barrett *et al.*, 2004; Little *et al.*, 2006; Hulme y Shepherd, 2003; Barrientos y Shepherd, 2003; Sen, 2003; Carter y May, 1999.

225 Hulme y Shepherd, 2003.

226 Little *et al.*, 2006.

227 Helme y Shepherd, 2003; Fafchamps *et al.*, 1998; Rosenzweig, y Woping, 1993; Corbett, 1988.

228 Corbett, 1988.

vulnerabilidad frente a eventuales choques. Diversas estrategias son adoptadas por los hogares para proteger los activos. Por un lado, los mercados financieros y los instrumentos formales de aseguramiento permiten aislar de los choques la base de activos²²⁹. Sin embargo, los mercados financieros y los instrumentos de aseguramiento no están, por lo general, disponibles para los hogares pobres, que deben adoptar otras estrategias bastante costosas para preservar sus activos en los momentos de crisis²³⁰. Una estrategia recurrente es sacrificar consumo de corto plazo, para evitar las ventas irreversibles de activos, llevando a los hogares a suavizar la tenencia de activos e induciendo una alta variabilidad en el consumo²³¹.

La dificultad para acceder a los mercados de riesgos o a los mecanismos formales de aseguramiento de riesgos no sólo reviste de implicaciones a los procesos de acumulación de activos. Al carecer de estos instrumentos, los hogares están más expuestos a riesgos esperados e inesperados. El capital físico, los mercados financieros y los instrumentos de aseguramiento formal permiten también aislar de variaciones en el ingreso las decisiones de consumo. Es así como los hogares pueden tomar sus decisiones de consumo intertemporal y evitar que choques anticipados modifiquen estas decisiones. Por ejemplo, si los hogares anticipan los gastos de educación de los hijos, no deben modificar sus decisiones de consumo para solventarlos. De otro lado, los impactos inesperados, como la pérdida de empleo o una enfermedad grave, se pueden mitigar con créditos, seguros o mecanismos informales de riesgo. Dichos mecanismos permiten evitar que las variaciones en el ingreso se trasladen a las decisiones de consumo. El consumo estaría entonces dictado por las necesidades y las preferencias y no por los ciclos del ingreso, lo cual permite a los hogares suavizar su consumo²³². Esto se conoce como la teoría del ingreso permanente.

Al igual que la convergencia de las trayectorias económicas, la teoría del ingreso permanente pocas veces se cumple. Suavizar consumo es difícil cuando los choques no son posibles de anticipar: muchos hogares, en particular en los países en desarrollo, no tienen acceso ilimitado a los mercados de crédito y a los instrumentos formales de aseguramiento²³³. Para reemplazar estas alternativas, los hogares pobres de los países en

229 Carter y Barrett, 2006.

230 Townsend, 1994; Ligon *et al.*, 2001; Foster y Rosenzweig, 2001; Fafchamps y Gubert, 2006.

231 Carter y Barrett, 2006; Hoddinott, 2006; Barrett *et al.*, 2004; Zimmermann y Carter, 2003.

232 Deaton, 1992.

233 Jacoby y Skoufias, 1997, y Kohora y Horioka, 2006.

desarrollo recurren a mecanismos informales de aseguramiento de riesgo que, si bien no aseguran completamente el riesgo, permiten suavizar bastante el consumo, pese a la usual volatilidad del ingreso en estos países²³⁴.

Los mecanismos informales de riesgo son usados con frecuencia en los países en desarrollo. Las caídas en el ingreso se compensan con la venta de activos, las remesas o los créditos informales²³⁵. Las transferencias recíprocas, tales como los regalos y préstamos, son también instrumentos usuales para suavizar el consumo en los países en desarrollo²³⁶. Por último, decisiones en el seno del hogar, como la reorganización de las responsabilidades en el hogar, el incremento en la participación en el mercado laboral de algunos de sus miembros y la reducción de las porciones alimenticias, son algunas de las estrategias adoptadas por los hogares para aislar el consumo de las variaciones en el ingreso²³⁷.

Los mecanismos informales de riesgo no son, sin embargo, completamente eficientes para suavizar el consumo y reducir los riesgos inherentes a la volatilidad del ingreso²³⁸. Al ser informales, los mecanismos descritos en el párrafo anterior suceden entre individuos con relaciones personales cercanas. Sólo entre personas con fuertes nexos personales surgen los sentimientos altruistas necesarios para realizar un crédito informal o transferir recursos que mitiguen la crisis. Los contactos personales y cercanos permiten asimismo que estos mecanismos sean recíprocos (“yo te presto y tú me prestas cuando así lo necesite”) y que se generen incentivos para devolver el préstamo²³⁹. Dado que los mecanismos de aseguramiento informal emergen entre individuos cercanos y en redes sociales pequeñas, los ingresos de los individuos son similares, su variación está altamente correlacionada y el aseguramiento que proveen puede no ser completo. Como ilustración, cuando el grupo social enfrenta el mismo choque (por ejemplo, una mala cosecha, debido a cambios en el clima), no es posible contar con el apoyo de amigos y familiares, pues están enfrentando dificultades similares.

Enfrentar impactos o choques inesperados, sin contar con una estructura adecuada de aseguramiento, obliga a los hogares a adoptar estrategias

234 Morduch, 1999; Fafchamps y Gubert, 2006, y Fafchamps y Lund, 2002.

235 Rosenzweig y Stark, 1989; Fafchamps *et al.*, 1998.

236 Morduch, 2002; Fafchamps y Lund, 2002.

237 Fafchamps *et al.*, 1998; Jalan y Ravallion, 2001.

238 Townsend, 1994; Ligon *et al.*, 2001; Foster y Rosenzweig, 2001; Fafchamps y Gubert, 2006.

239 Townsend, 1994; Fafchamps y Lund, 2002; Fafchamps y Gubert, 2006.

costosas en el corto y largo plazo. Cuando los hogares no están asegurados frente a posibles riesgos, no es posible mantener constante el consumo y, por ende, deben sacrificar riqueza para evitar caídas en el consumo, una vez sucede un evento inesperado²⁴⁰. Los costos de adoptar este tipo de estrategias trascienden el corto plazo y pueden perpetuar la pobreza. Estudios empíricos han encontrado que los hogares contraen, por ejemplo, sus inversiones en capital humano y la asistencia escolar se torna errática, con el fin de mantener constante el consumo²⁴¹. Los niños provenientes de hogares con dificultades para suavizar el consumo enfrentan deterioros de salud, un menor estatus nutricional y un incremento en la participación en la fuerza laboral²⁴²; estrategias que en el largo plazo se traducen en menores ingresos familiares y en una posibilidad de perpetuarse en la pobreza.

Los activos y la capacidad de defenderse frente a eventuales riesgos son entonces esenciales en los procesos de generación de ingresos de los hogares. Su carencia, por otro lado, puede significar caer en la pobreza y nunca superarla. Los conflictos civiles y el desplazamiento forzado destruyen o deterioran tanto los activos como los mecanismos de aseguramiento frente al riesgo. Al menoscabarlos, los conflictos civiles transmiten un legado de pobreza estructural a ciertos grupos de la población. Pero, ¿cómo deterioran los conflictos estos instrumentos esenciales en los procesos económicos?

La destrucción de activos es frecuente durante los conflictos civiles. El despojo de activos de la población civil es una estrategia adoptada por los grupos armados para financiar las actividades de guerra y debilitar al oponente²⁴³, tal como evidencia el tercer capítulo. Más aún, la duración del conflicto y su sostenibilidad dependen en buena medida de la capacidad de los grupos armados para apropiarse de activos valiosos y extraer rentas de éstos. La pérdida de activos físicos, en particular la tierra, es entonces elevada durante los conflictos²⁴⁴ y se profundiza aún más como consecuencia del desplazamiento. Dado que las familias deben migrar intempestivamente, la protección de activos antes de iniciar la migración o su transporte a los lugares de recepción es improbable. Algunos propietarios de tierras son coaccionados a vender la tierra, otros abandonan los predios y pocos venden la tierra a su valor comercial para

240 Jacoby y Skoufias, 1997.

241 Jacoby y Skoufias, 1997.

242 Behrman, 1988; Foster, 1995; Jensen, 2000.

243 Hirshleifer, 2001.

244 Engel e Ibáñez, 2007; Matowu y Stewart, 2001; André y Platteau, 1998.

recuperar este capital e invertirlo en actividades productivas. Algo similar sucede con otros activos productivos que suelen ser abandonados antes del desplazamiento.

Los conflictos civiles, al significar ataques frontales hacia la población civil, causan además pérdidas considerables de capital humano, tal como se examinó en el capítulo anterior. Los asesinatos, los reclutamientos forzosos o las desapariciones forzadas desintegran el hogar y suceden, por lo general, a miembros del hogar en plena edad productiva. Además, la incapacidad física, producto de la violencia, y el síndrome postraumático pueden afectar seriamente las capacidades mentales y psicológicas de sus víctimas e impiden, así, que asuman sus responsabilidades económicas. Por último, el retorno del capital humano se deprecia, ya que la migración forzada ocurre usualmente desde áreas rurales hacia áreas urbanas, donde es poco valorada la experiencia agrícola de las personas desplazadas.

Los mecanismos formales e informales de aseguramiento de riesgo también se deterioran como consecuencia de los conflictos civiles: el acceso a los mercados financieros decrece, los créditos informales son menos frecuentes y las redes sociales se debilitan. Los canales de crédito se interrumpen en ciertas regiones geográficas, debido a la destrucción de la infraestructura bancaria. El desplazamiento forzado implica, además, un menor acceso a créditos formales. Al contar con una escasa capacidad para generar ingresos, la población desplazada incumple con sus obligaciones financieras anteriores y carece de garantías, pues ha perdido sus activos. Todo ello dificulta solicitar créditos nuevos. Si bien los créditos formales se pueden sustituir con créditos informales o con instrumentos informales de aseguramiento, éstos se debilitan en las condiciones extremas que surgen en el conflicto. El desplazamiento forzado, el surgimiento de una alta desconfianza en las comunidades y las caídas generalizadas en el ingreso de los pueblos afectan las condiciones mínimas necesarias para que emerjan instrumentos informales: la proximidad geográfica, el altruismo, la capacidad de monitoreo y el ingreso suficiente para apoyar a las personas con necesidades.

Para los pobres, los impactos de un conflicto civil pueden significar la perpetuación de la pobreza. Por un lado, la protección de activos es casi imposible para estos hogares durante el conflicto. Los menores ingresos no se sustituyen con caídas en el consumo, pues, por lo general, éste es cercano al nivel de subsistencia. Más aún, las contracciones actuales en consumo, encaminadas a proteger los activos, pueden implicar costos en el largo plazo, tales como la interrupción escolar, el deterioro del estado nutricional o inversiones menores en capital humano; estrategias todas

que pueden comprometer el consumo futuro²⁴⁵. Los conflictos, al destruir el capital físico, depreciar el capital humano y debilitar el capital social, pueden forzar a algunos hogares a quedar atrapados en trampas de pobreza. Si el impacto del conflicto produce una pérdida irreversible de activos o una pérdida que perdura durante varios períodos, las consecuencias negativas pueden ser permanentes y el ingreso puede desplomarse bajo un nivel crítico por lapsos de tiempo prolongados²⁴⁶.

Por otro lado, el conflicto civil inhabilita la capacidad de los hogares para suavizar el consumo y los obliga a adoptar estrategias costosas de mitigación que profundizan su vulnerabilidad²⁴⁷. La venta de activos, la adopción de prácticas agrícolas ineficientes y la agricultura de subsistencia son algunas de las estrategias usadas por los hogares para mitigar los impactos del conflicto y que implican altos costos en el largo plazo²⁴⁸. La evidencia empírica para países en conflicto muestra que la adopción de estas estrategias es sumamente costosa. La desnutrición, los declives en los ingresos totales durante el ciclo de vida y las caídas en trampas de pobreza son algunas de las consecuencias negativas identificadas²⁴⁹. Como resultado, las víctimas de los conflictos civiles enfrentan un riesgo elevado de quedar atrapadas en trampas de pobreza²⁵⁰.

El desplazamiento forzoso exacerba aun más dicho riesgo. No es posible para la población desplazada compensar la pérdida de activos –físicos, humanos, financieros y sociales– con una expansión en los ingresos. Hay una notoria dificultad de inserción en los mercados laborales urbanos, cuyos altos índices de desempleo impiden absorber a la población desplazada con pocas habilidades para competir en los mercados urbanos. Ello corrobora la evidencia del capítulo anterior. Los hogares desplazados carecen además de capital y no son sujetos de créditos, obstáculos considerables para iniciar proyectos productivos.

Las secciones siguientes describen la pérdida de activos de la población desplazada en Colombia y la disrupción de los mecanismos de aseguramiento; hechos que dificultan sobremanera la capacidad de la población

245 Carter y Barrett, 2006; Jensen, 2000; Jacoby y Skoufias, 1997; Foster, 1995; Behrman, 1988; Corbett, 1988.

246 Hoddinott, 2006; Dercon, 1998.

247 Brück, 2004a.

248 Brück *et al.*, 2004b; Donovan *et al.*, 2003.

249 Justino y Verwimp, 2006; Bundervoet y Verwimp, 2005; Alderman *et al.*, 2004.

250 Justino y Verwimp, 2006; Adato *et al.*, 2006; Hulme y Shepherd, 2003; Corbett, 1988.

para recuperar sus sendas productivas y retornar a los niveles de bienestar económico anteriores al desplazamiento forzoso.

C. La pérdida de activos de la población desplazada y su proceso de recuperación

El proceso de desplazamiento forzoso ocasiona pérdidas de capital físico, humano, financiero y social a sus víctimas. Conocer las magnitudes de dichas pérdidas es importante, pues permite, por un lado, identificar necesidades de intervención y, por otro, establecer si la población desplazada es capaz de recuperar por sí misma su producción económica. Asimismo, la recuperación de activos, una vez se produce el desplazamiento, es también una variable que amerita un análisis detallado para examinar qué tan efectivos han sido los hogares desplazados para controlar los activos que permanecieron en el origen, cuánto tiempo toma acumular nuevos activos y cuáles hogares han tenido una mayor capacidad de recuperación. El objetivo de esta sección es analizar cada uno de estos temas.

1. Magnitud de las pérdidas de activos y de la recuperación

Las pérdidas de activos de la población desplazada son sustanciales. El cuadro 1 presenta las pérdidas y recuperación de vivienda, capital físico y tierras. El abandono, destrucción o pérdida de la vivienda es significativo: cerca de la mitad de los hogares pierden sus viviendas, debido al desplazamiento, y sólo unos cuantos logran adquirir vivienda en el municipio de recepción. Pese a las elevadas pérdidas de vivienda, un porcentaje considerable, cerca del 18%, no era propietario de vivienda antes del desplazamiento y, tras el desplazamiento, logran adquirir vivienda, presumiblemente con los programas de vivienda de interés social.

Dado que los hogares rara vez pueden vender o transportar sus activos antes de la migración, éstos son abandonados en el municipio de origen y pocos son recuperados posteriormente. Los activos productivos, sin incluir la tierra y las inversiones en el predio, constituyen un alto porcentaje de las pérdidas de activos, y su propiedad se deteriora ostensiblemente conforme aumenta el tiempo de desplazamiento. De otro lado, los hogares desplazados recuperan artículos menos costosos, como los electrodomésticos, pero cuya contribución a la producción económica del hogar es baja o nula. Antes del desplazamiento forzoso, un poco más del 55,2% del valor de los activos provenía de activos productivos y, en el municipio de recepción, dicho porcentaje declina al 12,8%. Ello implica que la capacidad productiva de los hogares se debilita no sólo por una menor posesión de activos sino por una menor posesión de activos productivos.

Cuadro 1. Pérdida y recuperación de activos: vivienda, capital físico y tierra

Variable	Media	Desviación estándar
Vivienda		
Porcentaje de hogares que perdió vivienda en origen	46,5%	-
Porcentaje de hogares que perdió vivienda en origen y la recuperó en recepción	6,4%	-
Porcentaje de hogares sin vivienda en origen y con propiedad en recepción	17,9%	-
Pérdida promedio de vivienda	\$7,2 millones	\$0,6 millones
Capital físico		
Activos productivos (sin incluir tierras) – origen	\$0,8 millones	\$0,09 millones
Otros activos – origen	\$0,2 millones	\$0,01 millones
Porcentaje de activos productivos – origen	55,2%	0,02%
Activos productivos (sin incluir tierras) – recepción	\$0,04 millones	\$0,01 millones
Otros activos – recepción	\$0,2 millones	\$0,01 millones
Porcentaje de activos productivos – recepción	12,8%	0,03%
Tierra		
Tenencia de tierras	55,4%	-
Total hectáreas de tierra	13,2	2,1
Valor del total de hectáreas	\$8,6 millones	\$0,9 millones
Porcentaje de hectáreas con título de propiedad legal	31,2%	-
Promedio de hectáreas pérdidas	4,0	0,8
Valor de las hectáreas pérdidas	\$2,1 millones	\$0,4 millones
Porcentaje de hectáreas que se pueden recuperar en retorno	25,8%	-
Porcentaje de hectáreas bajo control de la familia	12,8%	-
Porcentaje de hectáreas con irrigación	19,0%	-
Número de animales	29,9	2,6
Valor presente de lucro cesante de la producción agrícola	\$34,1 millones	\$5,4 millones
Pérdida total de activos y recuperación		
Valor de activos en origen (sin incluir tierras)	\$15,2 millones	\$0,6 millones
Valor de activos en recepción (sin incluir tierras)	\$6,9 millones	\$0,5 millones
Recuperación de activos	\$-8,2 millones	\$0,7 millones

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Ahora bien, al considerar el despojo de tierra, la situación se torna más preocupante. La tenencia de tierras antes del desplazamiento era alta,

cerca del 55% tenía acceso formal o informal a la tierra, debido a la procedencia netamente rural de la población desplazada. El tamaño promedio de los predios, 13,2 hectáreas, no es despreciable. Recuperar las tierras una vez cese el conflicto es complejo, dada la alta informalidad en el acceso a la tierra y la debilidad en los derechos de propiedad predominante en muchas regiones del país: un poco más del 30% de los hogares cuenta con un título legal de su predio, mientras que para el porcentaje restante la tenencia era informal. Más preocupante aun, sólo un 12,8% de los hogares con tenencia antes del desplazamiento declara tener un control actual sobre la tierra, ya sea de manera directa o con la ayuda de familia o amigos. Como resultado de todo lo anterior, apenas una cuarta parte de los hogares considera posible retomar control de sus tierras en un eventual retorno. Las pérdidas agregadas de tierras para la totalidad de la población desplazada equivalen a 1,7 millones de hectáreas²⁵¹; cifra que equivale a 2,8 veces la cantidad de tierras distribuidas en los programas de reforma agraria durante el período comprendido entre 1993 y 2002. Pero si recuperar las tierras es un evento improbable, recuperar el capital invertido para mejorar los predios o incrementar la productividad agrícola es un evento imposible. Cerca de una quinta parte de los predios tenían irrigación, el número promedio de animales era 29 y el valor presente neto del lucro cesante de la producción agrícola es \$34,1 millones de pesos por hogar²⁵².

Al adicionar las pérdidas de vivienda, tierras y activos productivos, el valor promedio por hogar desplazado alcanza a \$10,3 millones. Las pérdidas agregadas para la totalidad de la población desplazada corresponden a un 3% del PIB colombiano en 2004. El proceso de recuperación de activos parece bastante limitado o casi inexistente. La recuperación de activos se mide como el valor de los activos en el municipio de recepción menos el valor de los activos en el municipio de origen. Dicho valor es en promedio negativo, es decir, no hay recuperación sino que persiste en promedio la pérdida de activos, y asciende a \$8.2 millones.

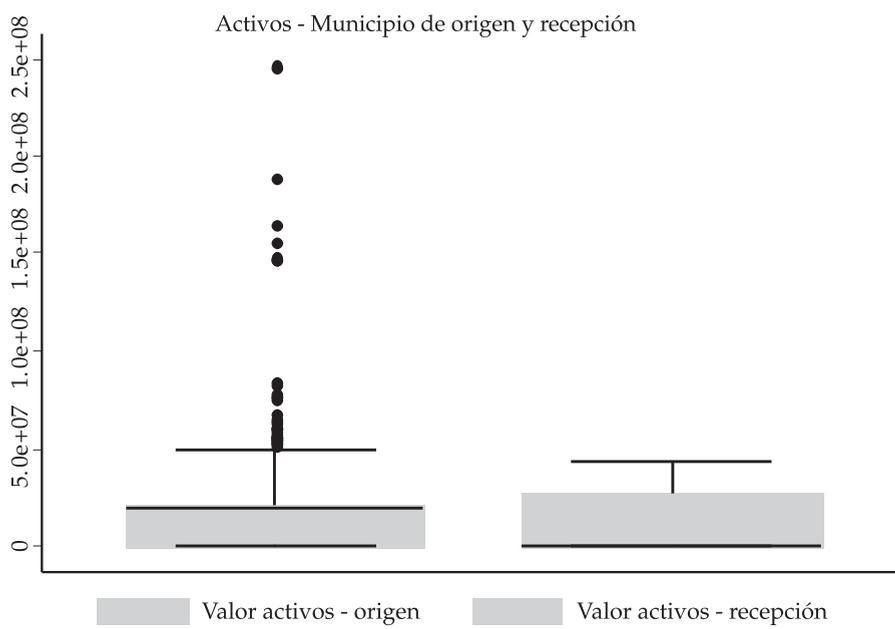
Además de provocar pérdidas considerables de activos, el choque inducido por el desplazamiento nivela por lo bajo la tenencia de activos. Después de la migración forzada, la distribución de activos se concentra

251 Para estimar los valores agregados para la totalidad de la población desplazada, los cálculos se basan en el número de personas y hogares estimados en Ibáñez y Velásquez, 2008: 779.395 hogares.

252 Para calcular el valor presente neto del lucro cesante de la producción agrícola, se asume que la producción agrícola del hogar cesa cuando el jefe del hogar muere. La tasa de descuento utilizada es del 9,5%. Según la OMS, la expectativa de vida de las mujeres y los hombres en las áreas rurales de Colombia es, respectivamente, 76,3 y 67,5 años.

en una media y mediana inferiores y su dispersión es menor. La gráfica 1 ilustra la distribución de activos antes y después del desplazamiento. Antes del desplazamiento, la media y la mediana del valor de los activos era superior, la distribución más dispersa, y con una mayor frecuencia de valores altos: la población contaba con activos más valiosos y los hogares “ricos” eran más usuales. Después del desplazamiento, la distribución se condensa y ninguna observación se encuentra muy por encima de la media y la mediana. En términos intuitivos, el desplazamiento elimina la posibilidad de contar con familias más “pudientes” y reduce la desigualdad en la propiedad de activos al empobrecerlos a todos por igual.

Gráfica 1. Valor de los activos en el municipio de origen y el municipio de recepción

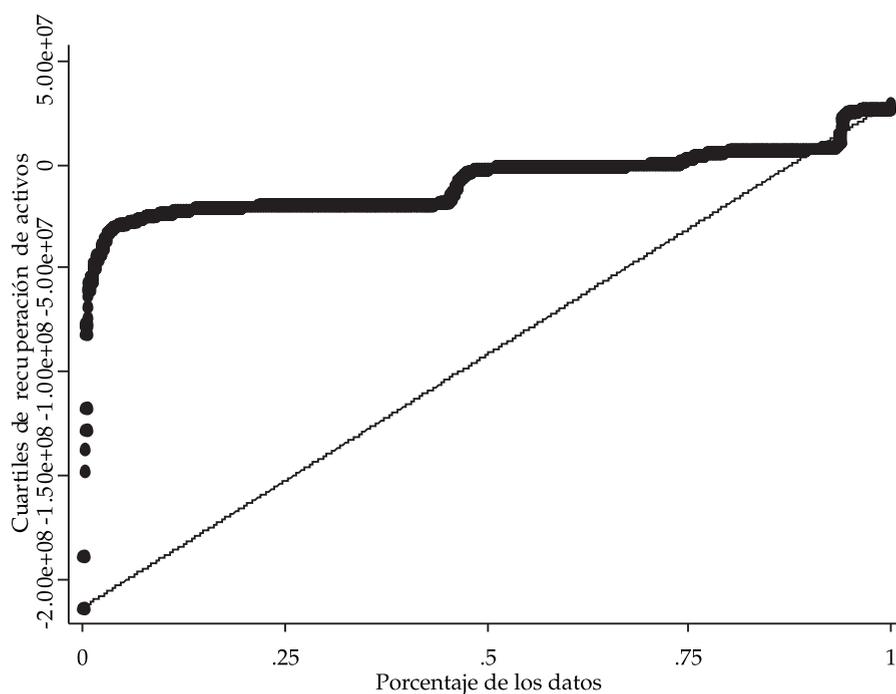


Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La recuperación es, sin duda, un proceso difícil para la población desplazada. La gráfica 2 muestra la distribución de la recuperación de activos por cuartiles. La recuperación de activos para un porcentaje considerable de hogares, 75%, es cero o negativa. Sólo un 25% de los hogares desplazados logra recuperaciones positivas de activos y a unos niveles aún insuficientes. La mediana de la recuperación de activos es, por ende, cero: un 50% de los hogares exhibe una recuperación de activos igual a cero o menor. Lo anterior significa que la capacidad de la población desplazada para recuperar sus activos o acumular nuevos activos está muy restrin-

gida. Hallazgo preocupante, pues las estrategias usuales encaminadas a expandir la base de activos no están disponibles para la población desplazada.

Gráfica 2. Recuperación de activos: distribución de cuartiles



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Pese a que los hogares podrían recurrir al ingreso laboral, los créditos y los instrumentos de aseguramiento para recobrar sus activos, el acceso a estos mecanismos es bastante limitado para la población desplazada. Las cifras para capital financiero, acceso a los mercados laborales, capital humano y capital social antes y después del desplazamiento se presentan en el cuadro 2. Primero, el acceso potencial a créditos informales se desploma después del desplazamiento: cae del 17,9% al 9,3% en el municipio de recepción. Dado que el acceso a créditos formales era prácticamente inexistente, el acceso en el municipio de recepción se quintuplica, pero apenas el 6,6% de los hogares desplazados son acreedores en los mercados formales de créditos. Además, las condiciones de los créditos formales se deterioran considerablemente en los municipios de recepción: el monto aprobado en recepción es la mitad del monto en origen, y el número de cuotas decrece.

Cuadro 2. Capital financiero, mercados laborales, capital humano y capital social

Variable	Media	Desviación estándar
Capital financiero – créditos informales		
Acceso potencial a créditos – origen	17,9%	-
Acceso real a créditos informales – origen	8,3%	-
Acceso potencial a créditos – recepción	9,3%	-
Acceso real a créditos informales – recepción	6,4%	-
Capital financiero – créditos formales		
Acceso a créditos formales – origen	1,4%	-
Monto crédito – origen	\$3,2 millones	\$2,2 millones
Plazo del crédito – origen	14,5 meses	1,0 meses
Acceso a créditos formales – recepción	6,6%	-
Monto crédito – recepción	\$1,6 millones	\$0,4 millones
Plazo del crédito – recepción	10,4 meses	1,4 meses
Mercados laborales		
Desempleo jefe del hogar – origen	1,7%	-
Ingreso por adulto equivalente – origen	1'928.321	325.606
Desempleo jefe del hogar – recepción	16,1%	-
Ingreso por adulto equivalente – recepción	624.167	37.328
Capital humano		
Años de educación jefe del hogar	5,7	0,1
Dedicado a actividades agrícolas	57,3%	-
Capital social		
Principal proveedor murió o abandono el hogar	8,5%	-
Participación en organizaciones – origen	32,6%	-
Número de organizaciones por hogar – origen	0,33	0,03
Posición de liderazgo – origen	7,5%	-
Participación en organizaciones – recepción	29,0%	-
Número de organizaciones por hogar – recepción	0,25	0,02
Posición de liderazgo – recepción	4,2%	-

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Las caídas en los rendimientos de los activos no se compensan con los ingresos laborales. Las tasas de desempleo se incrementan sustancialmente después del desplazamiento. Peor aún, el proceso de absorción de los mercados laborales urbanos es sumamente lento: la tasa de desempleo del jefe del hogar tras tres meses de desplazamiento es 53%, y después de un año esta cifra alcanza el 16%. Tasa similar a aquella de los indigentes urbanos, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2003²⁵³. La población

253 Ibáñez y Moya, 2006b.

desplazada no sólo enfrenta dificultades para vincularse a los mercados laborales urbanos; también para acceder a trabajos de buena calidad. Sus trabajos son, por lo general, en el sector informal, con bajos salarios y sin beneficios laborales. El resultado es una caída sustantiva en el ingreso laboral de las familias desplazadas, que en el municipio de origen percibían un ingreso de \$1,9 millones y en el municipio de recepción devengan \$624 mil por adulto equivalente. Ello significa que el ingreso después del desplazamiento no es siquiera la mitad del ingreso que percibían antes de migrar forzosamente.

¿Cuáles obstáculos enfrenta la población desplazada para vincularse a los mercados laborales urbanos? Si bien las altas tasas de desempleo urbanas en la actualidad pueden ser un impedimento para una rápida absorción de la población desplazada, los bajos niveles de escolaridad y la depreciación de su capital humano parecen ser las principales causas. Por un lado, las tasas de desempleo de la población desplazada después de un año de desplazamiento continúan siendo más altas que para la población indigente; los mercados laborales sí absorben lentamente a la población desplazada, pero persisten obstáculos adicionales. Por otro lado, la habilidad para competir en los mercados laborales urbanos es poca, pues la escolaridad de la población desplazada es baja, 5,7 años, y sus aptitudes agrícolas no son valoradas ni demandadas en los mercados urbanos (57,3% de los jefes del hogar estaban dedicados a la agricultura antes del desplazamiento). Ambos factores, y no el deficiente desempeño de los mercados laborales urbanos, parecen ser el principal obstáculo para la lenta vinculación a los mercados laborales urbanos de la población desplazada.

El desplazamiento forzoso interrumpe también los mecanismos informales de aseguramiento de riesgo. Los créditos informales, tal como se discutió en párrafos anteriores, decrecen significativamente; algunas familias se desintegran, debido a la muerte, asesinato o desaparición forzada del principal proveedor económico (8,5%); y la distancia y las interacciones menos frecuentes debilitan los vínculos con las redes sociales en los municipios de origen. Además, pese a que los hogares recobran rápidamente la participación en organizaciones formales, la naturaleza de las organizaciones en las cuales participan cambia sustancialmente. Antes del desplazamiento forzoso, los hogares eran miembros de organizaciones dedicadas a promover las actividades productivas (por ejemplo, organizaciones productivas y cooperativas), a otorgar créditos, a proveer asistencia técnica y a actuar como intermediarias frente a las instituciones gubernamentales. En los municipios de recepción, de otro lado, los hogares son miembros de organizaciones de población cuyo objetivo es

proporcionar ayuda humanitaria y no, necesariamente, impulsar proyectos productivos.

La pérdida de activos, la caída en los rendimientos del capital humano y la limitada capacidad para asegurarse contra riesgos implican una caída sustancial en el bienestar económico de los hogares. El consumo agregado por adulto equivalente, un indicador tradicional del bienestar de los hogares, decrece sustancialmente en el municipio de recepción. Tras el desplazamiento, el consumo agregado se reduce en un 22%: el consumo por adulto equivalente era \$1'460.715 en el municipio de origen, y dicho indicador en el municipio de recepción es \$1'138.301. Cerca del 65% del valor del consumo se destina a financiar el consumo de alimentos, lo cual revela la vulnerabilidad extrema de esta población. El consumo, además, parece no mejorar sustancialmente con el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción. Al transcurrir un año desde el desplazamiento, el consumo alcanza \$1.112.499; cifra que equivale al 76,1% del consumo antes del desplazamiento.

Estas cifras muestran que la lenta recuperación de la población desplazada repercute sobre su bienestar: su consumo es cercano a los niveles de subsistencia y ubica a las familias desplazadas en condiciones de vulnerabilidad extremas. Por un lado, un bajo consumo de los hogares produce altos costos en el largo plazo, pues genera desnutrición, inasistencia escolar y pobres condiciones de salud. Por otro lado, la población desplazada, al carecer de activos, enfrentar consumos de subsistencia y no contar con mecanismos de aseguramiento, no está en capacidad de enfrentar ningún tipo de choque. La ocurrencia de cualquier choque podría tener, por ende, consecuencias devastadoras.

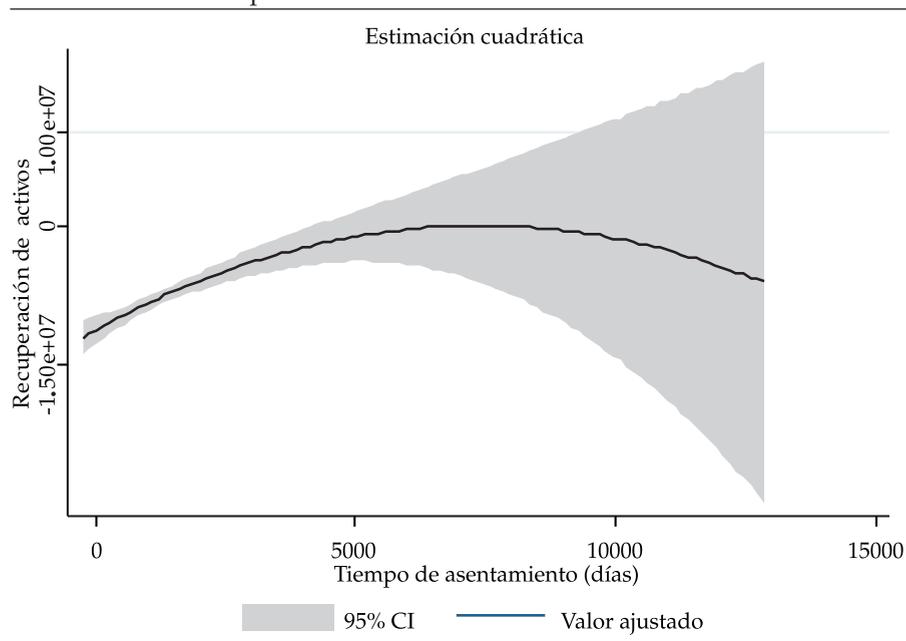
2. Los determinantes de la recuperación de activos

Es claro que los activos son un componente fundamental para generar ingresos y para actuar como mecanismos de aseguramiento de riesgos. Los datos de la sección anterior revelan que la pérdida de activos de la población desplazada es elevada y que la acumulación de nuevos activos es lenta. Es posible, sin embargo, que hogares con ciertas particularidades sean más exitosos en el proceso de recuperación de activos. Por ejemplo, el tiempo de asentamiento, el capital humano, el capital social y otros factores pueden contribuir a la acumulación de nuevos activos, mientras que las altas tasas de dependencia y la fragmentación del hogar pueden ser un obstáculo en dicho proceso. El propósito de esta sección es identificar los determinantes de la recuperación de activos, con base en estimaciones econométricas. Antes de profundizar en los resultados eco-

nométricos, presento unas gráficas y unas estadísticas descriptivas que proveen una exploración inicial sobre el tema.

Las gráficas 3 a 5 examinan la influencia del tiempo de asentamiento, el acceso a los mercados laborales y el ingreso laboral sobre la recuperación de activos. Las gráficas indican que, si bien las tres variables contribuyen positivamente, su contribución es apenas perceptible. A diferencia de los migrantes tradicionales, la población desplazada no parece recuperarse a medida que se consolida el proceso de asentamiento en el municipio de recepción. La recuperación de activos y el tiempo de asentamiento, tal como ilustra la gráfica 3, exhiben una débil relación de u-invertida. Tras un tiempo de asentamiento, se presenta una leve recuperación de activos que decrece, empero, para hogares asentados durante más de diez años. Más aún, la recuperación es tan leve que después de diez años de desplazamiento apenas alcanza un valor de cero. Este resultado se complementa con los hallazgos de capítulos anteriores: las condiciones de la población desplazada se agravan una vez finaliza la ayuda humanitaria de emergencia, y la vulnerabilidad parece persistir por un largo lapso de tiempo.

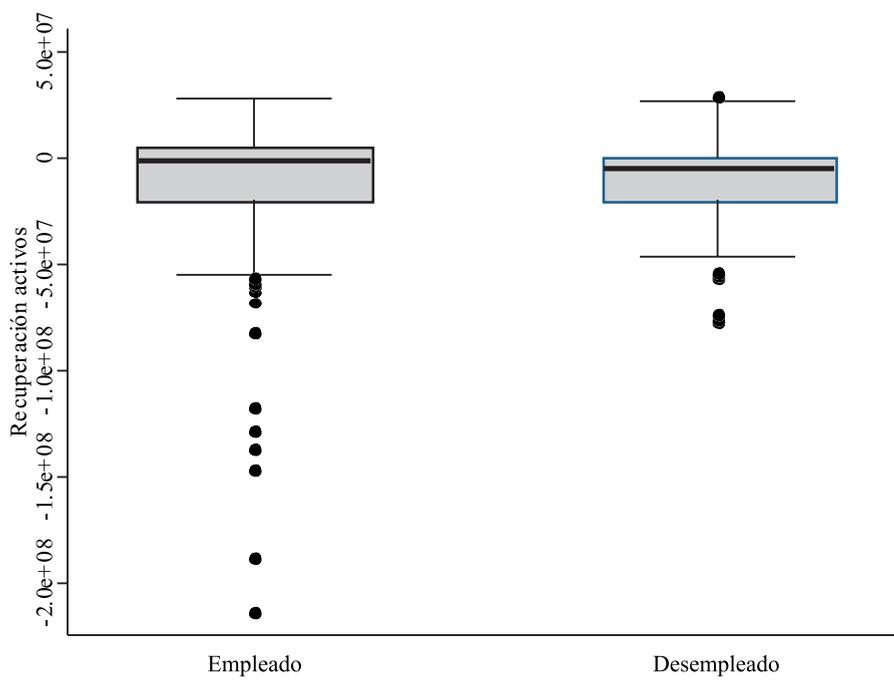
Gráfica 3. Recuperación de activos y tiempo de asentamiento en recepción



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

El impacto de estar vinculado a los mercados laborales, pese a ser un factor positivo, parece depender de la calidad del trabajo. La gráfica 4 ilustra la distribución de la recuperación de activos para los hogares con jefes empleados y desempleados. La distribución para los dos grupos es similar, pero la recuperación de activos es un poco superior para los hogares con jefes empleados, quienes reportan con más frecuencia una recuperación positiva. Dado que los hogares desplazados están empleados en el sector informal, con bajos sueldos y sin cubrimiento de seguridad social, el ingreso laboral parece ser sólo suficiente para cubrir las necesidades básicas y no para invertir en la acumulación de activos.

Gráfica 4. Recuperación de activos y vinculación a los mercados laborales

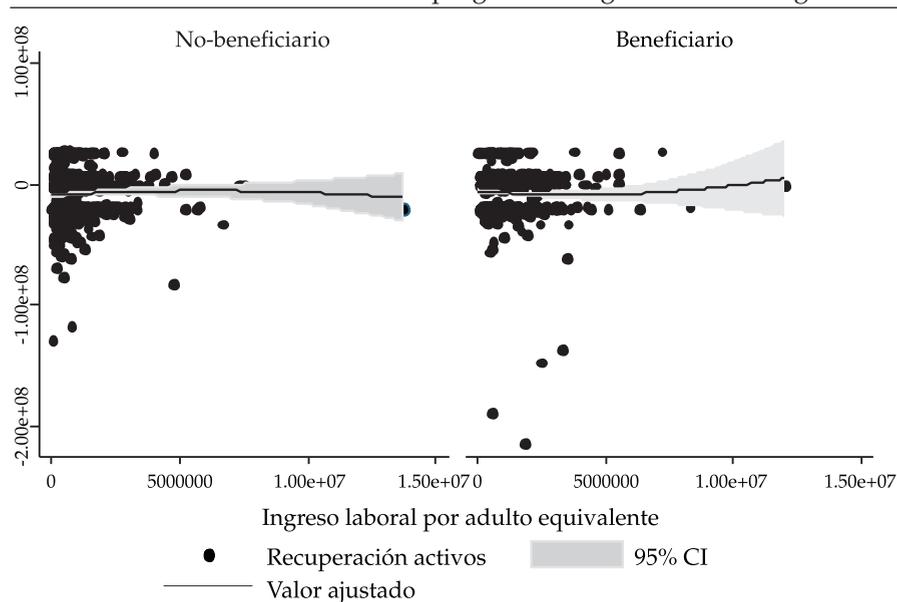


Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Sin embargo, las conclusiones difieren cuando se divide la muestra entre hogares beneficiarios y no beneficiarios de los programas de generación de ingresos. El impacto del ingreso laboral sobre la recuperación de activos para los dos grupos de hogares se presenta en la gráfica 5. Para los hogares no beneficiarios de los programas de generación de ingresos, no hay una relación entre el ingreso laboral y la recuperación de activos. La interpretación del párrafo anterior es entonces apropiada para dicho grupo de la población desplazada: la vinculación a trabajos de mala calidad

impide contar con ingreso adicional para destinar a la acumulación de activos. Los ingresos provenientes de los programas de generación de ingresos sí parecen, por el contrario, influir positivamente en los procesos de recuperación de activos. Dos explicaciones complementarias pueden sustentar este resultado. Por un lado, los programas de generación de ingresos parecen conectar a sus beneficiarios con trabajos de mejor calidad; por lo tanto, los ingresos laborales son suficientes para cubrir las necesidades básicas y para ahorrar, así sea un poco. De otro lado, los programas de generación de ingresos son complementados con otros beneficios, tales como programas nutricionales. Ello permite a los hogares beneficiarios complementar su ingreso laboral, aliviar la presión para cubrir las necesidades básicas, ahorrar y acumular activos.

Gráfica 5. Recuperación de activos e ingreso laboral: beneficiarios y no beneficiarios de los programas de generación de ingresos



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Los determinantes de la recuperación de activos no son evidentes. Los mercados laborales y el tiempo de asentamiento, las variables más obvias, parecen no contribuir significativamente. Pero afirmar tajantemente esto no es tampoco apropiado, pues el desempeño difiere bastante para distintos grupos de la población desplazada, tal como lo sugiere la gráfica 2. Existen cuatro grupos en la recuperación de activos: un grupo de hogares con pérdidas pronunciadas de activos (cuartil I), otro grupo con pérdidas leves (cuartil II), un tercer grupo con recuperación nula de activos (cuartil

III) y un último grupo con recuperaciones positivas de activos (cuartil IV). Todos los grupos divergen en su historia subyacente de desplazamiento, el impacto del desplazamiento sobre sus vidas, su estructura del hogar y su proceso de asentamiento en el municipio de recepción. Para entender la diferencia entre los grupos y profundizar en las causas de la recuperación de activos, el cuadro 3 presenta las estadísticas descriptivas de los cuatro grupos.

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas por cuartil de recuperación de activos (media y desviación estándar)

Variable	Cuartil I	Cuartil II	Cuartil III	Cuartil IV
Beneficiarios programas de generación de ingresos	29,7%	33,2%	28,3%	41,5%
Migración intramunicipal	13,3%	16,2%	13,2%	18,2%
Desplazamiento reactivo	88,5%	87,4%	86,8%	82,2%
Guerrilla – actor responsable	73,5%	72,1%	70,8%	63,6%
Paramilitares – actor responsable	48,4%	50,8%	46,1%	55,9%
Tiempo de asentamiento en recepción (días)	1,253,6 (888,2)	1,218,4 (1,026,4)	1,134,6 (992,2)	1,774,9 (1,122,0)
Jefe del hogar masculino	59,0%	60,9%	62,0%	69,0%
Principal proveedor murió o abandonó hogar	11,5%	7,9%	10,3%	6,9%
Minoría étnica	27,0%	32,4%	17,7%	19,8%
Edad jefe del hogar (años)	43,2 (12,9)	43,0 (13,8)	39,8 (13,1)	44,2 (12,9)
Años de educación jefe del hogar	5,8 (2,3)	5,7 (2,2)	5,7 (2,0)	5,5 (1,6)
Tasa de dependencia	32,5% (23,5%)	34,6% (24,3%)	36,7% (22,9%)	33,9% (22,5%)
Consumo agregado por adulto equivalente	1'211.388 (1'105.140)	1'303.609 (1'807.996)	1'229.174 (1'152.522)	1'136.7066 (1'266.708)
Porcentaje del consume agregado proveniente de donaciones	10,5% (24,3%)	9,1% (22,5)	13,7% (28,0%)	6,7% (19,1%)
Desempleo en recepción – jefe del hogar	19,8%		20,5%	12,2%

(Continúa...)

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas por cuartil de recuperación de activos (media y desviación estándar)

Dedicado previamente a labores agrícolas – jefe del hogar	59,2%	56,7%	52,3%	63,5%
Acceso a créditos formales	8,7%	12,6%	11,7%	23,5%
Participaba en organizaciones formales – origen	38,0%	35,5%	25,6%	29,4%
Participa en organizaciones formales – recepción	30,8%	33,2%	26,7%	33,6%
Contactos personales en recepción	73,3%	69,0%	70,7%	68,1%
Valor de activos – origen	\$27,3 mil (\$1,84 mil)	\$18,6 mil (\$6,3 mil)	\$2,8 mil (\$7,5 mil)	\$15,2 mil (\$8,4)
Valor de activos – recepción	\$0,8 mil. (\$3,6 mil)	\$2,3 mil. (\$6,8 mil)	\$2,9 mil. (\$7,8 mil)	\$27,2 mil. (\$1,2 mil)
Porcentaje de activos productivos	25,6%	16,8%	10,0%	13,0%
Tenencia de tierras	80,0%	66,6%	27,3%	61,6%
Número de hectáreas perdidas	16,3 (72,3)	4,1 (20,3)	2,8 (31,0)	5,9 (29,5)
Valor presente neto de las ganancias agrícolas	\$99,4 mil. (\$421 mil)	\$30,9 mil. (\$131 mil)	\$23,4 mil. (\$171 mil)	\$34,5 mil. (\$131 mil)

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Ser víctimas directas del conflicto y poseer una base sólida de activos antes del desplazamiento son las características más visibles de los hogares con pérdidas pronunciadas de activos (cuartil I). Dichos hogares han sufrido con más frecuencia los embates del conflicto armado, lo cual ha implicado vivir eventos traumáticos; cerca de 88,5% es víctima del desplazamiento reactivo, y la pérdida del principal proveedor del hogar es frecuentes (11,5%). La fuerte inserción en las redes sociales de su región y las mayores posesiones de activos de estos hogares parecen sugerir que el ataque directo obedece a estrategias deliberadas de guerra; atacar a los líderes y a aquellos con más activos produce beneficios estratégicos. De hecho, antes de suceder el desplazamiento forzoso, su participación en organizaciones formales era la más elevada entre los cuatro grupos y su estatus económico era, además, el más alto. El valor de los activos era significativamente mayor, la tenencia de tierras era extendida (80%) y el tamaño promedio de los predios es casi tres veces aquel del segundo mayor (cuartil IV). Más aún, el valor presente neto del lucro cesante de las ganancias agrícolas es significativo. Tal parece que los hogares del cuartil I tenían una producción agrícola nada despreciable, eran propie-

tarios de su tierra y fueron capaces de acumular un acervo significativo, en contraste con los otros tres grupos. Pese a las mejores condiciones en el municipio de origen, las condiciones en el municipio de recepción son poco menos que preocupantes. Pocos son beneficiarios de los programas de generación de ingresos, enfrentan altas tasas de desempleo, el acceso a los mercados financieros es escaso y, dado que fueron víctimas de ataques directos, un porcentaje significativo de los hogares son encabezados por mujeres (41%). La pérdida pronunciada de activos y su vulnerabilidad extrema en los municipios de recepción parece conducir a un lento proceso de acumulación y recuperación de activos.

La principal diferencia entre los hogares del cuartil II, con una mayor capacidad para recuperar activos, y el cuartil I radica en la victimización causada por el conflicto armado. Asimismo, los hogares del primer grupo tenían un menor estatus económico, pero las divergencias con el cuartil I no son sustanciales. Si bien los hogares del cuartil II poseían una base de activos menor, la tenencia de tierras era menos frecuente y los predios eran más pequeños, no eran de ninguna manera el grupo más pobre en el municipio de origen. De hecho, los hogares del cuartil III y IV eran de estatus económicos inferiores. La principal diferencia parece radicar en la victimización de ambos grupos. Dado que el ataque directo y deliberado a los hogares del cuartil II sucede menos veces, el impacto negativo del desplazamiento no es tan pronunciado: menos hogares perdieron su principal proveedor económico y la destrucción o abandono de activos fue más baja. Por consiguiente, estos hogares están mejor preparados para contrarrestar los otros impactos del desplazamiento. Ello implica mejores condiciones en el municipio de recepción, tales como tasas de desempleo inferiores, amplio acceso a crédito y una dependencia menor respecto a la ayuda estatal. Condiciones que redundan en un bienestar económico más alto.

Aunque los hogares de los primeros cuartiles enfrentan dificultades para recuperar sus activos, el perfil de vulnerabilidad de los hogares del cuartil III es grave. Sus datos denotan una recuperación nula de activos, una alta pobreza antes de la migración forzosa y un complejo proceso de asentamiento. Además, pocos poseían activos productivos, la tenencia de tierras era excepcional (27,3%) y sólo algunos estaban dedicados a labores agrícolas. Peor aun, los hogares del cuartil III poseen todas las condiciones que implican una alta vulnerabilidad. Sólo unos cuantos hogares son beneficiarios de los programas de generación de ingresos, viven lejos de su pueblo, el tiempo de asentamiento es aún corto, la pérdida del principal proveedor es tan alta como la del cuartil I, los jefes del hogar son más jóvenes y las tasas de dependencia son elevadas. Los hogares en este cuartil enfrentan, asimismo, las mayores tasas de desempleo y la menor

participación en organizaciones formales. Como resultado, la dependencia respecto a la asistencia estatal es significativa y la más alta entre los cuatro grupos. Sus condiciones son preocupantes y son, sin duda alguna, el grupo de hogares en peores condiciones y con unas sombrías perspectivas futuras.

Ahora bien, es importante comprender cuáles características son comunes en el único grupo con un desempeño relativamente positivo. Sus condiciones en el municipio de recepción son buenas, al contrastarlas con las de los otros tres grupos, pese a enfrentar en el municipio de origen un estatus económico inferior frente a los cuartiles I y II. Sobresale la alta participación de estos hogares en los programas de generación de ingresos: mientras que el porcentaje de beneficiarios en el cuartil IV es cercano al 41,5%, este porcentaje es 33,2% para el cuartil II (el grupo con el segundo cubrimiento). Asimismo, los hogares del cuartil IV han vivido en el municipio de recepción durante un período más prolongado, están localizados cerca de sus pueblos y todavía controlan algunos activos en el lugar de origen. Otras características que denotan vulnerabilidad son, además, menos generalizadas. En su mayoría, los hogares son encabezados por hombres (69%), sólo unos cuantos han perdido a su principal proveedor, las tasas de desempleo son bajas (12,2%), el acceso a créditos es diez puntos porcentuales más alto que el siguiente mayor acceso y la participación en organizaciones formales en los municipios de recepción es común. La posibilidad de enfrentar mejores condiciones en el municipio de recepción permite a estos hogares depender menos de la asistencia estatal, devengar mejores salarios y acumular activos.

El análisis anterior evidencia cómo algunos factores parecen ser determinantes en el proceso de recuperación de activos. El estatus económico en el municipio de origen, la pérdida de activos causada por el desplazamiento, la historia en torno al desplazamiento, la cercanía al municipio de origen, la capacidad de controlar activos, la vinculación a los mercados laborales, el acceso a los mercados financieros, los programas de generación de ingresos y la vulnerabilidad parecen ser determinantes importantes de este proceso. Se debe, sin embargo, llevar a cabo un análisis estadístico que permita controlar por las diversas características y, asimismo, entender la influencia e importancia de cada una de ellas. El modelo siguiente formaliza de alguna manera el análisis anterior y explica cómo actúa cada posible determinante.

La recuperación de activos está mediada por tres dinámicas distintas: el valor de los activos acumulados en el municipio de recepción (A_R) el valor de los activos en el municipio de origen que aún son controlados por el hogar (A_O^C) y el valor de los activos en el municipio de origen abando-

nados tras el desplazamiento (A_O^A). La recuperación de activos se define entonces como

$$R = A_R + A_O^C - A_O^A.$$

Cada dinámica está determinada por diferentes factores. Las circunstancias que forzaron el desplazamiento, el proceso de migración, las características sociodemográficas y las condiciones en el municipio de recepción son factores determinantes en el proceso de recuperación de activos y actúan ya sea a través de una o varias de las tres dinámicas.

Las circunstancias y el proceso de migración determinan la habilidad de controlar los activos en el municipio de origen y la acumulación de nuevos activos. La dinámica del conflicto que produjo la migración forzada está relacionada con el abandono o pérdida de activos en el municipio de origen. Por ejemplo, la presencia de grupos armados (P_O), uno de cuyos objetivos es financiar sus operaciones, puede derivar en despojo de activos y en el abandono de activos en origen: $\partial A_O^A / \partial P_O > 0$. Ello redundaría entonces en dificultades para recuperar activos, $\partial R / \partial P_O < 0$. Cuando los hogares migran intempestivamente para salvar sus vidas, es decir, el desplazamiento es reactivo (Re), la posibilidad de proteger los activos es limitada ($\partial A_O^A / \partial Re > 0$). Cuando los hogares migran de manera preventiva, pues temen la intensificación del conflicto en la región, planear el proceso de migración es más factible. Por lo tanto, la probabilidad de proteger, vender o transferir activos a familiares o amigos es mayor y el control de activos tras el desplazamiento es posible ($\partial A_O^C / \partial Re < 0$), lo cual a su vez permite continuar derivando retornos de los activos y acumular nuevos en el municipio de recepción ($\partial A_R / \partial Re < 0$). El desplazamiento reactivo significa entonces una menor recuperación de activos ($\partial R / \partial Re < 0$).

Asumir papeles de liderazgo en la comunidad o contar con densas redes sociales puede incitar los ataques de los grupos armados. Los grupos armados atacan a personas visibles de la comunidad, para aterrorizar a la población civil, debilitar el apoyo al oponente y prevenir iniciativas de resistencia civil. Los ataques directos, como se mencionó en el párrafo anterior, minan la habilidad de los hogares para proteger sus activos. Por lo tanto, el control de activos para los hogares con altos niveles de capital social en el municipio de origen puede no ser posible. Sin embargo, contar con redes sociales en el origen puede ser un apoyo para ejercer un control indirecto sobre los activos y continuar explotando los predios. El impacto entonces del capital social en el origen sobre el control de los activos es indeterminado ($\partial A_O^C / \partial CS_O \lessgtr 0$).

El ataque directo a los hogares no sólo provoca experiencias traumáticas; también puede significar altos costos económicos en el corto y largo pla-

zo. Los ataques producen en ciertas ocasiones la muerte o desaparición forzada del principal proveedor económico, que en áreas rurales suele ser el hombre (PP). Los hogares que pierden el principal proveedor económico enfrentan, por lo general, ingentes dificultades para recuperar las tierras, puesto que los títulos de propiedad están registrados por tradición en cabeza del hombre y las uniones libres son comunes en las áreas rurales²⁵⁴; la pérdida de activos de estos hogares puede ser sustancial ($\partial A_O^A / \partial PP > 0$).

La estrategia de migración puede, asimismo, afectar la recuperación de activos. La decisión de migrar en el municipio (migración intramunicipal), la fragmentación estratégica del hogar y el tiempo de asentamiento en el receptor pueden contribuir a mitigar la pérdida de activos o a acumular nuevos activos. Los hogares pueden decidir migrar en el municipio para preservar el control sobre sus activos productivos en el municipio de origen, continuar con sus actividades productivas en los predios y, así extraer rentas. Al estar cerca de sus predios, los hogares que adoptan la migración intramunicipal (M) pueden expandir el control de los activos en el origen ($\partial A_O^C / \partial M > 0$) y, al extraer más rentas, acumular nuevos activos en el municipio de recepción ($\partial A_R / \partial M > 0$). Ambos casos significan una mayor recuperación de activos ($\partial R / \partial M > 0$). De hecho, algunos hogares deciden fragmentarse por razones estratégicas y dejar a alguno de sus miembros en el pueblo o en áreas cercanas a sus predios (F), lo cual conduce a incrementar el control sobre los predios y a recuperar más activos: $\partial A_O^C / \partial F > 0$ y $\partial R / \partial F > 0$.

Por último, al consolidarse el proceso de asentamiento a medida que pasa el tiempo (T), el conocimiento acerca de los mercados labores y las oportunidades económicas se amplían. Ello conlleva una recuperación de la capacidad productiva y una mayor acumulación de activos en el municipio de recepción ($\partial A_R / \partial T > 0$). Sin embargo, al incrementar el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción, la posibilidad de continuar ejerciendo control sobre los activos en el municipio de origen decrece, pues poco a poco se diluyen los mecanismos para hacerlo ($\partial A_O^C / \partial T < 0$). Si el primer efecto domina sobre el segundo, es decir, si la posibilidad de recuperar la capacidad productiva sobrepasa la falta de control, debido a la distancia, el tiempo de asentamiento ejerce un efecto positivo sobre la recuperación de activos ($\partial R / \partial T > 0$). Tal efecto puede suceder cuando los hogares están más preparados para adaptarse a las condiciones del municipio receptor, cuando la posesión de activos en origen no era sustancial, o cuando ambos casos se presentan. Por el contrario, si el segundo efecto domina al primero, el efecto del tiempo de asentamiento sobre la recu-

254 Meertens, 2005.

peración de activos sería negativo ($\partial R/\partial T < 0$); situación que se podría presentar, por ejemplo, para los hogares del cuartil I, con altos niveles de activos en el municipio de origen y poco preparados para competir en las áreas urbanas.

Las características socioeconómicas del hogar y su estructura tras el desplazamiento son también determinantes de la recuperación de activos. La generación de ingresos del hogar y su acumulación de nuevos activos dependen parcialmente de la estructura del hogar y de la edad del jefe del hogar, entre otros. Una alta tasa de dependencia (D) implica una menor proporción de miembros del hogar dedicados a generar ingresos, y más necesidades, restringiendo así la capacidad de los hogares para acumular activos en el municipio de recepción ($\partial A_R/\partial D > 0$). Los hogares con jefatura femenina (J) enfrentan complicaciones para acumular activos, ya que, según los capítulos anteriores, el ingreso laboral de las mujeres desplazadas es inferior al de los hombres ($\partial A_R/\partial J < 0$). Dicha situación se agrava cuando la jefatura femenina es consecuencia del desplazamiento, es decir, si la mujer debe encabezar el hogar tras la muerte o desaparición del principal proveedor. El capítulo anterior muestra cómo estos hogares perciben un ingreso laboral bastante menor. Los bajos ingresos laborales y las altas tasas de dependencia derivan en una dificultad ingente para acumular nuevos activos ($\partial A_R/\partial PP < 0$). La edad del jefe del hogar (E), reflejo del ciclo de vida del hogar, presumiblemente tiene una relación de u-invertida con la acumulación de activos en el municipio de recepción. La poca experiencia laboral de las personas jóvenes redundan en bajos ingresos laborales y un proceso lento de acumulación de activos. Pero el aprendizaje de nuevas ocupaciones y el adaptarse a nuevas circunstancias es una tarea difícil para las personas mayores. Ello significa que los activos se incrementan conforme la edad del jefe del hogar es mayor, pero a una tasa decreciente ($\partial A_R/\partial E > 0$ y $\partial^2 A_R/\partial E^2 < 0$).

El capital humano (H), al ser un instrumento fundamental para idear estrategias que permitan ejercer más control sobre los activos en origen y para adaptarse a las condiciones en el municipio de recepción, puede contribuir en el proceso de recuperación de activos. Personas mejor educadas pueden diseñar estrategias efectivas para proteger los activos antes de la migración, ejercer más control sobre ellos o venderlos y convertirlos en capital líquido ($\partial A_O^C/\partial H > 0$). Una mejor educación también es fundamental para competir en los mercados laborales urbanos o para concebir fuentes alternativas de ingreso, proporcionando más ingresos para acumular nuevos activos ($\partial A_R/\partial H > 0$). El capital humano no es, sin embargo, un activo necesariamente trasladable. La experiencia agrícola (Ag) no es valorada en los mercados laborales urbanos, donde las ocupaciones

predominantes para los trabajadores no calificados son la construcción, los servicios y el comercio. Esta depreciación del capital humano no formal restringe las alternativas de generación de ingresos y de acumulación de nuevos activos ($\partial A_R / \partial Ag < 0$).

La pertenencia a minorías étnicas, tales como los grupos indígenas o afrocolombianos, es una característica del hogar que también determina la pérdida de activos en el municipio de origen y la acumulación de nuevos activos. No obstante, el efecto final sobre la recuperación de activos no es posible de establecer *a priori*. Por un lado, las minorías étnicas son víctimas con más frecuencia de los ataques directos por parte de los grupos armados, y continuar controlando los activos después del desplazamiento es complicado. Pero las minorías étnicas (Me) poseen, por lo general, títulos colectivos de propiedad, los cuales las protegen de alguna manera del despojo de tierras perpetuado por los grupos armados. Más aún, las densas redes sociales, una característica distintiva de las minorías étnicas colombianas, pueden constituir un apoyo para proteger los activos en el municipio de origen. Ello implicaría que el impacto de pertenecer a una minoría étnica sobre el control de activos en el municipio de origen es indeterminado ($\partial A_O^C / \partial Me \lesseqgtr 0$) y depende de cuál de los dos efectos anteriores es predominante. Por otro lado, las minorías étnicas, tal como se analizó en el capítulo anterior, tienen tasas más altas de desempleo, el acceso a la ayuda estatal es menor y el ingreso laboral es significativamente inferior, imposibilitando así que inicien procesos sólidos de acumulación de nuevos activos ($\partial A_R / \partial Me < 0$).

Las condiciones que confronta la población desplazada en el municipio de recepción, en particular, el vínculo a los mercados laborales y el capital social, son cruciales para promover u obstaculizar la acumulación de nuevos activos. El acceso a mercados laborales urbanos y la consolidación de empresas pequeñas independientes son fundamentales durante los procesos de acumulación de activos en el municipio de recepción. Además de cubrir las necesidades básicas, los ingresos obtenidos en los mercados laborales o en pequeñas empresas (Y_R) pueden ser invertidos en la acumulación de nuevos activos ($\partial A_R / \partial Y_R > 0$). Las redes sociales y el capital social en el municipio de recepción (CS_R) constituyen un apoyo para mitigar choques, adquirir información acerca de programas de asistencia u oportunidades laborales, así como acceder a programas de asistencia y créditos, entre otros. Para medir la densidad de las redes sociales, se incluye una variable dicótoma que denota los contactos en el receptor y la participación en organizaciones formales. Al proveer soporte durante los primeros meses, intermediación para conseguir empleo y alojamiento en los tiempos de crisis, la familia y los amigos pueden mitigar el impacto

del desplazamiento e impulsar la recuperación de la capacidad productiva. La participación en organizaciones formales, aparte de proveer un apoyo similar, puede promover el acceso a programas especiales para la población desplazada o asistencia legal para hacer valer sus derechos ($\partial A_R / \partial CS_R > 0$).

Por último, los beneficiarios de los programas de asistencia para la población desplazada, G , pueden recibir el impulso inicial necesario para recuperar su capacidad productiva, para generar suficientes ingresos y para reiniciar la acumulación de activos. El impacto depende, empero, del tipo de asistencia recibida. Si bien la ayuda humanitaria, los servicios de salud y la asistencia escolar son elementos importantes para mejorar las condiciones de la población desplazada, su efectividad para generar ingresos en el corto plazo es limitada. Por el contrario, los programas de generación de ingresos sí son efectivos en el corto plazo, pues promueven el acceso a los mercados laborales y proporcionan el capital semilla para invertir en actividades productivas. Dichos programas son entonces importantes para producir ingresos y acumular activos ($\partial A_R / \partial G > 0$).

La recuperación de activos es definida entonces por la ecuación

$$R = A_R(\text{Re}, M, T, D, J, PP, E, H, Ag, Me, Y_R, CS_R, G) \\ + A_O^C(\text{Re}, CS_O, M, F, T, H, Me) - A_O^A(P_O, \text{Re}, PP),$$

Cuya forma reducida se define por

$$R = R(P_0, M, F, T, \text{Re}, D, J, PP, E, H, Ag, Me, Y_R, CS_O, CS_R, G)$$

Con el fin de identificar los determinantes de la recuperación de activos, estimo un grupo de regresiones. Dado que los programas de generación de ingresos no son asignados al azar, ser beneficiario de un programa de generación de ingresos es un proceso endógeno que depende de los criterios de focalización, las características del hogar y su proceso de decisión. Tal como en el capítulo anterior, la variable de participación en los programas de generación de ingresos se instrumentaliza con una variable dicótoma que identifica si los municipios son cubiertos por los programas de USAID.

Los resultados de las regresiones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Variables Instrumentales (VI) y regresiones de cuartiles se presentan en el cuadro 4. Los resultados de las regresiones son robustos. La participación en los programas de generación de ingresos, la vulnerabilidad, la estrategia de migración, el tiempo de asentamiento y el estatus económico antes del desplazamiento son los determinantes más significativos de la recuperación de activos.

Cuadro 4. Determinantes de la recuperación: MCO, VI y regresiones de cuartiles

Variable	Regresión de cuartiles				
	MCO	VI	0,25	0,50	0,75
Beneficiarios programas de generación de ingresos	3,0481 (4,79)***	4,5090 (1,73)*	0,1714 (8,66)***	0,2720 (5,95)***	0,4316 (4,70)***
Desplazamiento intramunicipal	-2,3515 (-2,26)**	-2,3312 (-2,24)**	-0,0728 (-2,30)**	-0,1047 (-1,52)	-0,1480 (-1,09)
Desplazamiento reactivo	-1,0549 (-1,43)	-1,0581 (-1,43)	-0,0323 (-1,43)	-0,0763 (-1,52)	-0,0439 (-0,43)
Guerrilla – actor responsable	-2,6204 (-4,75)***	-2,6572 (-4,75)***	-0,0592 (-3,44)***	-0,1829 (-4,70)***	-0,2913 (-3,81)***
Paramilitares – actor responsable	0,3346 (0,66)	0,2804 (0,55)	0,0395 (2,42)**	0,0249 (0,67)	0,0970 (1,30)
Tiempo de asentamiento en recepción	0,0041 (9,18)***	0,0039 (7,02)***	0,0002 (10,41)***	0,0003 (9,56)***	0,0007 (10,43)***
Tiempo de asentamiento al cuadrado	0,0000 (-5,98)***	0,0000 (-4,97)***	0,0000 (-6,30)***	0,0000 (-6,21)***	0,0000 (-7,29)***
Jefatura del hogar masculina	1,4730 (2,81)***	1,4099 (2,63)***	0,0514 (3,06)***	0,0937 (2,45)***	0,2291 (3,03)***
Pérdida por muerte o abandono de principal proveedor	0,0033 (0,00)	-0,1377 (-0,16)	-0,0441 (-1,60)	-0,0793 (-1,27)	-0,0070 (-0,06)
Minorías étnicas	-2,1467 (-3,09)***	-2,1153 (-3,09)***	-0,0348 (-1,57)	-0,0874 (-1,74)*	-0,1347 (-1,35)
Edad jefe del hogar (años)	0,2073 (2,14)**	0,1923 (1,86)*	0,0068 (2,10)**	0,0236 (3,23)***	0,0315 (2,23)**
Edad jefe del hogar al cuadrado	-0,0018 (-1,70)*	-0,0016 (-1,43)	-0,0001 (-2,15)**	-0,0002 (-2,99)***	-0,0003 (-2,12)**
Años de educación jefe del hogar	-0,0246 (-0,24)	-0,0255 (-0,24)	0,0029 (0,79)	0,0029 (0,36)	0,0202 (1,33)
Tasa de dependencia	-0,5990 (-0,59)	-0,4970 (-0,50)	-0,0110 (-0,33)	-0,0863 (-1,15)	-0,0975 (-0,65)
Desempleo jefe del hogar – recepción	-0,7907 (-1,30)	-0,6609 (-0,98)	-0,0746 (-3,65)***	-0,1272 (-2,83)***	-0,1066 (-1,21)
Participación en organizaciones – origen	-0,9065 (-1,56)	-0,8620 (-1,46)	0,0166 (0,87)	-0,0601 (-1,37)	-0,1037 (-1,22)
Participación en organizaciones – recepción	1,0688 (1,76)*	1,0581 (1,73)*	0,0139 (0,70)	0,0721 (1,60)	0,2242 (2,55)***
Contactos personales en recepción	-0,1553 (-0,31)	-0,1584 (-0,31)	0,0143 (0,88)	-0,0041 (-0,11)	-0,0435 (-0,60)
Miembros del hogar enfermos	-0,9261 (-1,14)	-0,8241 (-0,98)	-0,0429 (-1,73)*	-0,1316 (-2,30)**	-0,1258 (-1,07)
Valor de los activos en origen (millones de pesos)	-0,9632 (-57,89)***	-0,9652 (-55,64)***	-0,9985 (-1791,38)***	-0,9965 (-828,75)***	-0,9880 (-362,01)***

(Continúa...)

Cuadro 4. Determinantes de la recuperación: MCO, VI y regresiones de cuartiles

Porcentaje de tierras bajo control del hogar	1,2559 (0,60)	1,2797 (0,61)	0,0328 (0,51)	0,1397 (0,96)	0,3173 (1,15)
Constante	-5,8674 (-1,81)*	-5,6900 (-1,81)*	-0,3811 (-3,30***)	-0,4628 (-1,74)*	-0,7770 (-1,51)
Número de observaciones	2,319	2,319	2,319	2,319	2,319
R cuadrado	0,6517	0,6508	0,5702	0,4911	0,3483

Errores estándar con corrección de White

Incluye controles municipales

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Al controlar por otras características, la contribución de los programas de generación de ingresos emerge ahora como significativa. Dicha variable es estadísticamente significativa y su efecto es grande para todas las regresiones estimadas. De hecho, el impacto de los programas de generación de ingresos es considerable para los hogares del cuartil IV. Participar en los programas de generación de ingresos parece impulsar de manera importante la acumulación de activos de la población desplazada, al presumiblemente producir ingresos adicionales para ahorrar y destinarlos a adquirir nuevos activos. Una evaluación detallada del impacto de los programas de generación de ingresos se presenta en el capítulo VI.

Migrar en el mismo municipio no es una estrategia efectiva para atenuar la pérdida de activos. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, los hogares migran intramunicipalmente para ejercer control sobre sus activos productivos, mantener las actividades productivas y continuar así extrayendo rentas de éstos. Sin embargo, los resultados de las regresiones de MCO y de variables instrumentales muestran un impacto contrario al esperado: la recuperación de activos es menor para los hogares que migraron dentro de su municipio. Resultado que parece ser causado por los hogares pertenecientes al cuartil I. Es importante ser cauteloso con este resultado, ya que migrar intramunicipalmente es una decisión que los hogares pueden tomar precisamente para evitar pérdidas elevadas de activos, y que puede ser adoptada por los hogares con activos más valiosos. El impacto negativo de la migración intermunicipal para los hogares del cuartil I denota, pues, la dificultad para separar la simultaneidad entre las dos variables. Los hogares del cuartil I poseían los predios más extensos, su dependencia en las labores agrícolas era alta y sus activos eran los más valiosos. Todo lo anterior, y el hecho de ser blancos frecuentes de los grupos armados, conduce a elevadas pérdidas de activos y a la necesidad

de migrar cerca de sus predios para intentar ejercer algún control sobre éstos, estrategia que parece ser poco efectiva.

Cuando la guerrilla es el actor responsable del desplazamiento forzado, recuperar activos parece más difícil. Las estrategias adoptadas por los grupos guerrilleros parecen profundizar la vulnerabilidad de los hogares, acrecentar las pérdidas de activos y restringir la acumulación de nuevos activos. Al examinar de manera detenida el proceso de desplazamiento de las víctimas de los grupos guerrilleros y paramilitares, se encuentra que las víctimas de la guerrilla pierden con más frecuencia el principal proveedor, y la perspectiva de recuperar las tierras tras el retorno es menor, lo cual puede significar que las estrategias adoptadas por estos grupos para ejercer control territorial y despojar tierras son más efectivas. De otro lado, los grupos paramilitares centran sus ataques reincidentemente sobre propietarios de tierras, pero los predios despojados son más pequeños.

La consolidación en el proceso de asentamiento contribuye a la recuperación de activos. Pero el impacto no es grande y decrece con el tiempo, exhibiendo una relación de u-invertida entre tiempo de asentamiento y recuperación de activos. Asumir entonces que la población desplazada se asimila a los migrantes tradicionales, y no diseñar programas para asistir a la población desplazada, implica una recuperación insignificante de activos y, muy probablemente, obliga a los hogares desplazados a permanecer en trampas de pobreza.

La vulnerabilidad frena los procesos de recuperación de activos. Los hogares con jefatura masculina exhiben un mejor desempeño durante el proceso de recuperación; contribución que se fortalece conforme aumentan los cuartiles. La recuperación de activos es, además, mayor para los hogares con jefes en edades intermedias, mientras que los hogares con jefes jóvenes o mayores enfrentan más dificultades para recuperar sus activos. De otro lado, la recuperación de activos es sustancialmente menor para los hogares pertenecientes a minorías étnicas o con miembros enfermos de gravedad. Las minorías étnicas desplazadas por el conflicto armado viven en condiciones sumamente precarias, debido al desarraigo, la dificultad de algunos para hablar español y el acceso restringido a la ayuda estatal. El ingreso laboral, insuficiente para cubrir necesidades esenciales, no se puede destinar a la recuperación de activos. Una enfermedad grave en el hogar compromete el proceso de recuperación de activos, en particular, para los hogares del cuartil I y II. Cuando los hogares están en condiciones de vulnerabilidad extrema, cualquier choque adicional, tal como una enfermedad grave, limita aún más su habilidad para acumular activos.

La inserción en los mercados laborales influencia positivamente la recuperación de los activos. Si bien las regresiones de MCO y VI no revelan efecto alguno de las condiciones laborales sobre la recuperación de activos, las regresiones de cuartiles indican que la recuperación de activos es menor para aquellos hogares con el jefe del hogar desempleado. El efecto es particularmente fuerte para los hogares ubicados en el cuartil III.

Por último, el capital social y la inserción en las redes sociales del municipio de recepción contribuyen al proceso de recuperación de activos. Al proveer apoyo para estabilizar el consumo, para mitigar choques y para intermediar en la búsqueda laboral, las organizaciones contribuyen a mejorar el proceso de asentamiento, expandir el ingreso y acumular activos. El impacto, empero, se produce para los hogares del cuartil IV, lo cual puede implicar que el capital social es realmente efectivo cuando la recuperación de activos va por buen camino.

El desplazamiento provoca, sin duda alguna, una pérdida sustancial de activos; el conflicto armado y la migración forzada causan un deterioro de capital físico, financiero, humano y social. La erosión de todos los tipos de capital, aunada a una restricción severa a la entrada en los mercados laborales, coloca a los hogares desplazados en una condición de vulnerabilidad extrema y complica la acumulación de capital. Ello impone altos costos económicos en el largo plazo difíciles de superar. De hecho, sólo un grupo reducido de hogares desplazados inicia un proceso de recuperación moderada de activos. Recuperación que está influenciada por las condiciones requeridas para embarcarse en actividades productivas exitosas: un período suficiente para consolidar el asentamiento en el municipio de recepción, altos acervos de capital social, acceso a créditos, empleo y una estructura del hogar menos vulnerable. Sin embargo, salir adelante e iniciar una senda exitosa productiva es bastante improbable para la población desplazada sin el apoyo de programas sociales. Los resultados anteriores indican que los programas de generación de ingresos son cruciales para impulsar el proceso de recuperación de la población desplazada.

Ahora bien, ¿está la población desplazada preparada para enfrentar nuevos choques? ¿Los mecanismos de aseguramiento disponibles le permitirían aislar el consumo de las variaciones en el ingreso? La carencia de activos significa una alta vulnerabilidad de los hogares desplazados frente a choques; vulnerabilidad que podría generar condiciones aun más precarias si sucede un choque inesperado. Por lo anterior, es importante examinar la capacidad de los hogares desplazados para asegurarse contra choques, dado que uno de sus principales mecanismos de asegura-

miento, los activos, prácticamente no está disponible. La sección siguiente analiza este tema.

D. Los mecanismos de aseguramiento contra riesgos y la suavización del consumo

La evidencia empírica descrita en la sección anterior es indiscutible: la población desplazada carece de mecanismos formales e informales de aseguramiento de riesgo para atenuar el impacto de los choques. La base de activos es incipiente, el acceso a los mercados financieros es mínimo y las redes sociales se han debilitado como consecuencia de la distancia. A continuación examino si la ausencia de mecanismos de aseguramiento del riesgo obliga a los hogares a enfrentar una alta vulnerabilidad, al no poder aislar el consumo de las variaciones en el ingreso. Para abordar dicho análisis, presento primero la evolución del ingreso laboral y el consumo a lo largo del tiempo, estimo regresiones econométricas de los determinantes del cambio del consumo y examino las estrategias adoptadas por los hogares para compensar las variaciones del ingreso laboral.

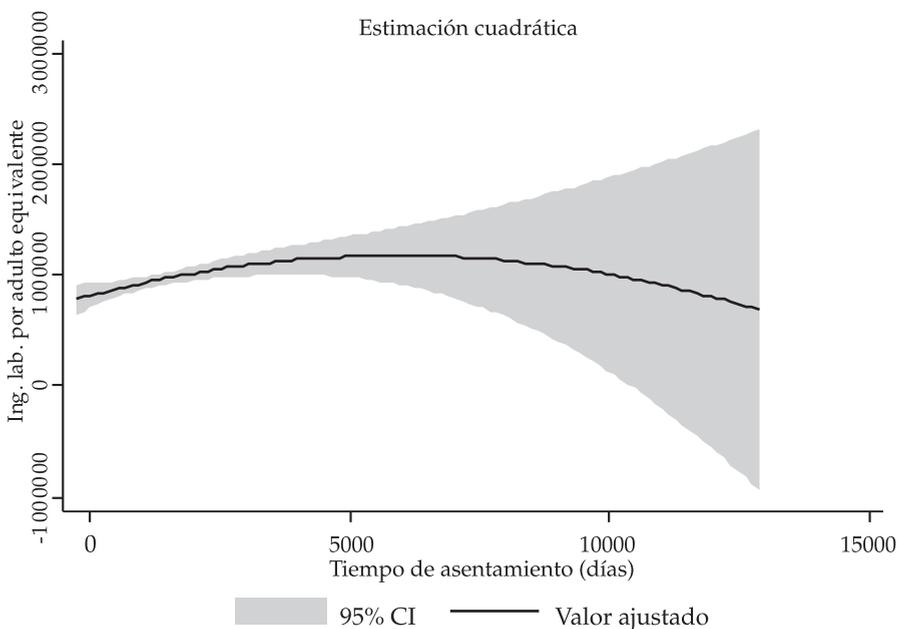
1. Evolución del ingreso y del consumo de la población desplazada

El desplazamiento ocasiona una caída pronunciada en el ingreso laboral y el consumo de los hogares. El ingreso por adulto equivalente se desploma en un 50%, como consecuencia del desplazamiento, y el consumo por adulto equivalente desciende en un 22%. El ingreso, aunque aumenta levemente durante los primeros años, parece estancarse después de cinco años de permanecer en el municipio receptor y, tras diez años de asentamiento, decrece. La gráfica 6 ilustra la evolución del ingreso laboral conforme se consolida el asentamiento en el municipio de recepción. Antes del desplazamiento, el ingreso laboral por adulto equivalente era \$1,9 millones. Durante los primeros tres meses del desplazamiento, el ingreso laboral apenas alcanza a ser un poco menos de \$400.000 y, después de un año de desplazamiento, el ingreso crece levemente a \$984 mil, es decir, la mitad del ingreso en el municipio de origen. Al transcurrir un año, el ingreso laboral continúa aumentando hasta un poco más de un millón y permanece en ese nivel durante varios años, para después caer.

La evolución del consumo tampoco es favorable durante los primeros años. La gráfica 7 muestra que durante los primeros años el consumo exhibe una tendencia decreciente, para después mostrar una recuperación significativa. Es así como, después de un año de desplazamiento, sólo equivale al 76% del consumo antes del desplazamiento. Pero más pre-

ocupante aun es el desplome que se presenta después de tres meses del desplazamiento. Durante los primeros tres meses del desplazamiento, el consumo agregado por adulto equivalente es \$1.037.697; entre tres meses y un año, el consumo se incrementa a \$1,4 millones y, tras un año de desplazamiento, el consumo de nuevo se desploma a niveles similares a los de los tres primeros meses, \$1,1 millones.

Gráfica 6. Evolución del ingreso laboral

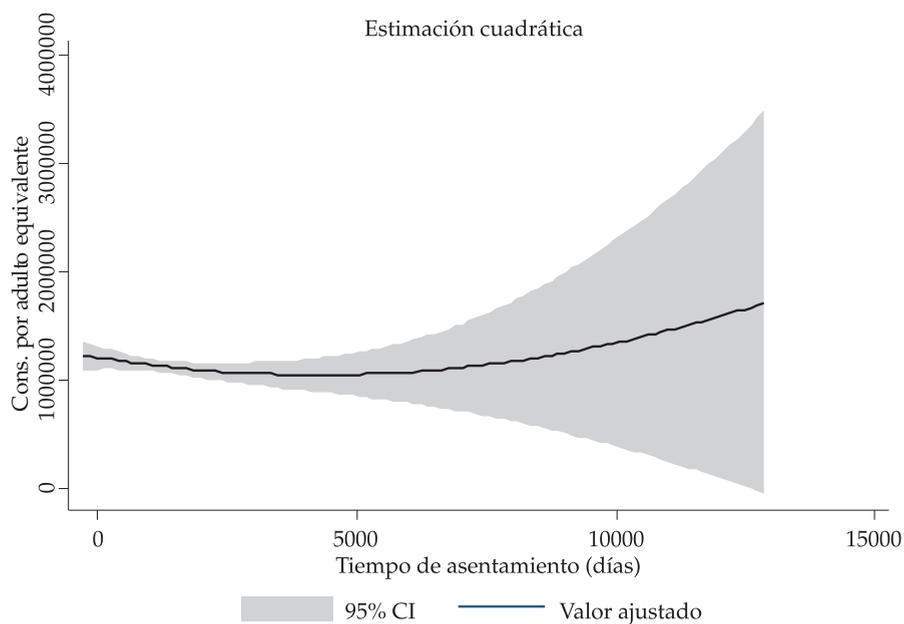


Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Diversos sucesos pueden explicar el comportamiento del consumo. Los tres primeros meses varios mecanismos de apoyo están presentes. Primero, aquellas familias que tuvieron la oportunidad de vender sus activos, o una porción de sus activos, antes del desplazamiento pueden destinar el capital adquirido a financiar el consumo de los primeros meses. Segundo, la ayuda de familiares y amigos en el municipio de recepción (por ejemplo, alojamiento y provisión de alimentos) es amplia en un principio, y después de un tiempo se diluye, ya que no es sostenible. Tercero, la asistencia humanitaria de emergencia cubre un período de tres meses y los programas de estabilización económica duran usualmente cerca de seis meses. Por lo tanto, al año de la migración forzada, las familias no cuentan ya con ahorros, donaciones ni ayudas y el consumo decrece frente al de los primeros meses. Cabe anotar, sin embargo, que se presenta una recomposición favorable en las fuentes de financiación del consumo.

Mientras que durante los tres primeros meses persiste una alta dependencia de las donaciones para financiar el consumo (28% del consumo es donado), después de un año esta dependencia ha caído a menos de una tercera parte (8% del consumo es donado).

Gráfica 7. Evolución del consumo agregado por adulto equivalente



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

2. La suavización del consumo

La evolución del ingreso laboral y el consumo no es necesariamente paralela. El ingreso laboral exhibe una tendencia creciente, pero poco pronunciada, y el consumo parece variar alrededor de un valor que bien podría ser el consumo de subsistencia. Es importante analizar si las variaciones del ingreso se traducen en variaciones del consumo o si, por el contrario, los agentes intentan suavizar su consumo y aislarlo de esta manera de choques negativos.

Para analizar lo anterior, me baso en el modelo teórico que asume que los agentes transfieren recursos económicos entre períodos para maximizar utilidades contingentes. La habilidad para transferir recursos de un período a otro y, por ende, de separar la senda de consumo de los ingresos depende de la base de activos, así como del acceso a los mercados financieros y los mecanismos de aseguramiento. El consumo está entonces

determinado por las necesidades y las preferencias del hogar, y no por las variaciones del ingreso²⁵⁵. La aproximación empírica para probar lo anterior debe establecer si las variaciones en el ingreso no se traducen en variaciones en el consumo. La ecuación usada más comúnmente en la literatura está definida por

$$\Delta \ln C_i = \beta \Delta \ln y_i + \alpha X_i + \varepsilon_i$$

donde $\Delta \ln C$, representa el cambio en el logaritmo de consumo entre el período t y el período $t-1$ para el hogar i ; $\Delta \ln y$, es el cambio en el ingreso durante el mismo período; X_i es el vector de las características sociodemográficas del hogar, y ε_i es un término aleatorio que capta variables no observables. Cuando el hogar se asegura completamente frente a riesgos anticipados y no anticipados, $\beta = 0$, ello significa que las fluctuaciones del ingreso no ocasionan cambios en la senda de consumo, ya sea porque el hogar anticipó de manera perfecta el choque o porque los mercados de crédito y los mecanismos de aseguramiento mitigaron completamente el impacto del choque inesperado. De otro lado, cuando no es posible suavizar el consumo, $\beta = 0$.

Se estiman varias versiones de la regresión anterior. Primero, se estima la regresión de los cambios en consumo sin controlar por participación en los programas de generación de ingresos. Los programas de generación de ingresos pueden, sin embargo, contribuir a fortalecer la capacidad de los hogares para suavizar su consumo, al proveer fuentes adicionales de ingresos. Para captar este efecto, el segundo conjunto de regresiones interactúa los cambios en el ingreso con la participación en los programas de generación de ingresos. Por último, la habilidad para suavizar consumo puede fortalecerse a medida que el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción se prolonga. Durante los primeros tres meses, los hogares desplazados son beneficiarios de ayuda humanitaria, la cual puede ser fundamental para evitar caídas sustanciales en el consumo. Una vez la ayuda humanitaria finaliza, la evidencia empírica sugiere que la vulnerabilidad de las familias desplazadas se incrementa significativamente²⁵⁶. La habilidad para suavizar el consumo puede, por consiguiente, variar de acuerdo al tiempo de asentamiento en el municipio receptor. Para controlar por estos cambios, se interactúan variables dicótomas del tiempo de asentamiento con cambios en el ingreso laboral y con la participación en programas de generación de ingresos. Los tres conjuntos de regresiones que se estiman son

$$\Delta \ln C_i = \beta \Delta \ln I_i + \gamma Z_i + \varepsilon_i$$

255 Deaton, 1992.

256 Econometría, 2003.

$$\Delta \ln C_i = \beta_j [\Delta \ln I_i^j * G_i] + \gamma Z_i + \varepsilon_i$$

$$\Delta \ln C_i = \beta_j^1 [\Delta \ln I_i^j * d_{0-3}] + \beta_j^2 [\Delta \ln I_i^j * d_{3-12}] + \beta_j^3 [\Delta \ln I_i^j * d_{>12}] + \gamma Z_i + \varepsilon_i$$

donde $\Delta \ln C_i$ y $\Delta \ln I_i$ representan el logaritmo del cambio en el consumo y el ingreso laboral antes y después del desplazamiento; Z_i es un vector de características sociodemográficas del hogar; j indica si el hogar es beneficiario o no beneficiario de los programas de generación de ingresos; d_{0-3} es una variable dicótoma igual a uno cuando el tiempo de asentamiento es menor a tres meses, d_{3-12} es una variable dicótoma igual a uno cuando el tiempo de asentamiento es entre tres meses y un año, y $d_{>12}$ es una variable dicótoma igual a uno cuando el tiempo de asentamiento es superior a un año.

El acceso a los programas de generación de ingreso es una variable endógena; una variable que identifica si el desplazamiento fue masivo se utiliza como instrumento de la participación en programas de generación de ingresos. Con el fin de focalizar la asistencia estatal respecto a la población desplazada, se diseñó un sistema de registro cuyo principal objetivo es identificar a la población desplazada. El Registro Único de Población Desplazada (RUPD) requiere que los hogares declaren frente a una entidad del Ministerio Público los hechos que condujeron al desplazamiento. Dicha declaración debe ser verificada en un período máximo de 15 días por Acción Social, entidad gubernamental responsable de atender a la población desplazada. Una vez se verifica la veracidad de la declaración, el hogar es registrado como desplazado y puede ser entonces beneficiario de los programas estatales para la población desplazada. Cuando la migración es masiva, el hogar es registrado automáticamente en el RUPD. El acceso a los programas de generación de ingresos evaluados en este libro está condicionado al registro en el RUPD. El desplazamiento masivo determina entonces la probabilidad de ser beneficiarios de los programas de generación de ingresos, pero el desplazamiento masivo no influencia los niveles de bienestar ni la habilidad para suavizar el consumo.

El cuadro 5 presenta los resultados de las estimaciones para las regresiones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Variables Instrumentales (VI). Los resultados de las regresiones revelan la enorme dificultad de las familias desplazadas para evitar que las variaciones en el ingreso se traduzcan en variaciones en el consumo, es decir, para suavizar su consumo. El coeficiente para el cambio en el ingreso (β) es estadísticamente significativo e igual a 0,19, evidenciando la poca capacidad de los hogares desplazados para confrontar cualquier tipo de choque. La magnitud del coeficiente del cambio en el ingreso es alta, en particular cuando se

compara con los hogares pobres en Colombia (0,03) y Nicaragua (0,07)²⁵⁷. Si surge un choque inesperado que altere el ingreso, un porcentaje considerable de la caída en el ingreso se transmitirá en una caída del consumo, que ya se encuentra cercano a niveles de subsistencia.

Cuadro 5. Coeficientes suavización de consumo (β)

Coeficiente (β)	MCO (i)	MCO (ii)	MCO (iii)	VI (iv)	VI (v)	VI (vi)
Cambio en ingreso	0,19*** (7,540)	-	-	-	-	-
Cambio en ingreso x tiempo de asentamiento inferior a tres meses	-	0,34*** (2,980)	-	-	-	-
Cambio en ingreso x tiempo de asentamiento entre tres meses y un año	-	0,21*** (3,640)	-	-	-	-
Cambio en ingreso x tiempo de asentamiento superior a un año	-	0,18*** (6,770)	-	-	-	-
Cambio en ingreso x beneficiarios	-	-	0,23*** (7,010)	0,30*** (3,570)	-	-
Cambio en ingreso x no beneficiarios	-	-	0,17*** (5,350)	0,16*** (3,020)	-	-
Cambio en ingreso x beneficiarios x tiempo de asentamiento inferior a tres meses	-	-	-	-	0,32*** (9,660)	0,23 (1,330)
Cambio en ingreso x beneficiarios x tiempo de asentamiento entre tres meses y un año	-	-	-	-	0,29*** (2,700)	0,11 (0,520)
Cambio en ingreso x beneficiarios x tiempo de asentamiento superior a un año	-	-	-	-	0,23*** (6,550)	0,33*** (3,710)
Cambio en ingreso x no beneficiarios x tiempo de asentamiento inferior a tres meses	-	-	-	-	0,34*** (2,510)	0,13* (1,680)
Cambio en ingreso x no beneficiarios x tiempo de asentamiento entre tres meses y un año	-	-	-	-	0,19*** (2,990)	0,25** (2,080)
Cambio en ingreso x no beneficiarios x tiempo de asentamiento superior a un año	-	-	-	-	0,16*** (4,65)	0,15*** (2,560)

(Continúa...)

Cuadro 5. Coeficientes suavización de consumo (β)

Número de observaciones	1.495	1.495	1.495	1.342	1.495	1.342
Rcuadrado	0,259	0,262	0,259	-	0,2619	-

Incluye características del hogar y controles departamentales

Errores estándar corregidos con White

*Significativo al 10%

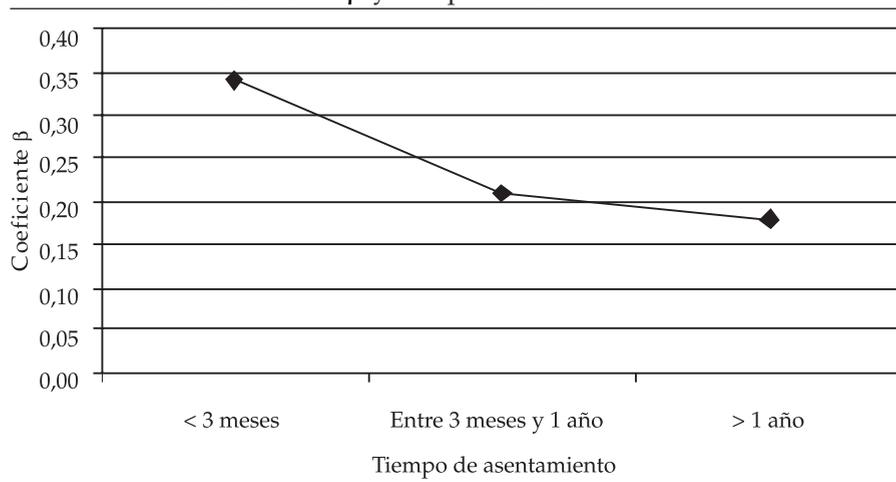
**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: Ibáñez y Moya (2006a).

¿Mejora con el paso del tiempo la habilidad de los hogares para suavizar consumo? La consolidación en el municipio de recepción contribuye a reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a posibles choques. El coeficiente β es cerca de 0,35 para las familias con menos de tres meses de asentamiento y desciende de manera pronunciada (0,21) para los hogares entre tres meses y un año de asentamiento (ver la gráfica 8). La tendencia decreciente pronunciada no se mantiene, y para los hogares con más de un año de asentamiento el coeficiente beta es 0,18, magnitud bastante elevada y que denota aún una alta vulnerabilidad de los hogares después de que ha transcurrido un año de asentamiento. De hecho, el coeficiente β es muy superior al coeficiente estimado por Barrera y Pérez-Calle para los pobres urbanos en Colombia.

Gráfica 8. Coeficiente β y tiempo de asentamiento



Fuente: Ibáñez y Moya (2006a).

Los bajos ingresos, el consumo cercano al límite de subsistencia y la dificultad para mitigar choques obligan a los hogares desplazados a adoptar

estrategias costosas para evitar caídas adicionales en consumo. Primero, algunos hogares distribuyen a sus miembros entre el municipio de origen y el municipio de recepción como estrategia para diversificar las fuentes de financiación del consumo y para continuar derivando ganancias de sus activos: 21% de los hogares mencionan que tienen por lo menos un miembro del hogar viviendo en el municipio de origen. Segundo, la interrupción de la educación secundaria es frecuente y es una estrategia de los hogares para solventar los menores ingresos. La asistencia escolar secundaria es, por lo tanto, inferior en las comunidades de recepción, en contraste con las comunidades de origen, pese a contar con la mayor cobertura educativa de las áreas urbanas. De hecho, la asistencia escolar primaria se aumenta significativamente después del desplazamiento, pero la asistencia escolar en secundaria decrece. Además, cerca del 16% de los hogares reporta que sus hijos contribuyen en las actividades de generación de ingresos, provocando así interrupciones escolares de aproximadamente 147 días en promedio.

Adoptar cualquiera de las estrategias anteriores conlleva costos de largo plazo, al reducir los ingresos en el largo plazo, comprometer el consumo e incrementar así el riesgo de caer en trampas de pobreza. Es importante entender cuáles hogares enfrentan un mayor riesgo de adoptar dichas estrategias, para focalizar políticas públicas en los grupos particularmente vulnerables. Con el fin de identificar los grupos con más riesgo de adoptar estrategias costosas, se estiman regresiones probit para la probabilidad de adoptar estrategias como el trabajo infantil y la fragmentación del hogar, así como regresiones de Mínimos Cuadrados Ordinarios para el número de días de interrupción escolar. El cambio en el ingreso laboral (ΔI_i) las características del hogar (Z_i), el capital social (S_i), la posesión de activos (A_i), la dinámica de la migración (M_i) y una variable dicótoma para la participación en los programas de generación de ingresos (G_i) son incluidos como determinantes de la probabilidad de adoptar estas estrategias. La probabilidad para el hogar i de adoptar la estrategia k está definida por

$$\Pr(\text{ob(adoptar estrategia } k)_i) = f(\delta_0 G_i + \delta_1 \Delta I_i + \delta_2 Z_i + \delta_3 S_i + \delta_4 A_i + \delta_5 M_i + \varepsilon_i)$$

donde k son la vinculación de menores a los mercados laborales, la fragmentación del hogar y la interrupción escolar. Los resultados de las regresiones se presentan en el cuadro 6.

Cuadro 6. Determinantes de las estrategias para suavizar consumo
Fragmentación del hogar y trabajo infantil

Variables	Fragmentación hogar		Trabajo infantil		Días interrupción escolar	
	Probit	VI Probit	Probit	VI Probit	MCO	IV
Beneficiarios generación de ingresos	-0,17* (-1,830)	-2,13*** (-8,940)	0,09 (0,870)	1,92*** (3,250)	-42,16 (-1,310)	-432,54 (-0,550)
Cambio en ingreso	0,36*** (8,660)	0,23*** (2,820)	0,07** (2,000)	-0,06 (-0,930)	15,60 (1,180)	45,80 (0,850)
Jefe del hogar masculino	-0,07 (-0,750)	0,07 (0,960)	-0,29*** (-3,130)	-0,25** (-2,100)	-0,37 (-0,080)	-1,18 (-0,190)
Tamaño del hogar	-0,07*** (-3,340)	-0,02 (-1,170)	0,18*** (8,900)	0,10 (1,260)	-4,81 (-0,190)	-10,37 (-0,350)
Edad – jefe del hogar	0,00 (-0,030)	0,03*** (2,300)	0,02 (0,940)	-0,02 (-0,950)	-55,21* (-1,940)	-0,02 (0,000)
Edad cuadrado – jefe del hogar	0,00 (0,430)	0,00** (-2,040)	0,00 (-0,310)	0,00 (1,560)	11,25 (1,440)	-6,36 (-0,180)
Pertenciente a minoría étnica	0,13 (1,200)	0,27*** (3,820)	-0,04 (-0,340)	-0,21*** (-2,620)	-12,92 (-1,340)	-1,09 (-0,050)
Años de educación – jefe del hogar	0,02 (0,880)	0,03 (1,630)	-0,01 (-0,470)	-0,02 (-1,310)	0,11 (1,120)	-0,01 (-0,030)
Años de educación – cónyuge	-0,05 (-1,570)	0,04 (1,260)	0,00 (-0,040)	-0,05* (-1,720)	-85,14*** (-2,770)	59,90 (0,440)
Dedicado a actividades agrícolas en origen – jefe del hogar	-0,12 (-1,390)	-0,04 (-0,650)	0,05 (0,520)	0,04 (0,510)	-5,65 (-0,900)	-6,84 (-1,130)
Participación en organizaciones – recepción	0,13 (1,480)	-0,06 (-0,730)	0,02 (0,180)	0,12* (1,650)	-20,84* (-1,960)	-12,37 (-0,580)
Propietario vivienda – recepción	0,00 (-0,030)	0,18*** (2,880)	0,08 (0,810)	-0,13 (-1,320)	42,63 (1,520)	29,47 (0,570)
Porcentaje de tierras bajo control hogar	0,11 (1,260)	-0,05 (-0,810)	0,00 (-0,050)	0,10 (1,570)	5,02 (0,180)	-24,10 (-0,420)
Contactos en recepción	-0,01 (-0,070)	-0,08 (-1,350)	0,15* (1,610)	0,12* (1,760)	-71,56** (-2,350)	-26,08 (-0,720)
Número de días asentamiento	0,00* (-1,800)	0,00** (2,370)	0,00* (-1,770)	0,00*** (-4,430)	63,80*** (2,620)	111,72*** (3,800)
Número de días asentamiento – cuadrado	0,00*** (2,740)	0,00 (-1,070)	0,00* (1,640)	0,00*** (3,430)	-54,18 (-1,550)	-56,10 (-1,430)

(Continúa...)

Cuadro 6. Determinantes de las estrategias para suavizar consumo
Fragmentación del hogar y trabajo infantil

Desplazamiento intramunicipal	-0,80*** (-5,220)	-1,02*** (-9,760)	0,13 (1,020)	0,73*** (3,090)	0,26*** (4,680)	0,37 (1,570)
Desplazamiento masivo	0,15 (1,320)	- -	0,13 (1,070)	- -	0,00* (-1,920)	0,00 (-1,300)
Constante	-0,43 (-0,900)	-0,53 * (-1,670)	-2,27*** (-4,200)	-0,86 (-0,680)	-20,17 (-0,420)	-274,92 (0,000)
Número de observaciones	1.600	1.605	1.598	1.605	512,84** (2,240)	399,86 (1,190)
Pseudo R cuadrado	0,1471	-	0,1121	-		
					789	789
					0,187	-

Controles departamentales incluidos

Errores estándar corregidos con White

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: Ibáñez y Moya (2006a).

Las estimaciones arrojan resultados interesantes. Algunas variables tradicionalmente identificadas como señales de vulnerabilidad ejercen la influencia esperada. La necesidad de generar ingresos adicionales obliga a los menores de hogares con jefatura femenina a vincularse a los mercados laborales y a interrumpir sus estudios escolares por un período más prolongado que los otros hogares. Asimismo, el tamaño del hogar es un factor que incrementa el riesgo de adoptar estrategias costosas. Más miembros significan más necesidades y una mayor presión para ampliar los ingresos, para lo cual se incrementa el trabajo infantil y se interrumpe la asistencia escolar durante un tiempo más prolongado. Por último, hogares con jefes mayores, y presumiblemente con hijos mayores, se fragmentan con más frecuencia. Esta estrategia es razonable para hogares con dicha estructura de edad. Los hijos mayores no requieren tanta atención; es más, pueden fácilmente viajar al municipio de origen, con el fin de continuar explotando sus activos.

Los hogares pertenecientes a minorías étnicas, si bien es claro que son más vulnerables, parecen ser más dados a proteger a sus hijos y a evitar adoptar estrategias con altos costos en el futuro. Los niños de dichos hogares revelan una menor probabilidad de estar participando en la fuerza laboral y la interrupción escolar, y cuando sucede, es por períodos más cortos.

La educación del cónyuge y la posesión de activos físicos parecen ser un mecanismo de protección para impedir la vinculación de los hijos al

mercado laboral. Ambas formas de capital complementan los ingresos del hogar y evitan así la presión sobre los hijos. Los hogares cuyos cónyuges tienen más años de educación enfrentan una menor probabilidad de trabajo infantil y la interrupción escolar sucede por menos tiempo. Asimismo, los hogares con propiedad de vivienda en el municipio de recepción exhiben menos días de interrupción escolar.

Por otro lado, el capital social en el municipio de recepción parece ser un simple instrumento de intermediación para conseguir empleo. La participación en organizaciones formales y los contactos en el lugar de recepción significan una mayor probabilidad de vincular a los menores a los mercados laborales. Es probable que las familias con escasez de ingresos recurran a sus familiares y amigos, así como a organizaciones formales, para buscar trabajos en los cuales sus hijos puedan vincularse. Sin embargo, ninguna de las dos variables ejerce una influencia significativa sobre los días de interrupción escolar.

La dificultad para recuperar la senda productiva después del desplazamiento aparece de nuevo cuando se analiza el impacto de los días de asentamiento. El tiempo de asentamiento parece agravar las condiciones de los hogares desplazados, que se ven obligados a recurrir a estrategias costosas con más probabilidad, conforme pasa el tiempo de asentamiento: la fragmentación del hogar, el trabajo infantil y la interrupción escolar aumentan con el tiempo de asentamiento.

Por último, los programas de generación de ingresos parecen no ser efectivos para evitar que los hogares recurran a estrategias poco convenientes. Pese a que los beneficiarios de los programas de generación de ingresos se fragmentan con menos probabilidad, el impacto sobre el trabajo infantil y la interrupción escolar no es significativo. Una evaluación detallada de estos resultados se presenta en el capítulo siguiente.

Los resultados de esta sección evidencian la vulnerabilidad de la población desplazada frente a posibles choques. Su capacidad para aislar el consumo de las fluctuaciones en el ingreso es limitada. Al suceder un choque sobre el ingreso, los hogares desplazados deben contraer el consumo, ya en niveles bastante bajos, o recurrir a estrategias con altos costos futuros. La dificultad para mitigar choques surge debido a la pérdida de activos, a las altas tasas de desempleo, al casi inexistente acceso a los mercados financieros y a un debilitamiento de las redes sociales; todos consecuencia del desplazamiento forzado.

E. Conclusiones

La recuperación de la población desplazada reviste dificultades ingentes, tal como muestran los resultados de este capítulo y el capítulo anterior. Los instrumentos necesarios para emprender procesos productivos sostenibles y para protegerse frente a eventuales riesgos se diluyen como consecuencia del desplazamiento. La posesión de activos, debido a pérdida o abandono, se reduce sustancialmente y la acumulación de nuevos activos tras el desplazamiento es un proceso lento y poco efectivo. Los menores retornos provenientes de los activos y la deficiente acumulación de nuevos activos no pueden ser compensados con los ingresos laborales, pues éstos son bajos, debido a la dificultad para vincularse a los mercados laborales y a la vinculación a trabajos de mala calidad. Los mercados financieros no son tampoco una opción para solventar los menores ingresos. Por último, los mecanismos formales e informales de aseguramiento de riesgo se debilitan después del desplazamiento. Todo lo anterior significa que la población desplazada carece de instrumentos para iniciar y consolidar la recuperación de su capacidad productiva.

Recobrar los activos, incrementar el ingreso laboral, acceder a los mercados financieros y contar con mecanismos informales de aseguramiento no parecen aumentar con el tiempo de asentamiento en el municipio receptor. El proceso de recuperación de la población desplazada es lento y, para muchas variables, la recuperación parece deteriorarse de nuevo para aquellos hogares con un tiempo prolongado de asentamiento: la posesión de activos y el ingreso laboral exhiben una relación de u-invertida con el tiempo de asentamiento. Suponer, por lo tanto, que la población desplazada recobra su capacidad productiva con el paso del tiempo es errado y puede conducir al diseño de políticas inadecuadas.

Los programas de generación de ingresos, de otro lado, son medianamente efectivos y contribuyen en la recuperación de activos de la población desplazada. Es claro que los programas de generación de ingresos impulsan la recuperación de activos. Sin embargo, los beneficios de dichos programas no son suficientes para fortalecer los mecanismos de aseguramiento contra riesgos y para prevenir así que los hogares adopten estrategias costosas en el largo plazo, tales como la fragmentación del hogar, la interrupción escolar y el trabajo infantil.

Si se adopta una estrategia de no intervención, la población desplazada enfrentaría altos riesgos de caer en trampas de pobreza, ya que no posee ningún instrumento para salir adelante sola. El conflicto armado perpetuaría así un legado de pobreza y desigualdad que poco contribuye a reconstruir un país en un período de posconflicto. Atender a las víctimas

del conflicto armado no es sólo un deber, porque así lo plantea el derecho internacional humanitario; es también necesario, bajo una lógica económica cuyo objetivo es abogar por agentes económicos libres, productivos y capaces de proveerse su sustento económico.

VI

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Tres conclusiones reiterativas emergen de los dos capítulos anteriores. Primero, la caída en bienestar como consecuencia del desplazamiento es elevada y las condiciones económicas de la población desplazada en los municipios de recepción son precarias. Segundo, la recuperación del choque del desplazamiento parece bastante improbable. La migración forzada ocasiona una pérdida de activos sustancial, productivos en especial, minando así la capacidad productiva de los hogares; deteriora los mecanismos de aseguramiento contra futuros choques; y el paso del tiempo en el municipio de recepción no implica una mejora en las condiciones de la población desplazada. Tercero, los programas de generación de ingresos, así sea incipientemente, parecen impulsar el proceso de recuperación de los hogares desplazados.

Recuperar la capacidad productiva de los hogares desplazados requiere de una asistencia externa, pues el transcurso del tiempo no mejora sus condiciones económicas ni les permite acumular una base de activos productiva suficiente. Para atender a la población desplazada, el Estado colombiano ha promulgado una legislación que parte de la Ley 387 de 1997 y es complementada con los decretos, resoluciones y directivas presidenciales que se desprenden de ésta. La ayuda estatal está contemplada en tres etapas: prevención, ayuda humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica. Los programas de prevención buscan eliminar las causas del desplazamiento, para así disminuir su incidencia. El objetivo de la ayuda humanitaria de emergencia es atender a la población desplazada durante los tres primeros meses del desplazamiento, con la provisión de alimentación, hospedaje, salud y transporte. Una vez finaliza la ayuda humanitaria de emergencia, se inicia la fase de estabilización

socioeconómica, cuyo principal fin es ayudar a la población desplazada a recobrar su capacidad productiva y ser así responsable de su sustento, sin necesidad de recurrir a la ayuda estatal. Al alcanzar la estabilización socioeconómica, cesan la condición de desplazamiento y, por lo tanto, la asistencia especial para la población desplazada.

La asistencia para la población desplazada en Colombia se ha concentrado en afinar la provisión de ayuda humanitaria de emergencia, expandir el cubrimiento de salud, promover la asistencia educativa y, en el último año, proveer subsidios condicionados con el programa Familias en Acción. La fase de estabilización económica, en particular, los programas de generación de ingresos, ha sido poco efectiva, debido al insuficiente presupuesto asignado por las entidades estatales y a la dificultad inherente en implementar programas de generación de ingresos para víctimas del conflicto armado (Ibáñez y Moya, 2007). La poca efectividad de los programas de generación de ingresos deriva en la imposibilidad para la población desplazada de proveerse su sustento económico, una alta dependencia de la ayuda estatal y una carga fiscal elevada para Colombia. Evaluar los programas de generación de ingresos es esencial para identificar si son efectivos para mejorar las condiciones de la población desplazada, qué dimensiones del bienestar impactan estos programas, cuáles grupos de la población se benefician más con el programa y cómo se deben ajustar, con el fin de incrementar su efectividad.

El objetivo de este capítulo es analizar el impacto de los programas de generación de ingresos diseñados para atender a la población desplazada. Dado que el fin último de los programas de generación de ingresos es expandir la capacidad económica de los hogares, evalúo en primera instancia si participar en dichos programas incrementa el ingreso laboral de los hogares y si este incremento se traduce en mejores condiciones de bienestar, representado por el consumo agregado. Analizo, además, si la expansión en el ingreso producida por los programas de generación de ingresos es sostenible y contribuye a fortalecer los mecanismos de aseguramiento del riesgo de los hogares, proteger su consumo, mejorar los indicadores sociales y evitar que los hogares adopten estrategias costosas para solventar caídas en el ingreso o acumular activos. Por último, es importante examinar cómo modifican los programas de generación de ingresos las preferencias de los hogares desplazados. Es probable que el acceso a los programas de generación de ingresos, al contribuir en el proceso de consolidación de las familias desplazadas en el municipio de recepción, modere el deseo de retornar al municipio de origen. Ello plantearía un dilema de política pública, pues el retorno, una vez cese el conflicto, es considerado la política óptima para la población desplazada.

A. Los programas de microcrédito y capacitación laboral: evidencia de su impacto

Para impulsar la recuperación de la capacidad productiva de los hogares desplazados, las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han diseñado programas de generación de ingresos enfocados en proyectos de emprendimiento empresarial, con la provisión de microcréditos, o en la inserción a los mercados laborales, con capacitaciones laborales. El diseño de dichos programas se basa en programas existentes en Colombia y en otros países para apoyar a la población pobre. El objetivo de esta sección es examinar la evidencia disponible sobre el impacto de programas similares. Cabe anotar que la evidencia se circunscribe a programas focalizados en la población pobre, y no hay aún estudios rigurosos acerca del impacto de estos programas en las víctimas de conflictos civiles.

El fin último de los programas de provisión de microcréditos y capacitación laboral es incrementar el ingreso de la población pobre; aliviar las restricciones de crédito que enfrentan los pobres es el principal objetivo de los programas de microcrédito. Los créditos para la población pobre, debido a la falta de garantías, la dificultad para identificar a los buenos acreedores y los elevados costos de monitoreo, conllevan un alto costo para los bancos comerciales, lo que deriva en una restricción de la oferta de créditos para estos grupos de población. La provisión de microcréditos subsana entonces estas restricciones de crédito. Al contar con créditos, los hogares pobres pueden iniciar negocios, antes imposibles de llevar a cabo, debido a sus bajos ingresos y a la imposibilidad de disminuir el consumo para financiar los costos de capital²⁵⁸. Los programas de capacitación laboral buscan mejorar la capacidad laboral de los individuos, de tal manera que se reduzca el desempleo o se incrementen los salarios de las personas empleadas.

1. Los programas de microcréditos

Los programas de microcréditos, con ciertas variaciones mínimas, son similares. Los créditos están focalizados en población pobre, sus montos son pequeños y no requieren garantías. Para asegurar el pago de los créditos y reducir los costos de información, los créditos se otorgan a pequeños grupos de la comunidad, pero son individuales. El papel del grupo beneficiario es asegurar el pago del crédito, ya que si un miembro del grupo no cumple con sus obligaciones, los miembros restantes no podrán

258 Pitt y Khandker, 1998.

acceder a créditos adicionales. Una vez se cumple con el pago del crédito, los beneficiarios pueden acceder a créditos por montos superiores. Dicho esquema ha reducido los costos de provisión de créditos a la población pobre y el desempeño de los índices de cartera es bastante satisfactorio.

Diversos estudios han examinado el impacto de los programas de microcrédito. Los resultados de las evaluaciones son similares: los beneficiarios son, por lo general, los hogares con ingresos más altos de la población pobre; los programas parecen mejorar los indicadores de ingreso, pero su impacto sobre indicadores sociales es mínimo o inexistente; el impacto del programa está altamente correlacionado con el ingreso inicial; y pocos beneficiarios salen de la pobreza gracias al programa. Sin embargo, los programas de microcrédito cumplen un importante papel protector, pues reducen la dependencia respecto a créditos de usura y permiten la diversificación de las fuentes de ingreso familiares.

Los programas de microcrédito, al ofrecer montos pequeños, promueven la participación de los segmentos pobres de la población y reducen el atractivo del programa para los hogares no pobres. La evidencia de algunos programas de microcrédito indica, empero, que los beneficiarios se concentran mayoritariamente en la porción alta de la distribución de ingresos entre la población pobre²⁵⁹. Al parecer, las conexiones con los miembros importantes de la comunidad son una ayuda para acceder a los programas de microcréditos²⁶⁰. Si bien la captación de los programas de microcréditos por grupos de la población con ventajas sociales o económicas no es común, es importante evitarlo, para asegurar que los créditos se canalicen hacia los más necesitados.

El impacto de los programas sobre el ingreso de los beneficiarios es positivo, pero no siempre se traduce en mejoras de otros indicadores. Los beneficiarios perciben mejoras en el ingreso y otras variables productivas, como la tenencia de activos, la producción agropecuaria, las fuentes adicionales de crédito, las ventas de los negocios familiares y la oferta laboral de las mujeres²⁶¹. La expansión en la capacidad económica parece, sin embargo, no irradiarse a otros indicadores de bienestar del hogar. Los mayores ingresos no se traducen necesariamente en un mayor consumo o en un incremento en la capacidad de los hogares para suavizar el consumo. Chen *et al.* (2006) encuentran que los beneficiarios de un programa de generación de ingresos en China prefieren ahorrar los ingresos adicionales obtenidos en el programa y, por lo tanto, el consumo permanece

259 Coleman, 2006; Park y Ren, 2001.

260 Coleman, 2006; Shaw, 2004.

261 Coleman, 2006; Shaw, 2004; Park y Ren, 2001.

constante en el corto plazo. Una vez perciben las ganancias del programa como permanentes, incrementan levemente su consumo en el largo plazo. Los resultados de una evaluación de un programa similar en China indican, además, que la habilidad para suavizar el consumo no se fortalece con el programa: es posible que la dificultad para cumplir con el pago de las cuotas exacerbe el efecto de las variaciones en el ingreso²⁶². Es más, el impacto sobre el ingreso exhibe una alta variabilidad, de tal manera que el ingreso de algunos beneficiarios permanece estable o decrece. Como resultado, sólo unos cuantos beneficiarios logran sobrepasar la línea de pobreza, aquellos cerca de la línea de pobreza, y algunos pobres extremos apenas alcanzan a superar la línea de pobreza extrema²⁶³.

El impacto de los programas de microcrédito sobre indicadores sociales, como educación y salud, no es claro. Coleman (2006) encuentra un efecto nulo de los programas de microcrédito sobre los gastos en educación y salud. Wydick (1999), por su parte, encuentra que los niños de hogares beneficiarios de programas de microcrédito en Guatemala se retiran con menor frecuencia del colegio. Algo similar sucede con las niñas hijas de madres beneficiarias del Banco Grameen en Bangladesh²⁶⁴. Los resultados contradictorios de los microcréditos sobre la asistencia escolar no son, sin embargo, sorprendentes. La asistencia escolar implica un *trade-off* entre retornos futuros del capital humano y retornos presentes, por la vinculación de los niños a los mercados laborales. Los costos de oportunidad son aun mayores cuando las mujeres dedican los recursos del microcrédito a trabajar, y es, por tanto, necesario apoyarse en los niños para cumplir con las labores del hogar, disminuyendo así la asistencia escolar²⁶⁵.

El impacto positivo de los programas está relacionado con diversas variables. Primero, los ingresos iniciales son determinantes del impacto del programa. Los programas producen un retorno mayor para los pobres cercanos a la línea de pobreza. Más aún, para algunos casos, el impacto del programa sobre los más pobres es nulo o pequeño y no perdura en el largo plazo²⁶⁶. La dificultad de los pobres para aprovechar los programas de microcrédito e iniciar inversiones productivas no está relacionada con los programas *per se* sino con su entorno económico: mercados poco favorables, bajas demandas de sus productos, por el perfil socioeconómico de sus clientes, una infraestructura inadecuada y deficiencias de capital

262 Park y Ren, 2001.

263 Shaw, 2004.

264 Pitt y Khandker, 1998.

265 Morduch, 1999; Wydick, 1999.

266 Coleman, 2006; Shaw, 2004.

humano²⁶⁷. Segundo, la organización también determina el impacto del programa. Park y Ren (2001) encuentran que, para dos programas idénticos operados en China por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el incremento en el ingreso es significativamente mayor para los beneficiarios de las ONG. Dado que las entidades gubernamentales distribuyen los créditos con criterios clientelistas y no de acuerdo a las necesidades o talentos de quienes los solicitan, el impacto del programa es menor. Tercero, en algunos casos, el impacto del programa es superior para las mujeres, en contraste con los hombres. En Bangladesh, las beneficiarias del Banco Grameen perciben un consumo mayor y un incremento mayor en el valor de los activos diferentes de la tierra²⁶⁸.

De otro lado, la imposibilidad para los hogares más pobres de extraer beneficios de los programas de microcréditos obedece a una variedad de factores. La indivisibilidad del capital fijo y las altas inversiones requeridas para iniciar negocios de altos retornos restringe a los hogares pobres a crear empresas de bajos retornos, cuyos ingresos contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las familias, al disminuir la dependencia de los créditos de usura, diversificar las fuentes de ingresos y proveer a las mujeres un ingreso independiente, pero no son suficientes para salir de la pobreza. Los bajos niveles de capital humano limitan también la capacidad de los más pobres para aprovechar los programas de microcrédito. La baja escolaridad implica dificultades para entender las condiciones del mercado, para emprender ocupaciones no tradicionales, para apoyarse en redes sociales imprescindibles como fuente de información y de contactos laborales, y para emprender negocios rentables. Todo lo anterior obliga a los hogares más pobres a invertir en empresas de bajos retornos, pero cuyas habilidades y capital requeridos pueden ser asumidos por una persona de baja escolaridad²⁶⁹.

2. Los programas de capacitación laboral

Los programas de capacitación laboral han sido adoptados en países desarrollados y no desarrollados. El objetivo de dichos programas es fortalecer las habilidades laborales de los participantes, ampliar sus conocimientos, para así acceder a una gama más amplia de ocupaciones, y, en últimas, incrementar su ingreso laboral. Los programas son dirigidos, por lo general, a los segmentos pobres de la población que estén desempleados, con bajas escolaridades, migrantes rurales o madres cabeza de familia.

267 Shaw, 2004.

268 Pitt y Khandker, 1998.

269 Shaw, 2004.

Las evaluaciones del impacto de los programas de capacitación laboral no son muy alentadoras²⁷⁰. Las ganancias de los programas de capacitación, cuando las deficiencias laborales son grandes y las inversiones por participante son pequeñas, son mínimas. Las ganancias se concentran, por lo general, en los grupos con debilidades laborales y fuertes desventajas económicas²⁷¹. Pese al impacto positivo para ciertos grupos, la magnitud del impacto es bastante pequeña. Por ejemplo, la evaluación de un programa dirigido a jóvenes en edad de trabajar encontró que el impacto sobre el desarrollo cognitivo no perdura en el largo plazo; además, las tasas de empleo tras tres años y medio de finalizado el programa son idénticas a las del grupo de control²⁷². Una evaluación similar de un programa enfocado en mujeres adultas calculó una tasa de retorno del programa del 3,5%, monto insuficiente para sacar un porcentaje aceptable de mujeres de la pobreza²⁷³. Más aún, los programas no reintegran a los beneficiarios al flujo productivo de la economía y, si bien reducen la pobreza, no son suficientes para sacar a sus participantes de la pobreza²⁷⁴.

Por último, las evaluaciones de impacto han encontrado, por lo general, que los programas de capacitación operados por empresas privadas proveen unos beneficios mayores que los programas públicos²⁷⁵. Cuando los programas son implementados por las firmas mismas, los salarios se incrementan en el corto plazo, ya que proveen entrenamiento en ocupaciones básicas, las cuales son más efectivas en un período inmediato²⁷⁶. Sin embargo, los beneficios en el largo plazo se disipan, en algunos casos, al limitar la movilidad laboral de los beneficiarios²⁷⁷. Al incrementar los salarios iniciales, otros estudios encuentran un impacto positivo de las capacitaciones emprendidas por las firmas mismas²⁷⁸.

270 Medina y Núñez, 2005; Lalonde, 1995; Heckman *et al.*, 1993; Pawasarat y Quinn, 1993; Leigh, 1990.

271 Lalonde, 1995.

272 Heckman *et al.*, 1993.

273 Lalonde, 1995.

274 *Ibid.*

275 Medina y Núñez, 2005; Veum, 1999; Bishop, 1994; Bartel, 1992; Lynch, 1992.

276 Lynch, 1992.

277 Parent, 1999; Lalonde, 1995; Lynch, 1992.

278 Veum, 1999.

3. ¿Son los programas de microcréditos y de capacitación laboral útiles para atender a la población desplazada?

Los programas de generación de ingresos para la población desplazada abarcan cursos de capacitación laboral y provisión de microcréditos. Las evaluaciones de impacto descritas en esta sección muestran una alta variabilidad en la efectividad de los programas. Ambos programas son insuficientes para impulsar a los beneficiarios a sobrepasar la línea de pobreza. Sólo los hogares con ingresos iniciales cercanos o un poco superiores a la línea de pobreza logran resultados significativos. Para los otros hogares, el impacto es claro: los programas expanden el ingreso y protegen a los hogares frente a futuros choques, pero los beneficios no se sostienen en el tiempo, no parecen suficientes para aumentar la inversión en capital humano y no son exitosos para reintegrar a los beneficiarios al flujo productivo formal de la economía.

¿Cuáles son las implicaciones anteriores al aplicar estos programas a la población desplazada? Implementar estos programas en población desplazada reviste complicaciones adicionales que han sido discutidas en capítulos anteriores: la base de activos físicos de la población desplazada es pequeña, la educación es deficiente, la experiencia laboral es inadecuada para las áreas urbanas, sus redes sociales en el lugar de recepción son limitadas, carecen de garantías para solicitar créditos y su bajo consumo impide reducciones adicionales para invertir esos ingresos en actividades productivas. Pareciera entonces que los programas similares, diseñados para la población pobre, requieren de refuerzos adicionales para asegurar un impacto significativo para la población desplazada. El objetivo de las secciones siguientes es evaluar la efectividad de los programas de generación de ingresos diseñados para la población desplazada.

B. Los programas de generación de ingresos para la población desplazada²⁷⁹

Los programas de generación que se evalúan en este capítulo son financiados por USAID y operados por CHF, FUPAD y OIM. Los programas de generación de ingresos, que cubren capacitación laboral y emprendimiento empresarial, surten una serie de etapas similares, a saber: (i) divulgación del programa; (ii) preselección de beneficiarios; (iii) proceso previo de capacitación; (iv) selección de beneficiarios; y (v) implementación. Dichos procesos se describen a continuación.

279 Esta sección se basa en el *Manual operativo para las entidades operadoras, Programa de asistencia económica* (CHF, 2003).

Un paso previo a la selección de beneficiarios es la difusión masiva del programa entre los potenciales beneficiarios. El uso de carteleras, la distribución de la información con los equipos encargados de suministrar la asistencia humanitaria de emergencia, el apoyo de organizaciones y entidades que trabajan con población desplazada y la divulgación en barrios de la ciudad con alta concentración de esta población son las principales estrategias para difundir la información concerniente a los programas. El propósito del proceso de difusión masiva es ampliar la población objetivo con posibilidades de solicitar su inclusión en los programas de generación de ingresos.

Los beneficiarios potenciales identificados durante la etapa de divulgación deben cumplir con un conjunto de requisitos para acceder al programa. En primer lugar, es requisito indispensable que el hogar se encuentre en condición de desplazamiento y que dicha condición sea comprobable. En segundo lugar, los hogares deben haber sido beneficiados por la ayuda humanitaria de emergencia y, por lo tanto, tener resueltas sus necesidades básicas.

Cuando la población potencial es superior a los recursos disponibles, se debe complementar su selección con criterios definidos para priorizar la selección. Los criterios siguientes, en orden de importancia, son la base para la priorización: (i) contar con una experiencia mínima de seis meses en actividades empresariales, ya sea independientes o laborales; (ii) tener experiencia en actividades productivas asociativas; (iii) ser jefe de hogar con personas a cargo o en situación de discapacidad física; (iv) ser jefe de hogar mujer con personas a cargo; y (v) ser joven, con edad entre 18 y 25 años, y con personas a cargo.

Los requisitos y criterios de selección anteriores se comprueban con una visita de campo a la unidad económica y a la familia. La visita permite, además, establecer las condiciones de la actividad económica y de la vivienda, así como elaborar un plan preliminar de apoyo al hogar beneficiario. La visita de campo, en conjunto con la lista de requisitos y prioridades descritos en párrafos anteriores, es la base para la primera selección de beneficiarios.

Los beneficiarios preseleccionados deben asistir a programas de capacitación, cuyo fin último es elaborar planes laborales y empresariales que serán sometidos a un Comité Técnico para la selección final de beneficiarios. Los hogares preseleccionados deben asistir a capacitaciones en orientación ocupacional, temas psicosociales, conocimientos de unidades empresariales y aspectos laborales. El objetivo de las capacitaciones laborales es, por un lado, identificar las habilidades, destrezas y limitantes de cada beneficiario, para así elaborar un perfil laboral y, por otro lado, capa-

citar a los beneficiarios en oficios demandados en los mercados laborales de los municipios receptores. El objetivo de las capacitaciones empresariales es fortalecer las capacidades empresariales de los beneficiarios, para adelantar una adecuada gestión administrativa, financiera y comercial de sus unidades empresariales y realizar un diagnóstico empresarial.

Los procesos de capacitación culminan en la elaboración de un plan laboral o empresarial. Los planes laborales contienen información acerca del perfil laboral, es decir, el nivel educativo de los beneficiarios, los cursos de capacitación recibidos en períodos anteriores, la experiencia laboral y las destrezas y habilidades para desempeñar los trabajos. Se identifican, además, los principales obstáculos para la vinculación a los mercados laborales, tales como las obligaciones familiares, el nivel educativo y la edad. Los planes empresariales incluyen el plan de inversiones y las necesidades de capacitación técnica, intercambios empresariales, asesorías y recursos para capital de trabajo. Asimismo, el perfil empresarial elabora un diagnóstico de la empresa o de la actividad económica.

Dichos planes son sometidos a un Comité Técnico, que otorga un monto máximo de US\$500 a los beneficiarios escogidos. El beneficiario puede acceder a servicios combinados y, por lo tanto, escoger programas que agrupen la capacitación laboral y el apoyo para el funcionamiento de unidades empresariales. Una vez se aprueban las solicitudes de ingreso, el operador hace una entrega formal de los recursos, en la cual los beneficiarios firman un acta de acuerdos y compromisos. Los hogares que no cumplan con los compromisos establecidos en los planes no podrán ser beneficiarios de programas posteriores.

C. Evaluación del impacto de los programas de generación de ingresos

Evaluar el impacto de los programas de generación de ingresos, en particular, la capacitación laboral y la provisión de microcrédito, es el objetivo de esta sección. Dichos programas están diseñados para garantizar que los hogares desplazados sean capaces de generar sus propios ingresos, enfrenten unas condiciones de vida dignas y, de manera paralela, reduzcan su dependencia de los programas de asistencia. Con estadísticas descriptivas y regresiones econométricas, la evaluación establece si los programas fueron efectivos para alcanzar los objetivos identificados. Los datos provienen de la ENHD (2004) descrita en el capítulo IV. Esta sección examina la estrategia de evaluación adoptada y los resultados de la misma.

1. Estrategia metodológica

El objetivo de esta evaluación es estimar el impacto de los programas de generación de ingresos para mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares. La principal dificultad en este tipo de evaluaciones radica en la incapacidad de observar las condiciones socioeconómicas de un mismo hogar con y sin el programa de generación de ingresos. Es necesario, por lo tanto, construir un grupo de control, con el fin de estimar las condiciones socioeconómicas si no hubiese sido beneficiario del programa. Dicho grupo se puede construir con métodos experimentales y no experimentales. En los métodos experimentales, se selecciona un grupo de posibles beneficiarios, el acceso al programa se asigna de manera aleatoria y se construye una línea de base. Ello asegura que, en promedio, las características del grupo de control y de tratamiento sean idénticas. En los métodos no experimentales, se construye una muestra de no beneficiarios con características similares a la muestra de beneficiarios. Diversos estudios han demostrado que los métodos experimentales y las estimaciones de diferencias-en-diferencias arrojan estimaciones de impacto con sesgos menores, en contraste con los métodos no experimentales²⁸⁰.

Dos problemas de los datos de la muestra de beneficiarios impiden adoptar los métodos experimentales o una estimación de diferencias-en-diferencias. El acceso a los programas de generación de ingresos no se asigna de manera aleatoria entre un grupo de posibles beneficiarios, lo cual descarta el uso de métodos experimentales. Los programas, además, no aplicaron una línea de base y encuestas en etapas posteriores, con el fin de evaluar el desempeño de los beneficiarios a lo largo del tiempo. Esto descarta entonces la estimación de diferencias-en-diferencias. Dichas fallencias dificultan la capacidad de establecer una relación causal entre la participación en los programas y cambios en las condiciones socioeconómicas de los hogares.

La evaluación se basa, por ende, en métodos no experimentales y se diseña con el objetivo de minimizar el sesgo de estimación de los métodos no experimentales. El sesgo se minimiza con la aplicación del mismo cuestionario a ambos grupos, la selección de la muestra para el grupo de control y tratamiento en los mismos municipios, y la eliminación de los hogares que se ubican por fuera del soporte común. Estas dos primeras características aseguran que la selección del grupo de control, con base en características observables, sea adecuada, al controlar por el contexto económico y usar las mismas técnicas de medición para ambos grupos²⁸¹.

280 Heckman *et al.*, 1998.

281 *Ibid.*

La selección del grupo de control con base en no observables reviste mayores complicaciones y el sesgo consecuente se reduce con el método de diferencias-en-diferencias. Pese a las bondades de este método, los datos disponibles no permiten aplicarlo, ya que no se cuenta con información previa a la puesta en marcha del programa de los beneficiarios y grupos de control.

Dadas las consideraciones anteriores, se usó un método de emparejamiento, que se describe en los párrafos siguientes. La medición ideal del impacto de un programa de generación de ingresos compara las condiciones económicas del hogar i después del programa C_{1i} con dichas condiciones antes del programa C_{0i}

$$\Delta = C_{1i} - C_{0i} \mid D_i = 1$$

donde D_i representa la probabilidad de ser beneficiario del programa de generación de ingresos. El impacto del programa se mide comparando la diferencia entre las condiciones económicas con el programa y las condiciones económicas del mismo hogar si no hubiese sido beneficiario. El segundo término de la expresión no es observable y se debe aproximar con datos del grupo de control. Para que esta aproximación sea adecuada, es necesario que las condiciones económicas del grupo de control, condicionado en las características observables X , posean la misma distribución de las condiciones económicas de los beneficiarios si no hubiesen participado en el programa.

$$E(C_0 \mid X, D = 1) = E(C_0 \mid X, D = 0)$$

La estimación del impacto del programa de asistencia se calcula entonces de la manera siguiente:

$$\bar{\Delta} = E(C_1 \mid X, D = 1) - E(C_0 \mid X, D = 0)$$

Para estimar el impacto del programa, es necesario, por consiguiente, emparejar las observaciones con base en el vector multidimensional X , lo cual es prácticamente imposible de llevar a cabo. Rosenbaum y Rubin (1983) demuestran que el problema de multidimensionalidad se puede resolver con la definición de una función de emparejamiento que denota la probabilidad de participar en el programa a evaluar:

$$\Pr(D = 1 \mid X) = P(X).$$

Dicha función permite llevar a cabo el proceso de emparejamiento entre el grupo de tratamiento y de control. Más aún, Heckman *et al.* (1998) demuestran que una condición menos restrictiva para estimar el impacto del programa a evaluar requiere que la distribución de las condiciones económicas del grupo de control, condicionado en la función de empare-

amiento, sea idéntica a la distribución de las condiciones económicas del grupo de beneficiarios si no hubiesen participado en el programa:

$$E(C_0 | P(X), D = 1) = E(C_0 | P(X), D = 0).$$

El propósito de la función de emparejamiento es crear un índice que agrupe las características observables de los hogares y permita así emparejar cada hogar del grupo de beneficiarios con uno o más hogares del grupo de control. Los hogares sin un hogar equivalente en el soporte común son eliminados de la muestra, para reducir el sesgo causado por las variables no observables.

La estimación de la función de emparejamiento para la participación en programas de generación de ingresos está definida por

$$P_i = f(D_i, M_i, H_i)$$

donde P_i es la probabilidad de que un hogar sea beneficiario de un programa de generación de ingresos, D_i caracteriza las dinámicas que generaron el desplazamiento, M_i son las estrategias de migración del hogar y H_i es el vector de características socioeconómicas del hogar. El vector de las variables que caracterizan las dinámicas que generaron el desplazamiento contiene una variable dicótoma que denota si el hogar fue desplazado por grupos paramilitares o guerrilleros y si el desplazamiento fue reactivo. El desplazamiento masivo, el desplazamiento intramunicipal y el tiempo de asentamiento en el municipio de recepción componen el vector de las estrategias de migración adoptadas por el hogar. El vector de características del hogar está compuesto por el género del jefe del hogar, la jefatura femenina debido al desplazamiento, la edad, la escolaridad del jefe del hogar, la pertenencia a minorías étnicas, la ocupación en actividades agrícolas del jefe de hogar en el origen, la tasa de dependencia, si un miembro del hogar padece una enfermedad física o psicológica grave, el porcentaje de tierras en el origen aún en control del hogar, los contactos con familiares y amigos en el municipio de recepción y la participación en organizaciones formales en el mismo.

Pese a controlar por un buen número de variables observables, aún persisten variables no observables que pueden sesgar la medición del impacto del programa. Es posible que los hogares que participen en los programas de generación de ingresos sean más emprendedores, estén mejor conectados y tengan distintas preferencias respecto al riesgo, en contraste con los no participantes²⁸². Si bien muchas variables incluidas pretenden controlar por estos factores, la imposibilidad de medirlas adecuadamente podría generar un sesgo hacia arriba del impacto del programa. Ello

282 Coleman, 2006; Morduch, 1999.

implicaría que se estaría sobredimensionando el impacto del programa. Por otro lado, es posible que los programas focalicen la ayuda en hogares más vulnerables, como aquellos en los que el jefe del hogar es una mujer, los hogares más pobres o los hogares con elevadas pérdidas de activos, como consecuencia del desplazamiento. Asimismo, es posible que para la población desplazada, debido al proceso traumático de las experiencias vividas en el origen y a la migración forzada, existan variables no observables que afectarían el desempeño del hogar en el programa: la depresión, la dificultad para adaptarse a la ciudad y el estrés postraumático son algunas de ellas. Tanto las variables de vulnerabilidad como el grupo de las últimas variables generarían un sesgo hacia abajo del impacto del programa, subdimensionando así su efecto.

El objetivo final de los programas de generación de ingresos, tal como se ha planteado en párrafos anteriores, es incrementar la capacidad productiva de los hogares desplazados y, así, mejorar sus condiciones de bienestar. Para evaluar si en efecto se cumplen estas dos premisas, examino primero si la participación en dichos programas ha mejorado las condiciones laborales, tales como la tasa de desempleo y el ingreso laboral, y la capacidad de gasto de los hogares, medida como el consumo de los hogares. Asimismo, es importante analizar si las ganancias de los programas de generación de ingresos han permitido la acumulación de activos que en un futuro producirán retornos y bienestar. La expansión inicial de la capacidad productiva, si es sostenible, debería mejorar las condiciones económicas y de bienestar de las familias desplazadas y reducir así la dependencia respecto a la ayuda estatal. Con el fin de explorar esto, mido el impacto del programa sobre el porcentaje del gasto destinado al consumo de alimentos, variable que denota la vulnerabilidad del hogar, sobre el porcentaje del gasto financiado por donaciones y sobre el porcentaje de hogares desplazados por debajo de la línea de pobreza y de la línea de indigencia. Si los programas de generación de ingresos han sido efectivos, los cuatro indicadores deberían disminuir a medida que los beneficios del programa se consolidan. La vulnerabilidad de los hogares frente a futuros choques también debería disminuir en el largo plazo si el impacto del programa es sostenible en el tiempo. Para evaluar si se reduce dicha vulnerabilidad, evalúo el impacto del programa sobre la capacidad de los beneficiarios para suavizar el consumo y acceder a otros programas de crédito. Los beneficios del programa deberían además irrigarse a los menores del hogar y aumentar así su asistencia escolar, reducir su participación en los mercados laborales y prevenir la interrupción escolar; se analiza el impacto sobre los tres indicadores. Por último, examino si el programa modifica las preferencias de los hogares acerca del deseo de retorno. Es probable que, al mejorar las condiciones de bienestar en el

municipio de recepción, los programas de generación de ingresos disminuyen aun más el deseo de retorno de los hogares.

2. Estadísticas descriptivas

Antes de analizar el impacto de los programas de generación de ingresos, es importante examinar las características de los beneficiarios de los programas y del grupo de control. Si este último está bien construido, las características de ambos grupos deben ser similares. Los cuadros 1, 2 y 3 exploran las diferencias entre el grupo de control y el grupo de beneficiarios del proceso de desplazamiento y las estrategias de migración, las características del hogar y las condiciones económicas antes de suceder el desplazamiento. Las comparaciones de los resultados muestran unos grupos bastante homogéneos con diferencias mínimas en unas cuantas variables, que se discuten a continuación.

Las motivaciones del desplazamiento, los actores responsables del mismo y las estrategias de migración son similares para los dos grupos (ver el cuadro 1). Si bien el perfil de victimización difiere un poco, ya que los beneficiarios han sido víctimas con más frecuencia de amenazas directas e intentos de homicidios, los dos grupos –beneficiarios y control– se desplazan en proporciones casi idénticas, como reacción a un evento violento (desplazamiento reactivo). De otro lado, los beneficiarios son víctimas de los grupos paramilitares en proporciones mayores (53% *vs.* 45%). Las estrategias de migración de los dos grupos divergen, y es para dichos indicadores donde se presentan las mayores diferencias. Los beneficiarios parecen migrar menos de manera directa y más por etapas (81,8% *vs.* 93%), prefieren migrar fuera del departamento y muy pocos residen aún en el municipio de origen. Es probable que el mayor tiempo de asentamiento en el municipio de recepción haya implicado migraciones adaptativas adicionales por fuera del municipio, e incluso del departamento, para los grupos beneficiarios. La estrategia migratoria adoptada por los hogares puede afectar su desempeño en los programas de generación de ingresos. Por ejemplo, los hogares pueden percibir el desplazamiento como temporal y permanecer en la cabecera municipal a la espera de una oportunidad para retornar; por lo tanto, los incentivos para invertir en soluciones permanentes son menores, y también la efectividad de los programas de generación de ingresos, probablemente. Para controlar por dichos efectos, se tiene en cuenta la estrategia de migración en la función de emparejamiento y se compara el impacto del programa para las distintas estrategias de migración.

Cuadro 1. Proceso de desplazamiento y estrategias de migración

Variable	No beneficiarios ^a	Beneficiarios
Motivo de desplazamiento		
Amenaza directa	54,4%	61,8%
Intento de homicidio	18,9%	20,9%
Homicidio	34,4%	33,6%
Masacre	21,1%	19,3%
Confrontación armada	36,0%	35,7%
Violencia indiscriminada	39,1%	41,6%
Más de un motivo de desplazamiento	68,5%	65,8%
Desplazamiento reactivo	87,6%	85,3%
Motivaciones económicas para migrar	14,1%	10,5%
Actores responsables del desplazamiento		
Grupos guerrilleros	70,2%	72,5%
Grupos paramilitares	45,0%	53,0%
Fuerzas armadas	3,5%	4,7%
Más de un grupo	24,8%	33,9%
Estrategia de migración		
Migra núcleo familiar completo	90,6%	90,7%
Migra con familia extendida	74,3%	73,9%
Migración masiva	7,5%	7,4%
Migración directa a receptor	93,0%	81,8%
Migración intradepartamental	59,0%	47,7%
Migración intramunicipal	17,7%	3,0%
Percibe desplazamiento como definitivo	78,3%	78,8%
Tiempo de asentamiento – días	1.183,2 (34,9)	1.487,7 (886,4)

a. Estadísticas calculadas con factores de expansión

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

El cuadro 2 muestra la estructura de los hogares beneficiarios y de los no beneficiarios, si bien difiere para ciertas variables, es parecida. Los hogares beneficiarios parecen ser menos vulnerables, al contar con un mayor porcentaje de jefatura masculina, un menor tamaño del hogar, tasas de dependencia inferiores y escolaridades más altas. Pero las diferencias para estos indicadores son mínimas. Parece, sin embargo, existir una focalización deliberada hacia los hogares pertenecientes a minorías étnicas, grupos considerados como más vulnerables, pues dichos indicadores para indígenas (25,6% vs. 17,2%) y afrodescendientes (19,5% vs. 10,9%) difieren significativamente entre los dos grupos.

La fragmentación del hogar es otra diferencia que emerge entre los dos grupos. Los grupos beneficiarios presentan una fragmentación levemente mayor de sus hogares frente a los no beneficiarios. Las verdaderas di-

ferencias surgen cuando se analiza la causa de dicha fragmentación. La muerte o abandono del jefe del hogar, de nuevo una variable que denota la vulnerabilidad del hogar, es bastante más frecuente entre los hogares beneficiarios. Dado que los programas se asignan con criterios de vulnerabilidad, es posible que estos hogares sean focalizados con mayor probabilidad.

Cuadro 2. Características de los hogares desplazados y cambios en la estructura del hogar por desplazamiento

Variable	No beneficiarios ^a	Beneficiarios
Características hogares desplazados		
Jefatura masculina	61,0%	64,7%
Tamaño del hogar	5,32 (0,11)	5,17 (2,07)
Número menores de 12 años	1,76 (0,75)	1,51 (1,27)
Número jóvenes entre 12 y 17 años	0,84 (0,05)	0,92 (1,01)
Número personas entre 17 y 65 años	2,50 (0,07)	2,53 (1,35)
Número mayores 65 años	0,17 (0,02)	0,10 (0,34)
Años escolaridad jefe del hogar	5,70 (0,12)	5,78 (2,09)
Años escolaridad cónyuge	5,76 (0,5)	6,02 (1,63)
Porcentaje alfabetismo jefe del hogar	79,1%	81,9%
Pertenencia a grupos indígenas	17,2%	25,6%
Pertenencia a grupos afrodescendientes	10,9%	19,5%
Cambios en la estructura del hogar		
Fragmentación del hogar	20,7%	21,5%
Miembro del hogar: jefe del hogar	8,5%	11,3%
Miembro del hogar: cónyuge	1,7%	2,6%
Miembro del hogar: hijos	12,7%	10,4%
Jefe del hogar muere o abandona hogar	6,4%	10,2%
Contacto mensual	7,1%	13,3%
Hogar recibe transferencias	20,8%	24,8%
Valor promedio de las transferencias	43.472 (14.611)	65.363 (300.595)

a. Estadísticas calculadas con factores de expansión

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Las condiciones económicas de los hogares antes del desplazamiento son similares (ver el cuadro 3). Al reflejar la capacidad productiva de los hogares en su entorno tradicional, dichos indicadores son importantes. Se espera que los indicadores no diverjan sustancialmente, ya que ello significa que la probabilidad de contar con variables no observables relacionados con la capacidad productiva (por ejemplo, talento empresarial) se minimiza. Los ingresos laborales difieren sólo por \$22.000, el consumo es un poco mayor para los beneficiarios y las tasas de desempleo para los jefes del hogar son idénticas. El perfil ocupacional se diferencia levemente: los beneficiarios se dedicaban en el origen con más frecuencia a actividades de comercio y menos a agricultura.

Cuadro 3. Condiciones económicas antes del desplazamiento

Variable	No beneficiarios ^a	Beneficiarios
Ingreso y consumo		
Ingreso laboral por adulto equivalente	1.928.321 (325.606)	1.920.548 (3.922.003)
Consumo por adulto equivalente	1.627.002 (276.577)	1.795.005 (9.062.564)
Mercados laborales		
Desempleo – jefe del hogar	1,7%	1,1%
Desempleo – otros miembros mayores de 18	5,0%	2,8%
Agricultura – ocupación laboral	57,3%	55,6%
Comercio – ocupación laboral	8,0%	11,1%
Industria – ocupación laboral	2,2%	1,9%
Construcción – ocupación laboral	3,7%	2,4%
Servicios – ocupación laboral	6,8%	6,2%
Labores domésticas – ocupación laboral	12,8%	11,8%
Capital físico		
Activos productivos (sin incluir tierras) – origen	\$0,8 millones (\$0,09 millones)	\$2,7 millones (\$13,3 millones)
Otros activos – origen	\$0,2 millones (\$0,01 millones)	\$2,8 millones (\$0,4 millones)
Porcentaje de activos productivos – origen	55,2%	54,5%
Tierra		
Tenencia de tierras	55,4%	59,2%
Total hectáreas e tierra	13,2 (2,1)	13,9 (55,4)
Valor del total de hectáreas	\$8,6 millones (\$0,9 millones)	\$8,4 millones (\$19,4)
Porcentaje de hectáreas con irrigación	19,0%	18,2%

(Continúa...)

Cuadro 3. Condiciones económicas antes del desplazamiento

Número de animales	29,9 (2,6)	38,3 (246,6)
Valor presente neto lucro cesante producción agrícola	\$34,1 millones (\$5,4 millones)	\$49,9 millones
Capital financiero		
Acceso real a créditos informales – origen	8,3%	10,3%
Acceso a créditos formales – origen	1,4%	3,3%
Servicios sociales: educación y salud		
Asistencia escolar niños entre 7 y 11 años	52,1%	46,1%
Asistencia escolar niños entre 12 y 17 años	74,2%	72,3%
Afiliados a régimen subsidiado de salud	52,5%	36,1%

a. Estadísticas calculadas con factores de expansión
 Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La tenencia de activos en el municipio de origen parecía ser más favorable para los hogares beneficiarios. En primer lugar, el acceso a la tierra era más frecuente para los beneficiarios (55,4% vs. 59,2%), pero el tamaño y el valor de los predios eran similares. En segundo lugar, la tenencia de activos, tanto productivos como no productivos, es significativamente superior para los hogares beneficiarios. Asimismo, el acceso a créditos informales y formales era mayor. Es probable que los hogares beneficiarios estuvieran dedicados con más frecuencia a labores productivas en sus predios y que, por ende, las inversiones en activos productivos fueran mayores. Ello podría implicar un perfil más empresarial de los hogares beneficiarios, y es importante controlar por variables que lo caractericen, para intentar minimizar el sesgo producido por variables no observables.

Las condiciones socioeconómicas parecen también indicar la mayor vinculación de los beneficiarios a actividades productivas propias. Por un lado, la asistencia escolar de ambos grupos de edades analizados era menor para los hogares beneficiarios. Se puede presumir que los menores contribuyeran a las actividades productivas en los predios y, como consecuencia, la asistencia escolar fuera menor. Por otro lado, pese a percibir mayores ingresos y contar con una capacidad de gasto más amplia, la afiliación al régimen de salud era menor para los beneficiarios. Resultado que se puede presentar por una menor vinculación a los mercados formales de trabajo.

Para terminar la comparación, es importante conocer el acervo de capital social de ambos grupos. El capital social puede determinar no sólo la participación en los programas de generación de ingresos; también podría contribuir, con contactos e información, al éxito de nuevos negocios o a incrementar la probabilidad de la vinculación laboral. Por otro lado, hogares con densas redes sociales, dado que cuentan con el apoyo de las

mismas, pueden no requerir ayuda adicional y no recurren entonces a los programas de generación de ingresos. La vinculación a redes sociales en el municipio de origen era menor para los beneficiarios, 26,4% participaba en organizaciones formales, frente a los beneficiarios, cuyo indicador es del 32,6%. Sin embargo, una vez los hogares se asientan en el municipio de recepción, la participación en organizaciones formales se iguala y alcanza un 29% para ambos grupos.

Para concluir, los grupos de beneficiarios y no beneficiarios parecen compartir varias características comunes: las causas del desplazamiento, los actores responsables del mismo, la estructura del hogar y las condiciones económicas en el municipio de origen. Empero, persisten unas cuantas diferencias que podrían inducir sesgos en la evaluación y que deben ser analizadas. Los beneficiarios prefieren municipios de recepción alejados del origen, pertenecen en mayores proporciones a minorías étnicas, la fragmentación del hogar, por muerte o abandono del jefe, sucede con más frecuencia y parecieran tener un perfil más empresarial. Dichas características podrían introducir sesgos hacia abajo o arriba en la evaluación y, por tanto, es importante controlar por todos estos factores en el proceso de emparejamiento.

3. El impacto de los programas de generación de ingresos

El impacto de los programas de generación de ingresos se evalúa en esta sección. En primer lugar, estimo la probabilidad de participar en los programas de generación de ingresos, es decir, la función de emparejamiento, para así establecer quiénes acceden con mayor frecuencia a dichos programas y, posteriormente, emparejar a los beneficiarios con un contrafactual. En segundo lugar, evalúo el impacto del programa para un conjunto de variables socioeconómicas, con el fin de identificar si los beneficiarios, además de percibir un incremento temporal en sus ingresos, pueden ahorrar e invertir en activos que redundarán en ingresos futuros (por ejemplo, capital humano, activos productivos) para financiar consumo y reducir riesgo. En tercer lugar, examino el impacto del programa sobre grupos particulares de la población desplazada, con el fin de identificar si hay un impacto diferenciado para los diversos grupos.

Los resultados de la probabilidad de participar en programas de generación de ingresos se presentan en el cuadro 4. Al controlar por todas las variables, algunas de las diferencias que existían entre el grupo de beneficiarios y el grupo de control desaparecen, y se encuentra de nuevo que el grupo de control parece haber sido construido de manera adecuada. Las diferencias que persisten tras controlar por todas las variables pare-

cen estar determinadas por el comportamiento de los hogares y por los procesos de focalización de los programas.

Cuadro 4. Probabilidad de ser beneficiario de programas de generación de ingresos

Variable	Efecto marginal (t-estadístico)
Desplazamiento intramunicipal	-0,3559 (-10,57)***
Desplazamiento reactivo	-0,0027 (-0,08)
Desplazamiento masivo	0,1163 (2,00)**
Guerrilla – actor responsable	0,0447 (1,58)
Paramilitares – actor responsable	0,0408 (1,52)
Tiempo de asentamiento en recepción – días	0,0003 (8,25)***
Tiempo de asentamiento al cuadrado	0,0000 (-5,23)***
Jefatura del hogar masculina	0,0774 (2,73)***
Pérdida por muerte o abandono de principal proveedor	0,1828 (3,81)***
Edad jefe del hogar – años	0,0133 (2,39)**
Edad al cuadrado	-0,0002 (-2,73)***
Años de escolaridad jefe del hogar	0,0033 (0,57)
Minorías étnicas	-0,0177 (-0,53)
Dedicados a agricultura en origen	-0,0482 (1,83)*
Tasa de dependencia	-0,1446 (-2,66)***
Miembro del hogar con enfermedad grave o discapacidad mental	-0,0779 (-1,86)*
Participación en organizaciones formales – recepción	-0,0229 (-0,85)
Contactos personales en el receptor	0,0095 (0,37)
Porcentaje de tierras bajo control del hogar	-0,1116 (-0,91)
Municipios AID	0,0260 (0,64)
Número de observaciones	2003
R cuadrado	0,2347

Incluye controles municipales
Errores estándar corregidos con White

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Las decisiones y el comportamiento de los hogares pueden influir en la participación de los hogares desplazados. Por ejemplo, las personas con iniciativa empresarial o con experiencia laboral pueden acudir a dichos programas, para así obtener un impulso que les permita vincularse a labores productivas. Asimismo, las personas expuestas a información constante acerca de la asistencia para población desplazada pueden enterarse sobre estos programas y solicitar el ingreso a ellos. Los resultados de la estimación para la probabilidad de ser beneficiario indican que el comportamiento y las decisiones de los hogares, en efecto, influyen en el proceso. Por un lado, la probabilidad de ser beneficiarios es mayor para los hogares que migran por fuera de su municipio de origen, con jefatura masculina o con jefes mayores. Migrar fuera del municipio de origen puede significar la decisión del hogar de buscar una solución permanente de asentamiento y, por ende, los incentivos para invertir en nuevas alternativas productivas pueden inducirlos a solicitar su ingreso a programas de generación de ingresos. Los jefes de hogar hombres o mayores cuentan con más experiencia laboral y los programas de generación de ingresos pueden actuar como intermediarios para conseguir trabajos o para financiar actividades productivas. Por otro lado, los hogares con más tiempo de asentamiento en el municipio de recepción tienen mayor probabilidad de ser beneficiarios de dichos programas, pero el impacto es apenas perceptible. El tiempo de asentamiento, al acumular información y fortalecer vínculos con redes sociales, amplía el conocimiento acerca de las oportunidades en el municipio de recepción. Por último, si bien los programas de generación de ingresos focalizan su ayuda de acuerdo a ciertos criterios de vulnerabilidad (por ejemplo, jefatura femenina), otros tipos de población vulnerable son cubiertos con menor frecuencia por estos programas. La probabilidad de participar en estos programas es menor para los hogares dedicados previamente a labores agrícolas, con altas tasas de dependencia o con algún miembro con enfermedades graves. Es probable que estos hogares acudan menos a solicitar ayuda, ya sea porque son atendidos por otro tipo de asistencia y no requieran asistencia adicional o porque la vulnerabilidad misma les impide el acceso a estos programas. Por ejemplo, la necesidad de cuidar un enfermo en el hogar impide participar en el proceso de selección y capacitación del programa; por lo tanto, recurren a la primera alternativa de generación de ingresos disponible, pese a percibir menores retornos.

Los criterios de focalización del programa también determinan la probabilidad de ser beneficiario. Los hogares que se desplazaron de manera masiva y aquellos con jefatura femenina debido al desplazamiento muestran una mayor probabilidad de ser beneficiarios. Ambos resultados surgen del proceso de focalización. Para participar en los programas de

generación de ingresos, los hogares deben verificar su condición de desplazados y estar incluidos en el Registro Único de Población Desplazada. Cuando se presentan desplazamientos masivos, los afectados son registrados automáticamente en el RUPD. No es entonces sorprendente que su probabilidad de ser beneficiarios sea un 11,6% más alta. Los criterios de focalización establecen asimismo una prioridad para las mujeres cabeza de familia, y los resultados denotan una clara focalización en las mujeres cabeza de familia que debieron asumir este papel tras el desplazamiento: el efecto marginal de dicha variable, un 18,3%, es el mayor frente a todas las otras variables.

El impacto de los programas de generación de ingresos en el corto plazo es positivo, pero insuficiente para sacar a los hogares desplazados de la pobreza. Si bien la capacidad económica de los hogares beneficiarios se expande, los hogares parecen destinar dicha expansión a invertir en capital físico y posponen gastos, tales como la educación, que podrían mejorar sus condiciones económicas presentes y futuras (ver el cuadro 5).

El impacto del programa sobre las tasas de desempleo, el ingreso laboral por adulto equivalente y la acumulación de activos en el lugar de recepción no sólo es significativo estadísticamente; su magnitud es también considerable. Participar en los programas de generación de ingresos reduce el desempleo del jefe del hogar en un 7,8%, incrementa el ingreso por adulto equivalente en \$361 mil y aumenta el valor de los activos en casi tres millones. Ello significa que los programas de generación de ingresos fortalecen la capacidad productiva de los hogares, al menos en el corto plazo, ya que, además de acumular activos que en el futuro pueden generar retornos, trabajan y ganan más.

Algunos mecanismos formales e informales de aseguramiento de riesgo, esenciales para enfrentar choques futuros, se fortalecen levemente para los hogares beneficiarios. Sin embargo, el impacto parece ser insuficiente para evitar que las contracciones del ingreso del hogar no se traduzcan en caídas del consumo. La mayor capacidad económica de los hogares parece brindarles oportunidades de créditos adicionales, probablemente al demostrar más solidez económica, y los beneficiarios acceden a más créditos informales. Los resultados del capítulo anterior encuentran que los programas de generación de ingresos no son efectivos para fortalecer los mecanismos de aseguramiento contra riesgos y, por ende, un porcentaje elevado de las variaciones en ingreso se traducen en variaciones de consumo. El programa de generación de ingresos sólo contribuye a fortalecer la habilidad para suavizar el consumo para los hogares con un tiempo de asentamiento entre tres meses y un año; período tras el cual la capacidad para suavizar el consumo se torna aun peor que para el grupo de control.

Park y Ren (2001) encuentran resultados similares para los programas de microcréditos chinos.

Ahora bien, los incrementos en el ingreso y los activos productivos, pese a reducir levemente la vulnerabilidad de los hogares, no implican en el corto plazo cambios significativos de las condiciones sociales. La participación en los programas de generación de ingresos deriva en un leve aumento, de \$105.010, del consumo por adulto equivalente. Dicho incremento no significa, empero, un cambio suficientemente grande para salir de la indigencia y mucho menos de la pobreza: la probabilidad de estar por debajo de la línea de indigencia o de pobreza es igual para los hogares beneficiarios y no beneficiarios. Pese a no contribuir en este frente, los programas reducen la vulnerabilidad de los hogares desplazados en algunas dimensiones. Los beneficiarios dependen menos de donaciones para financiar su consumo y, más importante aun, dedican un menor porcentaje de su gasto a financiar el consumo de alimentos. Pero el impacto sobre ambas variables es pequeño: el porcentaje de gasto financiado por donaciones para los beneficiarios es del 6,2%, y para el grupo de control es del 8,4%; y el porcentaje de gasto destinado a consumo de alimentos para los beneficiarios es del 63,2% y para el grupo de control es del 68,6%. Los resultados dejan entrever que los programas de generación de ingresos producen un incremento en la capacidad productiva y actúan como mecanismo protector, pero los impactos no son suficientes para salir de la pobreza, y la protección que proveen es poca.

¿Se traduce el incremento en los ingresos en un mayor acceso a los servicios de salud y una mayor asistencia escolar? Los beneficiarios de los programas de generación de ingresos tienen un acceso a los servicios de salud bastante mayor frente a los no beneficiarios: 79,7% vs. 65,0%. Es importante, sin embargo, interpretar los resultados con cautela. Tal como se explicó en párrafos anteriores, para ser beneficiario de los programas de generación de ingresos es necesario estar inscrito en el RUPD. La inscripción en el RUPD implica, por su parte, un acceso inmediato a los servicios de salud estatales. El resultado puede ser, por lo tanto, ocasionado por estar incluido en el RUPD, y no por el programa mismo. Algo similar sucede con la asistencia escolar: la inscripción en el RUPD otorga inmediatamente el derecho a los servicios escolares, sin necesidad de sufragar los costos de pensión y matrícula. Pese a lo anterior, la asistencia primaria y secundaria de los menores provenientes de hogares beneficiarios, si bien es superior, no es mucho más alta. Es posible que el incremento en los ingresos no sea suficiente para evitar que los menores interrumpan sus estudios y se vinculen a los mercados laborales para contribuir a sostener el hogar.

Cuadro 5. Impacto de los programas de generación de ingresos

Variable de tratamiento	Antes de PSM			Después de PSM		
	Beneficiarios	No beneficiarios	Diferencia	Beneficiarios	No beneficiarios	Diferencia
Desempleo jefe del hogar	10,2%	20,9%	-10,7%***	10,2%	18,1%	-7,8%***
Ingreso por adulto equivalente	1.029.976	549.398	480.577***	1.029.041	667.621	361.419***
Valor de activos en recepción	9.862.490	8.036.753	1.825.736***	9.865.454	6.926.967	2.938.486***
Acceso a créditos informales	10,6%	7,9%	2,7%**	10,7%	7,9%	2,7%***
Consumo por adulto equivalente	1.199.599	1.047.499	152.099***	1.199.543	1.094.533	105.010**
Porcentaje de hogares por debajo de línea de pobreza	95,2%	95,1%	0,1%	95,2%	94,6%	0,1%
Porcentaje de hogares por debajo de línea de indigencia	62,9%	71,7%	-8,9%***	62,9%	66,0%	-3,2%
Porcentaje del gasto financiado con donaciones	6,2%	13,1%	-6,8%***	6,2%	8,4%	-2,2%*
Porcentaje de gasto destinado a alimentos	63,2%	68,0%	-4,8%***	63,2%	68,6%	-5,4%***
Acceso a servicios de salud	79,6%	67,2%	12,4%***	79,7%	65,0%	14,6%***
Asistencia educativa primaria	78,6%	71,1%	7,5%***	78,6%	74,9%	3,7%*
Asistencia educativa secundaria	76,1%	68,3%	7,8%***	76,1%	68,5%	7,6%***
Deseo de retorno	3,8%	12,5%	-8,7%***	3,8%	7,3%	-3,5%***

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Por último, al mejorar las condiciones en el municipio receptor y consolidar el proceso de asentamiento, el programa reduce el deseo de retorno de los hogares. Un poco más del 3,8% de los beneficiarios de los programas de generación de ingresos expresan un deseo de retorno, mientras que dicho porcentaje para los no beneficiarios es de 7,3%, es decir, casi el doble; resultados que plantean un dilema de política interesante. Una vez cese el conflicto, la mejor alternativa para la población desplazada es retornar a su municipio de origen, pues conoce las oportunidades productivas de su región, cuenta con la experiencia laboral apropiada, puede recuperar sus activos productivos e insertarse de nuevo en sus redes sociales. Si bien los programas de generación de ingreso mejoran las condiciones de bienestar en el municipio de recepción, reducen el deseo de retorno y es probable que en el largo plazo el retorno no sea una alternativa considerada como factible.

Los cuadros 6a y 6b muestran el impacto diferenciado para cinco grupos de la población desplazada: los migrantes departamentales, las minorías étnicas, los hogares dedicados previamente a la agricultura, los hogares que perdieron el principal proveedor económico y los hogares más educados. El impacto de los programas de evaluación de ingresos no es homogéneo para grupos particulares de la población desplazada. La estrategia de migración, la vulnerabilidad de algunos grupos y la habilidad para extraer beneficios de los programas parecen determinar la magnitud del impacto del programa.

La estrategia de migración, tal como se planteó en párrafos anteriores, puede estar ligada a la decisión de permanecer temporal o definitivamente en el municipio de recepción e influencia los incentivos de inversión del hogar. Los resultados parecen confirmar dicha hipótesis. El impacto del programa para los hogares que deciden migrar cerca de sus municipios de origen se concentra en los índices de desempleo y en el ingreso laboral, con un efecto nulo sobre la acumulación de activos, el consumo por adulto equivalente y el deseo de retorno. Es probable que este grupo de hogares escoja como plan de producción la vinculación a los mercados laborales y no la iniciación de pequeñas empresas, para evitar así inversiones fijas que no pueden ser posteriormente trasladadas en un eventual retorno. Ello redundaría en una caída significativa en las tasas de desempleo y un aumento elevado en los ingresos laborales. Dicho incremento no parece destinarse, sin embargo, al proceso de arraigo en el municipio de recepción, pues la tenencia de activos permanece constante y el consumo no varía. Es probable que prefieran invertir estos recursos en los activos productivos abandonados en origen, como la tierra, para así preparar su retorno. Por ende, el programa tampoco modifica el deseo de retorno de este grupo de hogares.

Cuadro 6a. Impacto de los programas de generación de ingresos, por características de los hogares

	Total de la muestra	Tipo de migración			Minorías étnicas		Agricultura en origen	
		Intradepto.		Interdepto.	Minorías	No minorías	Si	No
Desempleo jefe del hogar	-7,8%***	-11,5%***	-5,0%**	-4,1%	-7,2%***	-10,8%***	-2,3%	
Ingreso por adulto equivalente	361.419***	443.604***	179.219**	735.039***	398.051***	289.349***	473.196***	
Valor de activos en recepción	2.938.486***	1.575.156	3.129.486***	3.196.949***	3.023.504***	4.313.036***	1.422.874	
Acceso a créditos informales	2,7%***	0,0%	3,3%	-1,6%	2,9%	4,7%**	1,5%	
Consumo por adulto equivalente	105.010**	60.426	138.456**	149.928*	98.285*	-66.552	224.011***	
Porcentaje de hogares por debajo de línea de pobreza	0,1%	1,2%	-1,1%	1,3%	0,01%	3,7%**	0,0%	
Porcentaje de hogares por debajo de línea de indigencia	-3,2%	-0,01%	-2,9%	-12,2%**	-1,7%	4,9%	-1,0%**	
Porcentaje del gasto financiado con donaciones	-2,2%*	-1,4%	-1,7%	-2,6%	-3,6%***	0,0%	-5,6%***	
Porcentaje de gasto destinado a alimentos	-5,4%***	-9,8%***	-2,9%**	-1,7%	-8,3%***	-1,8%	-8,5%***	
Acceso a servicios de salud	14,6%***	5,4%*	18,0%***	9,7%*	14,6%***	16,6%***	12,1%***	
Asistencia educativa primaria	3,7%*	6,1%**	-2,5%	1,5%	11,9%***	6,1%**	-2,8%	
Asistencia educativa secundaria	7,6%***	6,3%**	4,3%	3,8%	14,1%***	16,3%***	5,9%	
Deseo de retorno	-3,5%***	-2,5%	-10,4%***	-8,3%***	-1,3%	-0,0%	-3,2%*	

*Significativo al 10%,

**significativo al 5%,

***significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Cuadro 6b. Impacto de los programas de generación de ingresos, por características de los hogares

	Total de la muestra		Jefe abandona hogar		Educación	
	Sí	No	Sí	No	>mediana	<mediana
Desempleo jefe del hogar	-7,8%***	-8,9%***	5,2%	-8,9%***	-35,5%***	-6,3%***
Ingreso por adulto equivalente	361.419**	368.081***	448.822***	368.081***	886.153***	319.479***
Valor de activos en recepción	2.938.486***	2.977.169***	2.395.635	2.977.169***	5.954.453***	1.749.149***
Acceso a créditos informales	2,7%***	2,6%	-4,5%	2,6%	2,3%	2,0%
Consumo por adulto equivalente	105.010**	91.192*	384.300***	91.192*	699.297***	65.376
Porcentaje de hogares por debajo de línea de pobreza	0,1%	0,0%	-1,7%	0,0%	-6,7%	1,5%
Porcentaje de hogares por debajo de línea de indigencia	-3,2%	-1,1%	-24,1%***	-1,1%	-46,8%***	-0,01%
Porcentaje del gasto financiado con donaciones	-2,2%*	-1,5%	-10,4%*	-1,5%	-10,7%**	-2,4%*
Porcentaje de gasto destinado a alimentos	-5,4%***	-5,2%***	-1,5%	-5,2%***	-16,8%***	-3,9%***
Acceso a servicios de salud	14,6%***	12,9%***	11,1%	12,9%***	27,4%***	12,5%***
Asistencia educativa primaria	3,7%*	4,8%**	27,6%***	4,8%**	13,5%*	5,7**
Asistencia educativa secundaria	7,6%***	9,9%***	29,4%*	9,9%***	4,5%*	4,5%*
Deseo de retorno	-3,5%***	-3,1%**	-13,4%**	-3,1%**	3,1%	-4,4%***

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

El programa parece ser un mecanismo protector efectivo para los hogares vulnerables. Para ambos grupos vulnerables analizados, las minorías étnicas y los hogares con jefatura femenina debido al desplazamiento, los resultados son similares. Si bien la participación en el programa no mejora las tasas de desempleo, el impacto es positivo y significativo para el ingreso laboral, el consumo y el porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia. El programa, aunque no parece producir impactos importantes en el largo plazo, pues la acumulación de activos permanece constante y las perspectivas laborales no se modifican, ejerce un papel protector temporal al aumentar el consumo y permitir que muchos hogares sobrepasen la línea de indigencia. Las mejores condiciones redundan en una consolidación paulatina en el municipio de recepción y en una caída sustancial en el deseo de retorno.

Por último, el programa de generación de ingresos parece proporcionar beneficios evidentes a los participantes que tienen el interés o las habilidades para aprovecharlos. Primero, los hogares dedicados previamente a las labores agrícolas pueden derivar beneficios claros del programa al mejorar su perfil laboral y adquirir conocimientos en nuevos oficios para contrarrestar la experiencia laboral inadecuada en los mercados urbanos. Es así como los indicadores laborales para dicho grupo, en particular, las tasas de desempleo y el ingreso laboral, experimentan progresos significativos, que parecen luego traducirse en una adquisición de nuevos activos y una expansión en el acceso a créditos. Segundo, los hogares con más capital humano, representado por años de escolaridad por encima de la mediana de la muestra, son definitivamente los que perciben más beneficios de los programas de generación de ingresos. Las tasas de desempleo caen significativamente, mientras perciben incrementos sustanciales en el ingreso laboral, la acumulación de activos y en el consumo por adulto equivalente. Asimismo, la vulnerabilidad es menor: el porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia se reduce, la dependencia estatal es poca y el porcentaje de gasto destinado a alimentos también desciende para los beneficiarios. La cobertura en salud y en la asistencia educativa se aumenta más que para cualquiera de los grupos analizados. Es claro que dichos programas favorecen a hogares con más capital humano, que pueden aprovechar de mejor manera las capacitaciones, los procesos de intermediación en los mercados laborales y los recursos financieros recibidos.

La evaluación de impacto de los programas de generación de ingresos arroja resultados claros. Los programas son efectivos para incrementar la capacidad productiva de los hogares desplazados, al mejorar sus condiciones laborales, expandir su ingreso laboral y aumentar sus activos. Pero los beneficios no son necesariamente sostenibles en el largo plazo,

pues son insuficientes para que los beneficiarios superen la pobreza, y las reducciones en vulnerabilidad, si bien están presentes, son mínimas. Además, el incremento en capacidad productiva no se traslada en las mismas magnitudes hacia las inversiones en capital humano de los menores desplazados. Pareciera que los hogares desplazados, previendo futuros choques, prefirieran fortalecer su tenencia de activos antes que destinar las ganancias iniciales de los programas a mejorar las condiciones de bienestar e invertir en el capital humano de sus hijos.

Los programas, sin embargo, producen un impacto significativo para ciertos grupos de la población desplazada. Por un lado, los programas actúan como un mecanismo protector para hogares vulnerables, al evitar que el consumo disminuya aun más, que la población caiga en la indigencia y que la dependencia respecto a la ayuda estatal se profundice. Por otro lado, los programas son bastante efectivos para los hogares que puedan aprovecharlos y extraer ganancias de los servicios del programa. Los agricultores en origen, al adecuar su perfil laboral para la competencia en los mercados urbanos, y los hogares con altos niveles de escolaridad, al contar con las herramientas para aprovechar los servicios del programa, parecen extraer beneficios adicionales.

D. Conclusiones

Participar en los programas de generación de ingresos redundante en un impacto positivo para la población desplazada. El objetivo primordial de los programas de generación de ingresos, expandir la capacidad productiva de los hogares, parece cumplirse a simple vista: los beneficiarios perciben mayores ingresos laborales, sus tasas de desempleo son menores y la acumulación de activos en el municipio de recepción es más alta. Pese a percibir impactos positivos del programa, la magnitud del impacto no parece ser suficiente para impulsar a los hogares a salir de la pobreza, reducir su vulnerabilidad frente a futuros choques y evitar que los hogares adopten estrategias que deprimen su ingreso futuro. Al contar con bajos consumos y una clara imposibilidad de aislar los choques de ingreso sobre el consumo, los hogares beneficiarios son aún sumamente vulnerables. Para solventar el ingreso insuficiente, los hogares, a pesar de ser beneficiarios de los programas de generación de ingresos, deben recurrir a alternativas costosas, tales como la interrupción escolar, que significarán un ingreso futuro menor y la perpetuación de la pobreza.

Los hogares parecen destinar las ganancias de los programas de generación a acumular una nueva base de activos y a impedir caídas en el consumo por debajo de los niveles de supervivencia. Es posible que el fuerte

choque del desplazamiento modifique las preferencias de riesgo de los hogares desplazados, incrementando su aversión al riesgo. Ello parece derivar en comportamientos cautelosos frente a las ganancias de los programas de generación de ingresos. De tal manera, los beneficiarios destinan los beneficios del programa a recuperar y acumular nuevos activos productivos, lo cual significaría un incremento en los ingresos futuros a costa de los ingresos presentes.

El impacto del programa diverge para los distintos grupos de la población desplazada. Dos grupos parecen beneficiarse particularmente del programa: los grupos más vulnerables y los hogares más educados. Para los hogares más vulnerables, tales como los hogares encabezados por mujeres tras perder el jefe del hogar y las minorías étnicas, el programa cumple un rol protector, al evitar caídas en el consumo e impulsar el ingreso de los hogares para superar la línea de indigencia. De otro lado, los hogares más educados, al contar con el capital humano para aprovechar más las capacitaciones, los créditos y la asesoría empresarial, extraen beneficios bastante mayores del programa.

Tres problemas pueden estar sesgando los resultados de la evaluación de impacto. Primero, dado que la evaluación de impacto sólo capta un punto del tiempo, y dado también que los beneficiarios están recién incluidos en el programa, los impactos estimados se circunscriben al corto plazo. Es posible que en el largo plazo –con la consolidación de los beneficios del programa y del proceso de asentamiento– las ganancias del programa se incrementen. Segundo, al ser la vulnerabilidad un criterio de focalización del programa, los beneficiarios del programa pueden ser hogares particularmente vulnerables y, por lo tanto, los impactos del programa pueden estar subestimados. Por último, los hogares con más talento empresarial o habilidades laborales pueden solicitar su ingreso al programa con más probabilidad. Ello estaría sobreestimando los impactos del programa.

Evaluaciones de impacto de programas similares han encontrado que los bajos niveles de capital humano y las condiciones económicas precarias de los sitios donde residen los beneficiarios limitan las ganancias de los participantes en el programa²⁸³. Ambas conclusiones se aplican en el caso de la población desplazada, que cuenta con bajos niveles de escolaridad y reside, por lo general, en barrios marginales. Es importante, por ende, que los programas de generación de ingresos para la población desplazada se complementen con programas de reescolarización y prevención de la deserción escolar de los hijos, para evitar transmisiones intergeneracionales de la pobreza. La residencia en barrios marginales implica que

283 Coleman, 2006; Shaw, 2004.

las pequeñas empresas de la población desplazada enfrentan bajas demandas por parte de individuos con una restringida capacidad de gasto. Los programas de generación de ingresos deben entonces analizar cuáles pequeñas empresas pueden ser viables y rentables, para evitar inversiones que fracasen fácilmente. Por último, la capacitación laboral se debe concentrar en los oficios requeridos por la demanda laboral local, para así incorporar más fácilmente a los beneficiarios al mercado laboral una vez termine el programa.

Para terminar, cabe preguntarse si los programas de generación de ingresos se aplican a todos los hogares desplazados. Los hogares con ingresos sumamente bajos o con dificultades extremas para incorporarse a los flujos productivos de la economía, tales como los mayores de edad o los discapacitados, no derivan beneficio alguno de participar en los programas de generación de ingresos. En estos casos, podría ser más eficiente transferirles recursos directamente que invertir estos mismos recursos en un programa de generación de ingresos²⁸⁴.

284 González-Vega, 1998; Heckman *et al.*, 1993.

VII

EL RETORNO: UNA ALTERNATIVA EN LOS PROCESOS DE POSCONFLICTO

El retorno de población desplazada es, para muchos hogares, la política óptima una vez se inicia la era del posconflicto. El proceso de asimilación en el antiguo municipio, pese a no estar exento de obstáculos, es más sencillo. El conocimiento de los mercados productivos y laborales, de las redes sociales y de las reglas institucionales formales e informales, entre otros, facilitan la recuperación del choque producido por el conflicto y el desplazamiento forzoso.

Pero el retorno, por sí mismo, no garantiza un rápido proceso de recuperación. El mero retorno sin un apoyo estatal por un tiempo prudencial ha demostrado ser poco, sino nada, efectivo. Recuperar la capacidad productiva de la población desplazada es difícil, después de la usual pérdida de activos descrita en el capítulo V; del deterioro de la infraestructura pública, de la desconfianza reinante entre la población retornada y la población que nunca se desplazó, y después también de la debilidad de muchos gobiernos municipales. El retorno no es, además, una alternativa para todos los hogares desplazados. Para ciertos hogares, no regresar al lugar de expulsión es, sin lugar a dudas, la mejor alternativa. Dado lo anterior, las políticas públicas deben considerar las condiciones actuales en los municipios expulsores, focalizar los programas en aquellos hogares cuyo retorno es en efecto conveniente, e incorporar las preferencias de los posibles beneficiarios de estos programas. Así, pues, estudiar cuáles hogares desean retornar y entender sus preferencias por las diversas alternativas de asentamiento (retorno, reubicación y asentamiento en el receptor) son aspectos indispensables para diseñar programas sostenibles que redunden en una verdadera recuperación de la población desplazada.

El retorno de población desplazada debe, además, estar enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario y contemplar las dinámicas que provocaron el desplazamiento inicial. En primer lugar, el retorno de po-

blación desplazada no es siquiera una alternativa cuando persisten las condiciones de violencia y conflicto que causaron el desplazamiento. El retorno es una alternativa sólo cuando se desactivan las causas que originaron el desplazamiento forzoso. En segundo lugar, la población desplazada debe tomar su decisión de retorno con toda la información requerida para minimizar la incertidumbre acerca de las condiciones económicas y de seguridad que enfrentará tras regresar, y sopesando las diferentes alternativas. Retornar bajo una alta incertidumbre o porque no hay más alternativas posibles, dada una situación precaria en recepción, no es una decisión voluntaria, informada y libre. En tercer lugar, el retorno debe trascender el simple traslado al municipio de origen y ser complementado con programas, como la restitución de tierras, para que la población desplazada retome sus actividades productivas. Un retorno que agrava las condiciones económicas de la población desplazada no es sostenible y puede provocar nuevas migraciones. Los tres puntos anteriores significan que el retorno debe darse en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

El objetivo de este capítulo es analizar el retorno de población desplazada a sus lugares de origen. El capítulo se concentra en examinar cuáles factores estimulan y disuaden el retorno de población desplazada; en particular, se concentra en cuatro preguntas fundamentales para diseñar programas de retorno. Primero, el capítulo explora si el proceso de expulsión determina las preferencias de retornar de la población desplazada; es decir, si los hogares que enfrentaron procesos de desplazamiento más traumáticos son renuentes a retornar y prefieren permanecer en recepción, pese a estar viviendo en pésimas condiciones de bienestar. En este caso, la garantía de seguridad y no repetición es fundamental para promover el retorno. Segundo, se analiza la relación entre los procesos de asimilación en el lugar de recepción y el deseo de retornar. En particular, se explora si un rápido proceso de asimilación reduce los incentivos para retornar o si, por el contrario, la posibilidad de ahorrar recursos en recepción, para luego invertirlos en origen, incentiva el retorno de la población. En tercer lugar, el capítulo analiza si un programa de restitución de tierras promovería el retorno de la población. En cuarto lugar, se estudia si las limitaciones de la transferencia de capital humano entre las áreas rurales y urbanas convierten el retorno en casi la única opción digna para algunos hogares.

Analizar la decisión de retorno de los hogares requiere información de hogares desplazados que, en efecto, hayan regresado a su lugar de origen. Sin embargo, hasta el momento, pocos hogares desplazados han re-

tornado a su lugar de origen, y el retorno no ha sido sostenible en algunos casos. Hasta junio de 2008, cerca de 169.654 personas, equivalentes a 39.300 hogares y al 7% de la población desplazada, han retornado bajo el auspicio de los programas del gobierno colombiano²⁸⁵. Durante estos retornos no se han aplicado encuestas de hogares para analizar su decisión de retorno e identificar los principales determinantes del retorno. Para aproximar los determinantes del retorno, el capítulo usa datos de la ENHD (2004) descrita en capítulos anteriores, la cual indaga sobre el deseo de retorno de los hogares desplazados.

El capítulo se compone de tres secciones. En la sección A reviso la literatura económica sobre retorno bajo contextos de migración voluntaria y migración forzada. En la sección B describo el modelo base para analizar el retorno de población desplazada y los datos utilizados para estimar el modelo; analizo las estadísticas descriptivas y discuto los resultados econométricos. La sección C concluye.

A. La decisión de retornar

La decisión de retornar, a diferencia del desplazamiento forzoso, que es involuntario, se asemeja un poco más a la decisión de migrar. Los hogares o miembros del hogar evalúan las diferentes alternativas, sopesan los beneficios y costos de cada una y escogen estratégicamente la mejor, para consolidar sus condiciones de bienestar. La decisión de retorno en el marco del desplazamiento forzoso no carece, empero, de diferencias importantes frente a la decisión de retornar tras una migración voluntaria y por razones económicas. Las condiciones de seguridad, el trauma vivido por la victimización y la pérdida de activos son presumiblemente factores preponderantes en el proceso de decisión. El objetivo de esta sección es revisar la literatura disponible sobre el retorno de migrantes económicos y la poca evidencia disponible sobre el retorno de población desplazada o refugiada. Dado que el tercer capítulo realiza una revisión extensa de la literatura sobre migración económica, este capítulo se concentra únicamente en el tema del retorno.

1. La decisión de retornar en un contexto de migración voluntaria

La migración económica es una decisión voluntaria que se basa en un proceso racional, cuyo fin último es alcanzar un objetivo determinado: mejorar las condiciones económicas del hogar. Los planes de migración, que se diseñan para maximizar estos beneficios, comprenden no sólo la

285 Acción Social. Registro Único de Población Desplazada.

migración inicial sino la posibilidad de retornar en un período ulterior. Es así como los planes de retorno son una parte integral de las decisiones óptimas en el ciclo de vida de los migrantes²⁸⁶. Por ende, las migraciones pueden ser permanentes, como se suele asumir, o temporales.

Las migraciones temporales surgen por dos razones. Primero, el retorno puede ser una decisión previa en los planes de migración. Migrar es una estrategia efectiva para incrementar los ingresos del hogar, diversificar riesgos, aliviar las restricciones de crédito y expandir la inversión en actividades productivas agrícolas, entre otras²⁸⁷. De esta manera, los hogares o personas migran temporalmente para ahorrar y acumular activos, con el fin de invertirlos en un eventual retorno²⁸⁸.

Segundo, la migración temporal puede suceder tras una revisión de los planes de migración que se presenta por cambios en las condiciones del lugar de origen y destino o por una divergencia entre las expectativas iniciales acerca de las características del destino y sus características reales²⁸⁹. La decisión de migración no es, por ende, una decisión estática y definitiva. El proceso de migración no termina una vez se migra, pues las personas revisan constantemente sus planes de migración a la luz de nueva información²⁹⁰. Dado que la decisión inicial de migrar se basa en una incertidumbre acerca de las condiciones que se enfrentarán tras la migración, la certeza acerca de dichas condiciones, cuando sucede la migración, puede alterar los planes de migración²⁹¹. Ello implica que migraciones antes percibidas como temporales se convierten en permanentes, y viceversa.

Los planes de migración pueden revisarse tras la aparición de nueva información o cuando sucede un choque significativo que modifica el entorno²⁹². Con el paso del tiempo en el lugar de destino, los migrantes enfrentan diversos choques que, cuando son adversos, pueden conducir a una reducción en la permanencia del migrante, y cuando son positivos, amplían el tiempo de permanencia²⁹³. Algunos hogares pueden, además, quedar atrapados en el lugar de destino por un período más prolonga-

286 Borjas y Bratsberg, 1996.

287 Lall *et al.*, 2006; Rosenzweig, y Stark, 1989; Katz y Stark, 1986.

288 Lall *et al.*, 2006; Osili, 2004; Dustmann *et al.*, 1996; Borjas y Bratsberg, 1996.

289 Dustmann, 2000; Dustmann *et al.*, 1996; Borjas y Bratsberg, 1996.

290 Dustmann, 2000; Djajic y Milbourne, 1988;

291 Adda *et al.*, 2006; Borjas y Bratsberg, 1996.

292 Adda *et al.*, 2006.

293 *Ibid.*

do que el inicialmente planeado, debido a la falta de ingresos suficientes para retornar²⁹⁴. Un suceso de retorno puede, por ende, no necesariamente reflejar las intenciones iniciales de los migrantes²⁹⁵. En ausencia de incertidumbre, la revisión de los planes iniciales de migración no sucedería y la migración temporal sería sólo el resultado de una decisión óptima dentro del ciclo de vida de las personas.

La decisión de retorno, al constituir una etapa en los planes de migración, está influenciada por variables similares a las que determinaron la migración en primer lugar. Las preferencias más altas por consumir en origen, las condiciones económicas en origen y destino, los retornos del capital humano, los costos de la migración y algunos aspectos no monetarios parecen determinar la decisión de regresar²⁹⁶. El retorno está, asimismo, relacionado con el proceso de asimilación en la ciudad o país de destino²⁹⁷.

La perspectiva de alcanzar niveles de utilidad más altos en origen, de disfrutar más el consumo en origen, impulsa a los migrantes a retornar. La estructura del hogar o las características de sus miembros influyen las preferencias por el lugar de origen. La evidencia empírica ha encontrado, por ejemplo, que las preferencias en origen dependen de la desintegración de la familia entre el lugar de origen y destino o las características personales, tales como la educación y la edad²⁹⁸. Es así como, cuando los dos cónyuges provienen del mismo país o alguno reside en el lugar de origen, las preferencias por el país de origen son altas, el proceso de asimilación es lento y la propensión a retornar es mayor. La evidencia empírica revela, además, que los migrantes viejos se adaptan con mayores dificultades tras la migración, debido a que sus redes sociales en el lugar de origen estaban más afianzadas y son menos flexibles para integrarse en el lugar de destino. Ello redundaría en mayores preferencias por el lugar de origen y, por ende, en una inclinación a retornar²⁹⁹. Unas altas preferencias por el consumo en el lugar de origen conllevan altos costos de permanecer en el lugar de destino durante un período prolongado.

Las preferencias por el lugar de destino, como es de esperarse, influyen también la decisión de permanecer tras la migración o retornar. Unas altas preferencias por el lugar de destino, contrario al caso de unas altas

294 *Ibid.*

295 Dustmann, 2000.

296 Adda *et al.*, 2006; Dustmann, 2000; Dustmann *et al.*, 1996; Borjas y Bratsberg, 1996.

297 Gaviria y Mejía, 2005; Dustmann, 2000; Dustmann *et al.*, 1996; Borjas y Bratsberg, 1996.

298 Gaviria y Mejía, 2005; Dustmann, 2000; Dustmann *et al.*, 1996

299 Dustmann *et al.*, 1996.

preferencias por el consumo en origen, contribuyen al proceso de asimilación en el lugar de migración y a menguar la nostalgia por el país nativo y el deseo de retornar. El proceso de asimilación y la habituación a la nueva vida modifican las preferencias por el lugar de destino y aminora el atractivo de retornar. Así, pues, conforme pasa el tiempo, las intenciones de permanecer en el lugar de migración se afianzan³⁰⁰. Asimismo, las preferencias de otros miembros del hogar inciden en la decisión de retornar. Si el lugar de destino proporciona amplias oportunidades para los hijos de los migrantes, las preferencias de permanecer en destino aumentan y el proceso de asimilación mejora, lo cual reduce el deseo de retorno³⁰¹.

Al igual que en la migración inicial, los migrantes comparan las condiciones económicas en los lugares de origen y destino y pueden así replantear su decisión de permanecer o retornar. Por un lado, la mejora en las condiciones de la ciudad o país de origen atrae a los migrantes a retornar: un mayor poder adquisitivo por los bajos precios en el lugar de origen, un crecimiento económico dinámico o más oportunidades económicas pueden incentivar el retorno de los migrantes³⁰². Un deterioro de las condiciones económicas o un clima político adverso en el lugar de origen pueden, por el contrario, disuadir el regreso³⁰³. Por otro lado, un deterioro de las condiciones económicas en destino se convierte en un factor expulsor y en un incentivo para el retorno. Por ejemplo, algunos migrantes que consideraban poco probable el retorno pueden alterar sus planes al constatar que sus decisiones se basaron en información errónea acerca de las oportunidades económicas en el país o ciudad de destino³⁰⁴. El retorno puede ocurrir, sin embargo, pese a las mejores condiciones en los lugares de destino. Ello debido a que las preferencias por el lugar de origen están mediadas también por aspectos no monetarios³⁰⁵.

El capital humano y sus retornos potenciales influyen la decisión de migrar y las posibilidades de permanecer o no en el lugar de destino. Las personas educadas migran, en algunos casos, en busca de altos retornos para su capital en otros lugares³⁰⁶. Más aún, estudios empíricos muestran que, una vez los hogares o personas deciden adoptar la migración como

300 Adda *et al.*, 2006; Borjas y Bratsberg, 1996.

301 Dustmann, 2003; Dustmann *et al.*, 1996.

302 Dustmann, 2000.

303 Dustmann, 2000; Borjas y Bratsberg, 1996.

304 Borjas y Bratsberg, 1996.

305 Adda *et al.*, 2006.

306 Gaviria y Mejía, 2005; Agesa, 2001; Lanzona, 1998.

estrategia para expandir sus ingresos, se preparan invirtiendo en educación³⁰⁷. El capital humano y la experiencia laboral antes de la migración, no obstante, no son plenamente transferibles³⁰⁸. Algunas dimensiones del capital humano, tales como el idioma, las ocupaciones o la cultural laboral, suelen ser específicas del lugar. La discriminación hacia los migrantes puede, asimismo, limitar la transferibilidad de su capital humano³⁰⁹. La inversión en capital humano es también una estrategia una vez radicados en el destino. Para incrementar sus retornos, los migrantes invierten para adquirir capital humano, ya sea transferible o específico de su lugar de origen. Como resultado, en un inicio el capital humano de los migrantes no genera retornos similares a los retornos para los nativos, pero tras el paso del tiempo y de las inversiones en capital humano, los retornos convergen con los retornos de los nativos³¹⁰.

Los retornos del capital en el lugar de origen y la posibilidad de transferir el capital humano acumulado después de la migración determinan asimismo la decisión de retornar. Si la migración es temporal, los beneficios de las inversiones en capital humano específico del lugar son bajos, pues el horizonte de tiempo para extraer retornos es corto. Dichas inversiones son, por ende, menores y las ganancias laborales son naturalmente menores³¹¹. Por otro lado, unas altas inversiones en capital humano no transferible torna el regreso más costoso, lo cual redundaría, por ejemplo, en una menor intención de retornar de las personas jóvenes, dispuestas a adoptar capital humano específico del lugar de destino, pues su horizonte de planeación más largo les permite extraer retornos mayores de su inversión. Sin embargo, cuando el capital humano se transfiere fácilmente a los sitios de origen, la inversión en capital humano en destino puede ser alta, y esto no necesariamente desincentiva el retorno. Es más, puede incentivarlo si el capital humano adquirido en el lugar de destino es valioso en el lugar de origen y produce altos retornos³¹².

Si bien la decisión de los migrantes de retornar a su lugar de origen se asemeja a la decisión inicial de migración, el comportamiento de un migrante permanente o temporal diverge. Las migraciones temporales conducen a patrones heterogéneos en el proceso de asimilación, la tasa de ahorro, el comportamiento en los mercados laborales, el gasto de los

307 Kochar, 2004.

308 Stewart y Hyclak, 1984.

309 *Ibid.*

310 Dustmann *et al.*, 1996.

311 Dustmann *et al.*, 1996; Stewart y Hyclak, 1984.

312 Gitter *et al.*, 2008; Dustmann *et al.*, 1996.

hogares y las inversiones en capital humano, lo cual influencia a su vez el bienestar económico de los migrantes en el lugar de destino³¹³. La perspectiva de retornar induce a los migrantes a profundizar sus ahorros, dadas las posibilidades de inversión en el lugar de origen y los probables menores precios que enfrentarán tras volver³¹⁴. Su principal motivación es entonces ahorrar y no consumir en el lugar de destino; por lo tanto, su salario de reserva es bajo y están dispuestos a aceptar cualquier trabajo que les permita acometer sus objetivos³¹⁵. Las inversiones en capital humano específico del lugar de destino pueden ser menores para los migrantes temporales, pues éstas son costosas y su retorno es bajo, debido a la corta permanencia³¹⁶. Todo lo anterior puede explicar los diferentes patrones de asimilación entre la población de migrantes de distintos orígenes³¹⁷ y sesgar las estimaciones de la capacidad de los migrantes para asimilarse³¹⁸. Esto último sucede porque presumiblemente retornan los migrantes con menor intención o capacidad de asimilarse y, por ende, se observa un proceso de asimilación más exitoso.

2. La decisión de retornar en un contexto de migración forzada

El retorno de población desplazada es una etapa importante en el proceso de restitución de sus derechos y en la recuperación de su capacidad productiva. Pese a la importancia del retorno en un contexto de posconflicto, poco se ha abordado este tema en la literatura, tal vez por la dificultad para encontrar evidencia empírica que permita su análisis. Los estudios estadísticos o cualitativos coinciden, sin embargo, en muchas de sus conclusiones.

El retorno, tras la migración forzada, si bien contiene elementos similares a la migración voluntaria, reviste de características particulares. En el primer caso, la violencia es un factor preponderante en la decisión de retorno. Al evaluar si retornar o no, los hogares analizan las condiciones de seguridad de origen, las cuales constituyen el factor más importante en el momento de la decisión de retorno. Es más, el vivir una experiencia traumática de victimización torna a los hogares más renuentes a regre-

313 Adda *et al.*, 2006; Dustmann, 2000; Djajic y Milbourne, 1988.

314 Djajic, 1989.

315 Dustmann, 2000.

316 Dustmann *et al.*, 1996.

317 Adda *et al.*, 2006.

318 Borjas y Bratsberg, 1996.

sar³¹⁹. Así, pues, la seguridad en el momento del retorno y la violencia que se enfrenta antes del desplazamiento moldean, en buena medida, las preferencias por el lugar de origen. La sensación de seguridad y protección, no sólo proveniente de las fuerzas del Estado, sino de redes sociales o comunidades muy cohesionadas, es también un incentivo para retornar³²⁰. Por ejemplo, en Colombia los retornos colectivos, es decir, cuando un grupo de hogares decide regresar conjuntamente a su municipio, o el retorno de comunidades indígenas y afrocolombianas, con densas redes sociales, son los más exitosos³²¹.

Además de garantizar la seguridad de las personas que retornan, las pocas experiencias documentadas apuntan a la necesidad de generar incentivos para atraer de vuelta a la población desplazada. En primer lugar, la perspectiva de recuperar los activos, en particular la tierra, una vez se retorne, y el acceso a la tierra son un claro incentivo. Estudios econométricos demuestran, por ende, que los propietarios de tierra, con título formal de la propiedad, expresan un deseo más marcado de retorno³²². Ejemplos de países en épocas de posconflicto que han implementado programas de retorno han encontrado dificultades, pues muchos retornantes carecen de títulos de propiedad formal sobre la tierra y la restitución de bienes no ha sido posible. En Perú, dicho caso ha sido reiterativo, mientras que en Irak y Afganistán la imposibilidad de restituir las propiedades ha conllevado nuevos conflictos³²³.

En segundo lugar, el desarrollo económico de la región, una sólida gobernabilidad municipal y la provisión de infraestructura atraen el retorno de población desplazada y son esenciales para que el proceso sea sostenible. No se debe dejar de lado que el desplazamiento forzoso se generó en medio del conflicto, donde las instituciones gubernamentales fallaron en la protección de la población civil y las confrontaciones armadas destruyeron la infraestructura pública. Más aún, la población desplazada, por lo general proveniente de áreas rurales, migra a áreas urbanas, donde se evidencia la brecha en la prestación de servicios entre las áreas urbanas y rurales. Las expectativas de la población desplazada respecto a la ayuda estatal se tornan entonces más exigentes y el retorno es atractivo en la medida que los lugares de origen provean una infraestructura y

319 Econometría, 2008; Ibáñez y Querubín, 2004; Cordero, 2002.

320 Ibáñez y Querubín, 2004.

321 Econometría, 2008.

322 Ibáñez y Querubín, 2004.

323 Econometría, 2008; IDMC, 2007; Rogge y Lippman, 2004; Davies, 2004.

una gobernabilidad adecuadas³²⁴. En Colombia, los casos de retorno más exitosos suceden en los centros poblados, con una oferta concentrada de servicios estatales, y no en áreas rurales aisladas, con una mínima oferta institucional³²⁵.

En tercer lugar, los lugares de origen deben proveer alternativas de generación de ingresos. Es esencial para la población desplazada poder recuperar su senda productiva y cubrir, por lo menos, sus necesidades alimentarias. Los ejemplos de retornos en Perú y Colombia develan la importancia que asigna la población desplazada a recobrar la capacidad para sostenerse bajo condiciones dignas y procurar, con la producción agrícola, sus necesidades alimentarias básicas³²⁶.

Una rápida asimilación en los lugares de destino es, sin duda, una talanquera para el deseo de retornar. Ibáñez y Querubín (2004) encuentran que los hogares menos inclinados a retornar son aquellos con un mejor proceso de asimilación, el cual depende de diversos factores. Primero, niveles más altos de capital humano les permiten acceder a mejores oportunidades en los mercados laborales. Segundo, hogares vulnerables, por ejemplo, hogares cuyo jefe fue asesinado, prefieren permanecer en el municipio de destino, pues ofrece más servicios estatales. Tercero, el paso del tiempo en el lugar de recepción posibilita la asimilación del hogar y disminuye inexorablemente el deseo de retorno³²⁷.

B. El deseo de retorno de la población desplazada en Colombia

El retorno de la población desplazada en Colombia es aún incipiente y poco se conoce acerca de sus posibles determinantes. No es claro cuáles hogares podrían retornar a su municipio de origen ni cuáles políticas públicas, además de la recuperación de la seguridad, podrían impulsar verdaderos procesos de retorno. Llevar a cabo un análisis para explorar estos interrogantes no es posible. Los pocos retornos que se han presentado y la carencia de datos acerca de las características de los retornantes lo imposibilitan. La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados 2004 incluyó, sin embargo, una serie de preguntas que indagaban sobre el deseo de retorno de los hogares desplazados, los motivos para no querer retornar y el deseo de retorno bajo plausibles escenarios de retornos. Dichas preguntas,

324 Econometría, 2008; Cordero, 2002; Rogge y Lippman, 2004; Venancio *et al.*, 2004.

325 Econometría, 2008.

326 Econometría; 2008; Cordero, 2002.

327 Econometría, 2008; Ibáñez y Querubín, 2004.

aunadas a la información que recogió la encuesta, permiten analizar los determinantes del deseo de retorno para los desplazados, objetivo de esta sección. Para alcanzar este objetivo, se detalla el modelo en el cual se basa el análisis y se lleva a cabo un análisis estadístico y econométrico.

1. Un modelo para analizar el deseo de retorno

La decisión de retorno de la población desplazada es similar a la decisión de migración en un contexto de conflicto. Tal como se examinó en la revisión bibliográfica de la sección anterior, las decisiones de retorno están influidas por las preferencias por los lugares de origen y recepción, por las condiciones económicas y por el proceso de asimilación en el lugar de recepción. El análisis anterior no incorpora, sin embargo, las condiciones de seguridad y la posibilidad de ser víctima de la violencia como algunos de los factores decisivos en el retorno de población desplazada. Un modelo para analizar el desplazamiento forzoso, el cual tiene en cuenta las condiciones de seguridad, se desarrolló en el capítulo III y se aplica también para analizar el tema del retorno. Los próximos párrafos describen someramente el modelo y resaltan los puntos en los que difieren, para el caso del retorno. Cabe anotar que el análisis se basa en las intenciones de retorno y no en el retorno *per se*. Estudios de migraciones económicas revelan que hay una diferencia entre las intenciones de retorno y el retorno como tal, pero los determinantes del deseo de retorno y el retorno, el principal interés de este capítulo, parecen coincidir³²⁸.

Un hogar i decide retornar cuando la utilidad esperada de retornar es mayor que la utilidad esperada de permanecer en el municipio de destino:

$$E(U_{in}) > E(U_{id})$$

donde U_{ij} es la utilidad indirecta del hogar i en el lugar j , con $j = d$ para el lugar de destino y $j = n$ para el lugar de origen; y E representa el operador del valor esperado. La utilidad esperada está compuesta por una utilidad observada, v_{ij} , y un término aleatorio, ε_{ij} con media igual a cero que recoge todas las variables no observables del modelo:

$$E(U_{ij}) = v_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

La utilidad observada de permanecer en el lugar de destino o retornar al municipio de origen está determinada por las condiciones de seguridad en ambos lugares (S_{ij}), las condiciones económicas (Y_{ij}), los costos de la migración (C_i) y las características demográficas que moldean las preferencias de los hogares (Z_i):

328 Adda *et al.*, 2006; Dustmann, 2000.

$$v_{ij} = f(S_{ij}, Y_{ij}, C_i, Z_i).$$

Un hogar decide entonces retornar cuando la utilidad de retornar es mayor que la utilidad de permanecer en el lugar de recepción. Dado que el deseo de retorno está contenido en el modelo de decisión de retornar, un hogar expresa deseo de retorno cuando la utilidad de retornar en el momento de indagar sobre el deseo de retorno es mayor que la utilidad de permanecer. La probabilidad de desear retornar se define como

$$Prob_i(R_i = 1) = g(S_{id}, S_{in}, Y_{id}, Y_{in}, C_i, Z_i)$$

donde $R_i = 1$ denota que el hogar i desea retornar y $R_i = 0$ denota que el hogar no desea retornar.

El modelo anterior asume que las preferencias en el lugar de origen y de recepción difieren, es decir que la utilidad marginal de cada uno de los determinantes del modelo diverge. Por ejemplo, la utilidad de gastar un peso adicional en origen es diferente de la utilidad de gastar un peso adicional en recepción. En los párrafos siguientes se describen las variables proxies para las percepciones de seguridad en origen y recepción, las condiciones económicas en ambos lugares, el capital humano y, por último, las variables que determinan el proceso de asimilación en el municipio de recepción.

La evidencia del capítulo III reveló que, si bien algunas variables económicas influyen en el proceso de desplazamiento, la violencia es el factor preponderante. Es presumible que dicho patrón se repita, con menos fuerza, en la decisión de retornar. Por ende, una percepción de inseguridad puede disuadir el retorno, aunque los factores económicos sean óptimos. Para captar las percepciones de seguridad en el municipio de origen (S_{in}), incluyo si el hogar se desplazó producto de una amenaza directa, así como la percepción de presencia de grupos armados al margen de la ley (guerrilla y paramilitares) y la tasa de homicidios en el municipio de origen. La percepción de seguridad en el municipio de origen suele estar ligada con la experiencia que causó el desplazamiento. Así, pues, una familia que huyó después de ser víctima de una amenaza directa o de un evento traumático es más pausada y prevenida al examinar las condiciones de seguridad, y no sólo analiza la violencia generalizada en su municipio, sino la posibilidad de ser nuevamente víctima de la violencia. La variable de amenazas directas, que representa una agresión directa a un hogar o una persona en particular, pretende captar la dinámica de victimización que enfrentó el hogar y la posibilidad de una repetición de los hechos tras el retorno. La percepción de presencia de grupos al margen de la ley también refleja las condiciones particulares del conflicto en

la región. Es posible que persista la presencia de grupos armados, pese a que las condiciones de seguridad en el municipio hayan mejorado de manera significativa. La amenaza latente de la presencia de un grupo armado puede constituir un obstáculo para el retorno, si ese grupo fue el responsable del desplazamiento inicial. La tasa de homicidios en el municipio de origen, por otro lado, busca captar las condiciones de violencia generalizada en el municipio, que no necesariamente conducirán a una agresión al hogar en un eventual retorno. Una familia puede, entonces, decidir no retornar al sentir un alto grado de amenaza, pese a percibir una disminución objetiva de la violencia en su municipio.

En el lugar de recepción, la percepción de seguridad (S_{id}) reposa más en las condiciones generales del municipio, representadas por la tasa de homicidios, y en la posibilidad de ser víctimas directa del conflicto, representada por la presencia de grupos armados al margen la ley. Cuando los hogares avizoran un deterioro de las condiciones de seguridad en recepción y, en particular, una consolidación de la presencia de los grupos armados que causaron su desplazamiento, el retorno al municipio de origen se convierte en una alternativa y se puede anticipar. Al igual que en el caso de las condiciones de seguridad en origen, el riesgo de ser amenazado o victimizado de nuevo puede pesar más que la violencia generalizada en el municipio de recepción y, por ende, la presencia de grupos armados en recepción puede provocar retornos o reubicaciones. De otro lado, la violencia generalizada no necesariamente ocasiona un deterioro inmediato y significativo en la seguridad de los hogares desplazados.

La decisión de retorno, tras una migración voluntaria, está indefectiblemente relacionada con las condiciones económicas, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. De tal manera que una mejoría en la situación del lugar de origen crea un atractivo adicional del retorno a las ya preferencias marcadas de volver a su ciudad o país nativo. Ahora bien, las condiciones económicas pueden también influenciar la decisión de retorno en un contexto de conflicto armado, pero no es claro el tamaño de su influencia frente a las variables de seguridad. Un deterioro en el entorno económico de los municipios de recepción, que conlleva una contracción en los mercados laborales y en menos oportunidades de generación de ingresos, reduce los retornos de permanecer en el lugar de recepción y son un incentivo para regresar. Por el contrario, una recuperación económica del municipio de origen constituye un atractivo para retornar. La población desplazada migró para proteger su vida, y no para buscar mejores opciones económicas. Su lugar de origen es, sin duda, la mejor alternativa para maximizar su potencial económico y consolidar su proyecto de vida. Una recuperación de la dinámica económica de su lugar de origen atraerá el regreso de muchos de sus antiguos pobladores. Es más,

el retorno significa, en algunos casos, la recuperación o la restitución de activos productivos, lo cual incrementa aun más el atractivo de volver.

Las condiciones económicas en el municipio de origen (Y_{in}) se representan con el porcentaje de tierras abandonadas que se podrían recuperar en un eventual retorno, el logaritmo del consumo agregado en origen y el impuesto de industria y comercio per cápita recaudado en el municipio. Recuperar la tierra y reanudar la producción agropecuaria es la base para retomar la senda productiva que se perdió por el desplazamiento, lograr la autonomía en el sostenimiento y producir alimentos para el consumo. Todo lo anterior es un fuerte incentivo para regresar a la tierra nativa. El consumo en origen representa la capacidad de generación de ingresos antes del desplazamiento. Si dicha capacidad excede la de la recepción, los estímulos para retornar son claros. Por último, el dinamismo económico de la región representa las oportunidades productivas potenciales en un eventual retorno. Dado que se carece de PIB municipales, se incluye el recaudo del impuesto de industria y comercio (ICA) como proxy de la producción municipal.

Las condiciones económicas en origen no son, sin embargo, el único criterio para escoger entre la permanencia o el regreso. Éstas se comparan con las oportunidades económicas que brinda el municipio de recepción (Y_{id}), para así contar con un abanico de alternativas. Los incentivos de unas mejores oportunidades económicas en recepción se contraponen a las de origen; es decir, cuando el lugar de recepción ofrece mejores condiciones económicas, la inclinación a retornar decrece. Con el fin de captar las oportunidades económicas en recepción, se incluye el logaritmo del consumo agregado en recepción y el ICA per cápita de dicho municipio.

La capacidad para aprovechar las oportunidades que brindan el lugar de origen o el de recepción está determinada por el capital humano que poseen los miembros del hogar. Tal como se argumentó en la revisión bibliográfica, el capital humano no es necesariamente transferible entre sitios geográficos. La imposibilidad de trasladar el capital humano, debido a la procedencia rural de los hogares desplazados y su especialización en labores agrícolas, disminuye sus retornos en el lugar de recepción y constituye un incentivo para regresar. Por otro lado, ante el hecho de la adquisición de capital humano específico de las áreas urbanas o ante la posibilidad de educar a los hijos en los colegios urbanos –dada la mayor oferta educativa–, retornar genera un costo. Los aspectos anteriores se incluyen en el modelo con los años de educación del jefe del hogar, que pretende captar un capital humano más transferible entre áreas rurales y urbanas, una variable dicótoma que identifica si el jefe del hogar estaba dedicado a actividades agrícolas antes del desplazamiento, que refleja el

capital humano no transferible a áreas urbanas, y una variable de asistencia escolar de los menores, que representa la inversión actual en capital humano y los costos de retornar.

Por último, el proceso de asimilación en recepción y las preferencias que se adquieren por el nuevo lugar pueden disuadir el retorno. Cuando un hogar se asimila bien al lugar de recepción y éste se encuentra contenido en sus procesos económicos y sociales, el retorno puede generar un costo alto. Es más, si el desplazamiento modifica las preferencias y conduce a un rechazo del lugar de origen, el retorno no es una alternativa atractiva. Las preferencias se captan mediante la edad, el género y la estructura del hogar. El tiempo de asentamiento, la participación en programas de generación de ingresos y la asistencia escolar de los menores de la familia son variables que representan el proceso de asimilación.

Tal como se discutió en la revisión bibliográfica, la edad moldea las preferencias. Las personas mayores enfrentan dificultades para adaptarse a una nueva ciudad y para dejar atrás sus costumbres. El proceso de desarraigo es, en este caso, más doloroso. Por lo tanto, el deseo de retornar de las personas mayores es más alto. El género del jefe del hogar puede, asimismo, determinar las preferencias por ambos lugares. Por ejemplo, las mujeres cabeza de familia pueden desarrollar preferencias por el lugar de recepción, pues hay una oferta más amplia de servicios del Estado y facilidades de educación para sus hijos. Más aún, si las mujeres se convirtieron en jefes tras el asesinato o abandono de su cónyuge, pueden sentirse protegidas y apoyadas en áreas urbanas. Los hombres, por su parte, poseen un perfil laboral menos acorde con las ocupaciones laborales urbanas y su proceso de incorporación en los mercados laborales urbanos es lento y frustrante. Las preferencias por el origen se pueden afianzar, por tanto, en este proceso.

El proceso de asimilación depende, en buena medida, de las oportunidades económicas y de la adaptación al nuevo lugar. Dado que las oportunidades económicas de recepción y la posibilidad de asistencia se incluyeron, adiciono el tiempo de asentamiento y la participación en programas de generación de ingresos. Conforme pasa el tiempo, los hogares comprenden mejor el nuevo entorno, consolidan redes sociales y conocen los mercados laborales, lo cual redundaría en un mejor proceso de asimilación y, por ende, en una probable renuencia a retornar. Los capítulos anteriores han demostrado, sin embargo, que el tiempo de asentamiento no contribuye a mejorar las condiciones en el municipio de recepción e, incluso, después de un tiempo largo las empeoran. Ello podría implicar que, en el caso de la población desplazada, un mayor tiempo de asentamiento no necesariamente redundaría en una mejor asimilación en el lugar de recep-

ción. La participación en los programas de generación de ingresos contribuye también a afianzar el proceso de asimilación. Dichos programas no sólo expanden las oportunidades económicas, sino que generan nuevas redes sociales y proveen información para acceder a otros programas estatales. Es de esperar que ser beneficiario de los programas de generación de ingreso aumente las preferencias de permanecer en recepción.

2. Estadísticas descriptivas

El análisis del modelo anterior se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Desplazados (2004), la cual describí en detalle en el cuarto capítulo. Además de los módulos ya estudiados, la encuesta incluye un grupo de preguntas para indagar si el hogar está dispuesto a retornar y las razones para querer retornar. Estas preguntas se aplican únicamente al jefe del hogar, es decir no se indaga sobre las intenciones de retorno de cada uno de los miembros del hogar. Las estadísticas descriptivas que se presentan en los párrafos siguientes examinan el deseo de retorno de los hogares desplazados y comparan las características de los hogares con y sin intenciones de retornar.

El deseo de retorno de los hogares desplazados se presenta en el cuadro 1. Casi un 10% de los hogares expresaron deseo de retorno. Las razones para desear retornar residen en factores de expulsión y no en factores de atracción, es decir, en una percepción de unas mejores condiciones en el lugar de origen. Las malas condiciones en el municipio de recepción son identificadas entonces como las principales razones para retornar: un 34,6% arguye que no se ha adaptado al lugar de recepción, un 27,1% considera que las condiciones no mejoran, pese al paso del tiempo, y un 26,1% argumenta su deseo de retorno ante la dificultad para encontrar trabajo y financiar los gastos de alimentación. En contraposición, un 25,7% desea retornar para cuidar sus propiedades. Al comparar estos datos con el deseo de retorno de los migrantes internacionales, las diferencias son sustanciales y reflejan el traumático proceso del desplazamiento forzoso. Un estudio de Gaviria y Mejía (2005) revela que un 65% de los colombianos residentes en el exterior está considerando retornar en algún momento, y fundamentan su deseo de retorno en factores de atracción, tales como una mejoría de la economía y la seguridad, y no de expulsión, como en el caso de la población desplazada.

Tal como se ha discutido en párrafos y capítulos anteriores, el proceso de desplazamiento se genera por una victimización de la población civil que no sólo domina la migración inicial y forzosa sino el proceso de recuperación y el comportamiento posterior de los hogares. La decisión de retorno no es la excepción. Es de esperar, por un lado, que los hogares con pro-

cesos más traumáticos de desplazamiento sean más renuentes a retornar y, por otro lado, que las condiciones de seguridad actuales, ya sea en el municipio de origen o de recepción, cumplan un papel fundamental en la decisión.

Cuadro 1. El deseo de retorno^a

Variable	Porcentaje
Deseo de retorno	9,9%
Razones para retornar	
No encuentra trabajo en recepción	26,1%
Está pasando hambre en recepción	26,1%
No se ha adaptado al receptor	34,6%
No quiere perder propiedades en origen	25,7%
Lleva muchos meses en recepción y situación no mejora	27,1%
Se siente discriminado	8,7%

a. Los hogares podían escoger varias razones

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Los resultados del cuadro 2, que presentan el detonante del desplazamiento y la percepción de presencia de grupos armados y fuerzas estatales, confirman esta hipótesis. El detonante del desplazamiento influye en las intenciones de retorno, pero este último depende de la dinámica de victimización. No todas las experiencias traumáticas producen renuencia a retornar. Es claro que la amenaza de muerte como causa del desplazamiento es bastante más frecuente en el grupo de hogares que desea retornar (46,3% vs. 55,4%). Este patrón no se replica, empero, para otro tipo de detonantes igual o más traumáticos. Sorprende, por ejemplo, que el homicidio de miembros del hogar y las masacres en sus municipios de origen sean más frecuentes entre los hogares que desean retornar que los que no desean hacerlo. Ello se debe presumiblemente a que los hogares asignan una mayor importancia a una futura victimización tras un posible retorno que al proceso de victimización que generó el desplazamiento forzoso.

Lo anterior parece confirmarse con la importancia asignada por los hogares a la presencia de grupos armados al margen de la ley. Primero, los hogares parecen otorgarle un mayor peso a la presencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio de recepción que en el de origen. Para ilustrar, un 42,4% de los hogares que desean retornar percibe presencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio de recepción, mientras que dicho porcentaje es para los hogares sin intenciones de retorno del 26,5%. La presencia de grupos armados en recepción constituye, pues, probables agresiones futuras a la población y parece ser un factor de expulsión. Segundo, las fuerzas estatales parecen no ser un factor de

cisivo en el deseo de retorno. Es más, el deseo de retorno es más alto en los hogares que perciben una menor presencia estatal en los municipios de origen y una mayor presencia en los municipios de recepción. Si bien los resultados son sorprendentes a primera vista, concuerdan con los resultados presentados en el capítulo III. Estos resultados muestran que la presencia de las fuerzas estatales no parece ser efectiva para prevenir las amenazas de muerte contra la población civil, pero sí son efectivas para evitar el desplazamiento cuando es inminente. En el caso del retorno, donde pareciera dominar el miedo a ser víctimas de una nueva agresión de los grupos armados, la efectividad de las fuerzas estatales no parece de nuevo ser determinante.

Cuadro 2. Detonantes del desplazamiento y percepción de presencia de grupos armados y fuerzas estatales en origen y recepción

Variable	Desea retornar	No desea retornar
Detonante del desplazamiento		
Amenaza de muerte	46,3%	55,4%
Intento de homicidio	31,1%	17,6%
Homicidio	51,6%	32,6%
Desaparición forzada	13,2%	14,6%
Reclutamiento forzoso	13,7%	17,7%
Masacre	36,4%	19,5%
Secuestro	10,5%	7,3%
Confrontación armada	26,9%	37,0%
Violencia generalizada	43,8%	38,6%
Percepción de presencia		
Grupos armados ilegales – origen	97,5%	89,6%
Grupos armados ilegales – recepción	42,4%	26,5%
Fuerzas estatales – origen	37,4%	50,2%
Fuerzas estatales – recepción	70,3%	75,9%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La decisión de retorno y el deseo de retornar, tal como demostró el cuadro 1, están también ligados a las condiciones económicas que ofrecen el lugar de origen y recepción. El cuadro 3 compara las condiciones económicas en el municipio de origen, antes del desplazamiento y las condiciones actuales en el municipio de recepción, para los hogares con y sin intenciones de retorno. El retorno al lugar de origen puede facilitar la restitución de los activos abandonados, en particular la tierra, y la esperanza de recobrarlos parece determinar el deseo de retorno. El cuadro 3 revela que los hogares con deseo de retornar poseían parcelas más extensas, más valiosas y con una producción agropecuaria más rentable. Además, el valor de otros activos distintos a la tierra era un poco más elevado. Así, pues, el tamaño de los predios de los hogares que desean retornar

es de 15,1 hectáreas, el valor de los predios es de \$13,2 millones, el valor de su producción anual es de \$2,5 millones y el valor de otros activos es de \$16,7 millones. Dichas cifras para los hogares que no desean retornar son, respectivamente, 13,0 hectáreas, con un valor de \$8,1 millones, una producción agropecuaria anual de \$2,3 millones y un valor de otros activos de \$15 millones. Cabe anotar que la propiedad formal de la tierra parece no contribuir a proteger a la propiedad ni a un proceso expedito de restitución. Contra la intuición, los hogares con deseo de retornar reportan una menor proporción de propiedad formal de sus predios, lo cual pareciera sugerir que la propiedad formal no protege los derechos de propiedad y, por ende, no es un incentivo de retorno. Ahora, bien, la posibilidad de recuperar los predios tras el retorno sí es un incentivo de retorno: los hogares que desean retornar expresan poder recuperar un 37,9% de la extensión de sus predios, mientras que los hogares sin intención de retorno sólo podrían recuperar un 24,5%. Es evidente, sin embargo, que la percepción de recuperación no está necesariamente ligada con la propiedad formal de la tierra.

Cuadro 3. Condiciones económicas en origen y recepción

Variable	Desea retornar	No desea retornar
Pérdida de activos en origen		
Acceso a tierra	53,0%	55,7%
Tamaño de predios	15,09 (4,61)	13,04 (2,25)
Tamaño de predios perdidos	2,52 (1,85)	4,16 (0,91)
Valor predios	\$13,2 millones (4 millones)	\$8,1 millones (\$0,8 millones)
% tierras bajo propiedad formal	25,2% (6,0)	31,9% (2,2)
% tierras que se pueden recuperar si retorna	37,9% (7,1)	24,5% (2,0)
Ganancias agrícolas anuales	\$2,5 millones (\$1,4 millones)	\$2,3 millones (\$0,4 millones)
Valor activos en origen (sin tierra)	\$16,7 millones (\$1,3 millones)	\$15,0 millones (\$0,6 millones)
Condiciones económicas		
Consumo adulto equivalente – origen	\$0,96 millones (\$0,09 millones)	\$1,7 millones (\$0,31 millones)
Consumo adulto equivalente – recepción	\$0,8 millones (\$0,1 millones)	\$1,1 millones (\$0,06 millones)
Ingreso adulto equivalente – origen	\$1,1 millones (\$0,1 millones)	\$2,0 millones (\$0,4 millones)
Ingreso adulto equivalente – recepción	\$0,6 millones (\$0,1 millones)	\$0,6 millones (\$0,04 millones)

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Los ingresos laborales y el consumo, antes de controlar por otras características del hogar y del municipio, no parecerían influenciar de manera significativa el deseo de retorno. Las predicciones del modelo indican que retornar es más atractivo para los hogares con mayor consumo y mayores ingresos antes del desplazamiento y menor consumo y menores ingresos en recepción. En el cuadro 3 se observa que el consumo en origen no es un factor de atracción, pero es necesario ser cautelosos con esta afirmación, ya que la encuesta no recoge información directa sobre el consumo en origen y lo predice con base en un modelo estimado para Colombia con datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 1997. Por lo tanto, los errores de medición de esta variable pueden ser elevados. Por el contrario, un bajo consumo agregado por adulto equivalente en recepción parece contribuir al deseo de retorno. El ingreso laboral, una proxy bastante inexacta de los ingresos totales del hogar, pues la población desplazada labora por lo general en el sector informal, donde es difícil la medición del ingreso, no parece tener relación alguna con el deseo de retorno.

Las características del hogar y de sus miembros moldean las preferencias por el lugar de origen y de recepción. El cuadro 4 muestra las características de ambos grupos de hogares, a saber los hogares con y sin intención de retornar. Las diferencias entre ambos grupos de hogares son evidentes para casi todas las características analizadas y corroboran las hipótesis expuestas en el modelo de la sección anterior, aunque se deben comprobar con las estimaciones econométricas. Los hogares con jefes mayores, con jefatura masculina, o pertenecientes a minorías étnicas, tienen más intenciones de retornar. A medida que las personas son mayores, su adaptación a las nuevas condiciones en una ciudad desconocida y su aprendizaje de nuevas ocupaciones para participar en los mercados laborales son un proceso lento o, tal vez, la asimilación nunca sucede. Al igual que en Ibáñez y Querubín (2004), la renuencia a retornar es más frecuente en los hogares encabezados por mujeres. Diversos estudios han demostrado que las mujeres parecen adaptarse más fácil a los mercados laborales urbanos, pues sus oficios son más acordes a la demanda laboral. Además, la concentración de servicios estatales en las áreas urbanas es más atractiva para las mujeres, que podrían sentirse apoyadas. Por último, las minorías étnicas tienen fuertes vínculos culturales con el origen y su proceso de desarraigo es más fuerte; por ende, el retorno es siempre una alternativa atractiva. Poseer capital humano poco transferible a las áreas urbanas parece ser también un estímulo para retornar. En los hogares con intenciones de retorno, un 65,4% estaba dedicado a la agricultura antes de suceder el desplazamiento, en contraste con un 56,4% para aquellos hogares sin intenciones de retorno.

Cuadro 4. Características del hogar

Variable	Desea retornar	No desea retornar
Características del hogar		
Edad jefe de hogar – años	44,21 (2,47)	43,84 (0,64)
Jefatura masculina	67,5%	60,3%
Jefatura femenina por pérdida jefe hogar	8,7%	8,5%
Hogar fragmentado	39,1%	26,0%
Años de educación – jefe hogar	5,47 (0,29)	5,73 (0,13)
Jefe dedicado agricultura en origen	65,4%	56,4%
Minoría étnica	32,8%	18,4%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

La inserción en las redes sociales en origen y recepción y la posibilidad de recuperar las redes sociales en un eventual retorno pueden asimismo constituir un incentivo de retorno. Los datos, sin embargo, muestran poca diferencia en términos de densidades de las redes sociales entre los hogares que desean y no desean retornar. Al observar el promedio de organizaciones y la adopción de posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones para origen y recepción, no se encuentra una diferencia significativa entre los hogares que desean y no desean retornar. Por ejemplo, el promedio de organizaciones a las que pertenecían en origen es 0,37 para el primer grupo y 0,33 para el segundo grupo; y el promedio de organizaciones en recepción son 0,23 y 0,26, respectivamente. Si bien las redes sociales determinan el desplazamiento forzoso al constituir un factor de amenaza, no parecieran cumplir un papel importante en el proceso de retorno. Antes de derivar una conclusión categórica sobre este tema, es necesario estimar las regresiones de deseo de retorno.

La comparación entre los hogares que desean y no desean retornar evidencia que son dos grupos diferentes. La dinámica del desplazamiento, la posibilidad de recuperar activos tras un eventual retorno y las características del hogar difieren en muchas de sus dimensiones. Los hogares que desean retornar parecen enfrentar menos riesgos de ser de nuevo victimizados, pueden recuperar sus tierras con más probabilidad, su capital humano es más típico de las áreas rurales, son más viejos y son encabezados frecuentemente por hombres. Es claro que estas diferencias pueden desaparecer para algunos casos cuando se controle por todas las variables, y la siguiente sección describe los resultados de las estimaciones econométricas.

Antes de presentar las estimaciones econométricas, reviste interés analizar, así sea de manera preliminar y tangencial, si los hogares con deseo

de retornar adoptan comportamientos económicos diferentes. Es probable que los hogares con deseo de retorno decidan permanecer un lapso menor de tiempo en recepción, migren cerca de su lugar de origen para reducir los costos de regresar, prefieran acumular activos y no expandir consumo, y acepten trabajos más fácilmente, con el fin de ahorrar para retornar. Los resultados confirman estas hipótesis planteadas en la revisión bibliográfica. Los hogares que desean retornar han permanecido 1.164 días en origen, un 31,9% migra dentro de su municipio, poseen activos por \$7,9 millones y sus tasas de desempleo son 8,4%. Los hogares que no desean retornar han permanecido, por su parte, 1.238 días en el municipio de recepción, un 16,2% migró dentro de su municipio, el valor de sus activos es \$6,7 millones y el desempleo es de 16,9%.

3. Los determinantes del deseo de retorno

El modelo planteado en secciones anteriores se estima a continuación. Con el fin de establecer si el modelo es robusto, se estiman diversos grupos de regresiones. En primer lugar, los grupos de variables se incluyen progresivamente, de tal manera que primero se estima el modelo con las variables que representan las percepciones de seguridad; después se incluyen las condiciones económicas en origen y recepción, las variables de capital humano y, por último, las características de los hogares. Se estimaron también regresiones con variables de capital social, pero nunca fueron significativas ni contribuían a incrementar el poder de predicción del modelo. Por lo tanto, no se reportan los resultados. En segundo lugar, es probable que características no observables de las regiones influyeran en la decisión de retorno. Para ilustrar, la empatía con el municipio receptor o el arraigo al lugar de origen por factores que no son observables pueden ser un fuerte determinante del deseo de retorno. Con el fin de captar parcialmente las variables no observables, se incluyen controles regionales. Los resultados se muestran para las estimaciones con y sin controles regionales. En tercer lugar, se incluyen interacciones de las variables económicas con las amenazas directas, para establecer si, en efecto, las variables económicas ejercen una mayor influencia cuando la dinámica del desplazamiento fue menos traumática. Por último, se incluyen interacciones entre las variables de capital humano específico para áreas rurales (dedicación a actividades agrícolas) y para áreas urbanas (años de educación), y las condiciones económicas, con el fin de captar si los hogares con capital humano específico pueden extraer mayores retornos económicos. Estos últimos resultados no se presentan, pues las interacciones no son significativas y la magnitud y significancia de los otros coeficientes estimados no se modifican. Los resultados de las estimaciones se presentan en los cuadros 5a y 5b.

Cuadro 5a. Estimaciones probit: el deseo de retorno

Variable	(I)			(II)			(III)		
	Efecto marginal (t-estadístico)								
Amenaza directa-causa del desplazamiento	-0,0708 (-5,77)***	-0,0431 (-3,73)***	-0,0497 (-4,15)***	-0,0327 (-2,85)**	-0,0496 (-4,21)***	-0,0325 (-2,88)***			
Tasa de homicidios en origen	-0,0002 (-1,50)	-0,0001 (-0,46)	-0,0001 (-0,82)	0,0000 (-0,32)	-0,0001 (-0,61)	0,0000 (-0,15)			
Tasa de homicidios en recepción	-0,0001 (-0,52)	0,0011 (3,45)***	0,0000 (-0,05)	0,0008 (2,69)***	0,0000 (-0,03)	0,0008 (2,72)***			
Percepción presencia grupos armados origen	0,0079 (0,40)	0,0259 (1,60)	0,0132 (0,67)	0,0181 (1,04)	0,0179 (0,94)	0,0210 (1,26)			
Percepción presencia grupos armados recepción	0,0653 (4,93)***	0,0314 (2,62)***	0,0523 (4,17)***	0,0285 (2,44)**	0,0502 (4,07)***	0,0275 (2,40)**			
% tierras que se pueden recuperar si retorna			0,0520 (4,45)***	0,0305 (2,73)***	0,0494 (4,31)***	0,0290 (2,64)***			
Logaritmo consumo agregado retorno			0,0126 (1,72)*	0,0123 (1,72)*	0,0106 (1,47)	0,0107 (1,53)			
Logaritmo consumo agregado origen			0,0096 (1,19)	0,0029 (0,37)	0,0121 (1,51)	0,0056 (0,71)			
ICA per cápita recepción			-2,1348 (-4,91)***	-1,3930 (-3,39)***	-2,0324 (-4,76)***	-1,3101 (-3,24)***			
ICA per cápita origen			0,2872 (0,76)	0,3883 (1,01)	0,3536 (0,94)	0,4162 (1,09)			
Años de educación-jefe					0,0023 (0,82)	0,0018 (0,64)			
Jefe dedicado a agricultura en origen					0,0409 (3,59)***	0,0359 (3,35)***			
Controles regionales	No	Sí	No	Sí	No	Sí			
Número de observaciones	2.151	2.087	1.998	1.937	1.998	1.937			
Pseudo R cuadrado	0,0514	0,1217	0,1217	0,1601	0,115	0,1703			

*Significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Cuadro 5b. Estimaciones probit: el deseo de retorno

Variable	(IV)		(V)	
	Efecto marginal (t-estad.)	Efecto marginal (t-estad.)	Efecto marginal (t-estad.)	Efecto marginal (t-estad.)
Amenaza directa- causa del despla- zamiento	-0,0431 (-3,78)***	-0,0246 (-2,32)**	0,0953 (0,37)	-0,1490 (-0,45)
Tasa de homicidios en origen	-0,0002 (-1,13)	-0,0001 (-0,63)	-0,0001 (-1,07)	-0,0001 (-0,56)
Tasa de homicidios en recepción	0,0001 (0,22)	0,0007 (2,52)**	0,0001 (0,47)	0,0006 (2,28)**
Percepción presencia grupos armados origen	0,0241 (1,37)	0,0253 (1,71)*	0,0232 (1,42)	0,0237 (1,70)*
Percepción presencia grupos armados recepción	0,0434 (3,60)***	0,0199 (1,84)*	0,0388 (3,41)***	0,0185 (1,80)*
% tierras que se pueden recuperar si retorna	0,0478 (4,28)***	0,0269 (2,60)***	0,0464 (4,42)***	0,0283 (2,90)***
Log, consumo agrega- do retorno	0,0115 (1,62)	0,0107 (1,62)	0,0071 (0,78)	0,0037 (0,44)
Log, consumo agregado retorno por Amenazas			0,0079 (0,60)	0,0123 (1,01)
Log, consumo agregado origen	0,0122 (1,28)	0,0079 (0,88)	0,0201 (1,68)*	0,0106 (0,93)
Log, consumo agregado origen por Amenazas			-0,0202 (-1,39)	-0,0082 (-0,59)
ICA per cápita origen	0,3508 (0,95)	0,3290 (0,91)	0,9063 (2,03)**	0,9403 (1,87)*
ICA per cápita origen por amenazas			-1,5876 (-1,63)*	-1,5422 (-1,62)
ICA per cápita recepción	-1,4436 (-3,58)***	-0,8978 (-2,57)***	-4,0878 (-5,71)***	-2,9802 (-4,65)***
ICA per cápita recepción por amenazas			4,1373 (5,24)***	3,0478 (4,38)***
Años de educación-jefe	0,0025 (0,93)	0,0017 (0,68)	0,0024 (0,95)	0,0016 (0,68)
Jefe dedicado a agri- cultura en origen	0,0305 (2,49)**	0,0255 (2,28)**	0,0277 (2,39)**	0,0229 (2,15)**
Edad jefe del hogar-años	-0,0004 (-1,07)	-0,0004 (-1,11)	-0,0005 (-1,26)	-0,0004 (-1,20)
Jefe del hogar mas- culino	0,0329 (2,46)**	0,0272 (2,23)**	0,0312 (2,46)**	0,0273 (2,36)**
Jefatura femenina pérdida principal proveedor	0,0430 (1,62)	0,0293 (1,17)	0,0414 (1,63)**	0,0303 (1,26)

(Continúa...)

Cuadro 5b. Estimaciones probit: el deseo de retorno

Tiempo de asentamiento-días	0,0000 (1,42)	0,0000 (0,54)	0,0000 (0,97)	0,0000 (0,31)
Tiempo de asentamiento al cuadrado-días	0,0000 (-1,59)	0,0000 (-0,88)	0,0000 (-1,28)	0,0000 (-0,70)
Beneficiario generación de ingresos	-0,0539 (-4,41)***	-0,0559 (-4,90)***	-0,0422 (-3,61)***	-0,0466 (-4,26)***
Asistencia escolar menores	-0,0050 (-0,43)	-0,0059 (-0,56)	-0,0071 (-0,65)	-0,0076 (-0,76)
Controles regionales	No	Sí	No	Sí
Número de observaciones	1.998	1.937	1.998	1.937
Pseudo R cuadrado	0,1388	0,1991	0,1708	0,223

*Significativo al 10%

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004)

El riesgo de ser de nuevo víctima de la violencia y las condiciones de seguridad son las variables de percepciones de seguridad que afectan el deseo de retorno. Haber sido víctima de amenazas de muerte disminuye ostensiblemente el deseo de retorno. Dicha variable es, además, siempre significativa y su efecto marginal oscila alrededor del 3%, es decir, haber recibido amenazas de muerte antes del desplazamiento reduce el deseo de retorno en un poco más del 3%. En estimaciones anteriores, incluí una variable dicótoma para establecer si el deseo de retorno era menor cuando el hogar se había desplazado por eventos de victimización directa, tales como las amenazas de muerte, los intentos de homicidio y el homicidio. Esta variable nunca fue significativa y, por tanto, no presento sus resultados. Al tener en cuenta sólo las amenazas de muerte, la variable se torna significativa y su impacto es considerable. Parece ser que la posibilidad de ser víctimas de agresiones, y no el evento traumático *per se*, determina el deseo de retorno. Este resultado concuerda con el impacto de las amenazas directas sobre la probabilidad de desplazamiento forzoso estudiada en el capítulo III.

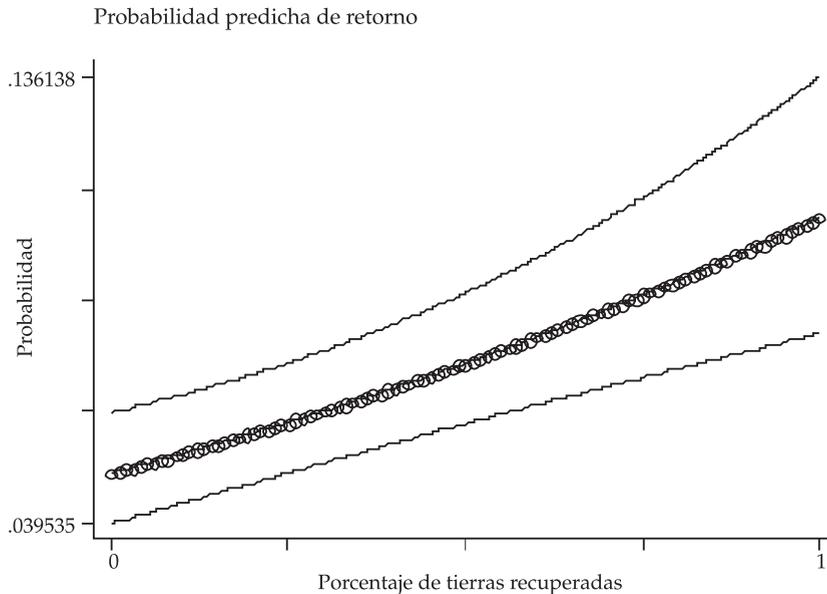
Asimismo, las condiciones objetivas de seguridad en el municipio de origen nunca aparecen como significativas, mientras que dichas condiciones en el lugar de recepción constituyen un factor de expulsión importante. Las tasas de homicidio en recepción y la percepción de presencia allí de grupos armados al margen de la ley producen un mayor deseo de retorno. Ambos resultados son robustos, pues persisten en todos los modelos estimados, pero su efecto marginal se reduce a casi la mitad cuando se

incluyen los controles regionales. Es posible que estas variables capten en un principio variables no observables de características de los municipios. El impacto no es, sin embargo, despreciable, incluso después de incluir los controles regionales. Un incremento en las tasas de homicidios en una persona por cada cien mil habitantes incrementa el deseo de retorno en alrededor un 0,07%, y la presencia de grupos armados al margen de la ley, en un 1,99%. Esto último implica que el impacto de la presencia de grupos armados en recepción casi se equipara con el hecho de haber sido víctima de amenazas de muerte. Ello reitera que el miedo de ser víctimas es preponderante en el deseo de retorno, mientras que los eventos pasados de victimización no necesariamente cumplen un papel determinante.

El atractivo económico de los municipios de recepción y origen reposa en diferentes factores económicos. La perspectiva de recuperar activos productivos en el lugar de origen, lo cual refleja, sin duda, el ingreso potencial de los hogares, es la dimensión económica del municipio de origen que determina el deseo de retorno. Es más, el porcentaje de tierras que se pueden recuperar tras el retorno es significativo en todos los modelos estimados y su efecto marginal es sustancial: un aumento de un 1% en el total de predios que se pueden recuperar tras el retorno incrementa el deseo de retorno en cerca de un 2,69%. Por lo tanto, el control sobre los predios en origen contrarresta de manera significativa el efecto negativo sobre el retorno que tiene, por ejemplo, el haber sido víctima de amenazas. La gráfica 1 ilustra la contundencia de la recuperación de predios sobre el deseo de retornar. La relación del porcentaje de predios que se puede recuperar y la probabilidad de retorno exhiben una pendiente inclinada que denota su fuerte impacto. Una política de restitución de activos contrarrestaría entonces el efecto negativo del miedo de una repetición de los hechos del desplazamiento y es, sin duda alguna, la base fundamental de los programas de retorno.

Las otras variables que pretenden captar las posibilidades de generación de ingresos en los municipios de origen, el logaritmo del consumo agregado en origen y el recaudo per cápita en origen, no son significativas en casi ninguna de las regresiones, pero exhiben los signos esperados. Al incluir las interacciones con la variable dicótoma de amenaza de muerte, ambas variables se tornan levemente significativas. El consumo en origen y el ICA per cápita aparecen como factores de atracción para el regreso al lugar de origen. Las interacciones de estas variables con la amenaza de muerte no son, empero, significativas, lo cual implica que, contrario a lo que se esperaba, el impacto económico no difiere cuando las personas fueron víctimas de agresiones directas.

Gráfica 1. La recuperación de predios y la probabilidad de desear retornar



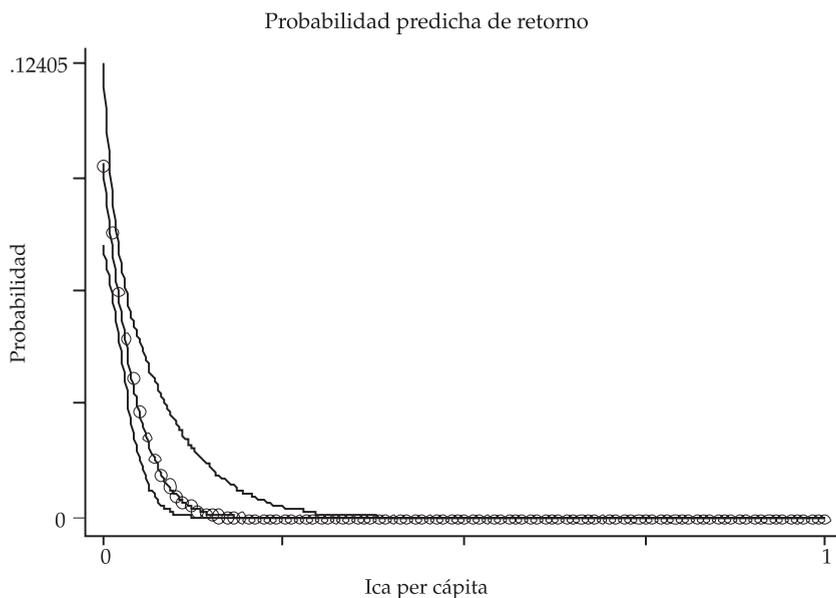
Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004)

Unas condiciones económicas favorables en el municipio de recepción disuaden, por su parte, el retorno. El recaudo del ICA per cápita en recepción reduce considerablemente el deseo de retorno y su efecto es consistentemente significativo al 1% en todas las estimaciones. Sin embargo, cuando se incluye la interacción con las amenazas directas, pareciera que el efecto del dinamismo económico del lugar de recepción sólo fuera un factor determinante para aquellos hogares que no fueron víctimas de amenazas directas. El coeficiente de interacción para los hogares víctimas directas de amenazas de muerte contrarresta completamente el efecto independiente del recaudo del ICA per cápita en recepción. El elevado impacto de una economía fuerte sobre la probabilidad de retorno se observa en la gráfica 2. Tal como se aprecia en esta gráfica, un incremento pequeño del recaudo del ICA para municipios con poco recaudo reduce significativamente el deseo de retorno. Así, pues, una mejora pequeña de la economía en recepción, en particular, en municipios poco dinámicos, reduce sustancialmente el deseo de retorno y rápidamente alcanza una probabilidad de retorno cercana a cero.

Las condiciones económicas particulares de los hogares en recepción, representadas por el consumo agregado en recepción, parecen no influenciar el deseo de retorno. El logaritmo del consumo agregado en recepción sólo

aparece como significativo en la segunda estimación, lo cual incluye las percepciones de seguridad y las condiciones económicas. Es más, el signo del coeficiente es contrario al esperado, es decir que un aumento en el consumo agregado del hogar redonda en una mayor inclinación a retornar. Dos posibles razones pueden estar causando el signo positivo. Primero, es posible que la carencia de recursos económicos elimine el retorno como una alternativa de decisión. Retornar requiere de inversiones monetarias para financiar los costos de transporte, el proceso de asentamiento y la puesta en marcha de la actividad productiva. Estudios sobre migración y retorno han encontrado que algunos migrantes permanecen “atrapados” en el lugar de recepción, pues no poseen suficientes recursos para financiar el retorno³²⁹. En este sentido, un incremento en el consumo agregado puede reflejar más recursos disponibles para financiar el retorno y, por tanto, aumenta el deseo de retorno. Si bien la explicación anterior puede ser válida, el coeficiente estimado no es robusto. Segundo, estudios de migrantes temporales demuestran que variables como el consumo y el ahorro se definen en una decisión intertemporal de migración. Es así como un hogar migrante puede reducir consumo para acumular ahorros que en etapas posteriores serán invertidos en el lugar de origen. Algo similar puede ocurrir en este caso.

Gráfica 2. El recaudo del ICA per cápita en recepción y la probabilidad de desear retornar



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

329 Adda *et al.*, 2006.

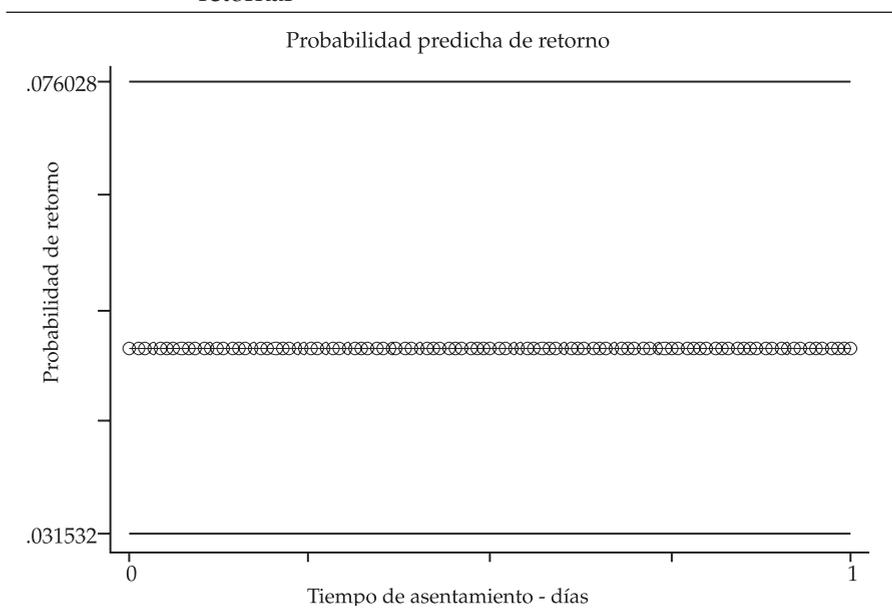
Los beneficios del capital humano, tales como los retornos de la educación o la posibilidad de invertir en capital humano en recepción, parecen circunscribirse al municipio de origen. Los años de educación del jefe del hogar y la asistencia escolar en recepción deberían estimular ambos, presumiblemente, la permanencia en el municipio de recepción. Los años de educación representan el capital humano formal que puede obtener unos retornos más altos en áreas urbanas, y, por ende, permanecer en destino es más atractivo. La asistencia escolar, resultado de una oferta educativa más amplia en áreas urbanas, es una inversión en capital humano cuyos retornos se percibirán en el futuro. Pese a los potenciales retornos presentes y futuros del capital humano, ninguna de las dos variables es significativa en las diferentes estimaciones. Por el contrario, la dedicación del jefe a la agricultura antes del desplazamiento determina de manera significativa el deseo de retorno, y este resultado es robusto respecto a diferentes especificaciones. Su impacto, además, es considerable y similar a ser víctima de las amenazas directas. La probabilidad de desear retornar es un 2,5% más alta para los hogares con jefes dedicados previamente a labores agrícolas. Tal como se ha discutido en capítulos anteriores, la transferencia del capital humano del campo a la ciudad es limitada, lo cual restringe la posibilidad de muchas personas desplazadas de acometer ocupaciones laborales urbanas y deriva en unas condiciones de bienestar bastante precarias para esos hogares. Como es de esperarse, los retornos de este capital son más altos en un eventual regreso, porque significa la posibilidad de retomar la actividad agrícola.

Las características del hogar poco moldean las preferencias del hogar por permanecer o retornar. A excepción del género del jefe del hogar, la edad del jefe y la desintegración del hogar no son significativas en ninguno de los modelos estimados. Los hogares con jefatura masculina están consistentemente más inclinados a volver, debido presumiblemente a su dificultad para adaptarse a los mercados laborales urbanos, tal como expliqué en párrafos anteriores. Poseer jefatura masculina incrementa la probabilidad de retorno en un 2,7%, lo cual sobrepasa, por ejemplo, el efecto de la dedicación previa a actividades agrícolas.

Las dificultades de asimilación en el municipio de recepción, evidentes en los capítulos anteriores, emergen también en la decisión de retornar. El paso del tiempo debe, supuestamente, contribuir al proceso de asimilación de la población desplazada. Conforme pasa el tiempo, las personas conocen mejor la ciudad en la cual decidieron sentar sus raíces, cimientan sus nuevas redes sociales, pueden moverse con más holgura en la ciudad y se familiarizan con sus costumbres. Ello debería indefectiblemente conducir a un proceso paulatino de asimilación en el municipio de recepción y a un deseo de permanecer en él. La evidencia de los capítulos

anteriores demuestra, sin embargo, lo contrario. El consumo agregado, el ingreso, la asistencia escolar y la acumulación de activos no sólo no mejoran con el tiempo, sino que en algunos casos decrecen tras unos cuantos años. Para el deseo de retorno, los resultados son similares. El tiempo de asentamiento no tiene ningún impacto sobre la probabilidad del deseo de retorno: el coeficiente estimado no es estadísticamente significativo y su efecto es cercano a cero, tal como lo ilustra la gráfica 3.

Gráfica 3. El tiempo de asentamiento y la probabilidad de desear retornar



Fuente: cálculos de la autora con base en ENHD (2004).

Por otro lado, la participación en programas de generación de ingresos, al contribuir al proceso de recuperación productiva de los hogares desplazados, redundaba en un menor deseo de retorno. Los resultados de las estimaciones muestran que la participación en los programas de generación de ingresos reduce el deseo de retorno entre un 4,2% y un 5,6%. Dicho resultado, encontrado asimismo en el capítulo anterior, plantea un importante dilema de política pública. Los programas de generación de ingresos parecen de alguna manera, así sea insuficiente, afianzar los procesos de asimilación de la población desplazada en los municipios de recepción y mejorar sus condiciones de bienestar. Pero, al expandir las alternativas de generación de ingresos y contribuir en la asimilación de la población desplazada, los programas de generación de ingresos incrementan el atractivo del municipio de recepción y reducen los incentivos

de regresar a su tierra nativa. En una etapa de posconflicto, por ende, el retorno podría ser menor respecto a las proporciones deseadas, debido a los programas de generación de ingresos. Ello no sería cuestionable si los programas de generación de ingresos contribuyeran a sacar a la población desplazada de la pobreza. Los resultados del capítulo anterior muestran, sin embargo, que, si bien los beneficiarios están un poco mejor que los no beneficiarios, están lejos de salir de la pobreza, es decir que los programas de generación de ingresos no impulsan a los hogares a salir de la pobreza, mientras que en un proceso de retorno ello podría ser más probable, pues se garantizaría, al menos, la seguridad alimentaria.

Cuatro conclusiones aparecen consistentemente en las estimaciones. Primero, la violencia, causa inicial de la migración forzada, es un factor determinante en el deseo de retornar, sólo en la medida en que se traduzca en un riesgo de agresiones para el hogar. Es así como, si el hogar fue víctima de agresiones de muerte antes del desplazamiento o percibe presencia de grupos armados al margen de la ley en el lugar de recepción, esto influencia de manera determinante el deseo de retorno, ya que ambos factores pueden significar un alto riesgo de ser de nuevo víctima de las agresiones de los grupos armados. Segundo, la recuperación de las tierras en origen, y no el dinamismo económico de la región, pues no necesariamente equivale a mayores oportunidades económicas para el hogar, impulsa el retorno. Por otro lado, un municipio de recepción con un alto ingreso per cápita disuade el retorno. Tercero, la dificultad para transferir el capital humano de las áreas rurales a las urbanas, lo cual inhibe la posibilidad de competir en los mercados laborales urbanos, convierte al regreso en la mejor alternativa para extraer retornos de su capital humano. Cuarto, el proceso de asimilación, mejor para los beneficiarios de los programas de generación de ingresos y peor para los hogares con jefatura femenina, determina de manera significativa el deseo de retorno.

C. Conclusiones

El retorno de población desplazada es considerado una opción válida, y tal vez óptima, en una etapa de posconflicto. Al regresar a su lugar origen, los hogares desplazados pueden retomar sus actividades productivas, recuperar sus redes sociales y actuar bajo las normas sociales e instituciones que les son familiares. Si bien esto no se traduce de manera automática en la superación del choque del desplazamiento, el proceso de recuperación podría ser más rápido e implicar traumas menores para el hogar.

El retorno no está exento, sin embargo, de dificultades y costos. El retorno es atractivo, en primer lugar, si se han desactivado las causas originales

del conflicto. El bajo deseo de retorno expresado por la población desplazada (10%), unos índices de retorno aun menores que el deseo de retorno (7%) y la influencia de algunas variables que recogen las percepciones de seguridad sobre el deseo de retorno ponen de manifiesto que la población desplazada no divisa el cese del conflicto en un futuro próximo y, por ende, el retorno no es una alternativa para muchos. Un Estado incapaz de garantizar la no repetición de los hechos del desplazamiento no debe considerar dentro de sus alternativas de política el retorno de población. Un requisito imperativo antes de diseñar programas de retorno es el cese del conflicto y las agresiones a la población civil en la región a retornar.

La restitución de tierras es también un elemento crucial para convertir el retorno en algo atractivo, tal como muestran claramente las estimaciones econométricas. Retornar a la población desplazada sin proveer alternativas de generación de ingresos tiene una alta probabilidad de fracasar en el corto o mediano plazo. Un programa de restitución de tierras es, por ende, el primer paso para promover proyectos productivos en el marco de los retornos y evitar futuros conflictos de tierras. Sin embargo, la pérdida de activos que afrontó la población desplazada implica, como se analizó en capítulos anteriores, que su habilidad para sostenerse es bastante limitada³³⁰ y, por tanto, carece de recursos adicionales para invertir en sus tierras y así ponerlas a punto para producir. Es necesario complementar la restitución de las tierras con recursos para reiniciar sus proyectos productivos.

El retorno no es una solución viable ni atractiva para todos los hogares. Los hogares con jefatura masculina o con jefes previamente dedicados a la agricultura exhiben una clara intención de retornar. Pareciera que los procesos de asimilación de estos hogares son poco exitosos. La lenta absorción de los mercados laborales de estas personas y sus dificultades para entender su nuevo entorno redundan en un muy lento proceso de asimilación y en unas preferencias claras por su lugar de origen. El retorno es, por ende, la mejor alternativa. Por otro lado, las alternativas que ofrecen las áreas urbanas, en cuanto a prestación de servicios sociales y apoyos a hogares vulnerables, parecen ser atractivos para los hogares encabezados por mujeres, que consideran la permanencia en recepción como su mejor alternativa.

Por último, un buen proceso de asimilación reduce el deseo de retorno. Es claro, sin embargo, que el paso del tiempo no consolida el proceso de asimilación en el municipio de recepción. Tal como se evidencia en los capítulos anteriores, el tiempo de asentamiento no mejora las condi-

330 Cordero, 2002.

ciones económicas y tampoco influencia las decisiones de retorno. Una buena asimilación sí parece ser impulsada por programas de generación de ingresos que, al mejorar las alternativas económicas de los hogares, reducen la disponibilidad de retornar. Existe, pues, una contradicción entre impulsar la asimilación de la población desplazada en el lugar de recepción y diseñar futuros planes de retorno. Antes de iniciar los procesos de estabilización socioeconómica, se deben identificar los hogares con y sin intenciones de retorno, a fin de diseñar planes diferenciales para ambos grupos. Dichos planes debe tener en cuenta que los hogares que desean retornar prefieren ahorrar recursos que luego invertirán en origen, para lo cual reducen el consumo del hogar y las inversiones educativas. La reducción del consumo y de la inversión en capital humano tienen, sin embargo, consecuencias negativas en el largo plazo. Se deben diseñar mecanismos para evitar que estos hogares no adopten estrategias equivocadas, de tal manera que sean productivos en recepción mientras logran retornar. Para los hogares que no desean retornar, los planes de estabilización socioeconómica deben enfocarse en acelerar el proceso de asimilación.

VIII

EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO: ¿UN CAMINO SIN RETORNO HACIA LA POBREZA?

Analizo en este libro el discurrir de la población desplazada, desde el momento de su salida hasta la decisión de retornar. Con el análisis de cada etapa del proceso, el libro intenta dar luces a preguntas fundamentales para decidir por qué se debe atender a la población desplazada con políticas especiales y cómo se debe atender a la población desplazada. Si bien a lo largo del libro discuto los detalles de dichas políticas, en esta conclusión me concentro en la discusión de tres preguntas, a mi juicio esenciales para diseñar una política justa, eficiente y con objetivos de largo plazo, y no una política que se concentre en el afán de resolver las emergencias inmediatas, y que deje a un lado la importancia de sentar las bases futuras para que la población desplazada disfrute una existencia digna, libre y autónoma. Una política cuyo énfasis sea impulsar individuos productivos, con aportes económicos y sociales a la sociedad, y no individuos altamente dependientes de la ayuda del Estado.

Abordo en los párrafos siguientes tres preguntas gruesas, cuyas respuestas determinan los principios de la política pública para población desplazada que decida adoptar cualquier Estado. Primero, ¿es la población desplazada víctima del conflicto armado por el mero hecho de ser forzada a migrar o sólo es víctima tras recibir agresiones directas de los grupos armados? Segundo, más allá de la violación evidente de sus derechos humanos, ¿cuál es el impacto económico de un choque como el desplazamiento forzado? ¿Debe ser la población desplazada beneficiaria de una ayuda especial para contrarrestar el impacto de dicho choque? Tercero, una vez se alcanza el posconflicto, ¿son los retornos al municipio de origen una solución para prevenir la sinsalida de la pobreza que parece generar el desplazamiento? ¿Cuáles son los principios mínimos requeridos para que la población desplazada decida retornar al municipio del cual huyó debido al conflicto?

El fin de abordar estas preguntas es contestar si, en efecto, el desplazamiento forzoso es un camino sin retorno hacia la pobreza. La respuesta es sí, como pretendo argumentar con la discusión ulterior. El desplazamiento sí es un camino sin retorno hacia la pobreza, un camino que además pueden también trasegar las segundas generaciones de las familias desplazadas si el Estado y la sociedad no deciden asumir su compromiso y adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Así, pues, el conflicto no sólo deja un legado de dolor; también deja un legado de pobreza.

El desplazamiento forzoso de población, tal como revelan los capítulos II y III con una clara contundencia, no es un efecto fortuito del conflicto armado, y el accionar de los grupos armados no recae de manera aleatoria en la población residente en áreas donde suceden los enfrentamientos. Muy por el contrario, el desplazamiento es un resultado doloroso de una estrategia congruente de los grupos armados para consolidar su hegemonía territorial en ciertas regiones geográficas, con el fin de alcanzar fines económicos y políticos en su lucha armada. En este proceso, los ataques se concentran en ciertos municipios, valiosos para alcanzar sus objetivos, y sus agresiones se dirigen a ciertos habitantes residentes en dichos municipios. Los grupos armados concentran su accionar en regiones con una débil presencia institucional, con poca claridad de los derechos de propiedad sobre la tierra y con atractivos económicos, ya sea por la posibilidad de apropiarse de bienes públicos, como las transferencias, o de bienes privados, como las tierras. Una vez en estas regiones, los grupos armados agreden a personas de la población civil con fuertes liderazgos en la comunidad, para así prevenir movimientos de resistencia civil, o a propietarios de tierras, para usurpar sus propiedades.

El desplazamiento forzoso es, pues, una lógica perversa de guerra con la clara intención de agredir a la población civil para alcanzar fines bélicos. Al ser la agresión directa y deliberada, los grupos armados están generando unas víctimas del conflicto armado que fueron, además, víctimas debido a la incapacidad del Estado para protegerlas. La población desplazada no es un producto desafortunado del conflicto; son unas víctimas claras del conflicto y deben ser consideradas como tales, más allá del proceso de victimización que sufrieron. Ello implica que una persona desplazada es víctima, no sólo por haber sido atacada por los grupos armados, sino por ser obligada a migrar como resultado de una estrategia de guerra.

Algunos argumentan que, debido a la similitud en el proceso, la población desplazada y la población migrante son similares, si no iguales. Este planteamiento, desconocedor como el que más de las dinámicas generadoras del desplazamiento, es absurdo. Los desplazados son forzados a

migrar para desocupar el territorio de pobladores incómodos, y los resultados estadísticos demuestran con contundencia que la violencia es la causa preponderante de dicha migración. Los migrantes económicos se trasladan en busca de mejores oportunidades. Los migrantes forzados se trasladan para salvar su vida u olvidar los horrores de las agresiones vividas.

Pero la discusión acerca del desplazamiento forzado debe trascender el hecho de si las personas fueron o no víctimas del conflicto. Más allá de la clara violación de sus derechos humanos, la migración forzada ocasiona un choque económico que no se compadece en su magnitud con otro tipo de choques usuales, como los desastres naturales, el desempleo o la muerte de familiares, y para los cuales se han diseñado redes de protección.

El desplazamiento forzado combina muchas de las dimensiones de los choques usuales. La migración forzada se presenta, en muchos casos, tras la muerte de familiares; el desplazamiento ocasiona una pérdida similar, o tal vez peor, de activos frente a los desastres naturales; y el cambio de entorno deprecia el capital humano y deja a los hogares sin redes sociales fundamentales para recibir apoyo. El desplazamiento contiene, entonces, todas las dimensiones de los choques, cuyo impacto se circunscribe, por lo general, a una, o a lo sumo dos, de estas dimensiones. Tras la migración forzada y la elevada pérdida de activos, las familias desplazadas cambian de entorno y no pueden recurrir a los mercados laborales ni a los mecanismos informales para acumular, de nuevo, un acervo de capital suficiente para generar ingresos, cubrir las necesidades básicas y acumular más activos. Tras un choque tradicional, las familias continúan en su mismo entorno, con los mismos mercados laborales y con sus redes sociales casi intactas. La posibilidad de apoyarse en estos mecanismos de aseguramiento amortigua el descenso de los ingresos y protege parcialmente el acervo de capital, mitigando así el choque. Dichos mecanismos de aseguramiento no están disponibles para la población desplazada, que, además, enfrenta pérdidas de magnitudes mayores.

La evidencia del libro es clara. La pérdida de tierras –principal activo productivo en las áreas rurales– y el consecuente freno de la actividad productiva en éstas son comunes entre la población desplazada. La depreciación de capital humano, al trasladarse del campo a la ciudad, donde sus aptitudes agrícolas no son valoradas, sucede para casi todos los jefes de hogar. Muchas familias enfrentan, además, la muerte o desaparición forzada del principal proveedor económico. Todo esto desencadena un descenso pronunciado de los ingresos presentes, y muy probablemente futuros, del hogar y una espiral de pobreza. Para solventar las caídas en ingresos, recobrar sus activos productivos y retomar sus vidas pro-

ductivas, los hogares adoptan unas estrategias que profundizan aun más la trampa de pobreza, dado que carecen de mecanismos alternativos. El consumo se contrae hasta un nivel cercano a la subsistencia, y algunos hogares recurren, por ejemplo, a la interrupción escolar. Si bien estas estrategias pueden incrementar un poco el ingreso presente, sacrifican el ingreso futuro: los ingresos adicionales percibidos por estas estrategias son insuficientes para acumular nuevos activos que generen retornos altos y contribuyan a salir de la pobreza. Peor aun, la vulnerabilidad frente a un futuro choque es extrema, pues los desplazados carecen de cualquier mecanismo para asegurarse antes del choque o mitigarlo una vez éste suceda.

El impacto económico del desplazamiento forzado es, por ende, profundo y empuja a los hogares a trampas de pobreza difíciles de superar. Las estrategias adoptadas para sobrellevar el choque y evitar caídas adicionales perpetúan el efecto del choque y ponen en riesgo a las segundas generaciones de las familias desplazadas. La desnutrición, por los bajos consumo, y la interrupción escolar minan la capacidad futura de los jóvenes desplazados. El desplazamiento es entonces una perpetuación de la pobreza para las generaciones presentes y, tal vez, futuras. Las trampas de pobreza, aunadas a las ayudas asistencialistas del Estado, generan una población altamente dependiente de la ayuda estatal y con pocos incentivos para retornar a su pueblo de origen, debido a la poca oferta institucional en áreas rurales. Este patrón se ha presentado de manera reiterada en países que han enfrentado conflictos y que están intentado su reconstrucción en la etapa de posconflicto³³¹.

En una etapa de posconflicto, que aún parece lejana en Colombia, pero no en otros países, es importante diseñar una política para la población desplazada, cuyo objetivo sea evitar los círculos viciosos de pobreza y asistencialismo descritos en el párrafo anterior. El retorno tras el fin del conflicto parece ser una política adecuada, mas no óptima, si sólo se concentra en el mero traslado físico de la población desplazada. Los resultados del capítulo VII y la experiencia en otros países develan tres dimensiones esenciales para retornos sostenibles y exitosos. Sin la garantía de no repetición de los eventos causantes del desplazamiento, la población desplazada no está dispuesta a someterse al riesgo de regresar. Pareciera preferir padecer las condiciones inhóspitas de las ciudades a ser víctima de una nueva agresión de los grupos armados. Pero retornar sin alternativas económicas y replicar la dependencia estatal que viven en las ciudades no es nada atractivo. En las ciudades tienen, por lo menos, la asistencia estatal a la mano, mientras que en el campo padecerían

331 Goodhand, 2001.

penurias similares y sin posibilidades de una ayuda, así sea asistencialista. Los retornos deben, por ende, estar acompañados de una verdadera política de restitución de tierras. Para el caso de Colombia, el marco legal para emprender una política de restitución de predios está disponible. Se requiere sólo la voluntad política para ponerla en marcha. Por último, el retorno con tierra debe ir acompasado con un capital suficiente para reactivar los procesos productivos. Muchos hogares no retornan por carecer de recursos para reiniciar su producción; otros retornan, y al carecer del capital para reiniciar su producción agrícola, migran de nuevo. Una transferencia de recursos debe acompañar los procesos de retorno. Dichos recursos se justifican, además, en la indemnización de la sociedad a un grupo de víctimas del conflicto armado.

No quiero, sin embargo, concluir el libro con un panorama desolador. El fin de un conflicto puede convertirse en una oportunidad, poco frecuente en la sociedad, para eliminar, o al menos llevar a un mínimo posible, las iniquidades pasadas. Una decisión de la sociedad en pleno para dejar a un lado las ayudas asistencialistas, que más parecen un acto de contrición, y para diseñar procesos de restitución de tierras y activos que creen individuos libres de elegir, autónomos y no dependientes de las pocas ayudas estatales, cimienta las bases para un país un poco más equitativo y viable. Atender a las víctimas del conflicto armado no es sólo un deber, porque así lo exige el Derecho Internacional Humanitario, sino también una necesidad, bajo una lógica económica cuyo objetivo es abogar por agentes económicos productivos y capaces de proveerse su sustento económico.

Los programas de generación de ingresos son un primer paso hacia dicho objetivo. La evaluación del capítulo VI devela que parecen ser efectivos en el corto plazo: el ingreso laboral de sus beneficiarios es mayor, las tasas de desempleo menores y sus acervos de capital son un poco más altos. Más aún, los programas cumplen un rol protector importante para los hogares en vulnerabilidad extrema. El impacto de los programas, empero, parece no ser suficiente para sacarlos de la pobreza. Dado que carezco de datos para evaluar el impacto del programa en el largo plazo, es difícil establecer si ello obedece a una deficiencia del programa, a unos incentivos perversos –por el mal diseño de la política estatal– o a un comportamiento en extremo cauto de la población desplazada. Es posible que las transferencias de los programas sean efectivas para mejorar las condiciones de la población desplazada, pero insuficientes para impulsar círculos virtuosos de acumulación de capital, altos retornos y mayores ingresos. Por otro lado, la ayuda especial para la población desplazada perdura hasta que el hogar alcanza la estabilización económica. Algunas familias pueden preferir permanecer un poco por debajo del ingreso necesario para alcanzar la estabilización socioeconómica y así continuar recibiendo

la ayuda estatal. Esto, al eliminar los incentivos para salir adelante, sería un incentivo perverso que en el largo plazo contribuiría a perpetuar la trampa de pobreza, porque elimina los incentivos para salir adelante. Por último, ser víctima de agresiones y pérdida de activos puede llevar a los hogares a asumir actitudes más cautelosas; por ende, los hogares desplazados pueden preferir acumular activos, con el fin de incrementar el consumo futuro, a costa del consumo presente.

La restitución de tierras y los programas de generación de ingresos son algunos de los muchos programas que se pueden adoptar para compensar a la población desplazada y para impulsar su recuperación económica. Es claro, por las conclusiones, que el conflicto crea un legado de pobreza difícil, o para algunos grupos imposible, de superar sin una verdadera ayuda estatal. La sociedad debe invertir recursos para evitar ese legado de pobreza, cimentar las bases para la reconciliación tras el conflicto y, tal vez ahora, después de décadas de conflicto, tener una paz duradera y un país justo con individuos que contribuyan a nuestro desarrollo económico y social, y evitar así que el desplazamiento forzado sea un camino sin retorno hacia la pobreza.

REFERENCIAS

Introducción

Gleditsch, N. P. (2002). *The Future of Armed Conflict*. The Begin-Sadat Centro for Strategic Studies, Israel.

Capítulo I

Alston, L., G. Libecap y B. Mueller. (2000). "Land Reform Policies, the Sources of Violent Conflict, and Implications for Deforestation in the Brazilian Amazon", *Journal of Environmental Economics and Management*, 39: 162-188.

André, C. y J. P. Platteau (1998). "Land Relations under Unbearable Stress: Rwanda Caught in the Malthusian Trap", *Journal of Economic Behavior and Organization*: 34.

Azam, J. P. y A. Hoeffler (2002). "Violence against Civilians in Civil Wars: Looting or Terror?", *Journal of Peace Research*, 39 (4): 461-85.

Binswanger, H. P., K. Deininger y G. Feder (1995). "Power, Distortions, Revolt and Reform in Agricultural Land Relations", en *Handbook of Development Economics*, volumen III (Eds. Behrman, J. y Srinivasan).

Castaño, L. (1999). *La distribución de la tierra rural en Colombia y su relación con el crecimiento y la violencia: 1985 y 1996*. Tesis de Maestría. Facultad de Economía. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Conferencia Episcopal (1999). *Boletín Trimestral sobre Desplazamiento Forzoso* No. 2. Abril a junio de 1999.

Conferencia Episcopal (2002). RUT informa sobre desplazamiento forzoso. Estudio de Caso 4. Bogotá, Colombia.

Contraloría General de la República (2002). *El manejo de los bienes incautados: una estrategia incompleta*. Bogotá, Colombia.

De Janvry, A. y E. Sadoulet (2001). *Access to Land and Land Policy Reforms*. United Nations University. Policy Brief No. 3. Helsinki.

- Deininger, K. y P. Olinto (2000), *Asset Distribution, Inequality and Growth*, Policy Research Working Paper 2375, Banco Mundial, Washington D.C.
- Deininger, K. y G. Feder (1998). *Land Institutions and Land Markets*. Policy Research Working Paper No. 2014. The World Bank Development Research Group. World Bank, Washington D.C.
- Fajardo, D. (1994). "La colonización de la frontera agraria colombiana", en *El agro y la cuestión social* (ed. Absalón Machado). Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Fajardo, D. (2002). *Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra*. Instituto de Estudios Ambientales. Universidad Nacional, Bogotá.
- Gaviria, A., (1998). "Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: the Case of Colombia", *Journal of Development Economics*, 61 (1):1-25.
- Guzmán, G., O. Fals Borda y E. Umaña (1963). *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Helo, J., A. M. Ibáñez y A. Velásquez (2008). *La informalidad de los mercados de tierras en Colombia*. Informe final presentado al Programa MIDAS-USAID. Bogotá.
- Henoa, H. (1998). *Desarraigo y futuro. Vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá*. Cruz Roja Colombiana, Medellín.
- Henderson, J. (1985). *Cuando Colombia se desangró: un estudio de la Violencia en metrópoli y provincia*. El Áncora Editores, Bogotá.
- Ibáñez, A. M. y P. Querubín (2004). "Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia". Documento CEDE 2004-23, Bogotá.
- Ibáñez, A. M. y A. Velásquez (2006). *El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia*. Documento Cede 36, Bogotá.
- Ibáñez, A. M. y A. Velásquez (2008). El impacto del desplazamiento forzado en Colombia: condiciones socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados laborales y políticas públicas. Informe final presentado a la CEPAL.
- Ibáñez, A. M. y C. E. Vélez (2008). "Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia", *World Development*, 36 (4): 659-676.

- Kay, C. (2007). "Reflections on Rural Violence in Latin America", *Third World Quarterly*, 22 (5): 741-775.
- LeGrand, C (1994). "Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debate", en *El agro y la cuestión social* (ed. Absalón Machado). Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Lozano, F. A. y F. E. Osorio (1999). *Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)*. CODHES, Bogotá.
- Molano, A. (1989). *Siguiendo el corte: relatos de guerra y de tierras*. El Áncora Editores, Bogotá.
- Molano, A. (1994). "Algunas consideraciones sobre colonización y violencia", en *El agro y la cuestión social* (ed. Absalón Machado). Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Moore, W. H. y S. M. Shellman (2006). "Refugee or Internally Displaced Person? To Where Should One Flee?", *Comparative Political Studies*, 39 (5): 599-622.
- Oquist, P. (1978). *Violence, Conflict and Politics in Colombia*. Studies in Social Discontinuity. Academic Press, Londres.
- Pérez, L. E. (2002). "Desplazamiento forzado en Colombia, 1995-1999: una aproximación empírica a las relaciones entre desplazamiento, conflicto armado y desarrollo", en *El desplazamiento forzado en Colombia: compromisos desde la universidad*. Bogotá.
- Pineda, R. (1960). *El impacto de la violencia en el Tolima: El Caso de Líbano*. Departamento de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá.
- PMA, Programa Mundial de Alimentos (2001). *Estudio de caso de las necesidades alimentarias de la población desplazada en Colombia*, Bogotá.
- Puyana, A. M. (1999), "Cultivos ilícitos, fumigación y desplazamiento en la Amazonía y la Orinoquía", en *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, eds., F. Cubides y C. Domínguez. Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional y Ministerio del Interior, Bogotá.

- Reyes, A. (1994). "Territorios de la violencia en Colombia", en *El agro y la cuestión social* (ed. Absalón Machado). Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Reyes, A. (1997). "La compra de tierras por narcotraficantes en Colombia", en *Drogas Ilícitas en Colombia* (ed. Francisco Thoumi), Editorial Planeta, Bogotá, Colombia.
- Reyes, A. y A. M. Bejarano (1998). "Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea", *Análisis Político*, 5: 6-27.
- Roldán, M. (2003). *A sangre y fuego: La violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, Bogotá.
- Salazar, M. C. (2001). "Consequences of Armed Conflict and Internal Displacement for Children in Colombia", *Winnipeg Conference on War Affected Children*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation in Colombia.
- Sánchez, F. y J. Núñez (2001). "Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia", en *Economía, crimen y conflicto* (ed. A. Martínez,). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Suárez, R. y K. Vinha (2003). *Elementos para una reforma agraria efectiva*. Informe final presentado al Banco Mundial, Bogotá.
- USCR (2003), *World Refugee Survey 2003*, Washigton. D.C.
- Vélez, C. E. (2002). *Colombia Poverty Report*, World Bank, Washington, D.C.
- Vollrath, D. (2007). "Land Distribution and International Agricultural Productivity", *American Journal of Agricultural Economics*, 89 (1): 202-216.
- Zapata, J. G. y C. Arismendy (2003). *Ordenamiento territorial y reforma agraria en Colombia: un nuevo enfoque para un viejo problema*. Fedesarrollo. Informe Final presentado al Banco Mundial, Bogotá.

Capítulo II

- Alessina, A. y R. Perotti, (1996). "Income Distribution, Political Instability, and Investment", *European Economic Review*, 40: 1203-1228.
- Angrist, J. D. y A. D. Kugler (2005). *Rural Windfall or a New Resource Curse? Coca, Income, and Civil Conflict in Colombia*, NBER Working Paper No. 11219.
- Azam, J. P. y A. Hoeffler (2002). "Violence against Civilians in Civil Wars: Looting or Terror?", *Journal of Peace Research*, 39 (4): 461-85.
- Bodea, C. y I. A. Elbadawi (2007). *Riots, Coups and Civil War*, Policy Research Working Paper No. 4397. Banco Mundial.
- Cairns, E. (1997). *A Safer Future: Reducing the Human Cost of War*. Oxfam Publications, Oxford, U.K.
- Collier, P., (1998). "On Economic Causes of Civil War", *Oxford Economic Papers*, 50: 563-573.
- Collier, P. y A. Hoeffler (2004). "Greed and Grievance in Civil Wars", *Oxford Economic Papers*, 56 (4): 563-595.
- Collier, P., L. Elliott, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol, y N. Sambanis (2003). *Breaking the Conflict Trap*. Banco Mundial y Oxford University Press, Washington y Oxford.
- Czaika, M. y K. Kis-Katos (2007). *Civil Conflict and Displacement: Village-Level Determinants of Forced Migration in Aceh*. HICN Working Paper No. 32.
- Davenport, C. A., W. H. Moore y S. C. Poe (2003). "Sometimes You Just Have to Leave: Domestic Threats and Forced Migration, 1964-1989", *International Interactions*, 27-55.
- Deininger, K., A. M. Ibáñez y P. Querubín (2008). Determinants of Internal Displacement and the Desire to Return. Mimeo.
- Dills, A.K., J.A. Miron y G. Summers (2008). *What do Economists Know about Crime?* NBER Working Paper No. 13759.
- Djankov, S. y M. Reynal-Querol (2007). *The Causes of Civil War*, Policy Research Working Paper No. 4254. Banco Mundial.

- Fearon, J. D. y Laitin, D. D. (2003). "Ethnicity, Insurgency and Civil War", *The American Political Science Review*, 97 (1): 75-90.
- Gates, S. y D. Lektzian (2004). *Drugs, Governance and Civil Conflict*. Artículo preparado para el Taller de Recursos, Gobernabilidad, y Guerras Civiles. Uppsala, Noruega.
- Gaviria, A. (1998). "Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: The Case of Colombia", *Journal of Development Economics*, 61 (1):1-25.
- Grossman, H. I. (1991). "A General Equilibrium Model of Insurrections", *The American Economic Review*, 81 (4): 912-921.
- Hedman, E. L. E. (2005). "A State of Emergency, A Strategy of War: Internal Displacement, Forced Relocation, and Involuntary Return in Aceh", en *Aceh under Martial Law: Conflict, Violence and Displacement* (ed. E. L. E. Hedman), Refugee Studies Centre, University of Oxford.
- Henao, H. (1998). *Desarraigo y futuro. Vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá*. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Hirshleifer, J. (1991). "The Technology of Conflict as an Economic Activity", *The American Economic Review*, 81 (2): 130-134.
- Ibáñez, A. M. y C. E. Vélez (2008). "Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia", *World Development*, 36 (4): 659-676.
- Ibáñez, A. M., A. Moya y A. Velásquez (2006). *Hacia una política proactiva para la población desplazada en Colombia*. Informe final presentado a USAID. Washington.
- Ibáñez, A. M. y Velásquez (2006). *El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia*. Documento Cede 36. Bogotá.
- Lozano, F. A. y F. E. Osorio. (1999). *Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)*. CODHES, Bogotá.
- Lubkemann, S.C. (2005). "Migratory Coping in Wartime Mozambique: An Anthropology of Violence and Displacement in 'Fragmented Wars'", *Journal of Peace Research*, 42 (4): 493-508.

- Macours, K. (2007). Land Titles and Conflicts in Guatemala. Documento sin publicar.
- Maystadt, J.F. (2008). *Does Inequality Make us Rebel? A Revisited Theoretical Model Applied to South Mexico*. HICN Working Paper No. 41.
- Melander, E. y M. Öberg (2006). "Time to Go? Duration Dependence in Forced Migration", *International Interactions*, 32: 129-152.
- Miguel, E., S. Satyanath y E. Sergenti (2004). "Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach", *Journal of Political Economy*, 112 (4): 725-753.
- Moore, W. y S. Shellman (2006). "Refugee or Internally Displaced Person? To Where Should One Flee?", *Comparative Political Studies* (39).
- Morrison, A. R. y R. A. May (1994). "Escape from Terror: Violence and Migration in Post Revolutionary Guatemala", *Latin American Research Review*, 29 (2): 111-32.
- Nafziger, E. W. y J. Auvinen (2002). "Economic Development, Inequality, War and State Violence", *World Development*, 30 (2): 153-163.
- Oquist, P. (1978). *Violence, Conflict, and Politics in Colombia*. Series in Social Discontinuity, Academic Press, Nueva York.
- Reyes, A. y A. M. Bejarano (1998). Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea, *Análisis Político*, 5, 6-27.
- Roldán, M. (2002). *A sangre y fuego: la violencia en Antioquia, Colombia*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Medellín.
- Rubin, B. (2000). "The Political Economy of War and Peace in Afghanistan", *World Development*, 28 (10): 1789-1803.
- Sánchez, F. y M. M Palau (2006). *Conflict, Decentralization and Local Governance in Colombia, 1974-2004*. HICN Working Papers No. 14. Households in Conflict Network.
- Schmeidl, S (1997). "Exploring the Causes of Forced Migration: A Pooled Time-Series Analysis, 1971-1990", *Social Science Quarterly*, 78 (2): 284-308.

- Schultz, T. P. (1971). "Rural-Urban Migration in Colombia", *The Review of Economic and Statistics*, 53: 51-58.
- Stanley, W. D. (1987). "Economic Migrants or Refugees from Violence? A Time-Series Analysis of Salvadoran Migration of the United States", *Latin American Research Review*, 22 (1): 132-154.
- Velásquez, A (2008). *The Formality in Property Rights: Determinants in the Military Strategy of Armed Actors*. HICN Working Paper No. 39.
- Weiner, M. (1993). "Security, Stability, and International Migration", *International Security*, 17 (3): 91-126.
- Weiner, M. (1996). "Bad Neighbors, Bad Neighborhoods: An Inquiry into the Causes of Refugee Flows", *International Security*, 21 (1): 5-42.
- Wood, W. (1994). "Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas", *Annals of the Association of American Geographers*, 84 (4): 607-634.
- Zolberg, A. R., A. Suhrke y S. Aguayo (1986). "International Factors in the Formation of Refugee Movements", *International Migration Review*, 20 (2): 151-169.

Capítulo III

- Becker, G. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Nueva York y Londres.
- Becker, G. (1975). *Human Capital*. Columbia University Press, Nueva York.
- Czaika, M. y K. Kis-Katos (2007). *Civil Conflict and Displacement: Village-Level Determinants of Forced Migration in Aceh*. HICN Working Paper No. 32.
- Davenport, C. A., W. H. Moore, y S. C. Poe (2003). "Sometimes You Just Have to Leave: Domestic Threats and Forced Migration, 1964-1989", *International Interactions*, 27-55.
- Deng, F. (1995). "Internally Displaced Persons: Report of the Representative of the Secretary-General". UN Document: UN/E/CN.4/1995/50, en Refworld CD-Rom.

- DNP (2005). Metas y priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia. Conpes 3400. Bogotá.
- Dustmann, C. (1992). *Migration, Savings and Uncertainty*. European University Institute, Department of Economics, Firenze.
- Erazo, J. A., F. A. Galán, A. M. Ibáñez, y S. Kirchhoff (2000). "Diferentes causas y consecuencias del desplazamiento: ¿quién los Compensa?" Informe final preparado para el Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- Fischer, P.A., R. Martin and T. Straubhaar (1997). "Should I Stay Or Should I Go?", en *International Migration, Immobility and Development* (ed. T. Hammar). Berg, Oxford.
- Gottschang, T. R. (1987). "Economic Change, Disasters, and Migration: The Historical Case of Manchuria", *Economic Development and Cultural Change* 35: 461-490.
- Greenwood, M. J. (1997). "Internal Migration in Developed Countries", en *Handbook of Population and Family Economics*, eds. Rosenzweig and Stark. Elsevier Science, Amsterdam.
- Henao, H. (1998). *Desarraigo y futuro. Vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá*. Medellín.
- Ibáñez, A. M. y P. Querubín (2004). "Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia". Documento CEDE 2004-23. Bogotá.
- Ibáñez, A. M. y A. Velásquez (2006). *Vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina y de los hogares pertenecientes a minorías étnicas ante el impacto del desplazamiento forzado*. Informe final presentado al Banco Mundial.
- Jagannathan, V. (1987). *The Logic of Unorganized Markets*. Oxford University Press, Oxford.
- Lewis, W. A. (1954). "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour", *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 22: 139-91.
- Lozano, F. A. y F. E. Osorio (1999). *Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)*. CODHES, Bogotá.

- Lucas, R. E. B. (1997). "Internal Migration in Developing Countries", en *Handbook of Population and Family Economics*, eds. Rosenzweig y Stark. Elsevier Science, Amsterdam.
- Maier, G. (1985). "Cumulative Causation and Selectivity in Labour Market Oriented Migration Caused by Imperfect Information", *Regional Studies*, 19: 231-41.
- Manski, C. F. y S. R. Lerman (1977). "The Estimation of Choice Probabilities from Choice Based Samples", *Econometrica*, 45 (8): 1977-88.
- Melander, E. y M. Öberg (2006). "Time to Go? Duration Dependence in Forced Migration", *International Interactions*, 32: 129-152.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. Columbia University Press, Nueva York.
- Moore, W. y S. Shellman, (2006). "Refugee or Internally Displaced Person? To Where Should One Flee?", *Comparative Political Studies* (39).
- Morrison, A. R. y R. A. May (1994). "Escape from Terror: Violence and Migration in Post Revolutionary Guatemala", *Latin American Research Review* 29 (2): 111-32.
- Plane, D. A. (1993). "Demographic Influences on Migration", *Regional Studies*, 27: 375-83.
- Ranis, G. y J. C. H. Fei (1961). "A Theory of Economic Development." *American Economic Review*, 51: 533-65.
- Ravenstein, E. G. (1885). "The Laws of Migration", *Journal of the Royal Statistical Society*, 48 (2): 167-227.
- Ravenstein, E. G. (1889). "The Laws of Migration." *Journal of the Royal Statistical Society*, 52 (2): 241-310.
- Schmeidl, S (1997). "Exploring the Causes of Forced Migration: A Pooled Time-Series Analysis, 1971-1990", *Social Science Quarterly*, 78 (2): 284-308.
- Schultz, T. P. (1971). "Rural-Urban Migration in Colombia", *The Review of Economic and Statistics*, 53: 51-58.
- Simon, H. A. (1957). *Models of Man*. John Wiley, Nueva York.

- Simon, H. A. (1983). *Reason in Human Affairs*. Basil Blackwell, Oxford.
- Sjaastad, L. A. (1962). "The Costs and Returns of Human Migration", *Journal of Political Economy*, 70: 80-93.
- Stanley, W. D. (1987). "Economic Migrants or Refugees from Violence? A Time-Series Analysis of Salvadoran Migration of the United States", *Latin American Research Review*, 22 (1): 132-154.
- Stark, O. (1991). *The Migration of Labor*. Basil Blackwell, Cambridge, MA.
- Stark, O. y Bloom (1985). "The New Economics of Labor Migration", *American Economic Review*, 75: 173-8.
- Stark, O. y D. Levhari (1982). "On Migration and Risk in LDCs", *Economic Development and Cultural Change*, 31: 191-6.
- Todaro, M. P. (1969). "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries", *American Economic Review*, 59: 138-48.
- Todaro, M. P. (1976). "International Migration in Developing Countries: A Review of Theory", ILO, Ginebra.
- Todaro, M. P. (1989). *Economic Development in the Third World*. Longman, Nueva York.
- Todaro, M. P. y L. Maruszko (1987). "Illegal Immigration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework", *Population and Development Review*, 13: 101-14.
- UNDP (2003). <http://www.undp.org/erd/archives/internal.htm>
- Wood, W. (1994). "Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas", *Annals of the Association of American Geographers*, 84 (4): 607-634.
- Zolberg, A. R., A. Suhrke y S. Aguayo (1986). "International Factors in the Formation of Refugee Movements", *International Migration Review*, 20 (2): 151-169.

Capítulo IV

- ACNUR (2003). *La población desplazada en Bogotá: una responsabilidad de todos*. ACNUR, Proyecto Bogotá Cómo Vamos. Bogotá.

- Alwang, J., P. B Siegel y S. L. Jorgensen (2001). *Vulnerability: A View from Different Disciplines*. Social Protection Discussion Paper No. 0115. Banco Mundial.
- Azam, J. P. y A. Hoeffler (2002). "Violence against Civilians in Civil Wars: Looting or Terror?". *Journal of Peace Research*, 39 (4): 461-85.
- Barrera, F. y A. M. Ibáñez (2004). *Does Violence Reduce Investment in Education?: A Theoretical and Empirical Approach*. Documento CEDE 2004-27. Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Binzel, C. y T. Brück (2007). *Conflict and Fragility: Findings from the Literature and a Framework for Analysis at the Micro Level*. Documento de trabajo sin publicar.
- Brück, T. (2007). *The Welfare Effects of Farm Households Activity Choices in Post-War Mozambique*. Documento de trabajo sin publicar.
- Bundervoet, T. y P. Verwimp (2005). *Civil War and Economic Sanctions: An Analysis of Anthropometric Outcomes in Burundi*. HICN Working Paper No. 11.
- Cohen, G. A. (1993). "Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities", en *The Quality of Life* (eds. M. Nussbaum y A. Sen). Oxford University Press.
- Collier, P. (1999). "On the Economic Consequences of Civil War", *Oxford Economic Papers*, 50 (4): 563-573.
- Collier, P., L. Elliott, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol y N. Sambanis (2003). *Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy*. Oxford University Press.
- DANE (1997). *Encuesta de Calidad de Vida*.
- DANE (2006). *Colombia, una nación multicultural: su diversidad étnica*. Gobierno de Colombia. Bogotá.
- De Walque, D. (2004). *The Long-term Legacy of the Khmer Rouge Period in Cambodia*, World Bank Research Working Paper No. 3446. Banco Mundial.
- Ghobarah, H. A., P. Huth y B. Russett (2003). "Civil Wars Kill and Maim People – Long Alter the Shooting Stops", *American Political Science Review*, 97 (2): 189-202.

- Glewwe, P. y G. Hall (1998). "Are Some Groups More Vulnerable to Macroeconomic Shocks than Others? Hypothesis Tests Based on Panel Data from Peru", *Journal of Development Economics*, 56: 181-206.
- Goodhand, J. (2001). *Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty*. CPRC Working Paper No. 6. Chronic Poverty Research Center.
- Green, R. (1994). "The Course of the Four Horsemen: Costs of War and Its Aftermath in Sub-Saharan Africa", en *War and Hunger* (ed. Macrae, J. y A. Zwi).
- Hoeffler, A. y M. Reynal-Querol (2003). *Measuring the Costs of Conflict*. Documento sin publicar.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2006). *¿Cómo el desplazamiento deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción*. Documento CEDE No. 2006-26. Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Ibáñez, A. M. y C. E. Vélez (2007). "Civil Conflict and Forced Migration: the Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia", *World Development*, 36 (4): 659-676.
- Kennickell, A. B. y M. Starr-McCluer (1997). "Retrospective Reporting of Household Wealth: Evidence from the 1983-1989 Survey of Consumer Finances", *Journal of Business and Economic Statistics*, 15 (4): 452-463.
- Mansuri, G. y A. Healy (2000). *Vulnerability Predictions in Rural Pakistan*. Development Research Group. Banco Mundial: Washington D.C. Documento de trabajo sin publicar.
- McKay, A. y S. Loveridge (2005). *Exploring the Paradox of Rwandan Agricultural Household Income and Nutritional Outcomes in 1990 and 2000*. Department of Agricultural Economics, Michigan State University, Staff Paper No. 2005-06.
- McKay, A. y D. Lawson (2003). "Assessing the Extent and Nature of Chronic Poverty in Low Income Countries: Issues and Evidence", *World Development*, 31 (3): 425-439.
- Misión de Pobreza para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y Desigualdad -MERPD (2006). *Pobreza y*

desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.

Organización Mundial de la Salud, OMS (2000). *The World Health Report 2000. Health Systems: Improving performance.* Ginebra.

Sen, A. (1993). "Capability and Well-Being", en *The Quality of Life* (eds. M. Nussbaum y A. Sen). Oxford University Press, Oxford.

Sen, A. (1999). "The Possibility of Social Choice". *The American Economic Review* 89 (3): 349-378.

Shemyakina, O. (2006). *The Effects of Armed Conflict on Accumulation of Schooling: Results from Tajikistan.* HICN Working Paper No. 12.

Stewart, F. y V. Fitzgerald (2001). "Introduction: Assessing the Economic Costs of War", en *War and Underdevelopment. Volumen 1: The Economic and Social Consequences of Conflict* (eds. F. Stewart y V. Fitzgerald). Oxford University Press, Oxford.

Stewart, F., C. Huang y M. Wang (2001). "Internal Wars: An Empirical Overview of the Economic and Social Consequences", en *War and Underdevelopment. Volumen 1: The Economic and Social Consequences of Conflict* (eds. F. Stewart y V. Fitzgerald). Oxford University Press, Oxford.

Urdinola, P. (2004). *The Hidden Cost of Violence, Infant Mortality in Colombia.* Documento de trabajo sin publicar.

Capítulo IV

Adato, M., M. R. Carter y J. May (2006). "Exploring Poverty Traps and Social Exclusion in South Africa Using Qualitative and Quantitative Data", *Journal of Development Studies*, 42 (2): 226-247.

André, C. y J. P. Platteau (1998). "Land Relations under Unbearable Stress: Rwanda Caught in the Malthusian Trap", *Journal of Economic Behavior and Organization*, 34.

Barrera, F. y F. Pérez-Calle (2005). *Consumption Smoothing: Empirical Evidence from Colombia and Nicaragua.* Documento sin publicar.

Barrett, C. B., P. P. Marenja, J. McPeak, B. Minten, F. Murithi, W. Oluoch-Kosura, F. Place, J. C. Randrianarisoa, J. Rasambainarivo y J. Wangila (2004). *Welfare Dynamics in Rural Kenya and*

- Madagascar*. Documento BASIS. University of Wisconsin, Madison.
- Barrett, C. B. y J. G. McPeak (2006). "Poverty Traps and Safety Nets", en *Poverty, Inequality and Development. Essays in Honor of Erik Thorbecke* (eds. A. de Janvry y R. Kanbur). Springer.
- Barrientos, A. y A. Shepherd (2003). *Chronic Poverty and Social Protection*. Documento presentado en el CPRC Conference on Chronic Poverty. University of Manchester.
- Behrman, J. (1988). "Intrahousehold Allocation of Nutrients in Rural India: Are Boys Favored? Do Parents Exhibit Inequality Aversion?" *Oxford Economic Papers*, 40 (1): 32-54.
- Borjas, G. J. (1985). "Assimilation, Changes in Cohort Quality, and the Earning of Immigrants", *Journal of Labor Economics* 3 (4): 463-489.
- Borjas, G. J. (1987). "Self-selection and the Earning of Migrants", *American Economic Review*, 77 (4): 531-553.
- Borjas, G. J. (1994). "The Economics of Migration", *Journal of Economic Literature* 32 (4): 1667-1717.
- Borjas, G. J. (1995). "Assimilation and Changes in Cohort Quality Revisited: What Happened to Immigrant Earnings in the 1980s", *Journal of Labor Economics* 13 (2): 201-245.
- Carliner, G. (1996). *The Wages and Language Skills of U.S. Immigrants*. NBER Working Paper No. 5763.
- Carter, M. R. y C. Barrett (2006). "The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An-Asset Based Approach", *Journal of Development Studies*, 42 (2): 178-199.
- Carter, M. R. y J. May (1999). "Poverty, Livelihood and Class in Rural South Africa", *World Development* 27 (1): 1-20.
- Chiswick, B. R. (1978). "The Effect of the Americanization on the Earnings of Foreign-born Men", *Journal of Political Economy* 86(5): 897-921.
- Chiswick, B. R. (1980). "The Earning of White and Colored Male Immigrants in Britain", *Economica* 47(185): 81-87.

- Corbett, J. (1988). "Famine and Household Coping Strategies", *World Development*, 16 (9): 1099-1112.
- Deaton, A. (1992). *Understanding Consumption*. Clarendon Lectures in Economics. Oxford University Press, Oxford.
- Deininger, K. (2003). "Causes and Consequences of Civil Strife: Micro-level Evidence from Uganda", *Oxford Economic Papers*, 55 (4): 579-606.
- Dercon, S. (1998). "Wealth, Risk and Activity Choice: Cattle in Western Tanzania", *Journal of Development Economics*, 55:1-42.
- Donovan, C., L. Bailey, E. Mpyisi y M. Weber (2003). *Prime-Age Adult Morbidity and Mortality in Rural Rwanda: Effects on Household Income, Agricultural Production, and Food Security Strategies*. Research Report, Food Security Research Project, Ministry of Agriculture, Kigali.
- Durlauf, S. N (1992). *A Theory of Persistent Income Inequality*. NBER Working Paper No. 4056.
- Dustmann, C. y A. van Soest (2001). "Language Fluency and Earnings: Estimation with Misclassified Language Indicators", *Review of Economic and Statistics*, 83 (4): 663-674.
- Engel, S. y A. M. Ibáñez (2007). "Displacement Due to Violence in Colombia: A Household Level Analysis", *Economic Development and Cultural Change*, 55 (2): 335-365.
- Fafchamps, M. y F. Gubert (2006). "The Formation of Risk-Sharing Networks". Próximo a publicarse. *Journal of Development Economics*.
- Fafchamps, M. y S. Lund (2002). "Risk-sharing Networks in Rural Philippines", *Journal of Development Economics*, 71: 261-287.
- Fafchamps, M., C. Udry y K. Czukas (1998). "Drought and Savings in West Africa: Are Livestock a Buffer Stock?", *Journal of Development Economics*, 55: 273-305.
- Foster, A (1995). "Prices, Credit Markets, and Child Growth in Low Income Areas", *Economic Journal*, 105: 551-570.
- Foster, A. y M. Rosenzweig (2001). "Imperfect Commitment, Altruism and the Family: Evidence from Transfer Behavior in

- Low-Income Rural Areas", *Review of Economic and Statistics*, 83 (3): 389-407.
- Galor, O. y J. Zeira (1993). "Income Distribution and Macroeconomics", *The Review of Economic Studies*, 60 (1): 35-52.
- Hirshleifer J., (2001), *The Dark Side of the Force, Economic Foundations of Conflict Theory*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Hoddinott, J. (2006). "Shocks and their Consequences Across and Within Households in Rural Zimbabwe", *Journal of Development Studies*, 42 (2): 301-321.
- Hulme, D. y A. Shepherd (2003). "Conceptualizing Chronic Poverty", *World Development*, 31 (3): 403-423.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2006a). *The Impact of Intra-State Conflict on Economic Welfare and Consumption Smoothing: Empirical Evidence for the Displaced Population*. HICN Working Paper No. 23.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2006b). *¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción*. Documento CEDE 2006-26. Facultad de Economía. Universidad de los Andes. Bogotá.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2007). *Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset Losses and Recovery for Displaced Households in Colombia*. Informe final presentado al Banco Mundial.
- Ibáñez, A. M. y A. Velásquez (2008). *Identifying Victims from Civil Conflicts: An Evaluation of the Forced Displaced Population*. Próximo a publicar.
- Jacoby, H. y E. Skoufias (1997). "Risk, Financial Markets, and Human Capital in a Developing Country", *Review of Economic Studies*, 64 (3): 311-335.
- Jensen, R. (2000). "Agricultural Volatility and Investments in Children", *American Economic Review*, 90 (2): 399-404.
- Justino, P. y P. Verwimp (2006). *Poverty Dynamics, Violent Conflict and Convergence in Rwanda*. HICN Working Paper No. 16.
- Kochar, A (1998). "Smoothing Consumption by Smoothing Income: Hours of Work Responses to Idiosyncratic Shocks in Rural India", *Review of Economics and Statistics*, 81 (1): 50-61.

- Krishna, A., D. Lumonya, M. Markiewicz, F. Mugumya, A. Kafuko y J. Wegoye (2006). "Escaping Poverty and Becoming in Poor in 36 Villages of Central and Western Uganda", *Journal of Development Studies*, 42 (2): 346-370.
- Leibovich, J. (1996). "La migración interna en Colombia: un modelo explicativo del proceso de asimilación", *Planeación y Desarrollo*, 27 (4): 47-65.
- Ligon, E., J. P. Thomas, y T. Worrall (2001). "Informal Insurance Arrangements in Village Economies", *Review of Economic Studies*, 69 (1): 209-244.
- Little, P. D., M. P. Stone, T. Mogues, A. P. Castro y W. Negatu (2006). "Moving in Place: Drought and Poverty Dynamics in South Woll, Ehiopia", *Journal of Development Studies*, 42 (2): 200-225.
- Lucas, R. E. y O. Stark. (1985). "Motivations to Remit: Evidence from Botswana", *Journal of Political Economy*, 93 (5): 901-918.
- Matowu, J. M. y F. Stewart (2001). "Uganda: The Social and Economic Costs of Conflict", en *War and Underdevelopment*. Volumen 2: *Country Experiences*. Oxford University Press.
- Meertens, D. (2005). *Tierras, derechos y género: leyes, políticas y prácticas en contextos de guerra y paz*. Informe final presentado a UNIFEM.
- Mookherjee, D. y D. Ray (2002). "Contractual Structure and Wealth Accumulation", *The American Economic Review*, 92 (4): 818-849.
- Morduch, J. (1994), "Poverty and Vulnerability", *American Economic Review Papers and Proceedings*, 84 (2): 221-225.
- Morduch, J. (1995). "Income Smoothing and Consumption Smoothing", *Journal of Economic Perspectives*, 9 (3): 103-114.
- Morduch, J. (1999). "Between the Market and the State: Can Informal Insurance Patch the Safety Net?", *World Bank Research Observer*, 14 (2): 187-207.
- Morduch, J. (2002). *Consumption Smoothing across Space. Testing Theories of Risk-Sharing in the ICRISAT Study Region of South India*. WIDER Discussion Paper No. 2002-55,

- Ravallion, M. y S. Chaudhuri (1997). "Risk and Insurance in Village India: Comment", *Econometrica*, 65 (1): 171-184.
- Reardon, T. y S. A. Vosti (1995). "Links between Rural Poverty and the Environment in Developing Countries: Asset Categories and Investment Poverty", *World Development*, 23: 1495-1506.
- Rosenzweig, M. y O. Stark (1989). "Consumption Smoothing, Migration and Marriage: Evidence from Rural India", *The Journal of Political Economy*, 97 (4): 905-926.
- Rosenzweig, M. R. y H. P. Binswanger (1993). "Wealth, Weather Risk and the Composition of Profitability of Agricultural Investments", *Economic Journal*, 103: 56-78.
- Rosenzweig, M. y K. I. Woping (1993). "Credit Market Constraints, Consumption Smoothing and the Accumulation of Durable Production Assets in Low Income Countries: Investments in Bullocks in India", *Journal of Political Economy*, 101 (2): 223-244.
- Shields, M. A. y S. Price (2001). "Language Fluency and Immigrant Employment Prospects: Evidence from Britain's Ethnic Minorities", *Applied Economic Letters*, 8: 741-745.
- Stewart, J. B. y T. Hyclak (1984). "An Analysis of the Earning Profiles of Immigrants", *Review of Economics and Statistics*, 66 (2): 292-296.
- Townsend, R. M. (1994). "Risk and insurance in Village India", *Econometrica*, 62 (3): 539-591.
- Zimmermann, F. J. y M. R. Carter (2003). "Asset Smoothing, Consumption Smoothing and the Reproduction of Inequality under Risk and Subsistence Constraints", *Journal of Development Economics*, 71: 233-260.

Capítulo VI

- Bartel, A. (1992). *Productivity Gains from the Implementation of Employee Training Programs*, NBER Working Paper No. 3893.
- Bishop, J. (1994). "Formal Training and Its Impact on Productivity, Wages and Innovation", en *Training and the Private Sector: International Comparison* (ed. L. Lynch).

- Chen, S., R. Mu y M. Ravallion (2006). *Are There Lasting Impacts of Aid to Poor Areas? Evidence from Rural China*. World Bank Policy Research Paper 4084.
- Coleman, B. E. (2006). "Microfinance in North East Thailand: Who Benefits and How Much", *World Development*, 34 (9): 1612-1638.
- González-Vega (1998). "Do Financial Institutions Have a Role in Assisting the Poor", en *Strategic Issues in Microfinance* (eds. M. Kimenyi, R. Wieland y J. D. Pischke). Ashgate Publishing, Aldershott, UK.
- Heckman, J., H. Ichimura y P. Todd (1998). "Matching as an Econometric Evaluation Estimator", *The Review of Economic Studies*, 65 (4): 261-294.
- Heckman, J. J., R. Roselius y J. Smith (1993). *U.S. Education and Training Policy: A Re-evaluation of the Underlying Assumptions Behind the "New Consensus"*. Department of Economics, University of Chicago. Working Paper No. CSPE94-1.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2006). *The Impact of Intra-State Conflict on Economic Welfare and Consumption Smoothing: Empirical Evidence for the Displaced Population*. HICN Working Paper No. 23.
- Ibáñez, A. M y A. Moya (2007). *La población desplazada en Colombia: examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales*. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la Desigualdad. Departamento Nacional de Planeación.
- Lalonde, R. J. (1995). "The Promise of Public Sector-Training Programs", *The Journal of Economic Perspectives*, 9 (2):149-168.
- Leigh, D. (1990). *Does Training Work for Displaced Workers?* W.E. Upjohn Institute for Employment Research. Kalamazoo, Michigan.
- Lynch, L.M. (1992). "Private Sector Training and the Earning of Young Workers", *The American Economic Review*, 82 (1): 299-312.
- Medina, C. y J. Núñez (2005). *The Impact of Public and Private Job Training in Colombia*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

- Morduch, J. (1999). "The Microfinance Promise", *Journal of Economic Literature*, 37 (4): 1569-1614.
- Parent, D. (1999). "Wages and Mobility: The Impact of Employer-Provided Training", *Journal of Labor Economics*, 17 (2): 298-317.
- Park, A. y C. Ren (2001). "Microfinance with Chinese Characteristics", *World Development*, 29 (1): 39-62.
- Pawasarat, J. y L. Quinn (1993). *Evaluation of the Wisconsin WEJT/ CWEP Welfare Employment Programas*. Employment and Training Institute, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin.
- Pitt, M. M. y S. R. Khandker (1998). "The Impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?", *The Journal of Political Economy*, 106 (5): 958-996.
- Rosenbaum, P. R. y D. B. Rubin (1983). "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects", *Biometrika*, 70 (1): 41-55.
- Shaw, J. (2004). "Microenterprise Occupation and Poverty Reduction in Microfinance Programs: Evidence from Sri Lanka", *World Development*, 32 (7): 1247-1264.
- Veum, J. R. (1999). "Training, Wages, and the Human Capital Model", *Southern Economic Journal*, 65 (3): 526-538.
- Wydick, B. (1999). "The Effect of Microenterprise Lending on Child Schooling in Guatemala", *Economic Development and Cultural Change*, 47 (4): 853-869.

Capítulo VII

- Adda, J., C. Dustmann y J. Mestres (2006). A Dynamic Model of Return Migration. Documento sin publicar.
- Agesa, R. (2001). "Migration and the Urban to Rural Earnings Difference: A Sample Selection Approach", *Journal of Development Studies*, 49 (4): 847-865.
- Borjas G. J. y B. Bratsberg (1996). "Who Leaves? The Outmigration of the Foreign Born", *Review of Economics and Statistics*, 78 (1): 165-176.

- Cordero, I. C. (2002). "Desplazamiento, inserción y retorno en Ayacucho (1993-1997)", *Migration dan les Andes, Chili et Pérou*, No. 5.
- Davies, A. (2004). "Restitución de la tierra y derechos de propiedad", *Forced Migration Review*, No. 21.
- Djajic, S. (1989). "Migrants in a Guest-Worker System", *Journal of Development Economics*, 21: 327-339.
- Djajic, S. y R. Milbourne (1988). "A General Equilibrium Model of Guest Worker Migration", *Journal of International Economics*, 25: 335-351.
- Dustmann, C. (2000). *Temporary Migration and Economic Assimilation*, IZA Discussion Papers No. 186.
- Dustmann, C. (2003). "Children and Return Migration", *Journal of Population*, No. 186.
- Dustmann, C., S. Bentilila y R. Faini (1996). "Return Migration: The European Experience", *Economic Policy*, 11 (22): 213-250.
- Econometría (2008). *Evaluación de los procesos de retorno para la generación de recomendaciones que permitan identificar variables de éxito y retos para una respuesta más efectiva*. Bogotá.
- Gaviria, A. y C. Mejía (2005). *Las varias caras de la diáspora: los nexos de los emigrantes colombianos con su país de origen*. Documentos CEDE No. 25. Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Gitter, S. R., R. J. Gitter y D. Southgate (2008). "The Impact of Return Migration to Mexico", *Estudios Económicos*, 23 (1):3-23.
- Ibáñez, A. M. y P. Querubín (2004). *Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia*, Documento CEDE 2004-23, Bogotá.
- IDMC (2007). *Peru: Compensation Pending for Victims of Forced Displacement*. www.internal-displacement.org
- Katz E. y O. Stark (1986). "Labor Migration and Risk Aversion in Less Developed Countries", *Journal of Labor Economics*, 4: 134-149.
- Kochar, A (2004). "Urban Influences on Rural Schooling in India", *Journal of Development Economics*, 74: 113-136.

- Lall, S. V., H. Selod y Z. Shalizi (2006). *Rural-Urban Migration in Developing Countries: A Survey of Theoretical Predictions and Empirical Findings*. World Bank Policy Research Working Paper No. 3915.
- Lanzona, L. (1998). "Migration, Self-Selection and Earnings in Philippine Rural Communities", *Journal of Development Economics*, 56 (1): 27-50.
- Osili, U. (2004). "Migrants and Housing Investments: Theory and Evidence from Nigeria", *Economic Development and Cultural Change*, 52 (4): 821-849.
- Rogge, J. y B. Lippman (2004). "Haciendo que el retorno y la reinserción sean sostenibles, transparentes y participativos", *Forced Migration Review*, No. 21.
- Rosenzweig, M. y O. Stark (1989). "Consumption Smoothing, Migration and Marriage: Evidence from Rural India", *The Journal of Political Economy*, 97 (4): 905-926.
- Stewart, J. B. y T. Hyclak (1984). "An Analysis of Earning Profiles of Immigrants", *Review of Economics and Statistics*, 66 (2): 292-296.
- Venancio, M., S. Pavelic, S. Zunic, G. Vukmir y M. Diana (2004). "De la emergencia al desarrollo: evaluando el papel del PNUD en Bosnia-Herzegovina", *Forced Migration Review*, No. 21.

Capítulo VIII

- Goodhand, J. (2001). *Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty*. CPRC Working Paper No. 6. Chronic Poverty Research Center.

Este libro se terminó de imprimir
y encuadernar en octubre de 2008
en Bogotá, D. C., Colombia.

Se compuso en la fuente
Palatino de cuerpo 10,5 puntos.